

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

Las empresas cooperativas de producción

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

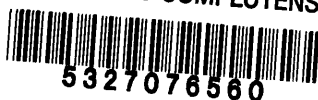
Fernando Valdés Dal-Ré

Madrid, 2015

Rd. 54.355-



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



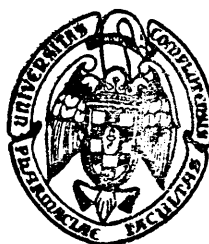
5327076560

171

Tesis Doctoral
presentada por
FERNANDO VALDES DAL-RE

LAS EMPRESAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION

Dirigida por el
Prof. GASPAR BAYON CHACON



Abril 1973.

BIBLIOTECA
DE DERECHO

i3781008K

ABREVIATURAS

AECOOP : Asociación de Estudios Cooperativos
Ann.Der.Civ : Anuario de Derecho Civil
BML : Boletín del Mutualismo Laboral
BOE : Boletín Oficial del Estado
CCDT : Cuadernos de la Cátedra de Derecho del Trabajo
CPS : Cuadernos de Política Social
DEC : Documentos de Educación Cooperativa
Dir.Comm : Diritto Commerciale
For.It : Foro Italiano
Giur.Cass.Civ. : Giurisprudenza Cassazione Civile
Giur.It : Giurisprudenza Italiana
Gius.Civ : Giustizia Civile
Il Dir.Lav : Il Diritto del Lavoro
JS : Jurisprudencia Social
LC : Ley de Cooperación de 1942
Mass.Giur.Lav : Massimario Giurisprudenza del Lavoro
Mon. dei Trib : Monitore dei Tribunali
RC : Reglamento de Cooperación de 1971
RDM : Revista de Derecho Mercantil
RPS : Revista de Política Social
Rev.Der.Priv : Revista de Derecho Privado
Rev. des soc : Revue des Sociétés
Rev.Etud.Coop : Revue des Etudes Coopératives
Rev. Int.Soc : Revista Internacional de Sociología
Rev. Int.Droit Comp : Revue Internationale du Droit Comparé
Rev.prat. soc : Revue pratique des sociétés
RISS : Revista Iberoamericana de Seguridad Social
Riv.Coop : Rivista della Cooperazione
Riv. delle soc : Rivista delle Società
Riv.Dir.Comm : Rivista di Diritto Commerciale
Riv.Dir.Civ : Rivista di Diritto Civile
Riv.Dir.Fall : Rivista di Diritto Fallimentare
Riv.Dir.Econ : Rivista di Diritto Economico
Riv.Dir.Ind : Rivista di Diritto Industriale
Riv.Dir.Lav : Rivista di Diritto del Lavoro
Riv.inf.mall.prof : Rivista degli infortuni e malattie professionali
Riv.trim.dir e proc.civ : Rivista trimestrale di Diritto e Procedura
Civile
STCT : Sentencia del Tribunal Central de Trabajo
STS : Sentencia del Tribunal Supremo

INDICE

Capítulo I

LA EVOLUCION HISTORICO-LEGISLATIVA DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION

	<u>pags</u>
1. Los factores determinantes de la aparición del fenómeno cooperativo.....	1
1.1. Los precedentes históricos y las primeras manifestaciones.....	6
1.2. El inicio de la legislación cooperativa.....	18
2. La evolución del fenómeno cooperativo en España.....	28
2.1 Las primeras manifestaciones cooperativas.....	31
2.2 Las fases de la regulación jurídica de las cooperativas.....	37
2.2.1. Etapa de derecho facultativo.....	39
a) Reconocimiento de la libertad de constitución de cooperativas.....	39
b) La ley de Asociaciones de 1887, como primera tentativa legal para regular unitariamente el fenómeno cooperativo.....	47
c) El particularismo normativo, como solución para la regulación de las sociedades cooperativas.....	51
d) El anteproyecto de 1927, como antecedente próximo de la legislación unitaria en materia cooperativa.....	54
2.2.2. Etapa de derecho necesario. La unicidad legislativa.....	56
a) La ley de 1931.....	56
b) La ley de 1938.....	60
c) La ley de 1942.....	62

Capítulo II

EL CONCEPTO ECONOMICO DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE PRODUCCION

1. La realidad económica del fenómeno cooperativo.....	70
2. La cooperación como sistema de organización económico....	72
2.1 El cooperativismo como sistema de organización integral.....	77
2.1.1. La cooperatización integral por vía de la producción.....	78
2.1.2. La cooperatización integral por vía del consumo.....	84
2.1.3. La cooperatización integral por vía de la producción y el consumo.....	90
2.1.4. Consideraciones críticas.....	91
2.2 El cooperativismo como sistema de organización sectorial.....	97
3. La cooperación como instituto económico: la empresa cooperativa.....	101
4. La configuración económica de la empresa cooperativa de producción.....	108
4.1 La empresa cooperativa de producción como supuesto indiferenciado de empresa.....	109
4.2 La empresa cooperativa de producción como supuesto diferenciado de empresa.....	113
4.2.1. La teoría de la Mutualidad.....	115
4.2.2. La teoría de la Gestión de Servicios.....	123
5. La empresa cooperativa de producción: su esencia.....	126

Capítulo III

LA ESTRUCTURA JURIDICA DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE PRODUCCION

1. La empresa cooperativa de producción como realidad jurídica.	134
2. Los elementos de la empresa cooperativa.Consideraciones generales.....	142

Sección I

LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE PRODUCCION

Subsección I

EL EMPRESARIO COOPERATIVO

A) Los aspectos formales del empresario cooperativo

1. La sociedad cooperativa como forma jurídica típica.....	152
2. La configuración jurídica de la sociedad cooperativa de producción.....	156
2.1. La sociedad cooperativa de producción como tipo de organización cooperativa.....	157
2.1.1. La delimitación del concepto en el ordenamiento cooperativo.....	162
2.1.1.1 Las cooperativas industriales de producción formadas por comerciantes,industriales y profesionales.....	163
a) Presupuestos subjetivos.....	164
b) Presupuestos mutualistas.....	172
2.1.1.2 Las cooperativas industriales de producción formadas por trabajadores.....	178

2.1.2 La delimitación del concepto fuera del <u>or</u> denamiento cooperativo.....	184
2.1.2.1. La noción de cooperativa de pro- ducción y la normativa fiscal...	184
2.1.2.2. La noción de cooperativa de pro- ducción y la normativa de segu- ridad social.....	189
2.2 La Sociedad como negocio jurídico base de la coope- rativa de producción.....	199
2.2.1. Significado y alcance de la cuestión.....	199
2.2.2. Los elementos del contrato de sociedad.....	207
2.2.3. Los elementos del contrato de sociedad coo- perativa de producción.....	216
2.2.3.1. La pluralidad de sujetos.....	217
2.2.3.2. La aportación en común.....	219
2.2.3.3. El ánimo lucrativo.....	228
a) El ánimo lucrativo como elemento esencial para la calificación societaria de la cooperativa de de producción.....	232
Primera : El criterio diferen- ciador entre socie- dad y asociación.....	232
Segunda : La cooperativa como sociedad mutualista..	233
Tercera : La cooperativa como sociedad formal.....	239
b) El ánimo lucrativo como causa del contrato de sociedad coope- rativa de producción.....	240
c) El beneficio como modalidad de lucro en la sociedad coo <u>perati</u> va de producción.....	248
d) El retorno como técnica de dis- tribuir el beneficio en la socie- dad cooperativa de producción.	252

2.3. El caracter diferencial de las sociedades cooperativas de producción.....	266
--	-----

B) Los aspectos materiales del empresario cooperativo

1. Delimitación del tema.....	274
2. La producción como interés objetivo de la empresa cooperativa	279
2.1. Concepto y clases de interés.....	279
2.2. El interés colectivo de los socios de una cooperativa de producción.....	281
2.3. Los intereses de los elementos subjetivos de la empresa cooperativa de producción.....	290
2.3.1. La imposibilidad de una configuración unitaria de la empresa cooperativa.....	290
2.3.2. La cooperativa como empresa ordenadora de intereses opuestos.....	293
2.3.3. La cooperativa como empresa ordenadora de un interés colectivo.....	297
3. La gestión en la empresa cooperativa.....	301
3.1 Propiedad y gestión en la empresa cooperativa.....	301
3.1.1. La titularidad en la propiedad de la empresa cooperativa.....	306
3.1.2. La titularidad del poder de gestión en la empresa cooperativa.....	309
3.2 La autogestión como fórmula de participación de los socios trabajadores en la gestión de la empresa cooperativa	311
3.2.1. Las fórmulas de participación de los trabajadores en la empresa: criterio de clasificación.....	312
a) La participación como derecho no derivado de la propiedad.....	313
a') Formas no institucionalizadas.....	313
b') Formas institucionalizadas.....	313
a'') Cogestión.....	313
b'') Autogestión.....	314
b) La participación en la gestión como derecho derivado de la propiedad.....	317

3.2.2. La naturaleza participatoria de la empresa cooperativa.....	319
3.2.2.1. Objetivos y esferas de actuación de la autogestión cooperativa....	325
3.2.2.2. La estructura de la autogestión cooperativa.....	327

Subsección II

<u>EL PERSONAL DE LA EMPRESA COOPERATIVA</u>	332
--	-----

Sección II

LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA COOPERATIVA

1. Delimitación del tema.....	335
2. La relación de trabajo cooperativo como relación social	336
2.1 El significado de la dependencia en la relación de trabajo cooperativo.....	344
2.2 La asunción del riesgo en la relación de trabajo cooperativo.....	348
3. La prestación de trabajo del socio-trabajador como prestación accesoria.....	353
CONCLUSIONES.....	361
INDICE DE AUTORES.....	

CAPITULO I

"LA EVOLUCION HISTORICO-LEGISLATIVA DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION"

1. Los factores determinantes de la aparición del fenómeno cooperativo.

Los orígenes del movimiento cooperativo (1) no pueden ser objeto de investigación aislada, como fenómeno cuyo nacimiento responde a razones propias; muy por el contrario el movimiento cooperativo por el momento histórico en que surge, por las motivaciones iniciales que entraña y por las implicaciones sociales, económicas y políticas que supone, no viene a ser sino una manifestación más del movimiento asociativo obrero; de ahí que cualquier análisis que prescinda de la identidad sustancial entre ambos movimientos, esté llamado a caer en un particularismo carente de bases históricas, solidamente objetivas.

Sabido es que los albores del siglo XIX coinciden con la decadencia de las estructuras comunitarias de corte medieval - cuya permanencia había arrastrado el siglo anterior - y con la consolidación de un

(1) Entre la abundante bibliografía sobre la materia, vid: GAUMONT, J. "Histoire de la cooperation en France et á l'etranger", Paris 1921; BROUCKERE, L. "La cooperation: ses origines, sa nature et ses grandes fenotions", Bruxelles 1926; HOOG, G. "La cooperation de production: origine et institutions", París 1942; COWLING, E. "Co-operatives in America. Their past present and future", New York 1943; WARBASSE, J.P. "Democracia cooperativa Historia, método y técnica del cooperativismo", Buenos Aires 1945.

nuevo sistema: el implantado por la Revolución Industrial (2).

El proceso de transformación fue largo, y los factores determinantes de la reestructuración social fueron tan complejos como diversos (3). En cualquier caso, lo que interesa destacar es que los cambios afectaron todos los aspectos de la comunidad: en el político, una burguesía comercial y emprendedora accede al poder, sentando las bases para un ejercicio democrático del mismo; en el económico, el maquinismo y la multiplicación de los inventos supone una ampliación en las técnicas de producción de bienes y servicios; en el jurídico desaparecen o se debilitan las relaciones de servidumbre del periodo anterior (4) echándose los cimientos para la construcción del Estado de Derecho; en el terreno social, por fin, aparece una nueva clase trabajadora - la proletaria - generalizándose el sistema del trabajo por cuenta ajena (5).

-
- (2) Sobre los orígenes de la Revolución Industrial, así como sobre los diversos factores que influyeron a lo largo de casi dos siglos hasta su consolidación, FLINN, W. "Orígenes de la Revolución Industrial" Madrid 1970, *passim*, y amplia bibliografía en pags. 187 y ss.
- (3) FLINN, Op. cit. pags. 48 y ss; vid. también ALONSO OLEA, M. "La revolución industrial y la emergencia del Derecho del Trabajo", RT 1970, nº 32, pags. 5 y ss. esp. pags. 5-29, con amplia bibliografía.
- (4) ALONSO OLEA, op. cit. pag. 8 señala en este periodo, en el terreno de las relaciones de trabajo, el tránsito del status al contrato; en parecidos términos, BAYON CHACON, G.- PEREZ BOTIJA, E. "Manual de Derecho del Trabajo", 8ª edic. revisada, vol. I, Madrid 1972, pags. 79-80.
- (5) ALONSO OLEA, op. cit. pags. 9-10; BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, op. y loc. cit.

Las consecuencias inmediatas de esta transformación para esa recién creada clase social no produjeron los esperados beneficios ya que el libre juego de la oferta y de la demanda, propio del pensamiento liberal dominante, unido al individualismo contractual, supuso unas condiciones de vida difícilmente sostenibles (6).

El trabajador - nos dice un testigo de la época (7) - "vive para no morir". Los salarios son insuficientes; el trabajo de mujeres y menores se generaliza; la seguridad en el trabajo es inexistente, y la higiene y salud pública provocan elevados índices de mortalidad.

Frente a esta situación, en la que el poder público no interviene sino a través de la mera función de policía para proteger el orden público y las buenas costumbres en espera de que el orden natural de

- (6) Vid al respecto los informes de las comisiones inglesas de 1832 (Sadler", sobre el trabajo infantil en la industria textil) de 1842 ("Lord Ashley" sobre el trabajo en las minas) y 1842 igualmente ("Chadwick", sobre las condiciones sanitarias de la población obrera); selecciones de los primeros en BOWDITCH, J.-RAMSLAND, C "Voices of the Industrial Revolution", Michigan 1961 (cit. por ALONSO OLEA, op, cit. nota 46 a pag. 18); en Francia vid. VILLERME, L.R. "Tableau de L'etat phsique et moral des ouvriers employés dans les manufactures du sois, coton et laine", Paris 1840; en España, los informes de "Lopez Piñero" de 1847, y de Salarich en 1858 (selección de textos en BORRAJO DACRUZ, E. "Introducción al Derecho del Trabajo", 3ª edic. Madrid 1971, pags. 117 y ss) y el de la Comisión de Reformas Sociales de 1884 (en ELORZA, A.- IGLESIAS, M.C. "Información oral y escrita sobre el estado y las necesidades de la clase obrera", Selección y notas, RT 1969, nº 25 pags. 159 y ss.).
- (7) cfr. GUEPIN, A. "Nantes au XIX siècle", Sebire 1835, pag. 484 (cit. por DOLLEANS, E. "Historia del movimiento obrero", t. I, Madrid 1969, pag. 17).

la libre contratación produzca una perfecta armonía jurídica y social (8), las clases trabajadoras no tienen otra vía, para la defensa y protección de sus derechos, que la que les brinda la fuerza de su asociación.

En este entorno surge, primero de forma aislada y no exenta de rasgos filantrópicos, posteriormente de manera coherente y uniforme, el movimiento asociativo obrero (9), como movimiento de reacción de una clase social contra las condiciones impuestas por la revolución industrial e ideológica; siendo los países más directamente afectados por este fenómeno los primeros en los que aparecerán las asociaciones obreras (10).

En esta fase inicial, las asociaciones de trabajadores tienen un marcado carácter polivalente: son asociaciones de resistencia política, de tipo reivindicativo, de socorro mutuo, etc; sin embargo esta multioperatividad durará relativamente poco, aunque lo suficiente para considerar que las posteriores manifestaciones asociativas, más o menos inde-

(8) BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, op. y loc. cit.

(9) Sobre el movimiento asociativo obrero, vid: DOLLEANS, op. cit. (3 vol.); ABENDROTH, W. "Historia del movimiento obrero europeo", 2ª edic., Barcelona 1970; MORTON, A.L.- TATZ, G. "Historia del movimiento obrero en Inglaterra", Madrid 1971. Para España ABAD DE SANTILLAN, D. "Historia del movimiento obrero español", 3ª edic., Madrid 1968, y TUNON LARA, M. "El movimiento obrero en la historia de España", Madrid 1972.

(10) En Inglaterra en 1830 surge la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo, y en 1834 la "Grand National Consolidated Trade Union" (cfr. ABENDROTH, op. cit. pag. 19 y DOLLEANS, op. cit. pag. 106); en Francia, en 1830, se constituye la "Asociación de Trabajadores" (cfr. ABENDROTH, op. cit. pag. 25 y DOLLEANS, op. cit. pags. 118-119).

pendizadas del asociacionismo obrero profesional, guardan con él una identidad de origen, que no se puede ocultar ni suprimir a la hora de ensayar investigaciones de cada una de ellas.

Es en este cuadro histórico en el que debe buscarse y analizarse el nacimiento del movimiento cooperativo en su vertiente de producción; no como fenómeno aislado y sin conexión con la estructura social del momento, sino como manifestación particularizada del movimiento asociativo obrero, del que recibe toda su originaria y sustancial razón de ser (11).

El que posteriormente ambos hayan seguido caminos separados no es sino una prueba de la capacidad de desdoblamiento del movimiento obrero, sin que por ello se produzca más que una diferenciación meramente instrumental (12).

(11) De ahí que la historia de ambos movimientos, en una primera fase, coincida plenamente; cfr. PEREZ BOTIJA, E. "Curso de Derecho del Trabajo" 2ª edic., Madrid 1950, pag. 434, y GOBBI, U. "Cooperazione", voz, en Nuovo Digesto Italiano, vol, IV, pag. 219.

(12) Sobre las relaciones, entre sindicalismo y movimiento cooperativo, vid: LAMBERT, P. "Syndicalisme, cooperation et problemes sociaux d'aujourd'hui", Liege 1956, y GASCON HERNANDEZ, J. "Sindicalismo y Cooperación desde el punto de vista internacional", Homenaje a Jordana de Pozas, Libro III, Madrid 1961, pags. 171 y ss. En el mismo sentido, ANGUEIRA MIRANDA, A. ("Hacia la comunidad cooperativa libre. Por una revolución social al margen del poder y la violencia", Buenos Aires 1969, pag. 67) dice que entre sindicatos y cooperativas de producción debería existir una íntima unión, al objeto de provocar una resistencia sin cuartel a la explotación".

1.1 Los precedentes históricos y las primeras manifestaciones

Por algunos autores se configura el movimiento cooperativo de producción como un fenómeno de naturaleza exclusivamente comunitaria (13), influenciados más por el carácter equívoco del término "cooperación" que por una investigación rigurosa de su nacimiento como fenómeno social.

Ciertamente que el término señalado puede hacer referencia a una manifestación primaria del hombre: la de unirse con otros individuos para satisfacer sus necesidades; pero este planteamiento, que llega en algunos autores a considerar a Platón como precursor de la idea cooperativa (14) nos parece equivocado. El fenómeno cooperativo es, como todos los fenómenos comunitarios, propio de la naturaleza humana (15); pero el punto de discusión y partida tiene que ser el momento histórico en que el hombre es consciente de la necesidad de crear un nuevo instrumento, por imponerlo así las estructuras del momento (16).

-
- (13) Cfr. MUÑOZ ALONSO, A. "La cooperativa como fenómeno comunitario", en Estudios de la Organización Sindical, vol. 4º, Madrid 1965, pags. 11 y ss.
 - (14) STAUDINGER, F. "Las cooperativas de consumo", Barcelona 1925, pag. 34, señala que la filosofía griega podía haber señalado, sin más, que el hombre es un animal de colaboración, es decir, cooperativo.
 - (15) En este sentido, BROUÈRE, "La cooperation..."cit. pag. 44 dice "La cooperation c'est une tendance des plus anciennes, qui constitue un aspect essentiel de la civilisation elle-même et de son evolution économique".
 - (16) Cfr. GLUCK, E. Encyclopedie Social des Sciences, t. IV, pag. 359.

Este hecho, y esta impronta comunitaria que la cooperativa encierra, ha llevado a diversos autores, historiadores del fenómeno cooperativo, a buscar antecedentes en instituciones comunitarias cuya aparición es cronológicamente muy anterior del siglo XIX.

Sin negar el valor que como punto de investigación puedan tener estos supuestos de asociación trabajo, lo cierto es que su caracterización como antecedentes de la cooperativa de producción es muy forzada, ya que si existe algún parecido es más en los aspectos formales del fenómeno que en los esenciales.

Así los antecedentes que se citan con tan remotos que se manifiestan en las primeras civilizaciones conocidas. En este sentido RIEU (17) pretende relacionar fenómenos comunitarios de trabajo en épocas griegas, romanas o egipcias con las cooperativas de producción actuales. Más parecido, siempre con el carácter relativo que veremos a continuación, podrían tener instituciones más recientes históricamente; se mencionan a tal efecto las "Volkeris genessenschaften" alemanas, las "fruitiriés" francesas, los "mir" y las "artele" rusas y las "raguda" montenegrinas (18).

En España se citan como antecedentes la plantación de árboles en

(17) "La coopération ouvrière átravers les ages", these, Paris, 1898, pags. 5-77.

(18) Cfr. ANGUEIRA MIRANDA, "Hacia la comunidad..." cit. pags. 101 y ss. RABBENO, U. "Le società cooperative di produzione". Milano 1889, pags. 3 y ss.

terrenos de aprovechamiento en común, la endecha, la adula, la lorra y otras instituciones de la vida local española (19), e incluso se ha pretendido vislumbrar en las instituciones gremiales un antecedente remoto de estas cooperativas (20).

Todas estas instituciones tienen en común con las cooperativas el carácter espontáneo de su nacimiento; pero difieren en la motivación, formalización y organización. En la mayoría de los supuestos que se citan la motivación es de carácter religioso o psicológico; con un ámbito local muy reducido y sin más conexión con fenómenos similares que la que ofrece el carácter asociativo de los mismos. Por otra parte, se trata en muchos casos de fenómenos inestables, en los que la asociación desaparece cuando lo hace la motivación, muy concretizada, de esta unión.

Las cooperativas de producción, y más concretamente las que suponen una asociación de los propios trabajadores, nacen con una idea idéntica a todas ellas: la de ser vehículos de emancipación de las clases

-
- (19) Sobre el tema, ver la ya clásica obra de COSTA, J. "Derecho consuetudinario y economía popular", t. II, Barcelona 1902, y "Colectivismo Agrario en España" Madrid 1915; GASCON HERNANDEZ, J. "Algunos aspectos cooperativos de la vida local", en Rev. de Estudios de la vida local, nº 73.
- (20) Así, GONZALEZ DE VEGA. A. "Balance histórico de la cooperación en España", en "El cooperativismo en la conjuntura española actual", Madrid 1964, pag. 273. RUIZ DE ARMAS, A. "Historia de la Previsión social en España", Madrid 1944, pag. 194 asocia gremios y cooperativas por la función de socorro mutuo que estas últimas ejercían.

trabajadoras (21), y en un momento histórico muy concreto; el del triunfo de la revolución industrial. Es con el deseo de superar el conflicto primario entre capital y trabajo, que esa revolución había puesto en evidencia, con el que surgen estas instituciones. Toda referencia al movimiento cooperativo de producción olvidando esta realidad histórica, supone la desconexión de este fenómeno con sus implicaciones sociales, y le convierte en un movimiento comunitario más, con características meramente organizativas.

El haber calificado en este sentido a las cooperativas de producción como movimiento espontáneo de reacción contra determinadas situaciones sociales, nos exige afirmar que los precursores de este movimiento no fueron más que realizadores prácticos de la aspiración interna de las clases trabajadoras (22), debiendo mencionarse los nombres de los franceses Buchez, Fourier y Blanc, y el del inglés Owen, a los que se considera como creadores de las primeras cooperativas de producción (23).

-
- (21) GABRIEL, R. "Des cooperatives de production", Paris 1910, pags. 3-5 ve en el sufragio universal el correlativo político de emancipación de las clases trabajadoras.
- (22) Con palabras tan gráficas como expresivas. GASCON HERNANDEZ, J. "De recho cooperativo", Rev. de la R.A.L.J. nº XII, 1956 (separata) pag. 7, dice que "la idea cooperativa no fué obra de tal o cual reformador social, sino institución de la idea popular".
- (23) TOTOMIANZ, V. ("Nueva historia de las doctrinas cooperativas" Rev. Cooperación, 1934, nº 3, pag. 1) considera como precursores de esta idea a dos oscuros pensadores del siglo XVII; a Plockboy, que en 1959 publicó un ensayo bajo el título de "procedimiento para convertir en felices a los pobres de esta nación y de los otros pueblos, reuniendo cierto número de hombres competentes en una pequeña asociación económica o pequeña república" y a Belles, que en 1965 publica una obra con el título de "Proposiciones para la creación de una

Tema discutido por los historiadores es el relativo a determinar cual fue la institución con rasgos tan acusados como para merecer la calificación de primera cooperativa de producción.

En este sentido hay que referirse a como las ideas filantrópico-reformistas de Owen se adaptaron perfectamente a la situación y a las aspiraciones del movimiento obrero inglés, que defraudado por las represiones del poder político en su intento de participar en la vida la boral del país, se refugió en la actividad cooperativo-sindical, sobre todo porque en este campo aun no había padecido ninguna derrota definitiva (24). Sus ideas las puso en práctica al fundar en New-Lanarck (Escocia) (25) su sistema de bolsa de trabajo, destinado a posibilitar el intercambio de mercancías al precio de las horas de trabajo realizadas en las cooperativas de producción. Con el fin de crear una nueva sociedad económica, y siempre ligado al plan de Owen, en 1833 se pretendió constituir la "General Labour Union", con el objeto de restar mano de obra a las empresas capitalistas; sin embargo esta aspiración de la gran Federación sindical, basada en las cooperativas de producción, no dió resultado (26).

asociación de trabajo comprendiendo todas las industrias útiles y la agricultura". En general, para una detallada exposición de la historia de la doctrina cooperativa, ver MILADENATZ, G. "Histoire des doctrines cooperatives", Paris 1935.

(24) ABENTROTH, Op. cit. pag. 19.

(25) Una exposición de este experimento en MACNAS, H.G. "Examen impartial des nouvelles vue de Robert Owen et de ses stablissements a New-Lanrck" (trad. francesa de Laffon), Paris 1881.

(26) Cfr. ABENTROTH, ob. cit. pag. 20.

Más importancia que a este experimento owenista conceden los investigadores de este fenómeno al desarrollado en Francia a iniciativa de Buchez, fundador en 1834 de la primera cooperativa de producción, denominada "Bijoutiers doré" (27).

Por su interés merece la pena detenerse en el análisis de los principios bajo los que actuaba (28).

El programa de la asociación era el siguiente: un cierto número de trabajadores se reunirían adoptando la cualidad de empresarios, y elegirían de entre ellos a dos representantes; cada uno de los trabajadores reunidos seguiría siendo retribuido como hasta el momento de la asociación, por días o a destajo, y según el grado de habilidad individual; una suma de dinero, equivalente a la cantidad que viniesen obteniendo los empresarios intermediarios, sería ahorrada, y al final de cada ejercicio se destinaría una quinta parte a la formación de capital social (29), y el resto sería distribuido a prorrata del trabajo prestado por cada socio; la asociación no mantendría trabajadores asalariados

- (27) VILLERME, L.R. "Les associations ouvrières", Paris 1849, pag; 61 menciona una cooperativa anterior a la citada, la "Caisse du Pain", fundada en un pueblo de Alsacia, llamado Guebwiller.
- (28) El pensamiento de Buchez respecto a esta asociación está contenido en "Journal des sciences morales et politiques" del 17 de diciembre de 1831, pudiendo consultarse su texto íntegro en el libro citado de LAMBERT, pags. 297 y ss.
- (29) Respecto de este capital social se decía que sería "inalienable et indissoluble". Cfr. LAMBERT, op. cit. pag. 299.

durante un periodo superior a un año, y transcurrido dicho plazo estaría obligado a admitir un número de trabajadores equivalente al aumento de la capacidad técnica de la asociación (30).

Una lectura detallada de estos principios permiten observar que en el ánimo de Buchez estaban implícitos los que posteriormente se denominarían "Principios básicos de la Cooperación, y que vendrían formulados, trece años después, por los pioneros de Rochdale (31).

Así Buchez veía la necesidad de contar con una estructura democrática, distribuía los excedentes de las operaciones a prorrata del trabajo, - aplicando pues el principio del "retorno", - y fijaba la doble cualidad socio-trabajador, al limitar el trabajo asalariado.

Quizás el fracaso de la cooperativa se debiese al idealismo del fundador, que no solamente declaraba el carácter indisoluble e irrep~~art~~ible del capital (32); sino que lo pretendía colectivizar de forma que "no perteneciese a nadie, ni estuviese sujeto a las leyes de la sucesión".

(30) Este principio decía así: *l'association ne pourrai faire travailler pour son compte des ouvriers étrangers pendant plus d'une année; au bout de ce temps, elle serait contrainte d'admettre dans son sein le nombre de travailleurs nouveaux rendus nécessaires par l'accroissement de ses opérations*". Cfr. LAMBERT, ob. y loc. cit.

(31) Se pueden consultar los Estatutos de la cooperativa de Rochdale en la citada obra de Lambert, pags. 304 y ss. Sobre la adecuación de estos principios al movimiento cooperativo actual vid: VALKO, L. "Una nuova era per i principi di Rochdale", en Riv. Coop. 1965, pags. 719 y ss.

(32) Una interpretación literal del capital social como inalienable e indisoluble" llevaría a un absurdo, puesto que es impensable que un particular pueda decretar un bien inalienable. Buchez, llevado de su

A pesar de todo, Buchez intuyó perfectamente el espíritu de solidaridad del movimiento cooperativo, la necesidad de transformar las estructuras económicas sociales y las posibilidades que la asociación de trabajadores ofrecía para el mejoramiento de su situación laboral. En definitiva corresponde a Buchez, y a la cooperativa por él fundada, el mérito de haber preparado el camino para las posteriores realizaciones cooperativas (33).

La posterior evolución del movimiento cooperativo es imposible en tenderla sin hacer referencia a un hombre: Blanc, y a un programa: la Organización de Trabajo.

Si en el periodo anterior al 1848 se sientan las bases para una acción coordinada del movimiento obrero en Francia, la revolución de ese año alienta y realiza el espíritu de asociación entre la clase trabajadora, poniéndose en práctica las ideas asociativas de Luis Blanc. (34).

idealismo, pretendía con ello evitar que la acumulación de capital provocase una inmediata disolución de la cooperativa por parte de los trabajadores, y así no conseguir una transformación de las estructuras económico-sociales. Esta es la interpretación que da LAMBERT, op. cit. pag. 47; en contra, RABBENO, op. cit. pags. 45 y ss.

- (33) No nos parece admisible la crítica de RABBENO a la obra de Buchez, en su conjunto, llegando a negar a la cooperativa por aquél fundada - relevancia alguna dentro del movimiento cooperativo. "L'associazione dei bijoutiers en doré - dice Rabbeno, op. cit. pag. 50 - fu una creazione tutta speciale che non ebbe alcun rapporto col movimento cooperativo", Toda la crítica de este autor esta basada en que el capital indisoluble propuesto por Buchez era un principio contrario a las leyes económicas vigentes.
- (34) Sobre el significado de la revolución de 1848, y sus diversas implicaciones, vid. DOLLEANS, op. cit. pags. 207 y ss.

El pensamiento de Blanc se puede concretar de la siguiente manera: los trabajadores constituirán pequeños talleres, en los que reinará una completa igualdad; al capital solo se le asignará un interés limitado, revisable periódicamente; los trabajadores asociados percibirán un salario por su trabajo, y los excedentes se repartirán en tres partes: una para los trabajadores, la segunda para constituir un fondo de socorro mutuo y la tercera para adquirir los instrumentos necesarios de trabajo para aquellos socios que entren en la asociación (35).

Así organizados, estos talleres se encontrarán en condiciones aptas para hacer la competencia a las empresas capitalistas privadas, llegando a sustituirlas mediante el monopolio de su asociación.

La fundamental diferencia del pensamiento de Blanc con el de Buchez radica en que aquél admite la propiedad de los asociados sobre el capital social, al que por otra parte no retribuye más que con un interés limitado y nunca con excedentes.

De nuevo se aprecia en el pensamiento de Buchez los principios básicos que hoy regulan la vida y organización de las cooperativas de producción: democracia, interés limitado al capital, creación de un fondo comunitario y puerta abierta a todos los trabajadores.

Las ideas de Blanc pudieron ponerse en práctica gracias al triunfo de la Revolución de 1848 (36) ya que deseoso el poder público de evi

(35) Cfr. BLANC, L. "Organisation du travail", 5ª edic. Bruxellex, 1848, pags. 117 y ss.

(36) Por un Decreto de 25-2 se reconoció la libertad de asociación y se

tar los desastres económicos del año anterior y de no abandonar en manos del capital privado la organización industrial del país, da vida a los Talleres Nacionales, a los que financia y protege (37).

El mayor problema con el que se enfrentaron las asociaciones de obreros fue la ausencia de capital, que se intentó remediar con un Decreto de 5 de junio, aprobado por la Constituyente, abriendo un crédito de tres millones de francos, destinados a repartirse entre las asociaciones, bien de obreros bien de patronos y obreros conjuntamente (38).

Desbordaría con mucho seguir las diversas alternativas por las que pasó esta concesión de crédito, que por algunos fue considerada como un movimiento hecho por la Asamblea para demostrar lo irrelevante, desde el punto de vista económico, de estas asociaciones (39); sin embargo, fué

garantizó el derecho al trabajo: "Le gouvernement provisoire de la republique francaise s'engage a garantir l'existence de l'ouvrier par la republique francaise s'engage a garantir du travail a tous les citoyens; il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du benefice de leur travail"; sobre el significado de este decreto vid. DOLLEANS, op. cit. pag. 209 y RABBENO, op. cit. pag. 71.

- (37) Cfr. ABENTROTH, op. cit. pag. 26; Según este autor la experiencia de Blanc guarda cierta similitud con las asociaciones de producciones de Lasalle, fomentadas igualmente por el Estado; para LAMBERT (op. cit. pag. 52) el pensamiento de Blanc guarda su vigencia en la experiencia cooperativa israelí.
- (38) Cfr. DOLLEANS, op. cit. pag. 221 y ss; RABBENO, op. cit. pags. 79 y ss.; VALLEROUX, H. "Les associations cooperatives en France et a l'etranger", Paris 1884, pags. 14 y ss.
- (39) Dice DOLLEANS, (op. cit. pags. 222-223). "El consejo quiso emplear sus créditos para prevenir las tendencias socialistas de algunas corporaciones... La Asamblea Nacional aprobó el decreto del 5 de julio con el propósito de demostrar, por la experiencia, la imposibilidad práctica de las asociaciones obreras de producción".

elevado el número de las mismas que se acogieron a él, constituyéndose asociaciones obreras de trabajo de manera vertiginosa.

Este auge del trabajo en común duró relativamente poco, hasta que el golpe de diciembre de 1851 puso fin a la existencia de las sociedades obreras, y consiguientemente a las asociaciones de trabajo a ellas ligadas (40).

En el resto de los países de Europa, el movimiento cooperativo de producción o bien carece de base ideológica, o bien carece de manifestaciones prácticas cuantitativamente relevantes. Así, en Inglaterra, y aunque se pueden encontrar casos aislados de cooperativas de producción constituidas independientemente de las de consumo (41), lo normal es encontrar a aquellas vinculadas a estas; y ello por cuando en este país interesa menos la participación del trabajador en el sistema económico, que la promoción del consumidor, al que se le ofrece la posibilidad de obtener bienes y servicios en mejores condiciones que las del mercado.

(40) En 1869, de 17 asociaciones de producción que funcionaban solo 8 habían sido creadas en 1848. Cfr. "Almanach de la Cooperation par 1869", Paris, 1870.

(41) En 1859 se crea en Londres la "Working frame-makers and gilders association", y en Wolverhampton la "Plate locksmiths association". Sin embargo estos ejemplos de cooperativas de producción desligadas del cooperativismo de consumo no son frecuentes. Sobre el tema, vid: HOLYOAKE, G. "History of co-operation in England", London 1879 y RABBENO, U. "La cooperazione in Inghilterra", Milado 1885, esp. pags. 85 y ss.

Diversas son las causas que frenaron la evolución de estas cooperativas en Alemania, aunque el resultado fue el mismo. El cooperativismo que surge en este país es un cooperativismo de crédito y ahorro, de adquisición de materias primas y de venta de productos manufacturados ligado al sector agrícola o al artesano, que no solamente no favorece un impulso del asociacionismo obrero, sino que, en cuanto distrae su atención brindándole mejores condiciones de vida, elimina en parte la necesidad de la asociación (42).

El examen de la evolución posterior de este fenómeno, desbordaría con mucho nuestro estudio, interesando destacar solamente que la idea cooperativa no se impone sin dificultades, siendo dos los factores más importantes que en esta primera época juegan. Por una parte los gobiernos, temerosos del clima revolucionario de este periodo, ven en las cooperativas de producción gérmenes de sociedades con fines políticos, sometiendo las en consecuencia a un control muy rígido de tipo gubernativo, cuando no decretando su disolución por motivos de orden público (43).

Por otra, son los propios trabajadores los que faltos de formación adecuada y de recursos económicos suficientes, influyen negativamente en su desarrollo; y todo ello, sin olvidar que poco a poco aquel espíritu de

(42) REITLINGER, F. "Les associations ouvrières en Allemagne", Paris 1867, esp. pags. 55 y ss. y RABBENO, "le société..." cit. pags. 257 y ss. Este autor cita unas cooperativas de producción en las que se daban dos tipos de socios: el trabajador-socio (mitglieder) y el simple accionista (Stille gessellschafter).

(43) Cfr. GAUMONT, "Histoire...", cit. pag. 22.

Buchez de constituer cooperativas de producción como instrumentos aptos para provocar una participación de los trabajadores, en el sistema económico-social, terminando con el régimen asalariado, va diluyéndose y convirtiendo a las cooperativas en nuevas formas de especulación capitalista (44).

1.2 El inicio de la legislación cooperativa

Con la afirmación de la intrínseca validez del fenómeno cooperativo y de su objetiva relevancia como instituto económico, se inicia el proceso de su regulación jurídica, en la que no solamente los condicionamientos económicos impiden una asimilación simple con cualquiera de las figuras jurídico-asociativas reconocidas legalmente, sino que su proyección social, los problemas técnicos de su encuadramiento en el derecho societario, y las tendencias cambiantes de la empresa, convierten el proceso legislativo en un camino tan fatigoso, como lento.

No son pretensiones nuestras el analizar en toda su intensidad el proceso evolutivo de esta legislación (45), que no ha encontrado una absoluta uniformidad normativa. Sin embargo, y en la medida en que un breve conocimiento de este proceso va a permitir la comparación de nuestra

(44) Son interesantes recordar las palabras de un trabajador en el congreso obrero de Francia, al decir "Le mouvement coopératif, de social qu'il était à son origine, est devenu essentiellement bourgeois et conservateur dans le mauvais sens du mot", Cfr. "Congrès ouvriers de France", sesión de 1876 a Paris, Paris, 1887, pag. 336.

(45) Sobre la evolución legislativa, vid: MEDUGNO, D. "Le leggi nella vita cooperativa. Cenni di legislazione comparata", 2ª edic. Milano 1933; HIRSCHELD, S. "Origines du droit coopératif en Europe", Rev.

realidad legislativa con la de los países inicialmente más afectados por el movimiento, vamos a repasar las características más sobresalientes de este proceso, deteniéndonos con mayor detalle en la legislación francesa.

La promulgación de normas jurídicas especiales para la sociedad cooperativa no fue tarea fácil, y a ello contribuyeron factores no solamente políticos, sino también intereses económicos.

En aquellos países en los que el reconocimiento de la institución cooperativa estuvo condicionada al previo reconocimiento de la libertad de Asociación, la regulación de las cooperativas de producción se hizo mediante fórmulas estrechas y desnaturalizadoras de su esencia; en aquellos otros en los que el reconocimiento de estas no se planteó como una cuestión política de principio, bien por estar ya reconocido el derecho de libre asociación, bien por aparecer ligadas estas cooperativas a los objetivos de cooperativas actuantes en sectores económicos diferentes a la producción, el freno vino impuesto por las organizaciones económicas que ya tenía voz en el contexto de la organización del país.

De ahí que los legisladores - como dice VERRUCOLI (46) no mostrasen ninguna diligencia en el establecimiento de esquemas legislativos que facilitasen la realización de la idea y de la organización cooperativa.

Etu. Coop. 1952, pags. 111 y ss; VALKO, L. "International Handbooks of Cooperative Legislation", Washington 1954.

- (46) "Derecho comparado europeo sobre cooperación", en "La agricultura española, el cooperativismo y otras formas de asociación agraria", Madrid 1965, pag. 29.

El primer país que vino a formular una normativa "ad hoc" para las cooperativas fue Inglaterra, al promulgar en 1852 la "Industrial and Provident Societies Act". (47).

Antes de la publicación de esta ley, las sociedades cooperativas tuvieron que adecuar su constitución a la normativa prevista para las "friendly societies", sociedades con finalidad de socorro mutuo reconocidas desde 1793; aunque esta adecuación suponía notables riesgos en orden a la responsabilidad de la sociedad frente a terceros (48).

En realidad la legislación inglesa no ofrece mayor interés que el señalado de haber sido el primer ordenamiento que configuró una normativa especial para las sociedades cooperativas; hecho que ha influido notablemente en el desarrollo cooperativo de aquel país, demostrándose una vez más que si bien el hecho se adelanta al derecho, una inteligente y a veces audaz proyección de este sobre aquél, es el camino más seguro para el crecimiento coherente de la realidad.

(47) Cfr. VALKO, L. "Le prima legge cooperativa", Riv. Coop. 1952, pags. 982 y ss. Sobre la historia de la legislación inglesa ver también HOLYOAKE, op. cit. y HALSBURY'S "Laws of England: Industrial and Provident Societies", 3ª edic. London 1957, vol. 21, pags. 3 y ss.

(48) De acuerdo con la legislación sobre las "friendly societies", estas sociedades no podían realizar actos de comercio, con lo que las primeras cooperativas tuvieron que ejercer su actividad bajo el nombre de un socio, que asumía bajo su responsabilidad la carga de la gestión empresarial. Esta situación duró hasta 1846, en que por medio de la "clausula de la pequeña inversión" (frugal investment clause) se permitió a estas sociedades, previa inversión del ahorro de los socios, proveer a estos de artículos alimenticios. Cfr. HALSBURY'S, "Laws"..., cit. pag. 4, y VERRUCOLI, Op. cit. pag. 28.

En Francia el desarrollo legislativo fue más tardío en orden al reconocimiento jurídico de la institución, pero presenta aspectos más atrayentes, no solo por el hecho de que la normativa francesa ha condicionado tradicionalmente la nuestra, sino por cuanto es el primer ordenamiento que inicia la legislación por vía de las cooperativas de producción.

En este sentido en 1848, y como consecuencia del movimiento popular que provocó la explosión de las asociaciones obreras de producción, se inician los primeros ensayos de regulación.

Así el 6 de agosto de 1849 se presenta una proposición de ley en la Asamblea legislativa tendente a "exceptuar de las formalidades relativas a la publicidad de sociedades y a la indivisión voluntaria, contenidas respectivamente en los códigos de Comercio y Civil, a las asociaciones industriales y agrícolas" (49).

Esta proposición de ley, que pretendía crear un "verdadero estatuto jurídico de la cooperación (50), no se aprobó, por lo que las sociedades cooperativas de producción obrera, que eran las verdaderamente importantes en esta época, tuvieron que adecuar sus esquemas a la normativa común sociataria. Entre las diversas formas jurídicas, la más acogida por las primeras cooperativas fué la de la sociedad comanditaria, atenuándose la diversa posición jurídica de los socios con unas disposiciones estatutarias más flexibles.

(49) Un mayor detalle de esta proposición en RAMADIER, P. "Le droit des Coopératives en France", Paris 1932, pags. 4 y ss.

(50) Cfr. COUTANT, L. "L'evolution du droit coopératif de ses origines a 1950", Reims 1950, pag. 26.

La situación de sometimiento de las cooperativas a las disposiciones comunes del derecho societario perdura hasta 1867, fecha en que se aprueba, tras diversos enteproyectos de matiz muy variado, (51) la ley de 24 de julio que regula en su título III las sociedades de capital variable. (52); y aunque no se configuraba autónomamente la sociedad cooperativa (podían constituirse sociedades civiles o comerciales con capital variable) se preparaba el camino para una regulación unitaria.

En realidad el legislador de la ley de 1867 no había pretendido crear una norma propia para las cooperativas, sino simplemente construir una figura jurídica que permitiese la adecuación de los principios cooperativos a las diversas sociedades; la consecuencia fue que ni el movimiento cooperativo de base aceptó los beneficios de la ley, ni la doctrina científica recibió con simpatía la norma, ya que en la misma se apreciaban omisiones básicas (53).

-
- (51) El primer proyecto se titulaba "Des sociétés de Cooperation", y el segundo "Dispositions spéciales aux sociétés de Cooperation". Ninguno de los dos obtuvo una acogida favorable entre el movimiento cooperativo. Cfr. "VALLEROUX. "Les associations...", cit. pag. 229; ver también HOOG, G. "La coopération de production", t. I. "Origine et Institutions", Paris 1942, pags. 9 y ss. y COUTANT, op. cit. pags 28 y ss.
- (52) Para un análisis del régimen jurídico establecido en esta ley, vid: HOUPIN, Ch. "Des sociétés civiles à capital variable: formation", en "Journal des Sociétés", 1897, pags. 337, y ss.
- (53) En este sentido, vid: VAVASSEUR, "Traité des sociétés civiles et commerciales", 6ª edic., Paris 1910, pags. 237 y ss.; NAST, A. "Le régime juridique des cooperatives", Paris 1919, pag. 119.

Fueron, después, las experiencias concretas y las exigencias particulares de la cooperación las que - como afirma VERRUCOLI (54) - determinaron en las primeras décadas de nuestro siglo una copiosa producción legislativa, iniciada, por lo que se refiere a la cooperativa de producción, por la ley de 18 de diciembre de 1915, que vino a dar pleno reconocimiento jurídico a la situación de hecho existente desde 1896 (55).

En esta breve referencia al proceso legislativo francés no podemos dejar de mencionar una disposición que, aun no siendo específicamente cooperativa, tuvo el inmenso valor de intuir el posible significado de la cooperativa de producción en un régimen capitalista (56).

Nos estamos refiriendo a la ley de 6 de abril de 1917, que creó un nuevo tipo de sociedad, la sociedad anónima de participación obrera,

(54) "Derecho...", cit. pag. 30.

(55) En 1888 se elaboró un proyecto de ley sobre el régimen jurídico de las cooperativas obreras de producción que no llegó a ser aprobado por la Asamblea. La ley de 1915 definía las cooperativas de producción como aquellas que tienen por fin "l'exercice en commun de la profession des associés pour l'entreprise de travaux, pour la vente des objets fabriqués ou travaillés par eux ou produits par leurs exploitation", Cfr. COUTANT, op. cit. pag. 59. Posteriormente, la ley de 25 de febrero de 1927 incorporó las disposiciones de la ley de 1915 al Code du Travail, arts. 23 y ss. Se puede leer el texto de esta ley en NAST. A. "Code de la Cooperation", Paris 1928, págs. 448 y ss. Esta ley de 1927 sufrió diversas modificaciones, hasta la ley de 1937, de 29 de mayo, que amplió el concepto de cooperativa de producción (art. 27 del libro III del Code) y que constituye su normativa especial. Cfr. RIVERO, J-SAVATIER, J. "Droit du travail" 4ª edic., Paris 1966, pag. 103.

(56) Coutant (op. cit.) guarda silencio respecto de esta disposición.

con dos clases de acciones: las de capital y las de trabajo; estas últimas (57) se consideraban propiedad colectiva del personal asalariado, constituido en sociedad cooperativa de mano de obra (58).

A pesar del escaso valor práctico de esta ley, y de las fuertes críticas que a ella la dedicó la doctrina científica (59), a nosotros nos parece el primer ensayo serio de configurar a la cooperativa como instrumento de participación obrera en un régimen capitalista, partiendo de las limitaciones que tiene para la formación de capital.

El movimiento legislativo alemán adopta en la regulación de las sociedades cooperativas (60) unos rasgos típicos con respecto al resto de las legislaciones europeas, si bien desde la perspectiva que nos interesa ofrezca escaso relieve. Las primeras cooperativas tuvieron que adecuarse a las figuras jurídicas reguladas por el derecho común alemán y

-
- (57) Los intentos de crear esta figura participatoria son anteriores a 1917. Cfr. ANTONELLI, E. "les actions de travail dans la société anonyme á participation ouvrière", Paris 1912, y RATTI, L. "Le azioni di lavoro come nuova forma di cooperativismo", Riv. delle soc. comm. 1912, pags. 639 y ss.
- (58) Cfr. GASPERONI, N. "Le azioni a favore dei prestatori di lavoro", Riv. delle Società, 1962, pags. 938, también MOIX, M. "Participación. La experiencia francesa en el mundo del trabajo", Madrid s/f. pags. 27 y ss.
- (59) Así ESCARRA J u E - RAULT, J. "Traité theorique et pratique de droit commercial", t. III, Paris 1955, pags. 147 y ss.
- (60) El término alemán de cooperativa es el de "genossenschaften". Este término es utilizado de forma muy amplia por diversos autores, y así GIERKE O. v., (Die Genossenschaftstheorie und die Rechtsprechung", Berlin 1881), considera como principio de esta sociedad la representación de la unidad en la multiplicidad, y designa como cooperativas a todas las asociaciones que, fuera del Estado y de los Municipios, posean una personalidad jurídica autónoma. Este concepto de la doctrina alemana parece desmesurado; Cfr. GAY DE MONTELLA, R. "Código de comercio comentado", Barcelona 1948, t. II, pag. 114.

por el de los diversos estados (61). El Código general de 1861 no contempló la sociedad cooperativa, por lo que los primeros pasos de estas acusaron una cierta imprecisión e inseguridad; situación que perduró hasta la promulgación de la ley de 4 de julio de 1868 (62) que reconoció a las cooperativas personalidad jurídica propia. Una vez producida la reunificación alemana, se publica la ley del 1 de mayo de 1889; que con algunos ligeros retoques mantiene todavía hoy su vigencia.

Con ello se comprueba la feliz regulación que el legislador hizo de las sociedades cooperativas, posibilitando que en el movimiento cooperativo se integrasen no solamente aquellas economías tradicionalmente consideradas como débiles, sino también aquellas otras que, aun no teniendo este carácter clasista, adecuasen su funcionamiento a los principios con que la cooperativa venía configurada (63); esto ha contribuido a crear un clima favorable a la constitución de cooperativas entre sujetos económicos de notable potencia y a un desarrollo cuantitativamente importante del movimiento cooperativo alemán.

-
- (61) Estas figuras asociativas eran la "Korporation" y la "Sozietat". Cfr. VERRUCOLI, "Le società cooperative", Milene 1958, pag. 7.
- (62) Esta ley se dictó para el Estado de Alemania del Norte, aunque posteriormente fué aplicada en otros "Lands". (HIRSCHFELD, "Les origines...", cit. pag. 112, y SCHONFELD, V. "Die Gesellschaftsformen im Wirtschaftsleben", Flensburg 1960, pags. 19 y ss). La ley de 1868 denominaba a las cooperativas como sociedades de comercio y de economía ("Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften").
- (63) La propia definición que de la cooperativa de el art. 1º de la ley demuestra este carácter posibilista de la cooperativa, al conceptuar como tal a aquella sociedad que sin número cerrado de socios, se propone el ejercicio de una actividad o el desarrollo económico de los socios, mediante la explotación en común de un negocio ("Gesellschaft von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des

En Italia, la primera regulación del fenómeno cooperativo apareció en el Código de Comercio de 1882, en donde se contemplaba a la cooperativa no como una figura jurídica autónoma, sino como una figura ordinaria, cualificada únicamente desde el punto de vista estructural por el sistema de la variabilidad de capital y por algunos aspectos personalistas en la participación social (64).

Como señala SCORDING (65) a la cooperativa se le asignaba un papel secundario a través de una normativa que, limitada a aspectos meramente organizativos, se superponía a la organización de la sociedad ordinaria (66).

El resto de las legislaciones europeas siguen, en mayor o menor medida, alguno de los esquemas legislativos examinados anteriormente y que podrían ser fácilmente reconducibles a dos.

Erwebes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittelst gemeinschaftlich... erworben die Rechten einer eingetragenen Genossenschaft nach Massgabe dieses Gesetzes").

(64) Estos aspectos se referían fundamentalmente a la adquisición y pérdida de la condición de socio a la atribución de un solo voto en las asambleas independientemente de la participación en el capital, a la necesidad de autorización de los administradores para los supuestos de cesión de acciones, etc. Sobre la regulación de las cooperativas en el código de 1882, vid. por todo MANARA, U. "Delle società e delle associazioni commerciali", vol. V, Torino 1902, esp. pag. 595 y ss. y BONELLI, G. "Le società cooperative nel vigente codice di commercio italiano", en "Dir. Comm", 1889, col. 696 y ss.

(65) "La società cooperativa", Napoli 1970, pag. 28

(66) Es decir que podía adoptar la forma de sociedad cooperativa anónima, en nombre colectivo o en comandita, siendo la más utilizada la primera. Vid. MANFREDI, P. "La società anonima cooperativa", 2ª edic. Milano 1885.

Por una parte se encuentra el modelo inglés, que configura una so
ciedad especial, distinta de las tradicionales, acentuando el carácter
 personalista de la cooperativa, y admitiendo todo lo más en la organizaci
ón algunas reglas típicas de la sociedad capitalista (67).

Consecuencia de este criterio es el carácter funcional y posibilista
 ta que adquiere el fenómeno cooperativo, al que se le considera no como
 corrector marginal del sistema capitalista sino como elemento básico de
 su desarrollo (68).

Por otra se encuentra el modelo francés, (69) que coloca a las coope

- (67) Siguen este modelo la legislación suiza, austriaca y sueca fundamen-
 talmente. La legislación suiza reguló la cooperativa, por primera
 vez y de forma unitaria, en el Código de las Obligaciones de 1881,
 donde se configuraba a la *genossenschaft* como instrumento adecuado
 para el ejercicio de la cooperación económica (Cfr. BARLOCHER, R.
 "Die Umwandlung einer Genossenschaft in eine Kapitalgesellschaft",
 Ber 1941, pags. 7 y ss.) En Austria, una ley de abril de 1873 regu-
 ló la constitución de las cooperativas, y el ordenamiento sueco pro
 mulgó en 1895 la legislación de las cooperativas, a la que configuró
 como grupo abierto de socios (*föreningar*), (Cfr. RICHAUME-LAMBERT,
 "Le nouveau régime juridique des coopératives en Suede", Rev. Int.
 Droit Comp. 1953, pag. 686).
- (68) Así VERRUCOLI, "Derecho...", cit. pag. 39. Respecto al carácter fun
 cional del fenómeno cooperativo en Inglaterra, y a la importancia
 de su desarrollo, vid GOWER, L.C.B. "The principles of modern com-
 pany law", London 1954, pag. 238-239, en donde escribe "Today co-ope-
 ratives/societies have become immensely powerful... the result of
 this development is that these societies have become assimilated, from
 economical point, to companies".
- (69) La influencia francesa se hizo sentir en la legislación belga y es-
 pañola. Así, la ley belga de 18 de mayo de 1973 configura la coope-
 rativa como una sociedad de capital variable. (Cfr. RESTEAU, Ch.
 "Traité des sociétés coopératives", 3ª edic. Bruxelles 1935, pags.
 13 y ss. y t Kint, J - GODIN, M. "Les sociétés coopératives", Bru-
 xelles 1968, pag. 10). Respecto a la evolución del ordenamiento co-
 operativo español, vid. pags. 28 y ss.

rativas entre los tipos ordinarios de sociedades comerciales, acentuando el carácter clasista de la función cooperativa, y limitando el fenómeno cooperativo a dimensiones estrechas e inadecuadas a sus exigencias.

2. La evolución del fenómeno cooperativo en España

En el apartado anterior hemos descrito la aparición del movimiento cooperativo, comprobando la identidad genética de este fenómeno con el movimiento asociativo obrero, y configurando a la cooperativa como organización dirigida a proteger los intereses económico-sociales de la clase trabajadora.

Igualmente se ha visto como las diversas legislaciones europeas respondieron, frente a ese movimiento, con una normativa encaminada a adecuar, en mayor o menor medida, los principios inspiradores del fenómeno con su carácter instrumental.

En todo caso, e independientemente del carácter rígido y clasista o funcional y pragmático con que vienen configuradas las sociedades cooperativas, lo cierto es que el análisis del proceso legislativo en Europa permite apreciar una relativa identidad, manifestada en la toma de conciencia del legislador de la necesidad de dotar a estas instituciones de un marco jurídico idóneo para la consecución de los fines económico-sociales a ellas inherentes.

Frente a esta identidad en el desarrollo legislativo de los países europeos, España ofrece un proceso evolutivo con características especiales tan acusadas, que permiten calificar de muy particular el desarrollo y la posterior consolidación del movimiento cooperativo y de su legisla-

ción, ya que no se dota a la sociedad cooperativa con unos esquemas propios hasta el final del primer tercio del presente siglo.

Sería erróneo, de todas formas, culpar del retraso del movimiento cooperativo al desinterés del legislador por otorgar un marco jurídico adecuado a estas instituciones; como pecaría de parcial el afirmar sin más que este desinterés del legislador se vió favorecido por la inexistencia del hecho social típico, el cooperativo, que impusiese la necesidad de regular las relaciones derivadas de él (70).

El problema es más complejo que todo esto, y en cualquier caso ambas posiciones mantienen solo un cierto grado de objetiva verdad.

Las razones del retraso en la recepción, y posterior evolución, del fenómeno cooperativo, no son sino las razones determinantes del retraso en la recepción de la Revolución Industrial, y en el que factores económicos se combinan con factores políticos y sociales de signo muy diverso.

En este sentido, recordemos que el fenómeno cooperativo aparece en los países europeos cuando las masas trabajadoras, social y económicamente proletarizadas, toman conciencia de la necesidad de asociarse como medida de reacción frente a las estructuras capitalistas.

Así pues, son dos los presupuestos básicos sobre los que opera el fenómeno cooperativo: por una parte, un proceso de industrialización lo suficientemente desarrollado como para conseguir la proletarianización de las clases trabajadoras; por otra, una toma de conciencia colectiva de

(70) GUASP, J. "Derecho", Madrid 1971, pags. 48 y ss. pone de relieve que la norma jurídica aparece cuando las relaciones entre los hombres exigen esa regulación.

esa clase trabajadora de la necesidad de asociarse como medio para buscar fórmulas sustitutivas o reformadoras.

En España, hasta bien entrado el siglo XIX, no se producen estos presupuestos generadores del movimiento cooperativo (71).

El proceso de industrialización de nuestro país es más lento que el del resto de los países europeos, - en especial el de Francia e Inglaterra, - lo que unido a la despoblación existente (72) y a lo tardío de la desaparición de los gremios, con la consiguiente declaración de la libertad de industria y de trabajo, (73) frena cualquier exigencia de asociación obrera.

El estado de subdesarrollo industrial en la España del primer tercio del pasado siglo encuentra en la región catalana y parte de la levantina una diversa situación, por lo que son estas las primeras regiones en reci-

-
- (71) GAUMONT, "Histoire..." cit., pag. 170 señala como causas del retraso del movimiento cooperativo español la inexistencia de un proletariado industrial suficientemente reivindicador, la posición represiva del poder público, y la inexperiencia de los iniciadores.
 - (72) ANES ALVAREZ, G "Las crisis agrarias de la España moderna", Madrid 1970 pags. 430 y ss.
 - (73) Sabido es como a pesar de los esfuerzos de la Constitución de 1812, la desaparición de los gremios, con la declaración de libertad de industria y trabajo, no llega hasta 1834 (D. 25-6) y 1836 (L.6-12). De todas formas no se puede olvidar que la muerte del gremio se fué gestando épocas muy anteriores; y así BAYON ("La autonomía...", cit. pag. 282) dice: "una serie de medidas anteriores (a las de 1813) habían dado cauce a la supresión de la mayor parte de las Ordenanzas Gremiales". Sobre el significado que la desaparición del gremio tuvo en la proletarianización del obrero español, vid. VICENS VIVES, "Historia económica y social de España y América", T. IV. Vol. II, Barcelona 1951 - pag. 162 y ss.

bir los movimientos asociativos obreros en general, y cooperativo en particular (74).

2.1 Las primeras manifestaciones cooperativas

La muerte oficial del gremio y las consiguientes declaraciones de las libertades de establecimiento de industrias y libre ejercicio del trabajo plantean de forma seria la lucha por la libertad de asociación, que se presenta como remedio del sistema liberal, al poder pasarse de un orden social atomizado, en el que el individuo y el Estado monopolizan todas las acciones y relaciones, a un nuevo orden en el que se da entrada a los grupos intermedios (75).

El movimiento cooperativo nace así involucrado en el proceso de conquista de la libertad de asociación, al estilo del movimiento cooperativo francés (76); y como en él su contenido es múltiple: son asociaciones de resistencia política, de ayuda mutua, de fines económicos. Esto equiva-

(74) Cfr. CARR, R. "España 1808-1936", Barcelona 1969, pags. 43 y ss. y 442.

(75) Cfr. BORRAJO DACRUZ, E. "Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid, 1972 pag. 122.

(76) Las coincidencias entre movimiento cooperativo español y francés no solo se dan en el terreno de los hechos (aparición del fenómeno por el tipo de cooperativas de producción, idéntica postura represiva del poder público) sino en el de la ideología. Y así ABAD DE SANTILLAN, (op. cit. pag. 60) denota la influencia del pensamiento de Fourier en los españoles Sebastian Abreu, Sagrario de Veloy y Faustino Alonso, todos ellos entusiastas de la cooperación.

vale a decir que en el proceso de constitución de las primeras cooperativas se dan los mismos factores y coincidencias que en el proceso de constitución de las asociaciones profesionales; de ahí que es estudio de las primeras cooperativas debe hacerse obligadamente desde la perspectiva de la lucha por la libertad de asociación.

En este sentido, el primer ~~paso~~ hacia la asociación llega en el 1839, cuando se autoriza la constitución de sociedades obreras con fines mutualistas y benéficos (77). Al amparo de esta ley, y en 1840, se crea en Barcelona la Asociación Mutua de Obreros de la Industria algodonera, forma exterior de una Sociedad de tejedores de algodón que funcionaba de hecho desde 1839 (78). En el 1842, los dirigentes de la Asociación solicitan del Ayuntamiento de Barcelona un préstamo de siete mil duros, con el que, una vez concedido, crean la primera cooperativa de producción: la Compañía Fabril de Tejedores de Algodón, cuya finalidad fue la de dar trabajo a los obreros en paro, que funcionó hasta 1848 (79).

(77) Se aprueba por R.O. de 28 de febrero. En el año 1838, los obreros catalanes habían solicitado el reconocimiento del derecho de asociación, que se les denegó. Cfr. GARCIA GALLO, A. "Manual de Historia del Derecho Español", T.I. Madrid 1959, pag. 905.

(78) Cfr. ABAD DE SANTILLAN, op. cit. pag. 64 GOMEZ GASAS, J. "Historia del anarco-sindicalismo español", Madrid 1968, pag. 17 y ss; CARR, R. España 1808-1939", cit. pags. 224 y ss.

(79) No hay plena unanimidad en torno a la fecha de creación de esta cooperativa; y así GOMEZ CASAS, (op. loc. cit.) señala la de 1841; sin embargo la mayoría de los autores la fijan en el 1842; vid. RAVENTOS CARNER, J. "El movimiento cooperativo español", Barcelona 1960, pags. 47 y ss y 82. El fundador de la cooperativo parece que fué Juan Munt (Munt lo escribe ABAD DE SANTILLAN, op. loc. cit.).

La desaparición de esta cooperativa sobrevino por su contenido plural ya que al ser disuelta en 1843 la Sociedad que le dió vida, las actividades de resistencia política que aquella ejercía pasaron a serlo por la cooperativa, provocando su crisis económica.

Es difícil enjuiciar de forma aislada el alcance y significado de esta primera cooperativa de producción (80), cuyo máximo interés reside no tanto en este dato, cuando en haber sido constituida al amparo de la primera asociación obrera con la que se abre camino a un proceso de cambio en las estructuras españolas. Su importancia, desde una perspectiva estrictamente cooperativa, fue escasa, y a su fracaso contribuyó en no poca medida el precario régimen jurídico al que tuvieron que acogerse (81).

Los primeros experimentos cooperativos nacen así sin el apoyo de un estatuto jurídico adecuado, y son más producto de los esfuerzos no exentos de filantropía de algunos entusiastas de la idea de la cooperación aplicada al marco económico-social, que de una acción comunitaria de la clase trabajadora (82). En definitiva, las primeras cooperativas de

(80) Por las mismas fechas de 1841 parece que hubo un ensayo de Manuel Sagrario de Veloy para constituir una cooperativa en Tempul (cerca de Jerez) tipo fourierista. Su intento fracasó, al no poder obtener del Estado determinadas concesiones. Cfr. GARRIDO TORTOSA, F. "Historia de las clases trabajadoras", t. IV, "El trabajo asociado", edic. Madrid 1970, pag. 125.

(81) El régimen jurídico era el de la R.O. de 1839, por lo que se regulaban las sociedades mutuas y benéficas. Sobre el significado negativo que este régimen jurídico tuvo en el movimiento cooperativo, vid: ROCA y GALES, J. "Las asociaciones cooperativas comparadas con las de socorros mutuos y demás asociaciones obreras en Cataluña", en "La Asociación", nº 4, 26-4 - 1866.

(82) Vuelve a ponerse de manifiesto el paralelismo entre el movimiento

producción carecen tanto de un sustrato popular amplio, como de un contexto jurídico limitador de su actividad; todo lo cual influyó en el escaso arraigo de estas figuras asociativas, cuyo número fue prácticamente irrelevante (83).

A partir de 1848, y hasta 1854, todas las asociaciones obreras viven en la clandestinidad, aunque la lucha por la libertad de asociación no cesa. En 1854 se produce una insurrección militar contra la Corona, que adquiere en Barcelona un fuerte matiz social, y que desemboca en la huelga general de 1855, - adquiriendo aspectos casi dramáticos (84), la petición de los trabajadores de libertad de asociación. - El Gobierno prometió elevar a las Cortes un proyecto de ley de Asociaciones, que al final no presentó (85).

Con el fin del Bienio Progresista, y la vuelta de Narvaez al poder, se inicia una política represiva de las asociaciones obreras, que culmina

español y el francés ya que a este también se le critica la falta de base popular; en este sentido RABBENO, ("Le società...", cit. pag. 223) señala que el movimiento inglés nació en la mente del obrero, mientras el francés lo hizo en la del filósofo.

- (83) PIERNAS HURTADO, J. "El movimiento cooperativo", Madrid 1890, pag. 97 pone en duda la cifra de medio millar de cooperativas para la década 1850. Seguramente para las de producción la cifra no pasaría de una veintena, siendo las actividades más importantes las de sastre, zapatero y calafate. Cfr. GARRIDO TORTOSA, op. cit. pag. 124.
- (84) El lema "Asociación o muerte", enarbolado por los huelgistas, da idea del alcance de esta aspiración. Cfr. ABAD DE SANTILLAN, op. cit. pag. 73.
- (85) En 1854, siendo Gobernador de Barcelona Pascual Madoz, una R.O. de 31-5 dió vida legal a las asociaciones, si bien por periodo corto. El texto de esta disposición se puede consultar en ABAD DE SANTILLAN op. cit. pag. 71 y ss.

con la promulgación del Decreto de treinta de abril de 1857, por el que se declaran disueltas todas las asociaciones de trabajadores, incluso las de finalidad benéfica o de socorro mutuo (86).

De nuevo vuelven las cooperativas de producción a la clandestinidad, procediéndose, incluso, a su disolución por los propios trabajadores ya que, si anteriormente había un régimen jurídico en el que apoyarse, ahora las sociedades cooperativas carecen de él, considerándose por parte del poder público su constitución como ilegal.

Esta situación se flexibiliza a partir de 1864 (87), tolerándose que las cooperativas que funcionan en régimen de clandestinidad pasen a un sistema de semi publicidad y procediéndose, a nuevas constituciones (88).

-
- (86) El decreto de abolición de las asociaciones obreras de Narvaez pone de nuevo de relieve la influencia de los movimientos obreros españoles y francés, y recuerda las frases de Thiers cuando en 1850 disolvió las asociaciones de trabajadores. "Les associations ouvrières - decía Thiers - ne sont autre chose que l'anarchie dans l'industrie", Cfr. DUVAL, J "Les origines du mouvement..., Cooperatif" Journal des Economists, 1867, nº 8 pag. 225.
- (87) Este cambio de actitud se debió al gobierno del General Dulce. "Hoy se lee en el diario "El obrero", de 4-9-1864 - que merced al régimen tolerante establecido por el General Dulce viven las asociaciones sin que sean objeto de temor por parte del gobierno..." Cfr. ELORZA, A. "El obrero y La emancipación, selección y notas preliminares de... RT nº 30, 1970, pag. 206.
- (88) Así, y en esta época, se constituyó la cooperativa "Obrera Mataronense", dedicada a la fabricación de hilados y tejidos, y que contaba con 247 socios (Cfr. ABAD DE SANTILLAN, op. cit. pg. 82 y RAVENTOS, op. cit. pg. 72). De esta época datan los primeros intentos de constituir cooperativas en la zona de Andalucía, Vid. DIAZ DEL MORAL, J. "Historia de las agitaciones campesinas andaluzas", 2ª edic. Madrid 1969, pag. 75 y GONZALEZ DE VEGA, A. "Balance histórico de la cooperación en España", cit. pag. 286.

En diciembre de 1865 se celebra en Barcelona un Congreso de Sociedades Obreras y Cooperativas, que se pronuncia en favor de la cooperación y de la libertad de asociación, elevando al gobierno una petición en este sentido (89).

El régimen de tolerancia hacia las asociaciones obreras en general, concluye con la publicación del Decreto de veinte de noviembre de 1868 (90), por el que se viene a reconocer el derecho a la libre asociación, recogido posteriormente en la Constitución de 1869 (91).

Es en este momento cuando el movimiento cooperativo se desliga del movimiento obrero, o más concretamente cuando los instrumentos de acción de ambos comienzan a tener vida autónoma.

Con ello se viene a formalizar una situación ya latente en el movimiento obrero (92), -agravada en épocas posteriores - y por la que se demostraría la incapacidad del movimiento cooperativo español para resolver la cuestión social de forma pacífica; puesto que hasta 1938, fecha en la

(89) El punto segundo a discutir en este Congreso estaba formulado de la siguiente forma, "las sociedades cooperativas ¿que ventajas reportan a los asociados y que probabilidades tienen de éxito?

El resto de las proposiciones a discutir, así como el texto final del Congreso, se puede consultar en los números 3-9-1865 y 7-1-1866 de el periódico "El Obrero", recogidos por ELORZA, op. cit. pags. 220 y ss.

(90) Gaz. 21.11

(91) Art. 17.3

(92) Así, en el primer Congreso Obrero Español de 1870, la Comisión Plenaria aprobó un dictamen en el que se decía "la cooperación, en sus dos ramas de producción y consumo, no puede ser considerado como medio directo y absoluto para alcanzar la emancipación de las clases

que la ideología del nuevo Estado supone su encuadramiento en la disciplina sindical (93), no pudo alejar a las clases trabajadoras de los partidos proletarios, ni conjurar la amenaza de la revolución violenta. (94).

En definitiva con el reconocimiento de la libertad de asociación termina el primer ciclo de la evolución del fenómeno cooperativo, dominado por la inseguridad jurídica, la postura represiva del poder público y la falta de base popular de las primeras experiencias.

2.2 Las fases de la regulación jurídica de las cooperativas de producción

Todo el proceso legislativo español en torno a la determinación del estatuto jurídico de las cooperativas de producción viene marcado por un aspecto: la imposibilidad del legislador de abandonar las suspicacias, heredadas de la acción de estas cooperativas en los años cincuenta, anejas al término asociación obrera de producción.

De esta postura apriorística derivarán sus torpezas e indecisiones a la hora de buscar el esquema jurídico más adecuado a la operatividad de la institución.

En el análisis del proceso legislativo español de la sociedad coope-

trabajadoras, sino solo como medio para aliviar la suerte de una parte de nosotros (Cfr. ARBELOA, V. M. "I Congreso Obrero español", Madrid 1972, pags. 202 y ss; vid. también ABAD DE SANTILLAN, op. cit. pag. 119). A partir de esta fecha dice GOMEZ CASAS (op. cit. pag. 38) que el cooperativismo habría de ser considerado con recelo por las organizaciones obreras.

(93) Vid. pags.

(94) CARR, op, cit. pag. 443.

rativa extraña que el legislador español, tradicionalmente propicio en recibir las directrices normativas de los ordenamientos extranjeros más próximos al suyo, rehuya afrontar el problema del establecimiento de un régimen jurídico propio; sobre todo si se piensa que el fenómeno cooperativo había ya ocupado la atención de casi todos los Parlamentos de la Europa del último tercio del pasado siglo.

No se trata de que el legislador presente unos esquemas jurídicos que desconozcan la esencia de la cooperativa; el problema reside en que el legislador se despreocupa de su regulación, de la fijación jurídica de los principios que dan al fenómeno cooperativo una intrínseca unidad y una acusada personalidad frente al resto de los fenómenos comunitarios que tiende a conseguir fines de parecida naturaleza (95).

Y solo será en fechas muy avanzadas, - cuando los legisladores extranjeros estén sometiendo a revisión sus correspondientes disposiciones - , cuando el legislador español proceda a reconocer que la sociedad cooperativa tiene una naturaleza que exige un régimen especial.

Con esto, estamos adelantando que en la evolución de este proceso cabe distinguir dos fases perfectamente definidas y delimitadas, que se pueden sistematizar de la siguiente forma:

- a) Una primera fase en la que las normas básicas reguladoras de la

(95) Para poner de relieve esta despreocupación del legislador, basta recordar la intervención de un diputado a Cortes, el Sr. Pedregal, que en la Legislatura de 1893 decía "En España nadie se ha ocupado de las sociedades cooperativas, y menos el legislador..." Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes, Legis. 1893, nº 30 pag. 713.

sociedad se encuentran en las normas de derecho común societario o asociativo. Será pues un derecho estatutario, originado por la costumbre a los principios generales de este fenómeno, y en el que la sociedad queda sometida a un mero control por razones de orden público.

b) Una segunda fase en la que se pasará del carácter facultativo al carácter obligatorio, mediante una regulación unitaria y un desgaje de sus normas de las disposiciones de derecho común.

2.2.1 Etapa de derecho facultativo, 1869-1931

Con la promulgación del decreto de veinte de noviembre de 1868 sobre libertad de asociación, se cierra el paréntesis de la clandestinidad jurídica de la sociedad cooperativa de producción, poniéndose fin al problema de su licitud o ilicitud, e iniciándose propiamente el proceso legislativo en materia cooperativa.

Ahora bien, como este periodo denominado por nosotros de derecho facultativo es excesivamente amplio como para reconocer en él una plena identidad, vamos a distinguir diversas fases según cual sea la posición legislativa respecto a esta institución.

a) Reconocimiento de la libertad de constitución de cooperativas

La primera ley que de una forma expresa reconoce la libertad de constitución de sociedades cooperativas es la ley de once de septiembre de 1869 sobre "libre creación de sociedades anónimas y de crédito", cuyo art. 2º par. 2º decía: "Las sociedades que legalmente no tengan el carácter de mercantiles, y las cooperativas en las que ni el capital ni el número de socios es determinado y constante, podrán adoptar la forma que los asociados crean conveniente establecer en la escritura fundacional".

Este precepto, en el que la influencia de la ley francesa de 1867 sobre sociedades de capital variable es patente (96), presenta algunos problemas en orden a la delimitación del ámbito al que se extendía la libertad de forma permitida para las sociedades cooperativas.

En este sentido hay que señalar que el precepto revistió una gran importancia, no solo por cuanto supuso el reconocimiento de la licitud de constitución de cooperativas (97), sino por que con él se demostró que el legislador había captado los principios organizativos básicos de esta institución.

Sin embargo el precepto fué excesivamente tímido en su formulación, e ineficaz en la regulación de las relaciones jurídicas internas entre los socios y externas frente a terceros.

Fué tímido porque de su propia redacción era lícito pensar que podrían constituirse, y funcionar legalmente, sociedades cooperativas que no tuviesen variabilidad, ni en el capital ni en el número de socios; las cuales, a sensu contrario, habrían de adoptar alguna de las formas establecidas en la propia ley.

(96) Vid. pag. 22.

(97) Algún autor ha señalado que el reconocimiento legal del libre derecho a asociarse en forma cooperativa, vino por vía jurisprudencial; así DEL ARCO ALVAREZ, J.L. ("Temas Cooperativos", Madrid 1963, pag. 8) dice que fué una S.T.S de 10-3-1873 la que fijó ese derecho de asociación. Nosotros pensamos que esa sentencia (se puede consultar en Dic. Alcubilla, t. II, pag. 120) no hizo sino reconocer esa validez legalmente establecido en la ley que estamos comentando, lo cual por otra parte no es sino la función propia de la Jurisprudencia.

Fue ineficaz por cuanto, y si en principio se podía pensar que tras esta acertada recepción de los principios básicos del fenómeno, se iba a proceder a la regulación de las relaciones internas y externas de la sociedad en aras de ofrecer una mayor garantía, esta no se llevó a efecto, dejando así con carácter facultativo aspectos tan relevante para la vida de la sociedad (98).

Así y todo, el precepto vino a establecer un criterio importante: el de que la naturaleza cooperativa de la sociedad no altera el carácter mercantil de su actividad.

En definitiva, y resumiendo el sentido de este artículo, la sociedad podía organizarse con capital y número de socios fijo o variable, en cuyo caso se permitía la libre elección de la forma.

El feliz inicio de la legislación cooperativa se vió frustrado, y la inactividad legislativa en torno a estas sociedades fué total en el resto del siglo.

Y todo ello, a pesar de que no faltaron voces pidiendo una regulación para las cooperativas (99), ni proposiciones de ley que solicitasen,

(98) Y esto a pesar de los claros términos de la regla quinta de la base quinta del Decreto de 20-9-1869 (Gaz 24-9) que aprobó las Bases para la redacción del Código de Comercio, que decía "... hay en el seno de estas sociedades multitud de relaciones jurídicas que no pueden pasar desapercibidas para el legislador, no porque le corresponda reglamentarlas, sino porque es deber suyo amparar el derecho don de el derecho peligra".

(99) Así, en una intervención del diputado a Cortes Sr. Moret en 1885, este pedía "...que se dicten disposiciones de carácter legislati-

no ya una legislación específica sino una exención en la contribución industrial (100).

El problema de la falta de normas jurídicas que de manera clara y sistemática regulasen la constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades cooperativas, se agravó con la entrada en vigor el primero de enero de 1886 del Código de Comercio, que derogaba la ley de 1869.

El Código de Comercio, incumpliendo las orientaciones contenidas en sus Bases, dedicó una escasísima atención a las sociedades cooperativas, fuese porque las consideraba sociedades civiles, fuese por que la variabilidad de su capital no encajaba en los moldes de las compañías mercantiles (101).

vo encaminadas a facilitar el cumplimiento de los altos fines que están llamadas a cumplir". (Cfr. "Diario de Sesiones", Legis. 1884-1885, nº 185 pg. 5.591).

(100) Entre las proposiciones de ley podemos citar: la del diputado Sr. Pascual y Casas, excluyendo de contribución a las cooperativas de producción, crédito y consumo que se estableciese por obreros y jornaleros industriales y agrícolas, (cfr. "Diarios de Sesiones", Legislatura 1871, nº 133, pag. 3369 y Apen 5º), la del diputado Sr. Cisa, excluyendo a las mismas cooperativas de la contribución industrial durante 10 años, (cfr. idem, legis. 1872, 1873 nº 37 pag. 880); la del diputado Sr. Pascual y Casas, estableciendo lo mismo que la anterior, si bien durante cinco años, (cfr. ibidem, nº 47, pag. 1177). A estas proposiciones de ley, podemos añadir las intervenciones orales de los diputados Sres. Garrido Tortosa e Isabel "Diario de Sesiones", legis. 1871, nº 124, pag. 3116 y legislatura 1872-1873, nº 21 pag. 353 respectivamente.

(101) Vid. ALVAREZ DEL MANZANO, "Curso de Derecho Mercantil", 2ª edic., t. I, Madrid 1903, pags. 721 y ss; DIAZ DOMINGUEZ, "Tratado elemental de Derecho Mercantil", T. II, Granada 1908, pag. 371; GONZALEZ DE ECHAVARRI Y VIVANCO, J.M. "Comentarios al Código de Comercio y Jurisprudencia española", 3ª edic., T. III, Valladolid 1945, pag. 211; y RAY DE MONTELLA, R. "Código de Comercio Comentado", T. II, Barcelona 1948, pag. 117.

Solamente el art. 124 se refirió a ellas, estableciendo que "... las cooperativas de producción, de crédito o de consumo, solo se considerarán mercantiles, y quedarán sujetas a las disposiciones de este Código, cuando se dedicaren a actos de comercio extraños a la mutualidad" (102).

La doctrina científica al plantearse el contenido del artículo 124 de este Código vino a reconocer, casi unánimemente (103), que con él las sociedades cooperativas quedaban excluidas de su ámbito, conclusión precipitada, ya que en realidad del precepto solo se deducía que la exclusión operaría cuando estas sociedades realizasen actos mutualistas.

El problema se planteaba, sin embargo, en la delimitación de los actos que tendría que realizar la sociedad cooperativa para ser sociedad mercantil, puesto que, y si bien el legislador hacía referencia a "actos extraños a la mutualidad", al no definir que habría de entenderse por mutualidad aplicada al ámbito de la cooperación, el silencio normativo permitía interpretaciones de muy diversa naturaleza.

No podemos detenernos, en el capítulo dedicado al estudio del proceso legislativo, al análisis de un concepto que ha sido calificado por parte de la doctrina como elemento esencial de las sociedades cooperativas (104) y por otro sector como algo extraño a sus esquemas (105); de ahí

(102) Este artículo se mantuvo a lo largo de todos los proyectos del Código de Comercio; vid. Diario de Sesiones, Legis. 1881-1882, n.º 85, Ap. 3; ibidem n.º 145 Ap. 10; ibidem Legis. 1882-1883, n.º 77, Ap. 8).

(103) Vid nota 101.

(104) Vid. por todos. PAROLI, A. "Ancora sulle scopo mutualistico degli enti cooperativi", Riv. Coop. 1950, pag. 424.

(105) Por todos AGRO, G. "Sul concetto di mutualità nella cooperazione", Riv. Coop. 1950 pag. 413.

que nos parezca más apropiado concederle la atención que merece en el capítulo destinado a examinar la esencia y configuración jurídica de este instituto (106).

Sin embargo, no quedaría el tema suficientemente orillado si no planteásemos el alcance que el precepto tuvo para las cooperativas de producción.

En este orden de cosas comencemos señalando que la mutualidad, referida a la cooperación, viene entendida en un doble sentido: por una parte, como una especial relación de naturaleza interna que exige que los resultados de la explotación económica se destinen a quienes han contribuido a su formación (107); por otra, como una especial relación de carácter externo, en virtud de la cual solamente quienes son socios de la cooperativa pueden realizar operaciones económicas con ella (108).

De entre estos dos sentidos, pensamos que el legislador del Código acogió el segundo (109), y en consecuencia las sociedades cooperativas de producción, crédito o consumo que realizasen operaciones con terceros no socios quedaban automáticamente sujetas a sus disposiciones (110).

(106) Vid. Cap. II

(107) Cfr. PADOA, G. "Alla ricerca della mutualità nella cooperazione", Riv. Coop. 1955, pag. 582.

(108) FERRI, G. "Trasformabilità delle società cooperative" Riv. Dir. Comm, I, 1951, pag. 100.

(109) GAY DE MONTELLA (op. cit. pag. 116) señala que el legislador del Código incurrió en el error de confundir los términos cooperativa y mutualidad; sin embargo pensamos que tal error no existe, ya que si por mutualidad se entiende no una especial sociedad, sino un atributo que puede aparecer en diversas sociedades, la expresión fue correcta, aunque no acertada.

(110) Notese que el Código no prohibía operar con terceros, ya que lo único

Esta interpretación no presenta problemas en el caso de las cooperativas de consumo o crédito, en las que serían las ventas o las operaciones activas y pasivas con terceros no socios los actos que, al ser extraños a la mutualidad de estas sociedades, determinasen su inclusión en el Código.

Ahora bien, ¿que operación con tercero no socio determina el carácter mercantil de las cooperativas de producción? En este orden de cosas, dos son las posibles soluciones que se podrían sostener:

- a) Considerar que el acto extraño a la mutualidad es el trabajar con no socios
- b) Considerar que es el producir para un tercero no socio.

En realidad la opción por una u otra tesis depende del concepto que de sociedad cooperativa de producción estuviese manejando el legislador del Código, concepto que si lo tuvo no lo plasmó en una disposición concreta.

No obstante esto, nos inclinamos a pensar que la solución más ajustada la ofrece la segunda respuesta; y ello no solamente por cuanto condicionar el carácter mercantil de esta sociedad a la existencia o no de

que establecía era que en estos casos la cooperativa habría de considerarse sociedad mercantil; en realidad este criterio estaba en línea con las soluciones adoptadas por la mayoría de los ordenamientos europeos, que no prohibía estas operaciones; vid. en este sentido: art. 48 de la ley francesa de 1867; 85 y ss. de la belga de 1873; 207 del Código portugués de 1881 y reforma de la ley inglesa de 12-9-1893 (cfr. MEDUGNO, "Le leggi..." cit. pags. 66 y ss.).

unos contratos de arrendamientos de servicios (hoy contratos de trabajo) sería un dato extraño a los esquemas del Código, sino sobre todo por qué pensamos que la triple clasificación cooperativa contenida en el artículo comentado tomaba como base la naturaleza económica de la operación realizada por cada una de ellas.

Aceptada esta interpretación, obvio es señalar la incidencia que para las cooperativas de producción formadas por trabajadores tuvo el precepto, ya que al ser sociedades que por su propia naturaleza habrían de producir para otros, siempre quedaban incluidas en el ámbito del Código; con la lógica consecuencia de venir sometidas a unas normas que garantizaban sus relaciones, tanto internas como externas.

Por último es de destacar que para aquellos supuestos en los que las cooperativas quedasen sujetas a las disposiciones del Código, la forma habría de ser alguna de las enumeradas en el artículo 122; o dicho con otras palabras, el legislador negó sustantividad formal a la sociedad cooperativa, que habría de adoptar la vestidura de una sociedad anónima, colectiva o comanditaria (111), cuando fuese mercantil su naturaleza.

En definitiva pues, y resumiendo el alcance que el artículo 124 del Código tuvo para las cooperativas obreras de producción, este fue el de posibilitar su funcionamiento legal, pudiendo ampararse en cualquiera de las formas mercantiles reconocidas legalmente; aunque para el resto de las cooperativas, estableció un régimen discriminatorio, ya que mientras las que aplicasen el principio de mutualidad habrían de vivir precariamente al amparo del artículo 13 de la Constitución de 1876, sin que viniese

(111) Siguiendo con los criterios de otras legislaciones (vid. pag.26).

reconocida a la sociedad personalidad jurídica distinta de la de los socios, - con la consecuencia de ser ellos los que asumirían las responsabilidades derivadas de la contratación con terceros -, las que no operasen con criterios mutualistas gozaban de plena personalidad jurídica, con un régimen estable de relaciones.

b) La Ley de Asociaciones de 1887, como primera tentativa legal para regular unitariamente el fenómeno cooperativo

La situación anormal provocada por el Código de Comercio, que determinaba que fuesen las cooperativas (salvo las obreras de producción a las que el sentido acogido de mutualidad no les afectaba) denominadas como puras (112), paradójicamente, las que se encontrasen fuera del círculo del Derecho, sin preceptos jurídicos que les sirviesen de apoyo y garantía exigía una actitud terminante por parte del legislador, al objeto de que por este se configurase unitariamente el fenómeno cuestionado.

Sin embargo y lejos de adoptar el criterio que hubiese merecido la realidad cooperativa, el legislador va a someter a todas las sociedades cooperativas a la normativa que crea para regular los fenómenos asociativos sin fin de lucro, dando con ello un gigantesco paso atrás.

Efectivamente: si las regulaciones anteriores, con ser desafortunadas, habían demostrado que algo de la esencia de la cooperativa se había captado, ahora al someter a todas estas instituciones por expresa dispo-

(112) Sobre la pretendida distinción entre cooperativas puras e impuras vid., por todos, GARCIA PADRON, M. "Las sociedades cooperativas en el Derecho Privado español. Iniciación a su estudio", Santa Cruz de Tenerife 1971, pag. 212 y ss.

sición de artículo 1º parrafo 2º de la Ley de Asociaciones de treinta de julio de 1887 (113) al mismo régimen que el resto de las coligaciones lí citas, el legislador cae en el más absoluto de los absurdos.

El primer efecto que tuvo esta ley fue el de unificar el régimen jurídico de todas las cooperativas de producción, puesto que a sensu con trario de lo establecido en el art. 2º, nº 2º (114), todas las socieda- des cooperativas, independientemente de la naturaleza mercantil o civil de sus actos, habrían de quedar sujetas a sus disposiciones.

- (113) Gaz. 12-7. Decía este artículo: "Se regirán también por esta Ley los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión, de patronato y las cooperativas de producción, crédito y consumo".

Interesante resulta destacar que la redacción de este artículo se introdujo después de diversas modificaciones del proyecto de ley; así no aparece en el proyecto de 11-7-1886 (QDiario de Sesio- nes", Legis. 1886, nº 51, Ap. 3º), ni tampoco se hace referencia en el proyecto aprobado por el Congreso el 17-3-1887 ("Diario..." Legis. 1887, nº 48, Ap. 8º). Por su parte tampoco se mencionan las cooperativas en el proyecto que envió el Senado ese mismo año, y cuyo art. 1º decía: quedan sometidas a las disposiciones de esta ley las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo. (Cfr. Diario... "cit, nº 76, Ap. 3º). La introducción de este párrafo se hizo por la comisión Mixta que, a la vista de las modificaciones presentadas por el Senado, preparó la redacción definitiva del proyecto.

- (114) Dice este artículo: "Las sociedades que no siendo de las enumara- das en el artículo 1º se propongan un objeto meramente civil o co- mercial, se exceptúan de las disposiciones de esta ley, y se regi rán por las disposiciones de derecho civil o mercantil respectiva mente". De acuerdo con éste artículo, ninguna cooperativa podría, después de 1887, ser considerada como sociedad civil o mercantil. Esta clara interpretación no siempre se entendió así, ni por el propio legislador (así el nº I de una R.D. de 21-12-1919, (Gaz. 22-12), que aprobaba los estatutos de una cooperativa de sonsumo in tervenida por el Estado, decía: "Con el nombre de sociedad coopera- tiva de consumo... se constituye una sociedad civil de este carác- ter") ni por la Jurisprudencia (ver S.T.S. de 22-1-1904 que declara la aplicación a las cooperativas de la legislación mercantil).

Si este efecto fue positivo, en cuanto que con él se vino a reconocer la sociedad cooperativa como una figura asociativa independiente de las demás reguladas por las leyes (115), fue negativo en cuanto que, y hasta la promulgación del Código civil, ninguna de estas sociedades habría de gozar de personalidad jurídica (116).

Pero la mayor crítica que merece la inclusión de las sociedades cooperativas en la Ley de Asociaciones fué la de convertir todas las normas de su funcionamiento en derecho facultativo; con el peligro de que al ser el régimen jurídico de las asociaciones (117) un régimen puramente estatutario, los fundadores o iniciadores de una cooperativa podían someter a aprobación unos estatutos en los que se inculcasen todos los principios o cooperativos, obligatorios ya en la mayoría de los ordenamientos legales.

Fuera de la genérica prohibición del parr. 1º art. 1º, relativa a la ausencia del "lucro o ganancia" que debía presidir el funcionamiento de estas asociaciones, ninguna norma hacía mención a la organización, funcionamiento interno, gestión o responsabilidad, dejándose todo ello a la autonomía de la voluntad (118).

(115) DEL ARCO ALVAREZ, J.L. "Ordenamiento jurídico de la cooperación en España", en "La empresa artesana y cooperativa a la luz de la doctrina social católica". Madrid 1963, pag. 202.

(116) Arts. 35 a 39 del C. civ.

(117) Sobre el régimen jurídico de las asociaciones, vid: CLARET MARTI, P. "Las asociaciones. Su régimen jurídico", Barcelona 1941; GARCIA PESARRODONA, J. "Régimen jurídico-administrativo de la Asociación", Barcelona 1950; PEREZ GONZALEZ, B - ALGUER, J, "Notas a la traducción del Tratado de Derecho Civil de Ennecerus-Kipp-Wolf", 2ª edic. t. I, vol. I, Barcelona 1950, pag. 435 y ss; PELLISE PRATS, B, voz "Asociación", en Nueva Enciclopedia Jurídica, t, III, Barcelona 1951, pags. 61 y ss.

(118) Vid. MARIN PEREZ, P. "La autonomía de la voluntad y la cooperación

Por otra parte, la prohibición de tender a la consecución de lucro o ganancia tuvo obviamente que producir tremendas lagunas interpretativas que afectaron profundamente el funcionamiento de las cooperativas en general.

En definitiva, pues, los efectos de estas indecisiones y deficiencias del legislador repercutieron en el progreso del fenómeno cooperativo en España, ocasionando, como señala FOLLO (119), no pocas arbitrariedades en el momento de la inscripción de las sociedades cooperativas, que no podían acudir al registro de sociedades mercantiles por expresa prohibición legal, pero que tampoco eran registradas en el de asociaciones, ante las dudas de los Gobernadores (120) de si sus estatutos encubrirían fines lucrativos.

La ley de Asociaciones, como ensayo de sistematización del régimen jurídico de las sociedades cooperativas, fue un fracaso. En primer lugar, debido a que el expediente de equiparar estas instituciones con las asociaciones benéficas (121) significaba tanto como desconocer la esencia de la cooperativa, y anclarse en una concepción históricamente superada; en segundo lugar, por cuanto la necesidad más inmediata de estas sociedades, contar con unos esquemas jurídicos típicos, fue completamente abandonada.

en DEC 1973, nº 18-19-20, pags. 219 y ss.

(119) "Misión y sentido de la nueva ley de cooperación", Rev. Der. Priv. 1942 (las referencias están hechas a separata, Imp. Galo Saez) pag. 14.

(120) Vid. art. 4º de la ley.

(121) Basta corroborar esta afirmación, con comprobar las entidades men-

c) El particularismo normativo, como solución para la regulación de las sociedades cooperativas.

Este vacío normativo en torno a las sociedades cooperativas, agravado por el auge de algún tipo cooperativo, obliga al legislador a dictar disposiciones particularistas y fragmentarias del fenómeno, con las que se piensa encontrar una solución.

Este giro en la actitud del legislador, influenciado sin duda por los criterios orientadores del Instituto de Reformas Sociales (122), se manifestó en un conjunto de disposiciones tendentes a fomentar la constitución de sociedades cooperativas, bien por la vía directa de promulgar normas específicas respecto de algún tipo cooperativo, bien por la indirecta de las exenciones fiscales (123).

cionadas conjuntamente con las cooperativas: gremios, socorros mutuos, previsión y patronato. Todas ellas tendían a realizar funciones bien de asistencia, bien de beneficencia.

(122) El I.R.S. tiene su antecedente en la Comisión Moret, creada en 1883, bajo la denominación de "Comisión para el estudio de las cuestiones que directamente interesan a la mejora y bienestar de las clases obreras, tanto industriales como agrícolas, y que afectan a las relaciones entre capital y trabajo"; sobre el tema, vid: IGLESIAS, M.C. ELORZA, A. "La fundación de la Comisión de Reformas Sociales", RT, nº 25, 1969, págs. 73 y ss. El I.R.S. nació en 1903, y para algunos autores es el antecedente inmediato del Ministerio de Trabajo; (así PEREZ BOTIJA, E. "Curso de Derecho del Trabajo" 2ª edic. Madrid, 1950, pag. 351). Sobre I.R.S. vid: MARTIN GRANIZO, W. "El Instituto de Reformas Sociales y sus hombres" Madrid 1946. En 1911, y con fecha 13-6 (Gaz. 15-6) se creó en el Instituto un registro de Asociaciones económico-sociales de carácter no lucrativo en el que se incluyó a las cooperativas. En general, sobre la evolución de la Organización laboral en España, vid: DE LA VILLA GIL, L.E. "Los orígenes de la Administración Laboral en España", Madrid 1969.

(123) Esta vía indirecta es para algunos autores el origen de la legislación cooperativa. (PERRAUD CHARMENTIER-LAURAS, "Manuel des sociétés

Esta legislación fomentó el desarrollo de cooperativas de consumo, de crédito, agrícolas y de vivienda (124) guardándose silencio en materia de cooperativas obreras de producción, que merecen trato legislativo exclusivamente por la vía fiscal (125).

La razón del escaso interés por estas cooperativas entendemos es doble; por una parte las organizaciones sindicales contemplan con reparos a este fenómeno asociativo (126); por otra, el poder público sigue dando a este movimiento un profundo contenido político.

cooperatives", Paris 1948, pag. 10). Sobre la evolución de la legislación fiscal en España, AMORÓS RICA, N. "El régimen jurídico fiscal de las cooperativas españolas", Madrid 1952, pags. 93 y ss. y DEL ARCO ALVAREZ, J.L. "Regimen fiscal de las cooperativas", Madrid 1969, pags. 31 y ss.

- (124) Prescindimos de dar un análisis pormenorizado de estas normas particularizadas, puesto que ello desbordaría el campo de investigación de nuestro trabajo. Sobre el tema, RAVENTOS, op. cit. pags. 175 y ss. DEL ARCO ALVAREZ, "Ordenación...", cit. pags. 203 y ss. Solamente merece ser mencionada la ley sobre los sindicatos agrícolas de 28-1-1906 (Gaz. 30-1), por ser la primera norma que contempla de manera global este tipo de cooperativas. A pesar de que lleva el título de "sindicatos" (con una clara influencia de la ley francesa de 21-3-1884), venía a regular las cooperativas. Sobre la equiparación de ambos términos, vid: PROTOPESCO, I. "Cooperation et sociétés cooperatives", Paris 1908, pag. 62 y ALMARCHA HERNANDEZ, L. "La cooperación como sistema económico-social", 4ª edic. León 1970, pag 108.
- (125) Así la ley de 27-3-1900, que establece la Contribución sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria, excluye de la Tarifa III (disp. 1ª, nº IV) a las cooperativas obreras de producción.
- (126) Dice CARR (op. cit. pag. 442) que la C.N.T. consideraba a las cooperativas como una insignificancia peligrosa, y los socialistas como una distracción aristocrática, salvo que se engranara con la lucha de clases mediante su incorporación al movimiento socialista. Por su parte, la cooperativa católica, desarrollada en el sector agrario y que contaba con muchos simpatizantes conservadores, aparecía ante los liberales como clericalismo encubierto. Esta afirmación de CARR, demuestra lo paradójico del movimiento cooperativo, considerado como burgués por las clases trabajadoras, y como subversivo por el poder público.

En definitiva se produce un círculo vicioso; el legislador, al comprobar el poco arraigo popular de estas manifestaciones asociativas, no dicta disposiciones reguladoras de su régimen jurídico; pero como no fomenta ni da facilidades para su constitución, su desarrollo es escaso (127).

La necesidad de promulgar una ley especial sobre sociedades cooperativas venía constituyendo aspiración unánime de todo el movimiento cooperativo español (128); consciente de ello la Administración crea en 1923 (129) una sección de "Cooperación" en el I.R.S. - desdoblando así en dos la sección de Asociaciones -, encomendándola como misión más inmediata la de preparar un proyecto de ley sobre estas sociedades.

(127) En 1923, un cooperativista español escribía: "en el movimiento cooperativo mundial, España ocupa un lugar tan modesto, que se prescinde de ella en la obra de evolución progresiva", (cfr. RIVAS MORENO, F. "La cooperación ante la Ley", El Escorial 1923, pag. 6) y en 1927, un gran cooperativista francés decía: "ce n'est pas faire injure a l'Espangne le fait de constater qu'elle n'occupe pas qu'une petite place dans le mouvement cooperatif", (cfr. GIDE, Ch. "Certains aspects originaux du mouvement cooperatif en Espagne", Rev. Etud. Coop. 1927, pag. 209). Igualmente reveladora de esta situación, es la lectura de la exposición de Motivos de un R.D. de 14-1-1925, que decía "No es España nación donde mayores éxitos registra las cooperativas, ..., quizás por falta de estímulos legales ..., no adquieran el desarrollo y arraigo precisos para que rindan frutos.

(128) Ya el primer congreso cooperatista catalano-balear, celebrado en 1902, había dedicado una ponencia al estudio del régimen jurídico de las sociedades cooperativas, abogando por una ley especial, cfr. "Actas y acuerdos del Primer Congreso Catalano-Balear", Barcelona 1902.

(129) Por R.D. de 9-2 ver también DE LA VILLA GIL, "Los orígenes...", cit. pag. 70.

En mayo de ese mismo año, se presentan dos anteproyectos de ley debidos a la iniciativa privada (130), que aun con criterios diferentes en algunos aspectos esenciales, constituyeron la primera aportación para el inicio de la tan esperada normativa legal.

Consecuencia de este nuevo estado de ánimo fué la promulgación de un R.D. el catorce de enero de 1925 (131) por el que se creaba una Comisión "para el estudio y redacción de normas para el régimen de las Asociaciones Cooperativas", dándose así el primer paso serio en la legislación cooperativa (132).

- d) El anteproyecto de 1927, como antecedente próximo de la legislación unitaria en materia cooperativa.

En 1927, la comisión encargada de redactar el anteproyecto termina sus trabajos, y lo presenta al Gobierno para, que una vez hecho suyo, lo remita como proyecto de ley a las Cortes; sin embargo, y demostrando una vez más la Administración el escaso interés que le merecen las instituciones cooperativas, la tarea de la Comisión no culmina con la aprobación del proyecto.

(130) Estos anteproyectos se debieron a los Sres. Salas Antón y Montalvo. Amplia noticia sobre tales anteproyectos, en GASCON Y MIRAMON, A. "Hacia una ley de cooperativas", Madrid s/f. pgs. 10 y ss.

(131) Gaz. 16-1. Esta disposición contenía dos artículos y cinco bases. El art. 1º establecía que "previas las informaciones públicas que se estimasen necesarias", se procediese a la redacción de un anteproyecto de ley. El art. 2º ordenaba la reacción, en el seno de la Comisión de una Ponencia encargada de dirigir los trabajos preparatorios. GASCON HERNANDEZ, J. ("La cooperación en España", Rev. R.A. de Leg. Jur., 1953, nº VI, pag. 6 referencia a separata, imp Galo Saez) señala que esta norma se debió a los esfuerzos de Aunós, Gómez Cano y Gascón y Miramón.

(132) GASCON HERNANDEZ, (op. y loc. cit.) señala como, paradójicamente,

No obstante ello, el anteproyecto comentado es de una singular importancia (133), ya que el texto legal, que se aprobará en 1931, seguirá en lo esencial los criterios orientadores del anteproyecto (134).

El más importante de estos criterios fué el de elevar a norma jurídica los llamados principios generales del cooperativismo, creando un derecho necesario para el funcionamiento de las sociedades cooperativas, y dejando a la mera regulación estatutaria el desarrollo de dicho derecho.

Por otra parte, el anteproyecto seguía el criterio de que la legislación cooperativa habría de contenerse en una ley orgánica especial, que regularía de forma unitaria y universal el fenómeno cooperativo: unitaria, por cuanto solo la sociedad cooperativa sería la destinataria (135); universal, por cuanto todas las cooperativas habrían de quedar sujetas a sus normas.

es un gobierno conservador, el del General Primo de Rivera, el que inicia la legislación cooperativa; señalando igualmente que la historia legislativa en materia cooperativa ha de arrancar de este anteproyecto.

- (133) Se puede consultar el texto íntegro del anteproyecto en la obra citada de GASCON Y MIRANON, pags. 39-99.
- (134) RAVENTOS CARNER (op. cit. pag. 216) ha realizado un estudio comparativo entre los textos del anteproyecto y de la ley de 1931, llegando a la conclusión de que, sobre un total de 48 artículos, solamente cinco difieren notablemente. En todo caso, la ley de 1931 pecó por defecto, ya que no reguló todos los aspectos contenidos en el anteproyecto.
- (135) La comisión, como cuestión previa a sus trabajos, rechazó el que la normativa cooperativa se integrase como un capítulo más en el Código de Comercio, o en una ley general, como la de Asociaciones. Cfr. GASCON Y MIRANON, op. cit. pag. 18.

Con ello, la legislación española se alinea con la tendencia más progresiva, considerando a la sociedad cooperativa como una sociedad "sui generis", y a la legislación cooperativa como el medio más adecuado para la consecución de los fines económico-sociales a ellas encomendados (136).

2.2.2 Etapas del derecho necesario. La unicidad legislativa

a) La ley de 1931

Apenas transcurridos tres meses desde la llegada de la República, por el Ministerio de Trabajo se dicta un decreto, con fecha cuatro de junio, por el que se regula el régimen jurídico de las sociedades cooperativas (137).

Mucho se ha discutido sobre la filosofía cooperativa de la norma república, acusándosela de demagógica y socialista (138). Independientemente del contenido político que encierra la segunda de las acusaciones, que en todo caso tendría que dirigirse más al sistema inspirador de la

(136) Sobre el tema, PEREZ BOTIJA, "El concepto legal de cooperación", C.P.S. nº 11, 1951, pag. 10.

(137) Gaz. 7-7. Este decreto fué posteriormente elevado a ley por las Cortes Constituyentes, con fecha 9-9. Su Regl. es de 2-10-31 (Gaz 21-10).

(138) Así, PUYAL, V. "La cooperación en su nueva etapa", Madrid 1948, pags. 18 y ss. En realidad al acusar a la ley de 1931, se está acusando al anteproyecto de 1927 en el que la participación de los sectores católicos del movimiento cooperativo fue muy importante.

norma que a la norma misma, y que en última instancia no vendría sino a demostrar la conexión del Derecho con los principios político-sociales que en cada momento se imponen en un ordenamiento determinado, lo cierto es que la perfección técnica de esta ley fué, en líneas generales, de difícil superación, habiendo inspirado numerosas leyes de otros países (139). Ciertamente que a su amparo se permitieron abusos, y en claro fraude a su espíritu numerosas cooperativas se convirtieron en sociedades de resistencia política, sin fines cooperativos; pero este hecho, considerado en si mismo, es irrelevante para montar la dura crítica dirigida contra la ley.

Sin entrar en un análisis detallado del régimen jurídico establecido por la ley (140), baste señalar que la principal y fundamental novedad introducida fué la de reconocer que la sociedad cooperativa constituía una figura autónoma dentro del marco de los fenómenos societarios y asociativos de contenido económico.

(139) Así, esta ley influyó en las legislaciones sobre cooperativas de Costa Rica, Colombia y Venezuela; e incluso fué traducida al alemán. Cfr. GASCON HERNANDEZ, J. "Derecho Cooperativo", Rev. R.A. de Leg. y Jur. nº XII, 1956, pag. 21 (referencias a separata, imp. Galo Saez).

(140) Sobre el tema, vid: CERDA RICHART, B "Cooperativas de producción y trabajo", Barcelona 1938. El art. 1º de la ley definía a la cooperativa como "la asociación de personas naturales o jurídicas que, sujetándose en su organización y funcionamiento a las prescripciones de la presente ley y tendiendo a eliminar el lucro, tengan por objeto satisfacer alguna necesidad común, procurando el mejoramiento social y económico de los asociados mediante la acción conjunta de estos en una obra colectiva". Era una definición idéntica a la del anteproyecto, salvo que este decía "tendiendo a eliminar algún lucro", y hablaba de obra en común el lugar de colectiva. Con esta definición, dice POLO, (op. cit. pag. 11) los términos sociedad cooperativa y sociedad mercantil desde esta fecha aparecen como inconciliables

Así pues, y si hasta este momento las sociedades cooperativas habían regulado sus relaciones internas mediante la potestad reglamentaria concedida a sus estatutos (141) que no encontraban más límites a la hora de regular que la voluntad de los socios fundadores, controlada en última y remota instancia por los órganos jurisdiccionales (142), y en el ámbito de sus relaciones externas había sido la inseguridad y precariedad jurídica la nota más dominante, con la aprobación de la ley se viene a establecer un régimen jurídico que convier- te a las normas estatutarias en normas subsidiarias de la propia ley, y que garantiza, tanto a los socios como a los terceros que con ella se relacionen un eficaz sistema de responsabilidad.

Con respecto a las cooperativas de producción interesa destacar que la ley de 1931 vino a quebrar el sistema clasificatorio hasta entonces tradicional en nuestro ordenamiento, que reconocía a esta co- operativa como tipo específico dentro del "genus" (143), haciendo

(141) El art. 4º de la ley de Asociaciones decía: "Los fundadores... presentarán al Gobernador... los estatutos, reglamentos, contra- tos o acuerdos por los cuales haya de regirse (la asociación)... "Independientemente de que pensemos que la redacción era poco fe- liz, puesto que venía a confundir el contrato - acto constituti- vo del vínculo asociativo - con los estatutos - norma ordenadora de la vida social (distinción pacífica en la doctrina; vid. , per todos, URÍA, R. "Derecho Mercantil", 6ª edic., Madrid 1958, pag. 122) lo que interesa destacar aquí es que los estatutos de las sociedades cooperativas constituyeron las únicas normas crea- doras de derecho cooperativo, impidiéndose su calificación "con- tra legem" debido a la inexistencia de disposiciones legales res- pecto de los aspectos organizativos y funcionales. Esta afirmación no viene sino a corroborar todo el contenido de nuestra exposición y que puede ser resumida en la anomalía que supuso la falta de normas legales reguladores de estas instituciones.

(142) Vid. art. 6º de la ley de Asociaciones.

(143) Recuerdese la triple clasificación contenida en el art. 124 del Código.

desaparecer el término producción, que queda subjetivizado con relación al de productores (144); estas cooperativas podían a su vez ser de dos tipos: de trabajadores y de profesionales.

Finalmente de las cooperativas del primer tipo era, entre otras, la de "contratar el trabajo en común" (145) "así como la de conducir "cooperativamente un taller o centro de producción".

Por su parte, las cooperativas de profesionales podían estar formadas por agricultores, ganaderos, industriales o comerciantes (146).

En realidad, solo el primer grupo respondía al concepto histórico de cooperativas de producción, que se rentalizaron al amparo de la ley del 31, generalizándose en aquellas zonas geográficas de nivel económico más elevado.

(144) Cfr. arts. 24 y ss. de la ley.

(145) Las cooperativas que tienen esta finalidad se conocen, en otros ordenamientos, con el nombre de cooperativas de trabajo; sobre el tema, y por todos D'ANGELO, A. "Cooperative di lavoro e soci lavoratori", Riv. Coop. 1962, pags. 671 y ss.

(146) Las cooperativas de profesionales podían ser: agrícolas, pecuarias y forestales; pesqueras y de servicios marítimos; mineras y minero-metalúrgicas; producción industrial; construcción; transportes y comunicaciones: comerciales; servicios y profesiones diversas; mixtas e indeterminadas. Fácilmente se comprueba que estas cooperativas más que de productores, estaban formadas por empresarios, no siendo posible su calificación como cooperativas "populares", especie cooperativa formada por obreros y personal de recursos económicos escasos y que recibía una protección fiscal especial.

A pesar de la excelente técnica jurídica de la ley, y de los buenos deseos del legislador para fomentar de manera general el movimiento cooperativo, no se consiguió en el terreno de las realizaciones prácticas un avance tan espectacular como la ocasión permitía, debido tanto a la desatención que recibió (147) por parte de la Administración cuanto a la falta de una educación cooperativa suficientemente desarrollada (148).

b) La Ley de 1938.

Aún sin haber terminado la guerra civil, y como consecuencia de los principios inspiradores del Nuevo Estado recogidos en el Fuero del Trabajo promulgado el nueve de marzo de 1938, se publica con fecha 27 de octubre una nueva Ley de Cooperación (149), que deroga algunos aspectos de la legislación cooperativa de la época republicana, y que somete a la disciplina de la recién creada Organización Sindical a las entidades cooperativas al establecerse en su art. 1º que "es deber de estas instituciones el

(147) Revela esta afirmación la lectura de la editorial que bajo el título "Por el cumplimiento de la ley cooperativa" apareció en la Rev. "Cooperación", nº 5 de 1936, en cuya pag. 4 se dice: "Con la implantación de la República se inició en nuestro país una nueva era para las organizaciones cooperativas... pero desde entonces a la fecha, muy poco se ha hecho en esta materia... No creemos exagerado reclamar de los que, en nombre del Frente Popular dirigen la política española, una mayor atención a los problemas y organización cooperativas, terminando con la excepción que nuestro país es en el mundo..."

(148) Al objeto de crear esta conciencia cooperativa, a través de una eficiente educación y enseñanza cooperativa, la Dº. Tº 5º, preveía un establecimiento progresivo de la enseñanza cooperativa en todos los centros estatales, del grado superior al primario, aumentando así lo previsto por Dº Tº 9 del anteproyecto que la establecía solo en las Escuelas de Ingenieros Industriales.

(149) Nótese que esta ley fue de las calificadas por la doctrina como de "Prerrogativa", dictadas por el Jefe del Estado en uso de las facultades conferidas por la ley de 30-1-1938.

de colaborar con los Sindicatos Nacionales en la solución de los problemas de tipo económico".

Aunque la eficacia práctica de esta ley fue nula, con ella se inició una nueva etapa para el movimiento cooperativo español, presidida por el deseo de sustituir la concepción liberal y democrática de la sociedad cooperativa, por otra autoritaria y jerarquizada (150) en la que lo sindical y lo cooperativo quedasen confundidos (151).

La ley de 1938 quedó derogada al promulgarse la Ley de Unidad Sindical de veintiseis de enero de 1940, cuyo artículo 6º disponía que: "Modificadas las circunstancias que determinaron su orientación, queda derogada en su totalidad la Ley de 27 de octubre de 1938, y en suspenso, mientras no se dicten disposiciones en la materia, toda tramitación de expedientes sobre constitución de nuevas cooperativas".

(150) Decía el Preambulo de la ley de 1938: "Es necesario inspirar el movimiento cooperativo español en principios de permanencia en la obra y de autoridad en la función, lo que exige la existencia de órganos rectores autoritarios, competentes y responsables en su gestión". En esta ley ya se contemplaba el derecho al veto, e incluso a la libre destitución, que en la elección y gestión de los Jefes de la Junta Rectora podía ejercer el entonces Ministro de Organización y Acción Sindical.

(151) Esta postura la considerao directamente influida por la que el régimen fascista italiano adoptó en relación con las entidades cooperativas. Sobre el tema de la disciplina y encuadramiento sindical de las cooperativas en el régimen corporativo italiano Vid: LABADES SA, R, "Realta e sviluppi della cooperazione in regimen corporativo", "Il dir. lav.", 1933 pags. 459 y ss; BARASSI, L. "Diritto sindacale e corporativo", Milano 1938, pags. 97 y ss; ZANOBINI, G. "Corso di diritto corporativo", Milano 1939, pag. 148-150; DEL GIUDICE, R. "Inquadramento sindacale delle cooperative", Archivio Studi Corporativi, fasc. I, 1940, pags. 14 y ss.

Con esta derogación expresa de la ley de 1938, la normativa legal aplicable a las cooperativas volvía a ser la de 1931 (152), si bien, y por imperativo legal, quedaba prohibida la constitución de nuevas cooperativas.

c) La Ley de 1942.

La necesidad de promulgar una ley de cooperativas se convirtió en un imperativo inmediato, y en este sentido con fecha dos de enero de 1942 se aprueba la ley de Cooperación (153), cuyo reglamento se publicó casi dos años después (154).

Con esta ley, el movimiento cooperativo español queda sometido de finitivamente al control de la Organización Sindical, no solo en sus

(152) La aceptación de la vigencia de la ley de 1931 es el único camino posible para sostener que en esta época regia alguna norma para regular las sociedades que ya funcionaban. Esta afirmación viene avalarse por el hecho de que si la ley de 1938 derogaba solo parcialmente la vigencia de la de 1931, y a su vez la ley de 1940 derogaba plenamente la de 1938 sin hacer referencia a la de 1931, en el ánimo del legislador estaba el no dejar desamparo a estas instituciones.

(153) De nuevo nos encontramos con una "ley de prerrogativas". Nótese, por otra parte, el cambio en la terminología denominándose a la ley de "Cooperación". GASCON HERNANDEZ, ("La cooperación en España", cit. pag. 7) considera este cambio lo más beneficioso llevado a cabo por la ley de 1942.

(154) 11-11-1943.

aspectos puramente organizativos (155), sino también funcionales (156).

Este control provocó de inmediato una actitud de suspicacia y recelo hacia las sociedades cooperativas de producción, temiéndose que en ellas se refugiaran las tendencias asociativas obreras de antaño (157).

Este cambio en la orientación política del movimiento cooperativo tuvo, y en buena medida sigue teniendo, consecuencias que afectaron tanto a la configuración jurídica de la sociedad cooperativa, cuanto al desenvolvimiento y expansión del fenómeno cooperativo en su vertiente de producción.

(155) Vid, sin ánimo exhaustivo, los siguientes preceptos de la ley: art. 3º ("las sociedades cooperativas... siempre disciplinadas a la organización sindical del Movimiento..."), art. 6º (las sociedades cooperativas se entenderán sujetas a la Obra Sindical de Cooperación ...), art. 26 (La Junta Rectora responderá ante el Estado y la O.S.C. de la dirección...) art. 27 (El Consejo de Vigilancia será nombrado por la O.S.C...) art. 53 (La Delegación Nacional de Sindicatos a través de la O.S.C., organizará jerárquicamente todo el movimiento cooperativo español...) art. 54 (Corresponde a la O.S.C... dirigir ... el movimiento cooperativo español).

(156) En este sentido vid. arts. 5.1 y 2 de la ley de 26-1-1940, y arts. 16-5 y 18.6 de la ley de 6-12-1940. También en la vigente ley sindical, ley 2/71 de 17-2, aparece intervencionismo de la Organización Sindical en los aspectos funcionales; así el art. 33 dice: "Corresponde a la Organización Sindical... 5. Realizar entre los sindicatos las funciones que le son propias en orden al estímulo y desarrollo del mutualismo; del movimiento cooperativo... de cualesquiera otras fórmulas de producción asociada..., estableciendo..., los cauces específicos de organización y representación".

(157). Cfr. RIAZA BALLESTEROS, J. M. y otros más, "Cooperativas de producción", Bilbao 1967, pag. 54.

En el primer aspecto, la sociedad cooperativa dejaba de ser considerada como un simple fenómeno asociativo de naturaleza jurídico-privada, para convertirse en organismo puesto al servicio de intereses públicos, y sometido en gran parte a las normas de naturaleza iuspublicista (158).

En realidad, y en una primera aproximación para justificar este intervencionismo en la organización y funcionamiento de una institución nacida de la libre y voluntaria asociación individual bastaría con acudir a la teoría de los conflictos de intereses, puesto que la doctrina enseña que la base de los controles públicos se encuentra en el conflicto entre un interés social (159) y un interés extrasocial, entendido tanto como interés individual de los socios que como interés extraño a la sociedad y a los socios.

En la sociedad cooperativa se puede plantear este conflicto de intereses, ya que en ocasiones, y debido a la función social que el Estado

(158) Para reforzar esta afirmación nuestra, baste traer aquí unas palabras del entonces Ministro de Trabajo, Sr. Girón de Velasco, que en un discurso a las Cortes decía: "El encuadramiento de la cooperación en la disciplina sindical se presenta como una necesidad... Estamos en el cause de los privado y lo estatal", (cfr. Boletín de las Cortes, nº 71, 1944, pag. 1489).

(159) Para la identificación del interés social, vid. GIORDANO, S. "Impresa sociale e scopo di lucro", en "Studi in Onore di Emilio Betti", vol. V, Milano 1962, pags. 177 y ss. en donde señala la existencia de un interés social digno de tutela, que no se identifica con el interés actual de los socios y que puede venir en conflicto con el interés de todos los socios actuales.

reconoce en esta institución (160), su finalidad y naturaleza pueda escapar del estrecho juego de los intereses privados para invadir sectores extraños al esquema funcional del ente y a su marco estructural (161).

En definitiva, parece plenamente justificada la naturaleza dual, jurídico-privada y jurídico-pública, de las normas reguladores de la sociedad cooperativa, y que sobre ella gire no solamente un control de legitimidad, sino también de oportunidad (162).

Sin embargo, este planteamiento trasciende con mucho de la orientación que la ley de 1942 dió a las sociedades cooperativas, puesto que

(160) PEREZ BOTIJA, "En torno al ...", cit. pag. 9 señala que la esencia de la cooperación es la de ser una "institución social"; y DE LA VILLA GIL, L.E. "El humanismo en la empresa cooperativa", en *Jornal*, nº 82, pag. 10 señala que la cooperativa es una "institución social de iure", (referencias a separatas). Las declaraciones de Organismos internacionales respecto a la función social realizada por estas entidades es numerosa; baste aquí recordar la Recomendación nº 127 de la Organización Internacional del Trabajo de 21-6-1966, que en su Dec. II, 3 dice: "En los países en vías de desarrollo, el establecimiento y la expansión de las cooperativas deberían ser consideradas como uno de los factores importantes del desarrollo económico, social y cultural...".

(161) Cfr. MICCIO, R. "La vigilanza dello Stato sulle cooperative", *Riv. Coop.* 1959, pag. 992. Vid, también MINERVINI, G. "La cooperazione e lo Stato", *Riv. dir. civ.* 1969, pags. 620 y ss. que estudia los diversos sistemas de control, interno y externo, sobre las sociedades cooperativas.

(162) MICCIO, Op. cit. pag. 995. También, NICOLETTI, D. "Presupposti e limiti della vigilanza sugli enti cooperativi", *Riv. Coop.* 1956, pags. 679 y ss y JEVA, "I controlli della prefettura sulle società cooperative", *Riv. delle soci.* 1957, pags. 1078 y ss.

lo que hizo no fué solamente instaurar estos controles sino desvirtuar, por medio de numerosas y rígidas intervenciones en los aspectos orgánicos y funcionales, la esencia que la sociedad cooperativa presenta en el concierto generalizado de los movimientos cooperativos de otros países, convirtiéndola en una sociedad jerarquizada a órganos sindicales con un carácter casi público (163).

En definitiva, el cooperativismo, en cuanto fenómeno de naturaleza socio-económica, y la sociedad cooperativa, en cuanto instrumento jurídicamente reconocido de aquél, quedaron encuadrados bajo los principios del dirigismo estatal, que delegó en la Organización Sindical la política de fomento y promoción de todas las entidades cooperativas (164).

Ahora bien, sería simplificar el planteamiento de todo el problema, considerar como único factor negativo en el proceso evolutivo de las cooperativas de producción, esta política de suspicacias y recelos adoptada por el órgano de promoción del movimiento; en cualquier caso, los condicionamientos fueron de naturaleza diversa, y afectaron tanto a los aspectos puramente internos, como a los externos.

La postura inhibicionista del Estado respecto de las sociedades cooperativas en general, y las de producción en particular fue gradualmente cambiando a lo largo de la década de los 50, hasta desembocar en

(163) Las construcciones doctrinales de la sociedad cooperativa como sociedad de interés nacional son muy escasas. En este sentido, de MARCO, F. "Sulla trasformabilità delle società cooperative", en "Il Diritto Fallimentare", 1950, pag. 106 señala que "nella categoria delle società di interesse nazionale vanno infatti comprese anche le società cooperative".

(164) Cfr. arts. 54 y 55 de la ley.

la siguiente en una actitud claramente beligerante en favor del cooperativismo de producción.

En este sentido, fueron numerosos los factores que influyeron para esta nueva postura aunque por su carácter decisivo es necesario detenerse de forma particular en dos.

a) En primer lugar, la constatación de una realidad cooperativa pujante en el sector producción; actuando con criterios económicos rentables, y con criterios sociales progresivos (165).

b) En segundo lugar, un creciente interés por aquellas instituciones que pudiesen ofrecer nuevas fórmulas para la reforma de las estructuras empresariales de tipo capitalista (166).

(165) Nos estamos refiriendo al complejo cooperativo de Mondragón. Sobre el tema, vid: ARIZMENDI, J.M. "Experiencias sobre una cooperativa: Mondragón, en "Estudios Cooperativos", 1966, nº 11-12, pags. 5 y ss; ELENA DIAZ, F. "El cooperativismo del grupo mondragonés. Análisis de esta experiencia a la luz de los principios cooperativos", *ibidem*, pags. 39 y ss; RIAZA BALBESTEROS, op. cit. pags. 83-203; GARCIA, Q. "Les cooperatives indetirelles", Paris, 1970.

(166) Vid. art. 12.2 del II Plan de Desarrollo Económico y social, aprobado por ley 1/69 de 11-2 (BOE 12-2), donde se dice que el Estado estimulará la agrupación (de la pequeña y mediana empresa)... prestando especial asistencia a las que se orienten hacia la mutua cooperación... Sobre el cooperativismo y el II Plan, vid: Ponencia "Factores humanos y sociales", II Plan de Desarrollo Económico y social, Madrid 1967, pags. 85 y ss; respecto a las relaciones con el III Plan, vid: "III Plan de Desarrollo Económico y Social", 1972-1975, Madrid 1971, pag. 146. En general, sobre el tema del cooperativismo y el desarrollo económico, RENS, J. "El papel de la cooperación en el desarrollo económico y social", en Cuadernos Informativos de desarrollo económico-social, abril 1963; OIT, "Papel de las cooperativas en el progreso económico y social de los países en vías de desarrollo", Ginebra 1964; WATKINS, W.P. "La promoción y la función de las cooperativas en las regiones en vías de desarrollo", Rev. Inst. Tra. vol. 71, 1965, pags. 106 y ss.

El instrumento de ayuda a las cooperativas de producción ha sido el Fondo Nacional de Protección al Trabajo, en cuyos planes de in-

Es necesario destacar, por otra parte, que esta mayor atención a los problemas del cooperativismo en general, y del de producción en particular, vino acompañado por un movimiento tendente a reformar la legislación sobre la materia; movimiento que fué encontrando eco tanto en sectores doctrinales (167) como en los de la propia Administración.

En este sentido, hay que señalar que el punto de partida corresponde a la base del movimiento, que al celebrar en el año 1961 la I Asamblea Nacional de Cooperativas, aprobó una ponencia dedicada a tratar este tema (168).

Este movimiento reformista, culminó, tras diversos anteproyectos (169), en la aprobación, con fecha trece de agosto de 1971, de un Regla-

versiones se dedica un capítulo muy importante para ayuda y fomento de las cooperativas de producción; en este sentido, vid. arts. 50 y ss. del XII Plan de Inversiones del F.N.P.T. (O.M 10-2-73, BOE 22-2)

- (167) Vid: BALLARIN MARCIAL, A. "Principios para una nueva ordenación de las cooperativas", en "Jornadas de Cooperación", hº 4, Madrid 1965, pags. 37 y ss: LOPEZ MEDEL, J, "Criterios para un mejor régimen jurídico de las cooperativas", en ibidem, pags. 101 y ss.
- (168) Ponente Sr. Del Arco Alvarez. La ponencia se denominaba "Bases del futuro ordenamiento jurídico y régimen fiscal de las cooperativas" Madrid 1962 (Se puede consultar en el nº 22 de la Revista AECCOOP, pags. 129 y ss.
- (169) La Organización Sindical elaboró un anteproyecto de ley, cuyo texto se puede consultar en "Estudios jurídicos sobre Cooperación", 2ª edic. Madrid, 1966, pags. 113 y ss. GARCIA PADRON, M. "Las sociedades cooperativas...", pag. 59 cita la existencia de un anteproyecto del Ministerio de Trabajo, al que califica como "mas flexible o menor rígido que el de la Organización Sindical", sin recoger la fuente de conocimiento.

mento nuevo de Cooperación (170), en sustitución del hasta entonces vigente de 1943.

Con la aprobación de este nuevo Reglamento no ha de terminarse el proceso legislativo sobre las sociedades cooperativas; y ello no solo por que oficialmente se ha anunciado la preparación de una nueva ley al respecto (171), sino fundamentalmente por cuanto al haber tenido que respetar el reglamento de 1971, por imperativos de técnica legislativa, los principios ordenadores contenidos en la ley, solo a través de una ley se podrá conseguir no ya un cambio en aspectos de carácter formal, o de estructura interna de la sociedad, sino en la total configuración de la institución cooperativa.

(170) BOE 9-10. Vid. VICENT CHULIA, F. "Análisis crítico del nuevo Reglamento de Cooperación", RDM 1972, nº 125-126, pags. 429 y ss.

(171) Así lo tiene anunciado el III Plan de Desarrollo, op. y loc. cit. En el mismo sentido, vid. declaraciones del Ministro de Trabajo, Sr. de la Fuente, en Barcelona (vid. prensa diaria 27-11-1970), en donde señala las necesidades de adecuar las sociedades cooperativas a las nuevas exigencias de una economía en desarrollo, lo que impone el preparar una nueva ley de cooperación, porque "la actual se ha quedado pequeña".

CAPITULO II

EL CONCEPTO ECONOMICO DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE PRODUCCION

1. La realidad económica del fenómeno cooperativo

Antes de entrar en el análisis de los aspectos jurídicos de la cooperativa de producción, investigando su configuración a la luz de nuestro ordenamiento positivo, parece necesario ensayar su concepto económico.

En este sentido, hay que señalar que por la doctrina económica se utilizan, no siempre de manera feliz, los términos de "cooperación", "cooperativismo" y "organización cooperativa", confundiéndose la idea - cooperación - con el sistema - cooperativismo o cooperatismo (1); y el sistema con el instrumento de su realización económica y jurídica - cooperativa (2).

No es este, sin embargo, lugar adecuado para detenerse en la delimitación terminológica del fenómeno cooperativo (3), que no ofrece, por otra parte, mayor interés práctico.

Lo que si tenemos que dejar sentado es que, sea cual fuere el tér

(1) Así WOLLEMBORG, L. "La teorica della coeperazione", en "Giornali degli econcmisti", 1887, pag. 130.

(2) Así AIMARCHA HERNANDEZ, L. "La coeperación como sistema económico-social", 4ª edic. León 1970, pag. 55.

(3) Un adecuado, a la vez que profundamente original planteamiento terminológico, en DE LA VILLA GIL, L.E. "El humanismo en la empresa cooperativa", Rev. Jernal nº 82, pag. 9 (referencias a separata).

mino utilizado, este tiene un hondo contenido económico. La cooperación presupone el desarrollo de una actividad económica, entendida esta en su más primario significado; es decir, como actividad humana dirigida a la satisfacción de las necesidades (4).

Trasladando esta elemental afirmación desde el plano abstracto de la idea al concreto de la realidad, equivale a aceptar que la entidad en que se materializa e instrumenta el hecho cooperativo queda configurada como una empresa económica.

No es por tanto el sistema cooperativo un sistema de beneficencia; ni es la empresa en que se realiza ese sistema una empresa de tipo caritativo, sino empresa económica dirigida - como acertadamente señaló hace ya tiempo el economista italiano PANTALEONI (5) - "a conseguir fines económicos de forma económica".

Partiendo de esta fundamental afirmación, la doctrina científica ha polemizado a la hora de delimitar los principios básicos económicos ya de la cooperación (6), ya de la cooperativa (7).

(4) BARRE, R. "Economía política", 4ª edic., t. I, Barcelona 1965, págs. 29 y ss.

(5) "Esame critico dei principi teorici della cooperazione", en "Giornale degli economisti" 1898, pag. 206.

(6) Además de las referencias que sobre la cooperación pueden encontrarse en los Manuales y Tratados de Economía Política, vid: SCHERMA, G. "La teoria económica della cooperazione", Palermo 1903; del mismo autor "Studio sul carattere economico della cooperazione", Palermo 1913; DALLA VOLTA, R. "Considerazioni sul fondamento teorico della cooperazione" en Scritti vari di Economia e Finanza, Firenze 1931, págs. 529 y ss. TAMAGNINI, G. "Principi teorici della cooperazione", Roma 1955; GUELFAT, I. "La cooperation devant la science économique", Paris 1966 y la abundante bibliografía francesa e inglesa citada en págs. 141-146.

(7) BIANDETTINI, A. "Note critiche sul concetto economico e giuridico delle

Dado que la finalidad de nuestra investigación queda limitada por el análisis de la empresa cooperativa parecería poco justificado el realizar un estudio del fenómeno cooperativo a la luz de la ciencia económica; sin embargo, y en la medida en que va a permitir un más completo encuadramiento de la empresa cooperativa de producción, nos vamos a referir al estado actual de esta investigación.

En este sentido, examinaremos en primer lugar los ensayos doctrinales para configurar al cooperativismo como sistema económico autónomo, y veremos la amplitud cuantitativa que al sistema se le ha dado para terminar analizando los principios económicos de la empresa cooperativa de producción.

2. La cooperación como sistema de organización económica

La elaboración de una morfología sobre la actividad económica encuentra su origen, nos dice BARRE (8), en la disputa metodológica que opuse, a finales del pasado siglo, a los teóricos de la ciencia económica, preocupados en hallar las leyes de la actividad económica, y a los historicistas, ocupados en descubrir los aspectos particulares de la realidad económica. De esta forma se originaron las nociones de organización económica y de tipos de organización económica.

società cooperativa", en Riv. Ital per le scienze giuridiche. t. XXXIV, págs. 281-335 y t. XXXV, págs. 51-110; PASADORO, G. "L'ordinamento economico e giuridico delle società cooperative" Milano 1900 PARLAGRECO, A. "Criteri tecnico-economici delle cooperative", Riv. Coop. 1949, págs. 242 y ss; TAMAGNINI, G. "Della nozione economica di cooperativa", Riv. Coop. 1954; TESSITORE, P. "Il concetto di impresa cooperativa in economia d'azienda", Verona 1968.

(8) Op. cit. pag. 152.

Doctrinalmente, se han clasificado los sistemas económicos en cinco grupos: de economía cerrada, artesanal, capitalista, colectivista y corporativo, viniendo definida cada uno según los elementos tipificadores que presenta (9).

Historicamente estos sistemas económicos han predominado en un ámbito geográfico o espacial determinado aunque no hayan sido predominantemente puros, superponiéndose y entremezclándose los elementos calificadores de uno u otro, originándose así sistemas capitalistas con elementos de economía artesanal, o sistemas colectivistas con pervivencia de rasgos, aun meramente sectoriales, de matiz capitalista.

Una comprobación empírica de la realidad económica, permite afirmar que los sistemas dominantes hoy son dos: el capitalista y el colectivista. La importancia práctica de estos dos sistemas trasciende lo puramente económico, para configurar dos diversas formas de organización comunitaria integral: política, social y jurídica.

Desde la perspectiva de la ciencia económica, y si se define a esta como la ciencia de "la administración de los recursos escasos" (10) cuya finalidad es la combinación más óptima de los factores de producción, es necesario reconocer que esta combinación se produce de forma distinta según el sistema analizado; diversa es la propiedad de estos factores y distintos son sus dogmas básicos: libre empresa e iniciativa privada, precios articulados sobre un postulado liberal ordenado por el máximo lucro

(9) Estos elementos son: espíritu, forma y sustancia, según los define SOMBART (vd. "El apogeo del capitalismo", Méjico 1946).

(10) BARRE, op. cit. pag. 34.

con el también máximo riesgo, en el capitalista; unidades técnicas de producción sustituyendo al empresario, regulación intervenida de precios y mercados en donde no prima el máximo beneficio como motivo sustancial del proceso productivo, en el colectivista.

Frente a la estructura dual de la realidad económica, aparece el cooperativismo como ensayo para resquebrajar esa dualidad, provocando así el que se comience a hablar del cooperativismo como una "tercera vía" en los sistemas de organización económica (11). Es decir, un tercer sistema acuñado entre el capitalista y el colectivista, oponiendo a aquel la eliminación del máximo lucro, y a este el reconocimiento de la propiedad privada.

Antes de pasar a analizar las respuestas doctrinales en torno a la configuración del sistema cooperativo como sistema económico propio, nos parece necesario, como punto de partida, hacer las siguientes consideraciones:

a) El concepto de sistema económico tiene hoy un valor relativo; está construido sobre bases empíricas al efecto de lograr un término medio entre las descripciones puramente historicistas y las interpretaciones meramente teóricas; o como señala el tan citado economista francés BARRE (12), su finalidad no va más allá que la de permitir la integración y explicación económica de los factores sociológicos e institucionales.

(11) La expresión es de LAVERGNE, B "L'ordre cooperatif", Paris 1920, pag. 65 y ss.

(12) Op. cit. pag. 158.

Trasladando esto al ámbito cooperativo, se exigiría la previa existencia, en el tiempo y en el espacio, de una organización económica que hubiera respondido plenamente a los principios generales del cooperativismo; sin embargo esta organización no ha existido más que en ámbitos geográficos reducidos, lo que impide afirmar, de forma tajante, que el movimiento cooperativo detente "macrodecisiones" económicas propias (13) que alteren de forma decisiva la realidad económica existente.

Por el contrario, la experiencia demuestra que funcionan organizaciones cooperativas en muy diversos sistemas económicos, las cuales han de adecuarse, al tomar sus decisiones, a los indicadores económicos impuestos por el sistema dominante (14).

b) Salvo honrosas excepciones, la doctrina científica económica o no ha prestado suficiente tiempo a la investigación y elaboración de una teoría económica pura y aplicada a la cooperación; e cuando lo ha hecho, se ha dejado arrastrar más por los aspectos ético-sociales del fenómeno,

(13) PERROUX, F. "Les macrodecisiones", en "Economie appliquée, abril-junio 1949.

(14) Como manifestación de la influencia que los sistemas económicos citados tienen sobre la operatividad económica de las cooperativas, baste recoger lo establecido en el art. 54.1 de la ley polaca sobre organizaciones cooperativas de 17-2-1961, que señala: "La actividad económica de la cooperativa se ajustará a un plan elaborado en el marco de los planes económicos y financieros".

en cuanto movimiento de emancipación de clases deprimidas, que por un análisis profundo de la función económica de la cooperación; dándose la circunstancia, paradójica en cierta medida, que los estudios mas serios sobre la teoría económica de la cooperación prevengan de aquellos economistas cuya finalidad fué la de negar la validez económica de los principios cooperativos.

Este nos obliga a señalar que, si se quiere mantener un cierto grado de rigor científico, la afirmación de que el cooperativismo es un sistema económico válido en si mismo, y con principios económicos propios es hoy más que un juicio científico, una aspiración deseable o una intuición profética.

En el terreno dubitativo en el que estamos moviéndonos, cobran gran significade las palabras del economista israelí GUELFAT cuando afirma (15) que "si bien la acción y las obras concretas del movimiento cooperativo presentan un campo fértil para las búsquedas teóricas (de la ciencia económica) puras y aplicadas, una teoría económica cooperativa no ha de ser necesariamente autónoma; puede o no puede serlo".

Sin supervalorar sus afirmaciones, si hay que señalar que su obra constituye la elaboración más seria y profunda para un acercamiento del pensamiento cooperativo a la ciencia económica; de ahí que consideremos como altamente indicativas sus opiniones.

Una vez hechas estas consideraciones veamos desde que perspectivas se han construido las teorías del cooperativismo como sistema de organi-

(15) O. cit. pag. 134 (subrayado del autor).

zación económico; distinguiendo a tal efecto entre aquellas que, sostiene que pueden ordenar integralmente todas las relaciones económicas de una comunidad; y aquellas otras que consideran que el cooperativismo no llegará nunca a organizar totalmente la realidad económica.

2.1 El cooperativismo como sistema de organización integral

La idea fundamental de esta concepción es la de que la cooperación es sistema apto para organizar toda la realidad económica y social en un determinado ámbito geográfico, consiguiendo convertirse en sistema económico único, o cuanto menos dominante (16).

La fuente en donde se encuentra esta aspiración la brindan los Estatutos de la primera cooperativa de consumo, la de Rochdale, considerados como la Carta Magna de la Cooperación. El artículo primero, párrafo sexto, de estos estatutos decía:

"En cuanto sea posible, esta sociedad se empeñará en la organización de las fuerzas de la producción, de la distribución, de la educación y del gobierno..." (17).

La posterior interpretación de cual sería el camino más adecuado para la conquista de la sociedad por parte de las organizaciones cooperati-

(16) Podrían coexistir el sistema artesanal, y en cierta medida el público nacionalizado; cfr. CIURANA FERNANDEZ, J.M. "Principios fundamentales de la cooperación", en "La empresa artesana y cooperativa a la luz de la doctrina social católica", Madrid 1963, pag. 71.

(17) La traducción se ha hecho desde el francés, recogiendo la hecha a este idioma por LAMBERT, P. "La doctrine cooperative" 3ª edic. Bruxelles 1964, pag. 305.

vas ha dado origen a muy diversas y en parte inconciliables posturas, las cuales pueden ser clasificadas de la siguiente forma:

- a) Las que consideran que este dominio del cooperativismo llegará por la vía de la producción;
- b) Las que señalan que será por la vía de las cooperativas de consumo, y
- c) La integral, según la cual será la combinación de producción y consumo la que logrará la cooperatización total.

Veamos brevemente estas teorías, si bien señalando ya que lo haremos solo desde las posturas doctrinales más representativas (18).

2.1.1 La cooperatización por la vía de la producción

En el capítulo anterior se vió que el movimiento cooperativo surge como reacción de las clases trabajadoras frente a las situaciones depresivas provocadas por la revolución industrial. Partiendo de esta afirmación, se piensa que el cooperativismo, cuya única y más exacta expresión es la cooperativa de producción, conseguirá resolver todos los males sociales producidos por la detentación del capital en manos de los empresarios intermediarios entre aquel factor de la producción y el trabajo.

Cronológicamente, es esta la primera tesis elaborada por la doctrina, que en ocasiones buscaba mas que hallar una tercera vía integrar el

(18) Para un estudio más detallado de las doctrinas económicas de la cooperación, vid. RUINI, C. "L'impresa cooperativa", Roma 1949, págs. 31 y ss y LAMBERT, op. cit. págs. 89 y ss.

cooperativismo en el sistema colectivista (19).

STUART MILL afirmaba en sus "Principios de economía política" (20) que a medida que la humanidad progrese, la asociación cooperativa predominará sobre las otras formas de organización industrial, con lo que - señala PANTALEONI (21) - en el pensamiento de economista inglés el progreso de la humanidad y el del cooperativismo de producción son fenómenos que constituyen variaciones concomitantes.

En términos parecidos se expresaba CAIRNES (22), para quien la cooperación era la única vía a través de la cual las clases trabajadoras podían acceder a los honores y beneficios de la humanidad.

Por su parte, SCHAEFFLE (23) más cauto que Stuart Mill, veía en la cooperativa de producción la meta deseada para obtener una plena integración de las clases trabajadoras en la sociedad.

(19) Así VALENTI, G. "L'associazione cooperativa: contributo alla teoria economica della cooperazione". Modena 1902, pag. 258 y ss señalaba que si la cooperación quería ser algo, tenía que ser socialista.

(20) Principios de economía política con algunas aplicaciones a la filosofía social (cit. por PANTALEONI, op. cit. pag. 203).

(21) Op. y loc. cit.

(22) "Some leading principles of political economy", London edic. 1883, pag. 289 (cit. por PANTALEONI, op. y loc. cit)

(23) "Il sistema sociale dell'economia umana", en Biblioteca dell'economista", vol. V, pag. 546.

En la postura de todos estos autores, se observa más que la construcción de una teoría económica del cooperativismo de producción, un deseo de contemplar en la cooperación un plan integral para la reorganización de la realidad social, impuesta por los principios económicos del capitalismo; de ahí que todas ellas caigan en una cierta abstracción ética, y se intenten construir más que sobre principios positivos, sobre meros principios negativos "anticapitalistas" (24).

Criticando la postura de estos autores, VALENTI (25) señala que todos ellos incurren en el error de menospreciar el intervalo de tiempo que en un sistema cooperativizado por vía de la producción separa inevitablemente la formación de capital de su empleo.

En el sistema capitalista - señala el economista italiano - el trabajador no posee el capital, sino que este se acumula con anterioridad lejos de su esfera; en el sistema cooperativo integral, construido por vía de la producción, el trabajador es propietario del capital que alimenta esa producción, con lo que está obligado a formarlo poco a poco, y si tal vez no consigue nunca poseer el necesario para fundar una empresa independiente, cuanto menos para crear un sistema económico nuevo.

Partiendo de este razonamiento, las conclusiones que se obtienen son dos:

a) Por una parte, y si lo que se pretende con una tal elaboración es

(24) Crítica esta que se puede ampliar a la mayoría de las construcciones económicas cooperativas; cfr. RUINI, op. cit. pag. 83.

(25) Op. cit. pag. 254, nota 1.

demostrar la virtualidad, como sistema económico propio de la cooperación por vía de producción, hay que reconocer que en tanto en cuanto esta considere como principio básico de ordenación económica el dogma de la propiedad privada de los medios de producción - que en el sistema cooperativo se traslada de sujetos simplemente - una cooperatización total por esta vía se manifiesta como imposible, quedando reducido su ámbito a unos supuestos geográficos muy concretos, y siendo las dimensiones de sus empresas de niveles no superiores al medio.

b) Si por el contrario, con el sistema cooperativo lo que se pretende es no solamente trasladar la propiedad privada de los medios de producción de unos sujetos a otros, sino de un sujeto individual a uno colectivo, entonces el sistema cooperativo se identifica plenamente con el sistema colectivista, en cuyo caso es obvio hablar ya de "tercera vía".

Independientemente de la atracción emotiva que se pueda sentir no hacia un sistema cooperativizado por esta vía, sino hacia la entidad económica en que ese sistema se materializa, lo cierto es que hay que preguntarse si un sistema económico cooperativizado a través de la soberanía del productor-trabajador actuaría con principios económicos distintos a como actúa el sistema capitalista (26).

En este sentido, VELARDE FUERTES (27) ha puesto de relieve que las

(26) Prescindimos de analizar esos principios en un sistema colectivista, por cuanto y como acabamos de decir, ello exigiría la información de unos principios no ya estrictamente cooperativos, sino simplemente colectivistas.

(27) "La cooperación y la teoría económica", en "La empresa artesana y

cooperativas de producción pueden llegar a ejercer aisladamente actividades monopolistas, con lo que, y a semejanza de lo que sucede en un sistema capitalista, los productores-trabajadores obtendrían de las rentas de monopolio ganancias elevadas, sin que desde esta perspectiva económica nos sirva de justificación el hecho de que estas se hayan trasladado de sujetos.

De ahí que el mismo economista señale que una cooperatización integral por vía de la producción no es, en el contexto general de las relaciones comunitarias de un país, un hecho socialmente deseable; sino en la medida en que estas queden ligadas a las cooperativas de consumo (28).

Analizando la posible existencia de una función económica propia en las cooperativas de producción, el tan citado economista español señala (29) que en estas entidades el factor trabajo se ve alterado en la me-

cooperativa a la luz..." cit, pag. 193; este hecho monopolista de las cooperativas de producción, o dejó también apuntado PANTALEONI, op. cit. pag. 313 al señalar como estas cooperativas devienen monopolies en la medida en que al convertirse en organismos cerrados, reservan a sus asociados los beneficios por ella producidos.

- (28) El problema de como unir a ambos tipos cooperativos, ha atormentado y sigue atormentando a la doctrina cooperativa; un planteamiento del tema en ELENA DIAZ, F. "Problemática actual de la doctrina cooperativa", en "El cooperativismo en la coyuntura española actual", Madrid 1964, pags. 71 y ss.

- (29) Op.cit. pag. 187-188.

dida en que el trabajador, al sentirse propietario de los medios de producción, está dispuesto a trabajar en condiciones económicas diferentes, modificando así la forma de la curva de la oferta de trabajo.

¿Podría entenderse que este hecho es suficiente para apreciar principios económicos propios en un sistema cooperatizado por vía de la producción? Por supuesto que no; y ello no solamente porque en el sentir de este autor la conclusión esté lejana, sino por cuanto creemos que el hecho en sí carece de una tal virtualidad como para obtener de él conclusiones generalizadoras. Efectivamente; si este principio de la propiedad privada en los medios de producción, origen de esa alteración económica, en manos de quienes ejercen el trabajo fuese solamente predicable de estas entidades, quizás se podría llegar a la conclusión que la cooperación de producción actúa con criterios económicos distintos al llamado sistema capitalista; pero hay que tener en cuenta que son muchas y muy diversas las formas de hacer participar a los trabajadores en la propiedad de la producción, en todas las cuales sería también apreciable esa función propia.

Este razonamiento equivale a afirmar que la cooperatización por vía de producción no actúa ni se rige por unos principios que le sean propios (30).

(30) En este caso, un accionariado obrero generalizado, o un sistema de empresas asociativas laborales alterarían el factor trabajo igual que las cooperativas de producción.

Significa esto que veamos imposible un tal sistema económico? La respuesta no puede plantearse más que en el terreno de la duda, ya que la palabra final corresponde a los economistas; y estas, ya sea por que cuando se han planteado el tema han elegido la construcción del sistema cooperativo por vía del consumo, ya sea por cuanto si se han enfrentado a este tema concreto no han sabido elaborar - quizás porque resulte imposible - una teoría económica propia de la cooperación de producción (31) tampoco lo han afirmado con criterios científicos óptimos.

2.1.2 La cooperatización integral por vía del consumo

Si en la teoría anterior el sistema cooperativo, como sistema de ordenación integral de las relaciones económicas viene construido sobre las cooperativas de producción, en esta segunda elaboración doctrinal, el cooperativismo integral llega de la mano de las cooperativas del consumo.

Digamos, antes de nada, que esta elaboración doctrinal ha sido más profundamente construida, pecando de menos emotividad, aunque sin llegar a alcanzar una integración plena en la teoría económica pura.

La doctrina de la soberanía del consumidor tiene sus orígenes en la doctrina alemana e inglesa, aunque su elaboración más cuidada la recibe de la doctrina francesa, y concretamente de la llamada Escuela de Nimes, cuyo máximo representante fué el economista Charles Gide (32).

(31) "El análisis científico en el orden económico de la experiencia cooperativa - dice FERROUX, F. en el Prólogo a la obra de Guelfat, cit. pag. 11 - no se ha presentado por la doctrina económica".

(32) Este economista ha sido considerado como el fundador de la moderna

El economista alemán PFEIFFER (33) fué el primero en ensayar una teoría económica de la cooperación dominada por las cooperativas de consumo, las cuales, utilizando de forma continua sus reservas financieras para la expansión económica, lograrían alcanzar la conquista de toda la producción, y con ella de la economía en general.

Prescindiendo de las construcciones doctrinales de diversos autores ingleses (34), decíamos que se debía al francés Charles Gide la elaboración mas cuidada de esta teoría. Ciertamente excedería de los límites de nuestro trabajo el analizar exhaustivamente el pensamiento económico de este autor, por lo que nos vamos a limitar a esbozar los rasgos más importantes de su postura, en orden a la transformación total del sistema económico actual por vía del cooperativismo de consumo.

teoría de la cooperación; sobre el tema de la figura de Gide en el movimiento cooperativo, vid. MLADENATZ, G. "Histoire des doctrines cooperatives", Paris 1933, pags. 290 y ss (hay una traducción española, Buenos Aires 1969).

- (33) "Die Konsumvereine", 2ª edic. Stuttgart 1895. Este autor fué el fundador de la llamada "Escuela de Hamburgo", cuyos máximos representantes fueron Kaufman y Staundiger; para el primero, vid: "Jahrbuch des zentralbandes", Hamburgo 1908 y "Die Stellungnahme der Sozialdemokratie zur konsuggenossenschaftsbewegung", Hamburgo 1911; la principal obra de STAUNDIGER, F. es "Die Konsumgenossenschaft", Leipzig 1908, traducida al castellano (Barcelona 1925).
- (34) Principalmente WEBB, S - POTTER, B "The consumers' co-operatives movement", London 1921.

La cooperación - dice GIDE (35) - es un fin en sí misma; o lo que es lo mismo, no es instrumento funcional de ningún sistema económico, bastando para que ella se realice dejar que evolucione y se multiplique la pequeña cooperativa de consumo. He aquí el punto de partida y el punto final de todo el pensamiento gidiano, y sobre el que construirá to de su plan de conquista del sistema económico, que vendrá realizado a través de sus ya famosas fases.

El contenido sistematizado de estas tres fases (36) es el siguiente:

1ª.- La titularidad del poder económico reside en el consumidor que debe emanciparse de la tiranía impuesta por el intermediario (37), llegándose en esta primera etapa al autoabastecimiento no competitivo de

- (35) Su principal obra es "La coopération. Conférences de propagande", título que a partir de la 5ª edic. pasó a denominarse "Cooperatisme" justificando este cambio el autor porque el término "ismo" explica mejor el pensamiento general que une a todas sus conferencias (las citas estarán hechas a la 4ª edic., París 1922). Otras obras suyas son "L'avenir des coopératives de production", París 1923; "Les sociétés coopératives de consommation", París 1924; "Le programme coopératiste", París 1924; "L'Ecole de Nîmes", París 1926.
- (36) Sobre el tema, con más detalle, GIDE, "La coopération", cit. pag. 88 y ss.
- (37) "La sociedad de consumo cooperativa permite a los consumidores no necesitar de ningún comerciante, haciendo ellos mismos sus compras a los productores", cfr. GIDE, "Curso de economía política", trad. esp. de la 7ª edic. (hecha por Docteur) París 1929, pag. 578, nota 1. El efecto económico de la desaparición de la intermediación por las cooperativas de consumo, no siempre se ha entendido correctamente por la doctrina. Así algún sector piensa que lo que desaparece con ellas es el intermediario; vid. NAVARRINI, U. "Delle società a delle associazioni commerciali", Milano 1924, pag. 901; otros autores por el contrario señalan que la cooperativa de consumo hace desaparecer la es-

todos los consumidores (38), y con ello al completo dominio del sector distributivo.

22.- Una vez conseguido el dominio en la distribución, las cooperativas están en condiciones adecuadas para dedicar parte de sus reservas financieras a la creación de nuevas entidades, que al operar en el sector industrial, permitan la producción a un justo precio de los productos fabricados para el consumo de las cooperativas distributivas (39).

speculación; así VALENTI, G. "L'associazione cooperative e la distribuzione della ricchezza", en Archivio giuridico "Filipo Serafini", vol. LXVI, 1901, pags. 37 y ss. Frente a estas posturas, hay que constatar que la intermediación no desaparece con la cooperación, ni las cooperativas eliminan al intermediario, ya que estas se convierten en intermediarios; como acertadamente dice GAY DE MONTELLA, R. ("Código de comercio español comentado", t. II, Barcelona 1948, pag. 114), se produce un cambio en la forma del intermediario, ya que la cooperativa es la que se erige a su vez en intermediario de sus socios, y en cualquier caso la desaparición de la intermediación significaría la desaparición de la propia cooperativa. En el mismo sentido, MANARA, U "Delle società e delle associazioni commerciali", vol. V, Torino 1902, pags. 613 y ss; VIVANTE, G. "Istituzioni di diritto commerciali", 18ª edic., Milano 1920, pags. 110 y ss.

- (38) Para GIDE, (op. y loc. ult. cit.), la competencia tiene efectos deplorables, los cuales no se producen en la cooperación ya que "al asociarse los individuos entre sí para proveer a sus necesidades, estos no se hacen la competencia"; contra este criterio de que en un sistema íntegramente cooperatizado se eliminan la competencia, PANTALEONI, (op. cit. pags. 412 y ss) que señala que "si todo se produjese o vendiese por medios cooperativos, se llegaría a la misma situación de libre concurrencia competitiva existente en un sistema de mercado libre".
- (39) Este es el punto más importante de toda la elaboración gidiana, ya que de la unión de las cooperativas de consumo con las de producción se conseguirá el precio justo sin la intervención de ningún mecanismo corrector; es decir, para el economista francés el normal funcionamiento de la oferta y de la demanda lleva aparejado, en un sistema cooperativo, la determinación del justo precio, sin que existan tendencias alcistas del sector producción, ni reductoras del sector con-

3º.- Dominado el sector distributivo y el productivo, no resta más que adquirir la tierra necesaria para producir los artículos a fin de que todo el sistema se encuentre cooperativizado.

Una vez realizada esta renovación la organización de la sociedad actual se transformará radicalmente. La actividad económica en lugar de estar regida por los principios de la ganancia individual, quedará regulada en beneficio de las necesidades sociales; y con ello la producción se convertirá de soberana, en simple elemento funcional de consumo (40).

En definitiva, el "desideratum" de Gide es convertir a la producción en instrumento del consumo, único modo de conseguir un equilibrio estable de las relaciones económicas.

¿Cual es el juicio crítico que nos merece esta postura (41)? Para dar una respuesta, planteemos la crítica en un doble terreno: en el de la teoría pura, y en el de los hechos concretos.

sumo. Sobre el tema, GIDE, "Formation et evolution de la notion du juste prix", Paris 1922, passim, esp. pags. 31 y ss; la teoría del justo precio lleva, por otra parte, la desaparición del lucro; sobre este aspecto en Gide, vid. "La cooperation", cit. pags. 285 y ss.; ver también LASSERRE, G. "Le probleme de la légitimité du profit", Rev. Etud. Coop., 1934, pags. 195 y ss y LAMBERT, op. cit. pags. 154 y ss.

(40) Para GIDE, ("La cooperation", cit. pags. 102 y ss) a los trabajadores les es indiferente la conquista de la industria a título de productores que a título de consumidores; de ahí que si las dos vías lleven al mismo resultado, en su planteamiento sea perfectamente válido elegir la segunda. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que tal afirmación no es correcta.

(41) La influencia de Gide en la moderna doctrina cooperativa es muy notable, sobretodo en la francesa, debiéndose citar a Lavergne, Poisson y Lasserre. El primero comparte plenamente la teoría de la soberanía del consumidor de Gide, aunque se aleja de él en lo que res-

Desde el primer aspecto, digamos que la teoría giddiana sobre la soberanía del consumidor - y consiguientemente dominio de las cooperativas de consumo - está montada sobre dos ideas fundamentales (42): por una parte, la de que el consumo es el fin último de toda la actividad económica; por otra, la de que el hombre cuando actúa como consumidor tiende a confundir su interés con el de la colectividad, mientras que cuando actúa como productor - trabajador - tiende a disociar el interés general con el suyo particular.

Ambas ideas son relativas, y en todo caso insuficientes para transformar el sistema económico actual. Por una parte, tanto la producción como el consumo son funciones económicas, y en consecuencia ese equilibrio en la ordenación económica habrá de originarse no mediante una situación de sujeción de la producción frente al consumo, sino a través de un estado de interrelación mutua (43).

Por otra, tampoco se puede elevar a verdad absoluta la afirmación de que en el cooperativismo de consumo el interés individual de los consumidores tienda a confundirse con el interés general, ya que no puede

pecta a la apreciación de que el sistema cooperativo suprimirá la competencia; (cfr. "La revolution cooperative", Paris 1949, págs. 54 y ss); POISSON, E. ("Republique cooperative" Paris 1920) ha ensayado la construcción práctica del sistema cooperativo. LASSERRE, es el que de manera más fiel ha seguido la doctrina de Gide, afirmando que "la cooperación de consumo, por la amplitud de sus realizaciones, por el radicalismo de su solución frente al lucro, y por la llamada universal al reino de los consumidores puede tener, y tiene de hecho, la ambición de renovar en toda su profundidad el conjunto de la economía", (cfr. "La Cooperation", Paris 1962, pag. 123).

(42) Cfr. LAMBERT, op. cit. pag. 168

(43) Cfr. VALENTI, op. cit. págs. 312 y ss; o como afirma GUELFAT (op. cit. pag. 68) es imposible concebir el dinamismo del consumo fuera del de la producción.

olvidarse los efectos que sobre esa conjunción opera la infinita subdivisión de la demanda (44).

Estas debilidades en la construcción teórica de la soberanía del consumidor son perfectamente constatables en el terreno de los hechos, de forma que de la experiencia histórica de los diversos movimientos cooperativos de consumo se demuestra que estos no han llegado nunca, y aun están lejos de llegar, a convertirse en "monopsonio", es decir en economía dominante de nuestros días; o como acertadamente señala GUELFAT (45), la fuerza de cohesión del movimiento cooperativo de consumo es comparativamente insuficiente para convertirle en economía dominante o incluso en monopolio imperfecto.

2.1.3 La cooperatización integral por vía del consumo y producción

Para salvar la construcción de un sistema económico cooperativo, y ante la imposibilidad de elaborarlo disociando las funciones económicas de la producción y del consumo, se acude, por la más moderna doctrina cooperativa, a la concepción de la soberanía coparticipada del productor y del consumidor, a los que se añade, como demostración de la importancia que en la ordenación económica adquiere el Estado, la del ciudadano.

Esta teoría, cuyo máximo representante es el belga LAMBERT (46),

(44) LAMBERT, op. cit. pag. 169; también GUELFAT, op. cit. pag. 59, al señalar que "la cooperative de consommation ne centralise qu'une part de la demande effective total".

(45) Op. cit. pag. 62. "Il est clair - escribe este autor, pag. 60 - que le monopsonne cooperatif est une categorie imaginaire ou presque".

(46) En la doctrina cooperativa española se adhiere a esta postura ELENA

pretende obviar así las debilidades de las construcciones anteriores, re conociendo un interés legítimo a todos los sujetos que intervienen en la ordenación de las relaciones económicas, mediante la decantación previa de sus respectivos ámbitos de poder.

Así, y en primer lugar, al consumidor le pertenece la distribución y fabricación de los bienes industriales de consumo generalizado y frecuente, así como la prestación de los servicios.

Al productor le corresponde ejercer las actividades primarias de la agricultura, y las ligadas directamente a la iniciativa familiar o de pequeño grupo.

Al ciudadano le pertenece la soberanía de las actividades que impli can servicios de carácter gratuito o semigratuito.

Por último, las tres soberanías ejercen su poder sobre las empresas públicas dedicadas a la fabricación de materias primas o de bienes de consumo de adquisición no generalizada ni frecuente. (47).

2.1.4. Consideraciones críticas

No es pretensión el dogmatizar ni enjuiciar críticamente posturas doctrinales nacidas en el ámbito de la ciencia económica: ni nuestra preparación lo permite, ni nuestra labor lo exige. Sin embargo quedaría nuestra exposición falta de armonía si evitásemos el afrontar la viabilidad económica de la construcción doctrinal que acabamos de examinar; de ahí

(47) Op. cit. pag. 179-181.

que nos parezca necesario hacer unas consideraciones objetivas de carácter general que señalen las debilidades de un sistema económico cooperativo (48).

a) La primera objeción que se podría realizar es la de que los sostenedores de esta construcción económica han invertido, para su elaboración, los supuestos teóricos; en el sentido de que partiendo de una aspiración última - creación de un sistema cooperativo con operatividad económica propia - han pretendido resolver todos los problemas de una tal ordenación, de forma inductiva, sin pararse previamente a considerar la virtualidad propia de la Teoría Económica Cooperativa.

De entre los mismos teóricos de la Cooperación, los hay que parten de una concepción económica clásico-liberal o socialista-planificada, o de economía mixta, e incluso no faltan construcciones que hayan intentado integrar la cooperación en el cuadro de la teoría keynesiana (49).

Todo esto viene a demostrar lo ya repetido en otro lugar, de que falta una base científica para afirmar la autonomía teórica de la Cooperación.

Con esta afirmación no estamos negando el valor concreto del cooperativismo, ni la importancia económica de las entidades cooperativas,

(48) Haremos alusión únicamente a aquellas consideraciones que puedan afectar a la doctrina de la cooperación como sistema de ordenación integral, prescindiendo de aquellas otras ya hechas, que afecten a las diversas perspectivas para conseguir una tal cooperatización.

(49) Sobre este último aspecto, vid. HAMILTON, D. "Keynes, Cooperation and Economic Stability", en "American Journal of Economics and Sociology", oct. 1954, Sobre el pluralismo teórico de la cooperación GUELFAT, op. cit. pags. 123 y ss.

sino tan solo planteando la duda de si no pertenecerá al reino de la utopía, de lo imaginario o imposible considera que toda la actividad económica pueda ser regida bajo principios cooperativos.

b) De destacar es, en segundo lugar, que la moderna doctrina económica califica de imperfecto el concepto de "sistema económico", ya que este no suministra las categorías lógicas que pueden afectar directamente a un análisis de su funcionamiento; es decir, que los elementos históricos o sociológicos, de los que el sistema económico es un compuesto, tienen a veces el inconveniente de ocultar la realidad económica y entorpecer su exacta comprensión (50).

Ello equivale a considerar como inoperante la investigación referente a si en el cooperativismo se dan los elementos necesarios para su calificación como sistema económico (51), puesto que lo que se busca es un

(50) Cfr. BARRE, op. cit. pag. 158.

(51) En ninguna de las obras que sobre cooperación y cooperativismo he consultado, se intenta construir el sistema cooperativo siguiendo el enfoque de Sombart; es decir, buscando cual es el espíritu, la forma y la sustancia de un posible sistema cooperativo. Intentando hacer esta calificación, deduciéndola de las principales posturas doctrinales, podría señalarse:

a) El espíritu es el de contrarrestar las desigualdades del capitalismo, mediante la búsqueda del precio justo. Parafraseando la calificación de Sombart respecto al espíritu capitalista, diríamos que la mentalidad de la cooperación se caracteriza por tres rasgos: espíritu de servicio (de lucha en el capitalismo), espíritu de solidaridad (de competencia en el capitalismo) y espíritu emocional (racional en el capitalismo)

b) La forma (es decir el conjunto de elementos sociales, jurídicos e institucionales) que definiría el marco de la actividad económica ejercitada cooperativamente podría ser la siguiente: la organización jurídica y social vendría caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción y de los bienes de consumo (esta

concepto que ponga mejor de relieve el principio según el cual se ordenan los procesos económicos, y que sirva para completar los datos suministrados por sistema económico (52).

De ahí, que la doctrina económica (53) haya procedido a elaborar un nuevo concepto que responda a estas exigencias: el de tipo de organización o tipo abstracto de sistema económico.

Este nuevo concepto, para cuya configuración se tiene en cuenta la relevancia recíproca de los planes trazados y ejecutados por los sujetos económicos, origina dos tipos abstractos de organización económica: el tipo de economía dirigida desde el centro y el tipo de economía descentralizada o de mercado. En aquel, el plan de una unidad económica se impone a todos los demás planes de los sujetos; en este, los planes de cada uno de

afirmación no es susceptible de generalizarla a todas las posturas doctrinales, ya que hay autores, LAMBERT, op. cit. pag. 160, y en general todos los socialistas acercados a la cooperación, que consideran que los medios básicos de producción deben ser propiedad colectiva (del Estado, que ejerce su poder a través del ciudadano), lo cual pone ya de manifiesto la dificultad de intentar una caracterización común del sistema económico cooperativo) y por el papel de las unidades técnicas de producción - entidades cooperativas - en la fijación del justo precio.

c) La sustancia (conjunto de procedimientos por mediación de los cuales se obtienen y transforman los bienes) o técnicas "puede" ser moderna y progresiva, (aunque es en este tercer elemento donde más radicalmente se manifiesta la inexistencia de una caracterización propia, hasta tal punto que no encontramos dificultad en señalar que este sistema cooperativo carecería de sustancia "per se").

(52) BARRE, op. cit. pag. 159.

(53) Vid: EUCKEN, W. "The foundations of economics", Londres 1951; HALM, G. N. "Economic systems: a comparative analysis", Nueva York, 1951.

ellos son independientes y entran en colisión (54).

Ni que decir tiene que hoy día estos dos tipos abstractos, químicamente puros, presentan una muy abundante escala de degradación convergente, de forma que es perfectamente lícito señalar su relativa unificación (55).

Pero frente a ellos, ¿presenta el cooperativismo unas características tan acusadas como para poder seguir configurándole como sistema económico autónomo?

Es en este punto en el que se encuentra detenida la investigación más moderna en torno al fenómeno cooperativo, y cuyas conclusiones no pueden más que ser dibujadas con perfiles tremendamente dubitativos.

En este sentido, el problema se centra en los siguientes términos: pueden las leyes económicas de la Cooperación invertir las leyes económicas de los tipos de organización de los que aquella forma parte?

Intentemos resolver la cuestión por vía empírica, comenzando por

(54) BARRE, op. y loc. cit.

(55) Las degradaciones en un sistema de economía centralizada son: sistemas económicos totalmente centralizado, producción planificada con libre elección de consumidores, consumo planificado con producción libre y planificación global con penetraciones sectoriales diversas. En el sistema descentralizado es posible igualmente apreciar diversos tipos de mercado, según se realice el ajuste de los planes individuales; sobre el tema, BARRE, op. cit. pagas. 163 y ss.

recordar que el fenómeno de la Cooperación no ha operado históricamente sobre áreas geográficas lo suficientemente extensas como para permitir una demostración fáctica de sus principios teóricos.

Por lo tanto, tenemos que encuadrar a la cooperación como requisito previo, dentro de alguno de los tipos de organización; lo que equivale ya a reconocer que las leyes económicas de esa organización van a estar afectando directamente un marco funcional.

Pensemos en el funcionamiento económico de las entidades cooperativas que actúan en una organización centralizada; se puede afirmar con certeza que los parámetros "cooperativos" no sufrirán influencia por la acción de ese tipo concreto de organización? No es menos arriesgado adelantar que las leyes económicas de la estructura centralizada obligarán a una adecuación operativa a las denominadas leyes económicas de la Cooperación? Ciertamente que sí, y ello por cuanto pensamos que la Cooperación, no puede configurar fuera de una economía centralizada o descentralizada (56).

c) Esta objeción, nos lleva de la mano a considerar la última de las debilidades de esta construcción, y que consiste en otorgar la calificación de "fin", en sí mismo considerado, a la Cooperación (57).

La Cooperación no es un fin, es decir no debe convertirse en aspiración última de la actividad económica. La cooperación es un instrumen

(56) Solución acogida por GUELFAT, op. cit. pags. 67 y ss. y 125 y ss.

(57) Calificada así por Gide, vid. supra pags.

to de las estructuras económicas existentes. De ahí que consideremos como plenamente exacta la afirmación del economista ruso PROKOPOVITSCH (58) de que "la diferencia de formas económicas crea diferencia de intereses económicos, los cuales a su vez engendran diferentes formas cooperativas".

La forma cooperativa viene dada por la estructura económica del marco geográfico en el que actúa; no hay así "forma cooperativa", sino formas cooperativa de economía de mercado o de economía dirigida.

Esta diversidad de formas de la cooperativa supone, por otra parte, el reconocimiento de la diversidad teórica de la cooperación; e lo que es lo mismo, que una teoría económica de la Cooperación debe configurarse partiendo de esta diversidad formal.

2.2 El cooperativismo como sistema de organización sectorial

Junto a las posturas doctrinales analizadas en el apartado anterior, coexisten otras que configuran a la cooperación no como un sistema de organización económica apto para provocar una radical transformación en la ordenación de las relaciones económicas, sino como un sistema económico que opera solo en un sector o sectores económicos concretos, alejándose así de ese ideal rochdaliano de conquista de la sociedad.

Esta corriente doctrinal, tanteada ya por los primeros teorizantes de la cooperación alemana (59), es hoy seguida por gran parte de la doctri

(58) "Le mouvement coopératif en Russie" (cit. por GUELFAT, op. cit. pag. 67).

(59) Vid: SCHULTE-DELITSOH, H. "Verschuss und Creditvereine als Volks-

na italiana (60). Son, no obstante, los economistas Walras y Fauquet los que han dado mayor profundidad a la elaboración de esta doctrina.

León WALRAS, cuya aportación a la teoría económica ha sido unánimemente reconocida (61), viene calificado como de "cooperativista militante", a pesar de que en toda su obra apenas si se encuentran referencias a la Cooperación (62). Para este economista, el papel de la cooperación se realiza fundamentalmente por vía de las cooperativas de crédito y de producción, las cuales permiten así el acceso de un gran número de trabajadores a la propiedad del capital y a la gestión de la empresa (63).

banken", 5ª edic. Leipzig 1876; RAIFFEISEN, F.W. "Die Darlehnskassenvereine", Neuwied 1966, Sobre el pensamiento cooperativo de estos autores, MLADENATZ, op. cit. pags. 84 y ss y 103 y ss.

- (60) Vid. para la una exposición sistematizada, RUINI, op. cit. pagas. 56 y ss. y 80 y ss y DAL PANE, l. "La coopération de la Science economique en Italie", en *Annales de l'Economie Collective*, 1967, nº 2, pagas. 167 y ss.
- (61) PIGOU, G. "Les théories de l'équilibre économique". L. Walras et V. Pareto", 2ª edic. Paris 1938, pagas. 33 y ss.
- (62) BOSON, M. "Leon Walras fondateur de la politique économique scientifique", Paris-Laussane 1951, pag. 29. Sobre el pensamiento cooperativo de Walras, vid. también GUELFAT, op. cit. pagas. 18 y ss. y LAMBERT, op. cit. pagas. 102 y ss.
- (63) La función asignada por Walras a las cooperativas - La de permitir el acceso de los trabajadores al capital, y con ello crear nuevos capitalistas - es criticada por LAMBERT, (op. cit. pag. 104), argumentando que la cooperativa pretende "étend la sphère d'utilisation collective du capital."

Por su parte, George FAUQUET ha sido el más ardiente defensor del cooperativismo como sector económico (64) construyendo su doctrina sobre unas bases profundamente empíricas.

En este sentido, comienza analizando la historia de los sistemas económicos; historia que se caracteriza por la naturaleza plural de las organizaciones económicas, ya que en una misma economía coexisten sectores de matiz vario, siendo cuatro los actuales: el público, el capitalista, el privado y el cooperativo (65).

La funcionalidad del sector cooperativo se sitúa en las extremidades inicial y final del proceso productivo, - agricultura y consumo, - mientras el resto de la estructura económica viene dominada por los sectores capitalista y público (66).

(64) Sintomática de esta postura es el título que dió a su obra más importante: "El sector cooperativo".

(65) Cfr. "El Sector Cooperativo", Buenos Aires, 1962, págs. 20-21. Una manifestación concreta de esta multiplicidad de sectores económicos se puede encontrar en Chile, donde el gobierno de Salvador Allende ha clasificado con criterios sectoriales las actuaciones económicas; cfr. GUERRERO GARCIA, A. "Comunicación al IV Seminario Iberoamericano Cooperativo", Madrid 1971 (inédito).

(66) El sector privado tiene la misma funcionalidad que el cooperativo; la diferencia de Fauquet entre el sector privado y el capitalista es meramente cuantitativa, ya que aquél nace de unidades económicas de tipo doméstico o artesano, y este a partir de concentraciones previas de capital; cfr. FAUQUET, op. y la cit.

La expansión del sector cooperativo depende de las fuerzas económicas y políticas concurrente en la organización económica, así como de las cualidades de los propios cooperadores (67), que juegan un papel esencial en su desarrollo.

La postura doctrinal de Fauquet presenta, a pesar de las duras críticas que desde los sectores más ortodoxos de la cooperación ha recibido (68), un realismo que se conjuga más adecuadamente con las posibilidades funcionales y estructurales de las entidades cooperativas.

En este orden de cosas no deja de ser un hecho objetivamente cierto, por muy criticable que sea, el de que en el seno de un tipo de organización descentralizada (e incluso nos atrevemos a decir que centralizada) el proceso de transformación de materias primas o el de bienes de equipo exige unos presupuestos - económicos fundamentalmente - que escapan del ámbito del sector cooperativo, que opera, por el contrario, con

(67) GUELFAT señala, (op. cit. pag. 62), que si las cooperativas de consumo no han adquirido mayor importancia económica es debido a la falta de lealtad de las masas de asociados-cooperadores, impidiendo así que el cooperativismo de consumo tenga influencia sobre los mercados de la economía de un país.

(68) Por tede vid. LAMBERT, op. cit. pags. 106 y ss. La crítica de este economista está basada en que la reducción del cooperativismo a sector económico hecha por Fauquet olvida que el sector público es susceptible de cooperatización, y que en ningún modo este debe equipararse a sector privado con entidades voluntarias.

plena eficacia en las zonas inicial y última del proceso productivo.

Esta reducción funcional del cooperativismo sirve, por otra parte, para poner de relieve su ya mencionado (69) carácter instrumental, con el que pensamos adquiere sus justos términos (70).

3. La Cooperación como instituto económico: la empresa cooperativa

Analizada en el apartado anterior la configuración económica del cooperativismo, así como la distinta amplitud doctrinal al mismo concedido, ocurre preguntarse, y en su caso investigar, si la idea económica de la cooperación (71) hace referencia más que a un sistema a un instituto económico.

El objeto de nuestro análisis no se centra ya en la determinación cuantitativa de un tal sistema, calificado como integral por unos y sec

(69) Vid. pags. 96.

(70) En el consumo, el cooperativismo ha revalorizado el papel del consumidor; ha clarificado las condiciones del mercado, dando un paso adelante hacia la superación de la anarquía de la concurrencia; re creó la teoría del justo precio; por su poder de compra cuantitativo ha roto frentes monopolistas de precios; ha fomentado una mentalidad comunitaria, etc., demostrando con ello que es un instrumento económico al servicio de "una economía social de mercado" (Soziale Marktwirtschaft). Sobre este concepto, GUELFAT, *op. cit.* pags. 65 y ss; sobre la cooperación y sus realizaciones económicas-sociales, GONZALEZ PARAMO, J.M. "La empresa y la política social", t. I., Madrid 1966, pags. 168 y ss.

(71) El término cooperación es anfibológico, ya que en su sentido primario designa "cualquier concurso de fuerzas" (cfr. WOLLEMBORG, "La teoria della cooperazione", *cit.* pag. 129) "colaboración genérica en cualquier campo y actividad" (VERRUCOLI, P. "La società cooperativa", Milano 1958, pag. 48). En su sentido técnico, hace referen-

torial por otros, sino en la propia configuración de la cooperación como sistema económico. O dicho en otros términos: ¿la cooperación en sentido económico es una idea-fuerza que encarna sus presupuestos en un sistema económico propio, o por el contrario se materializa en un instituto económico, que opera en una pluralidad de sistemas, a cuyas funciones económicas se somete en el ejercicio de su actividad?

Creemos que sin necesidad de hacer mayores esfuerzos recordatorios, a lo largo de la exposición del anterior apartado hemos ido dejando traslucir nuestra posición sobre el tema, de forma que nuestra postura es la de considerar a la cooperación no como un sistema económico, sino como un instituto económico.

No es en sí misma un sistema económico - o cuante menos la ciencia económica no ha demostrado con suficiente base científica que lo sea - sino que forma parte de un sistema económico, o utilizando la terminología de Eucken de un tipo de organización económica.

Esta tesis, ampliamente acogida por la doctrina (72), palantea sin embargo un problema de delimitación funcional, cual es el de fijar en que tipo de organización económica actúa la cooperativa.

cig bien al sistema económico que origina, bien a la asociación en que se instrumenta. En general, sobre el significado etimológico del término, vid. GASCON Y MIRAMON, A. "Estudios de iniciación. La cooperación y las cooperativas", edic. 1960 con notas de Gascón Hernández, pag. 4, nota 3.

(72) VALENTI, "L'associazione cooperativa...", cit. pag. 252; VERCELLONE, voz "Cooperazione e Imprese Coomperative", en Nov. Dig. Ital., t.

Para algunos autores, (73) el ~~institute~~ económico de la cooperación - es decir la organización o empresa cooperativa - solamente puede actuar en una organización de economía libre.

En todas estas posturas se nota fuerte influencia de los factores históricos, políticos y socialógicos que rodearon el nacimiento de la asociación cooperativa; y así se señala que si la empresa cooperativa nace como contrapeso o freno a los abusos de la empresa especulativa, ha de ser en el seno de ese sistema en el que la cooperativa encuentra su plena operatividad, actuando como corrector de sus principios.

Igualmente se argumenta, escudándose en el dogma de la propiedad privada, que al ser principio básico de las organizaciones cooperativas el reconocimiento de que dichas entidades se encuentran integradas en la esfera de la libre disposición de los asociados, por lo que al no venir reconocida esta en el sistema de economía dirigida, la organización cooperativa no puede actuar en el.

Independientemente de que estos y parecidos argumentos tengan en común el defecto de obtener conclusiones económicas de la institucionalización "de iure" de las organizaciones cooperativas (74) de forma que el entorno jurídico opera como factor limitativo de su funcionalidad,

IV, pag. 823; VERRUCOLI, op. cit. pag. 48; BARRE, op. cit. pag. 316; VELARDE, op. cit. pag. 197

(73) VALENTI, op. y loc. cit. que señala que "il sistema a cui appartiene (la cooperativa) è esclusivamente quello della libera concorrenza"

(74) Esta influencia normativa en la configuración económica de la coope

el argumento más poderoso en contra de la reducción de la cooperativa a instituto económico del sistema capitalista es el que emerge de la comprobación empírica, que nos demuestra que las cooperativas actúan en sistemas económicos colectivistas (75).

Por tanto pensamos, desde la perspectiva económica en la que nos movemos, que no es lícito reducir el ámbito de la cooperación a un tipo de organización descentralizada.

Si se acepta como concepto básico de la idea de la cooperación económica el de ser esta asociación de economías individuales para la satisfacción de necesidades económicas (76), despojando este concepto tanto de influencias histórico-sociales como de dogmas político-jurídico, la materialización e instrumentación de esta idea actúa - y objetivamente es un hecho que lo hace - en cualquiera de los dos tipos de organización que la moderna ciencia económica considera vigentes.

De este planteamiento de considerar a la cooperación ligada no a la idea de un sistema económico, sino a la de instituto económico suscep

ración la pone de relieve GUELFAT, op. cit. pag. 133. Por su parte, GRECO, P. ("La società", Torino 1959, pag. 48) pone de relieve la influencia que en la configuración jurídica de las cooperativas tuvo el concepto histórico de las mismas.

- (75) La doctrina marxista no niega el valor de la cooperación, simplemente la realiza a través de sus presupuestos teóricos básicos.

Sobre la realidad cooperativa en la Unión Soviética, vid: WRONSKI, H - CHAMBRE, R.P y LASSERRE, G. "Les cooperatives de consommation en URSS", Paris 1969. Con referencias generales a diversos países de economías dirigidas, vid: OIT, "Evolución y tendencias del movimiento cooperativo mundial", Ginebra 1962 passim.

- (76) Satisfacción de necesidades que pueden realizarse bien a través de

tible de realizarse en cualquiera de los sistemas dominantes en un ámbito geográfico determinado, se puede obtener una conclusión que por obvia nos parece innecesario señalar; cual es la de que ese instrumento de la cooperación queda sometido en su funcionamiento a las decisiones generales básicas, operativas en cada sistema. O lo que es lo mismo, que el método cooperativo no es uno en su materialización, ya que al actuar sobre entornos económico-sociales distintos, diversos ha de ser su acomodamiento.

En definitiva, pues, podemos afirmar que la idea de cooperación - en abstracto - es única; pero como las organizaciones económicas son plurales, el método cooperativo - en concreto - ha de ser igualmente plural.

Dicho esto, y toda vez que el tipo de organización económica en la que nos movemos es el calificado como de economía libre e descentralizada, nos interesa limitar la investigación de la cooperativa en este tipo concreto de organización.

En esta orden de cosas, digamos antes de nada que la cooperativa viene calificada como empresa económica; o como insuperablemente señaló PANTALEONI (77) hace ya tiempo, "Las cooperativas tienden a conseguir fines económicos de forma económica".

un proceso productivo, bien mediante el cambio de bienes y servicios; cfr. WOLLEMBORG, op. cit. pag. 132, VERRUCOLI, op. cit. pag. 48.

(77) Op. cit. pag. 205, en donde escribe: Intanto, conviene intendere

No son por tanto las cooperativas instituciones de beneficencia ni de caridad, sino organizaciones económicas tendentes a producir bienes o a prestar servicios con un coste menor del que por otros medios se podría obtener, y ello en beneficio de los sujetos que asocian sus economías (78).

De esta afirmación, son dos las conclusiones a obtener:

a) La organización cooperativa tiende a realizar una actividad económica, entendida tanto en el sentido de actividad productiva, como de cualquier otra actividad distributiva o consuntiva de bienes o servicios o aquellas otras en las que la actividad esté dirigida a administrar y conservar los bienes o a procurar y facilitar su goce directo sin emplearlos directamente como instrumentos de producción (79).

b) En los sistemas de economía descentralizada la actividad económica se realiza a través de unidades de producción calificadas como empresas; las cuales son parte del proceso y del sistema económico, sujetos activos y pasivos de esa actividad regida por tanto por los principios básicos de la economía y condicionada por la escasez de medios (80).

chiaramente codesto: che le imprese cooperative, siano quelle di consumo, o siano quelle di produzione, sono imprese economiche, ..., e tendono a conseguire fini prettamente economici in modo economico" (subrayado del autor).

(78) PANTALEONI, op. y loc. cit: también SIMONETTO, E. "Società e mutualità", Riv. dir. civ. 1964, pag. 395, al decir "La gratuità esula dall'animo del socio... e di conseguenza, l'organismo economico della cooperativa ha, ..., il fine di lucrare in operazioni economiche".

(79) Cfr. GRECO, op. cit. pag. 9

(80) Cfr. GONZALEZ PARAMO, op. cit. pag. 60.

De ahí, que la cooperativa, como una unidad más de producción de nuestro sistema económico, goce plenamente de los atributos y de la calificación de empresa (81); combinando los diversos factores de la producción, actuando de cara a un mercado (82) y asumiendo el riesgo inherente al ejercicio de la actividad elegida (83).

En definitiva, pues, en un tipo de organización de economía libre la idea de cooperación se instrumenta y realiza a través de una empresa

- (81) Algunos autores dudan de esta elemental calificación de la cooperativa como empresa, sin duda alguna por un defecto de visión de la funcionalidad de la misma. En este sentido LIEFMANN ("Die Unternehmungsformen", 4ª edic. Stuttgart 1928, cit. por VERRUCOLI, op. cit. pag. 46) califica a la cooperativa como órgano común de economías individuales e independientes; contra este criterio VERRUCOLI (Op. y los cit) señala que en esta teoría se confunde el resultado final de la actuación del instrumento económico originado por la integración y satisfacción de las economías individuales, con el de la estructura del propio instrumento. Salvo estas escasas discrepancias (también FERROUX, F. "Le capitalisme", Paris 1962, pag. 14), la doctrina económica es pacífica en la calificación de empresa a la cooperativa; por todos, BARRE, op. cit. pags. 301 y ss y BOTENI, T. "Economía Cooperativa", Roma 1963.
- (82) Sobre la necesidad que tiene la empresa de actuar de cara al mercado, vid: FERNANDEZ PIRLA, J. "La empresa desde el punto de vista económico", en la empresa, Madrid 1962, pags. 57 y ss.
- (83) Sobre la asunción del riesgo en la empresa, FERNANDEZ PIRLA, op. cit. pag. 47, si bien personalizándolo en la figura del empresario; desde la perspectiva de la cooperativa, VERRUCOLI, op. cit. pag. 47 y SCORDINO, F. "La società cooperativa", Napoli 1970, pgs. 6 y ss.

económica la cual comparte todas y cada una de las características comunes predicables a estas unidades de producción (84).

4. La configuración económica de la empresa cooperativa de producción

En apartados anteriores (85) señalamos que en un tipo de organización económica descentralizada, la actividad económica viene ejercida por unidades de producción denominadas empresas; decíamos también que la cooperativa, como cualquier otra unidad de producción, debía recibir el calificativo de empresa.

Llegados a este punto en nuestra investigación, parece necesario afrontar el problema de la configuración como empresa de la cooperativa de producción, problema que en definitiva se reduce a determinar si, desde esta perspectiva, la cooperativa se diferencia de la noción común de empresa, como especie respecto al género.

En este orden de cosas, y hasta obvio resulta el señalarlo, las posturas doctrinales se encuentran polarizadas en torno a dos criterios básicos, por una parte las que niegan que la cooperativa sea un tipo autónomo de empresa, opuesto al resto de las empresas que actúan en el sistema económico capitalista (86); por otra los que afirman su auten-

(84) GONZALEZ PARAMO, (op. cit. pag. 60) señala que las características comunes de las diversas clases de empresa son: 1º.- El carácter humano y social (la empresa está constituida por hombres), 2º.- la índole económica (la empresa es parte del proceso y del sistema económico), 3º.- La contextura jerárquica (necesidad de una autoridad y de unos mandos), 4º.- La vinculación a órdenes distintos (la empresa como objeto de investigación multidisciplinaria). Sin necesidad de argumentos mayores, se puede comprobar que la empresa cooperativa goza de todas y cada una de estas características.

(85) Vid. infra. pags. 74.

(86) La contraposición se presenta en los términos empresa cooperativa-

mía, configurando sus notas y caracteres específicos.

Prescindiendo de realizar un examen pormenorizado de las diversas posturas doctrinales (87), veamos el contenido básico de estos dos criterios para presentar, en último lugar, nuestra tesis.

4.1 La empresa cooperativa de producción como supuesto indiferenciado de empresa.

Vuelve a ser de nuevo el economista italiano Maffeo Pantaleoni (88) el que de forma más brillante, y en términos estrictamente económicos, ha mantenido el criterio del carácter indiferenciado de la empresa cooperativa, negando que aquella ostente principios económicos propios en un sistema de libre competencia (89).

En el sentir de este autor, existe empresa cooperativa cuando un grupo de personas, poseedoras de diversos factores de producción, unen

empresa capitalista (o especulativa utilizando terminología cara a la doctrina italiana).

(87) En general para mayor detalle, vid RUINI, op. cit. pags. 7-72. Estas posturas doctrinales más que plantearse la dicotomía empresa cooperativa de producción-empresa capitalista; utilizan el binomio empresa cooperativa-empresa capitalista; las conclusiones son, en la mayoría de los supuestos, susceptibles de aplicación al término por nosotros cuestionado.

(88) Este artículo se puede leer igualmente en sus "Scritti varii di economia", Milano-Palermo-Napoli 1904, pags. 204 y ss y en "Erote-mi di economia", vol. II, Bari 1925, pags. 130 y ss. Todas las referencias están hechas al artículo publicado en Giornale degli economisti.

(89) Op. cit. pag. 216.

sus fuerzas con el fin de producir para los componentes del grupo un bien económico que de otra forma no obtendrían, u obtendrían a coste mayor (90).

La creación de la cooperativa es fruto, por tanto, de un cálculo económico (91), ya que los componentes del grupo cooperativo son conscientes (92) de que uniendo sus fuerzas a través de esta nueva combinación sustituyen el anterior coste de producción por otro nuevo, y en consecuencia su interés en mantener viva la cooperativa durará mientras ese nuevo coste sea inferior al obtenido con el sistema de la producción indirecta (93).

Desde una perspectiva estrictamente económica es difícil negar la exactitud de las conclusiones señaladas por PANTALEONI, conclusiones plenamente válidas en el ámbito de las cooperativas de producción.

(90) Op. cit. pag. 213. Ver también NAVARRINI, (op. cit. pag. 901) en donde escribe: "Lo scopo per cui i soci si uniscono è appunto quello di approfittarne essi stessi, in quanto applicano lavoro e capitale a produrre una ricchezza nuova per potere fruire dell'intero reddito che ne deriva".

(91) En expresión de VERRUCOLI, op. cit. pag. 51.

(92) Dice PANTALEONI, (op. cit. pag. 209) "è l'egoismo la forza che le crea (l'impresa cooperativa) e che in seguito la tiene in vita". En el mismo sentido BANDETTINI, op. cit. 286. En contra vid WOLLEMBORG, (op. cit. pag. 133) para el que "Il principio dell'egoismo particolare informa il sistema speculativo, quello dell'interesse solidale il sistema cooperativo"; en parecidos términos, también DALLA VOTTA, R. "Considerazioni sul fondamento ...", cit. pg. 530.

(93) Cfr. PANTALEONI, op. cit. pag. 213.

En este tipo de cooperativas, unen sus fuerzas bien los poseedores del factor de producción trabajo, bien los que disponen del factor producción capital (94). En el primer supuesto, los componentes del grupo cooperativo miran a sustituir el coste de producción provocado por la presencia del empresario intermediario que relaciona el mercado con los bienes obtenidos mediante la prestación de un trabajo remunerado.

Ahora bien, como la cooperativa no elimina al empresario, sino que meramente le sustituye, el interés de sus componentes por mantenerla viva perdurará hasta tanto en cuanto el coste de esta sustitución sea inferior al que ofrecería la prestación de trabajo por combinación distinta a la cooperativa (95).

Sin embargo, si estas conclusiones son correctas desde esta perspectiva económica, hay que reconocer que el economista italiano llevó su investigación a unos términos demasiados puros y abstractos, olvidando otros aspectos no estrictamente económicos, pero que planean con intensidad en la configuración económica de la cooperativa de producción.

(94) Económicamente hablando nada hay que impida la existencia de una cooperativa de producción - actividad económica creadora de bienes e servicios formada por poseedores del factor capital. Problema distinto es el de si esta cooperativa responde al tipo legal de cooperativa de producción, y que será analizado posteriormente.

(95) Respecto a la cooperativa de producción formada por tenedores del factor capital, las conclusiones serían idénticas; e incluso en este supuesto la indiferenciación sería total (Insistimos en constatar que estamos prescindiendo de valoraciones legales).

Con ello estamos adelantando conclusiones; hecho que se hace necesario ya que esos aspectos sirven para enturbiar solo en cierta medida la conclusión obtenida por Pantaleoni, válida en términos de Teoría Económica (96).

Es decir, la cooperativa consiente una diferenciación socio-económica respecto de la empresa capitalista, pero no una contraposición económica (97).

Y ello por cuanto como acertadamente sostiene VERRUCOLI (98) las netas y características apreciadas como determinantes de la configuración económica autónoma de la empresa cooperativa "se agotan en el interior de la organización cooperativa de empresa, sin reflejo externo en las relaciones con los terceros".

En una economía descentralizada, la empresa cooperativa de producción - aun considerada en su contextura más primaria, esto es la formada por trabajadores - actúa y se somete de lleno a las reglas y leyes económicas que rigen el sistema (99).

Cierto que la posición de los factores de producción - capital y trabajo -, y su correspondiente remuneración es distinta a la de la empresa capitalista; como distinta es igualmente la gestión (100). Pero todo

(96) De acuerdo RUINI, op. cit. pag. 59 y VERRUCOLI, op. cit. pag. 59.

(97) Perfectamente expresado por GASPERONI, N. "La trasformazione delle società", Milano 1952, pag. 133, al decir: "Il carattere cooperativistico consente una differenziazione, ma non una contrapposizione tra impresa speculativa e impresa cooperativa".

(98) Op. y loc. ult. cit.

(99) Vid, pag. 97.

(100) Vid. Cap. III.

ello se agota en el marco del grupo componente de la empresa, sin que por ello se cuestione o modifique el concepto unitario y básico de la empresa económica, unidad de producción del sistema de economía libre.

4.2 La empresa cooperativa de producción como supuesto diferenciado de empresa.

Si el análisis de la configuración económica de la empresa cooperativa como supuesto indiferenciado de empresa presenta, desde una perspectiva doctrinal, caracteres homogéneos, y en consecuencia su sistematización no ofrece problemas previos de integración, el análisis de la configuración económica de la empresa cooperativa como supuesto diferenciado de empresa presenta, desde esa misma vertiente, no pocos problemas dada la variedad de los criterios utilizados para su elaboración.

En cierta medida no creemos exagerado el afirmar que la mayoría de los economistas que se han acercado al estudio de la empresa cooperativa, y más concretamente a la de producción, han sentido la necesidad de construir un concepto propio de empresa cooperativa, enturbiando, dada la construcción más empírica que científica, una elaboración doctrinal unitaria.

Aun reconociendo la falta de sistematización en las posturas doctrinales que van a analizarse, se podrían encuadrar todas ellas en dos grandes grupos: por una parte las de aquellos autores que más que ensayar un concepto positivo de empresa cooperativa, se limitan a afirmar que esta no se reduce a la noción común de empresa típica del sistema capitalis-

ta; son estas las ya citadas posturas "anticapitalistas" o "antiespeculativas", fundadas más en la apariencia externa del instituto económico cuestionado y en el fin por él perseguido, que en un estudio detenido de sus características económicas generales.

Por otra encontramos aquellas configuraciones doctrinales de tipo positivo, en las que, prescindiéndose de posturas apriorísticas, se elabora la teoría de la empresa cooperativa a partir de una tipificación previa de las categorías de empresa.

Las configuraciones del primer grupo apenas si merecen mayor detalle y ello no solamente por cuanto no aportan elementos para la delimitación positiva del instituto, sino por cuanto que si le hacen, los condicionamientos de naturaleza social adquieren tal relevancia que con ellos se reduce la empresa cooperativa a mera asociación de economías débiles fundada en principios de solidaridad humana (101).

Más importancia adquieren las configuraciones denominadas positivas pero cuya variedad impide un análisis exhaustivo de todas y cada una de ellas. De ahí que vayamos a limitar la investigación al estudio de dos de ellas, a las que consideramos como más representativas, tanto por la influencia que han tenido, como por el interés intrínseco que da su con-

(101) En este sentido, COSSA, L. "Economía Sociale", 9ª edic. Milano 1891, pag. 145; BOLAFFIO, L. "La cooperazione a preposito di un recente progetto di legge", Riv. Dir. Comm. 1921, I, pag. 591 que señala como características de la cooperativa el ser "antiespeculativa", y el estar fundada "sul vincolo economico della umana solidarieta"; sobre la introducción de elementos de matiz social en la configuración económica de la cooperativa, VERRUCOLI, op. cit. pag. 53.

tenido se desprende (102).

Antes de entrar en el estudio concreto de estas teorías es necesario señalar que en su elaboración se entremezclan elementos de estricta naturaleza económica, con otros de carácter extraeconómico, con lo que, y si ciertamente han provocado una aprehensión íntegra del fenómeno que nos ocupa, no han servido, desde la perspectiva de la economía pura, para desvirtuar la conclusión de Pantaleoni, plenamente aceptada por nosotros, de que la empresa cooperativa en general, y de producción en particular, no presenta rasgos funcionales que permitan afirmar su autonomía económica.

4.2.1 La teoría de la mutualidad

La teoría de la mutualidad aplicada a la empresa cooperativa encuentra su origen en las razones históricas, económicas y sociales que acompañan su nacimiento (103); la empresa cooperativa aparece para combatir la usura comercial - cooperativa de crédito -, para frenar los abusos de los comerciantes intermediarios - cooperativas de consumo -, para ofrecer mejores condiciones de trabajo - cooperativas de producción -, con lo que se piensa que su finalidad es la de ayudar recíprocamente a los componentes del grupo que, sintiendo la misma necesidad, la satisfacen a través de la creación de un tipo concreto de organización económica.

Etimológicamente el término mutualidad deriva de "mutuum", y signi

(102) Para mayor detalle remitimos a las obras citadas de RUINI y de LAMBERT.

(103) Vid. Cap. I de la tesis.

fica un sentimiento de prestación, de ayuda, excitado por el ejercicio de la solidaridad humana (104).

En términos económicos, la mutualidad vendría a significar un modo especial de organizar la actividad económica, una forma particular en el ejercicio de dicha actividad, que materializaría, por tanto, un tipo concreto de empresa; la mutualista, de la que la cooperativa sería una especie, contrapuesta a la especulativa o capitalista, segunda forma de organizar la actividad económica.

El planteamiento económico de la teoría de la mutualidad (105) en

-
- (104) Cfr. RODINO, L. "Il carattere giuridico ed economico della mutualità nelle società cooperative", en *Fore Italiano* 1896, col. 824.
- (105) La teoría de la mutualidad ha recibido el tratamiento más elaborado en la doctrina italiana, debido fundamentalmente a que el ordenamiento jurídico ha acogido el término mutualista para calificar a la cooperativa. En este sentido ya el proyecto del Código de Comercio de 1925 (el proyecto D'Amelio) indicaba que los elementos de la sociedad cooperativa eran dos: el sustancial del "scopo di mutualità" y el formal de la variabilidad de capital (cfr. "Progetto di codice di commercio", Roma 1925, págs. 114 y ss.); este proyecto significaba un cambio respecto del anterior de 1922 (proyecto Vivante) que acogía solo el elemento formal (cfr. "Progetto preliminare" Milano 1922, esp. págs. 328 y ss). El código civil de 1942 en su art. 2511 señala que "Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative...".

En general sobre el tema de la mutualidad en las empresas cooperativas vid: GOBBI, U. "Il requisito della mutualità nelle imprese cooperative", en "La cooperazione: dall'economia capitalista all'economia corporativa", Milano 1932, págs. 143 y ss; AGRO, G. "Sul concetto di mutualità nella cooperazione", en *Riv. Coop.* 1950, págs. 407 y ss; PAROLI, A. "Ancora sullo scopo mutualistico degli enti cooperativi", ibidem, págs. 420 y ss; FERRA, G. "Principi costituzionali in materia di cooperazione a carattere di mutualità". *Riv. derle sec.* 1964, págs. 771 y ss.

términos cooperativos, es el siguiente: en la empresa cooperativa se agrupan aquellos sujetos económicos que, portadores de una misma necesidad, pretenden su satisfacción a través de la creación y funcionamiento de la organización cooperativa.

Supuesto que esto sea así, la conclusión que se obtiene es la de que la esencia económica de la cooperativa reside en el hecho mutualista; es decir en el hecho de que quienes ejercitan cooperativamente una empresa lo hacen en su particular beneficio; o dicho en otros términos, en el hecho de que las operaciones en que se materializa la actividad económica elegida por la cooperativa se agota entre los propios componentes del grupo, cada uno de los cuales prescinde de obtener un lucro al relacionarse con el resto de los componentes del grupo (106).

Planteada así esta teoría, que históricamente conecta desde una perspectiva económica con la empresa doméstica (107) y desde una perspectiva social con las mutuas de previsión o entidades de socorro mutuo (108), vemos que en ella se conjugan dos factores, el primero de los

(106) Así RABENO, U. "Le società cooperative di produzione, Contributo allo studio della questione operaia", Milano 1889, pag. 438, RODINO, op. cit. col. 825.

(107) Esta conexión entre empresa cooperativa y empresa doméstica la resalta RABENO, op. cit. pag. 434, para el que las diferencias entre ambas instituciones son más de tipo histórico que esenciales: vid. también PAVONI, G. "Sulla teoria generale delle società cooperative", Catania 1919, pag. 29, LABADESSA, R. "Regimen giuridico della cooperativa" Roma S/f pag. 7 y SERRANO CARRAJAL, J. "Concepto y naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas", RPS nº 62, 1964, pag. 39. En contra de esta asimilación, por todos, RUINI, op. cit. pag. 78

(108) Esta relación la reconoció nuestro legislador en la ley de 1887,

cuales actua como causa.

Por una parte, se aprecia una especial relación entre la actividad de la empresa cooperativa - actividad económica - y la participación de los componentes en esa actividad; de forma que la cualidad de miembro es inherente a la de usuario del servicio prestado por la cooperativa, al mismo tiempo que solo puede beneficiarse del servicio de la empresa cooperativa quien ostenta la condición de miembro, cualidad que deviene, en definitiva, elemento exclusivo y excluyente para el ejercicio de la empresa cooperativa (109).

erreneamente como vimos (cfr. cap. I, pags. 47 ss de esta tesis). En este sentido no han sido pocos los autores españoles que al tratar el tema de la empresa cooperativa - o de la sociedad cooperativa - le hacen conjuntamente con el tema de las mutualidades laborales, por entender que ambas instituciones gozaban del principio común de la mutualidad (en abstracto). Así PEREZ BOTIJA, E. "Curso de Derecho del Trabajo", 2ª edic., Madrid 1952, pags. 420 y ss, que estudia las cooperativas en el capítulo dedicado a Cooperativas y Mutualidades; MENENDEZ PIDAL, J. "Derecho Social Español", vol. II, Madrid 1952, que las encuadra didácticamente en el capítulo dedicado a otras formas de seguridad y Previsión; GARCIA OVIEDO, C. "Tratado Elemental de Derecho Social", 6ª edic. Madrid 1954, que estudia las sociedades cooperativas en el Capítulo dedicado a Cooperación (t. II) junto a las mutualidades. Esta postura no la compartimos, puesto que aun reconociendo el nexo en común que puede existir entre estas instituciones a través de la mutualidad, son tan grandes y radicales las diferencias que separan a unas y otras que su tratamiento científico ha de ser distinto.

- (109) Aceptan este significado de mutualidad: FERRI, "Trasformabilità delle società cooperative", Riv. dir. comm. 1951, pag. 102, VERRUCOLI, op. cit. pag. 102, FERRA, op. cit. pag. 779 en contra BIGIAMI, W. "La professionalità dell'imprenditore", Padova 1948, pag. 64. Por su parte GOBBI, U. ("Società di mutuo socorro", Milano 1909, pags. 8 y ss) concede tal relevancia a este aspecto de la mutualidad en la cooperativa que según él y desde una perspectiva jurídica la condición de miembro se adquiere no con la propiedad del capital social, "ma a un rapporto d'altro genere con la società stessa". En parecidos términos se expresaba BOLAFFIO, L. ("II concetto legislativo della cooperazione", en Temi Veneta 1900, nº 1, pags. 1 y ss), al

Por otra, y si la mutualidad no significa más que el ejercicio de la actividad económica se destine y limite al círculo de los componentes de la empresa cooperativa (110), los beneficios económicos de él obtenidos, por una parte se reducen en la medida en que los propios componentes del grupo cooperativo prescinden "apriori" de la búsqueda de la ganancia limitada, una vez conseguida mutualísticamente la satisfacción de su necesidad (111), y por otra han de repartirse en función de la colaboración de cada asociado a la consecución del fin mutualista (112).

Construída así la teoría de la mutualidad, los sostenedores de la misma deducen los rasgos delimitadores de la empresa cooperativa; rasgos que por otra parte sirven para contraponerla a la empresa capitalista.

decir que la condición de cooperador se adquiere no con la de socio, sino con la concurrencia al intento cooperativo, se sea o no se sea socio.

- (110) Así SIMONETTO, "Società e mutualità", Riv. dir. civ. 1964, pag. 412 para el que "la mutualità altro non è che produzione di beni o servizi per i soci".
- (111) Esta limitación en la búsqueda de beneficio en la cooperativa, en MESSINEO, F. "Società cooperativa e sua trasformabilità", en Foro Italiano 1949, I, col. 71 y FERRI, op. cit. pag. 100. En sentido contrario OPPO, G. "L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti", Riv. dir. civ. 1959, pag. 384-385 en donde señala que "fondare lo scopo mutualistico su fatto di limitata ricerca di utili significa cadere in una svista psicologica", en sentido contrario también, aunque desde otra perspectiva, VERRUCOLI, op. cit. pag. 106.
- (112) Así PADOA, G. "Alla ricerca della mutualità nella cooperazione" Riv. Coop. 1952, pag. 590; en parecidos términos vid. también GALLONI, G. "Sulla natura giuridica delle cooperative fra assegnatari in zona di riforma", en Giustizia civile 1954, IV, pag. 2779.

Delimitada la teoría de la mutualidad, es necesario investigar si con ella se alteran los términos de nuestra conclusión; lo que en definitiva equivale a analizar su relevancia en la configuración indiferenciada de la empresa cooperativa de producción.

En este orden de cosas, la primera cuestión a dilucidar es si la mutualidad es presupuesto económico de la empresa cooperativa, o su acción se limita a la de mero atributo jurídico.

En este sentido digamos que la doctrina no mantiene una postura pacífica, encontrándose las opiniones polarizadas en torno a quienes sostienen el carácter ya económico (113) ya jurídico de la mutualidad (114), y los que defienden su naturaleza dual (115).

En realidad pensamos que la mutualidad, además de presupuesto económico de la organización cooperativa, puede ser atributo jurídico de ella (116), sin que esto suponga identificar conceptualmente cooperación y mu

(113) Así entre otros, PADOA, op. y loc. cit; FERRA, op. y loc. cit.

(114) SCORDINO, F. ("La società cooperativa", Napoli 1970, pgs. 75-76) al decir: "La mutualità è l'aspetto, per così dire, statico dell'istituto, in quanto considera la sfera giuridica attuale della società cooperativa..."

(115) Por todos OPFO, op. cit. pags. 386 en donde dice: "l'impresa è mutualistica in quanto è mutualistica la società"; con reservas, vid. GHIDINI, M. "Cooperativa e società" en Temi 1952, pag. 185. Vid también LEO, E.M. "La legge sulle casse rurali e artigiane e l'essenza della cooperativa" Riv. delle soc. 1966, pags. 552 y ss.

(116) Sobre el alcance de la mutualidad en nuestro ordenamiento positivo vid. pags. 45 y ss.

tualidad ni negar la existencia de empresas mutualistas no cooperativas (117).

En definitiva la mutualidad se presenta en el ámbito de las empresas cooperativas de producción con un doble alcance: uno de contenido económico y otro de contenido jurídico.

Económicamente, que es la perspectiva que en estos momentos interesa contemplar, la mutualidad se incardina en este tipo de empresas en el momento de su génesis, conformando internamente su estructura; conclusión esta que se refrenda al analizar el juego de los dos factores que intervienen en la estructura de la mutualidad.

Por lo que se refiere al primero de ellos, cierto es que las cooperativas de producción cumplen un fin mutualista, ya que en ellas unos sujetos económicos, portadores de una necesidad económica se asocian con el fin de satisfacer mutuamente-participando en la actividad económica de la empresa mediante la prestación de su trabajo - una necesidad sentida subjetiva y objetivamente.

Ahora bien, esta relación entre actividad económica de la cooperativa y prestación de trabajo tiene una mera proyección interna, agotándose en la conformación interior del instituto económico; en su esfera externa, la empresa cooperativa ha de relacionarse con terceros, ha de

(117) Vid. diferencias entre cooperación y mutualidad en NAST, A. "Le regime juridique des cooperatives", Paris 1919, pages 95 y ss (fija las diferencias en razón del objeto y en razón de las operaciones) y GOBBI, U. "Manuale di economia" Milano 1924, vol. II, nº 6275 (cit. por GRAZIANI, A. "Società cooperativa e scopo mutualistico" Riv. dir. comm. 1950, pag. 282). Un interesante planteamiento de esta conclusión en VERRUCOLI (op. cit. pages. 95 y ss) que delimi-

ofrecer sus productos a un mercado, - en el que quedan indiferenciados con respecto al resto de los productos de las restantes empresas económicas, - y ha de someterse a las leyes generales de la oferta y de la demanda.

Si desde este primer aspecto de la mutualidad nos trasladamos al segundo, la conclusión a obtener no es diferente. En primer término, por cuanto la afirmación de que la empresa cooperativa de producción se autolimita en la búsqueda de sus ganancias es una conclusión que oculta la realidad del funcionamiento económico de la empresa; sostener que la empresa cooperativa no busca la ganancia ilimitada y a renglón seguido mantener que la empresa cooperativa de producción pretende ofrecer condiciones de trabajo más ventajosas que las del mercado, es claramente contradictorio.

Las cooperativas de producción deben tender a la consecución de ganancia, lo que ocurre es que esos beneficios se limitan subjetivamente en un doble sentido: por una parte, y supuesto que en ella se asocien sujetos portadores del factor trabajo (118), a ellos se destinan esos bene

ta, perfectamente a nuestro juicio, los supuestos de entes mutualistas, cooperativos o no; también SCORDINO (op. cit. pag. 74) si bien no compartamos su calificación de la mutualidad.

(118) Económicamente, ya dijimos que tan cooperativa de producción era la constituida por aportadores de factor capital, como de factor trabajo; sin embargo prescindimos ya de la primera, no solamente por cuanto está fuera de los presupuestos históricos de la cooperativa, sino por cuanto nuestro ordenamiento jurídico recenduce el tipo legal al segundo de los supuestos (cfr. pags. 198.

ficios; por otra, y debido a la relación anteriormente citada, esos beneficios se reparten graduando la colaboración prestada (119).

En definitiva, la empresa cooperativa de producción es una empresa mutualista; pero esta calificación no sirve para fundamentar su autonomía económica, y sobre ella montar un supuesto tipo diferenciado de empresa.

El elemento mutualidad es presupuesto económico de la cooperativa; pero presupuesto de naturaleza estructural, que se agota internamente y que carece de fuerza para elevar a criterio delimitador la actuación económica de la cooperativa.

4.2.2 La teoría de la gestión de servicios.

El fundamento económico de la teoría de la gestión de servicios aplicada al ámbito de la cooperativa, encuentra un acusado paralelismo con la anterior teoría de la mutualidad, hasta tal punto que bien podría considerarse como una variación sobre el tema de la relación que se instaura entre la empresa cooperativa y los asociados en ella.

Ha sido Georges Fauquet el máximo representante y defensor de la teoría de la empresa cooperativa como empresa de servicios (120), la cual en su formulación más sencilla no viene a coincidir sino con la doctrina, sustentada ya hace muchos años por el italiano RABBENO (121), de que la

(119) Vid. pags. 252 y ss.

(120) Muy acogida en los sectores doctrinales cooperativos franceses y españoles. Para mayor detalle, vid. CIURANA FERNANDEZ, J.M. "Curso de Cooperación," Barcelona 1968, pags. 163 y ss. En España el más ardiente defensor de la teoría fue GASCON HERNANDEZ, J. "La cooperación - dice este autor en "Que es Cooperación?", en "Cooperación y cooperativas", Madrid 1960, pag. 193 - consiste en ser una empresa de servicio, y no de lucro".

(121) Op. y los cit.

esencia de la cooperativa radica en que las actividades de esta están destinadas al exclusivo beneficio de quienes utilizan el servicio por aquella ofrecido.

Dice FAUQUET que existen dos tipos de empresas: las empresas de "beneficio" y las empresas de "servicio", radicando la distinción entre estas en el hecho de que mientras en las primeras el fin no es satisfacer las necesidades de los usuarios (122), en las segundas "el fin directo que se trata de alcanzar es precisamente el servicio que esperan de ella aquellos usuarios que, habiéndola creado con su esfuerzo y a su propio riesgo, le han asignado el objeto particular que corresponde a sus necesidades" (123).

De esta distinción (124), derivan dos tipos diversos de gestión

- (122) "El sector cooperativo", cit. pg. 70. Para Fauquet el servicio a los usuarios en este tipo de empresas tiene un carácter instrumental, en la medida que es condición para su funcionamiento.
- (123) Op. cit. pag. 71. Estos usuarios pertenecen, según la naturaleza de las operaciones cooperativas, a una de estas tres categorías: usuarios-vendedores; usuarios-trabajadores y usuarios compradores.
- (124) Están dentro del tipo empresas de beneficio las empresas capitalistas, y en general todas aquellas otras fundadas y dirigidas con el fin primordial de sumar mayor ganancia, como las industriales o comerciales del Estado y de los Municipios y otras de carácter público, cuando tienen un fin fiscal (cfr. FAUQUET, op. cit. pag. 72).

Dentro de las empresas de servicio se integran, además de las cooperativas, las creadas por el Estado, Municipios u otras entidades para asegurar servicios de carácter general, tales como sociedades filántropas de viviendas económicas e igualmente ciertas empresas que toman a su cuidado, en interés de las pequeñas industrias rurales, la venta de sus productos las cuales aunque no estén controladas por los usuarios, funcionan en su interés directo, y su gestión es también de servicio (sic. op. loc. cit).

que se corresponden con cada una de las categorías antes citadas de em presa: gestión de beneficio y gestión de servicio (125).

Planteada así esta teoría, se pone de manifiesto las concomitancias exis tentes entre ella y la de la mutualidad, de forma que consideramos plenamente válidas y aplicables las observaciones anteriormente señaladas.

Es decir, en principio no negamos que la empresa cooperativa sea empresa de servicio; lo que si negamos es que la distinción tenga relevancia para convertirse en principio económico informador (126).

Como señala VERRUCOLI (127) la diferencia apreciada por FAUQUET se agota en el estrecho ámbito de una economía de empresa sin lograr ninguna proyección externa, y sobre todo sin dar origen al nacimiento de un

(125) Op. cit. pag. 73

(126) PANTALEONI, op. cit. pag. 215, criticando la teoría de Rabbeno (op y loc. cit.) señala como "ogni funzione economica si esercita da colui che la esercita, sempre per proprio conto esclusivamente. L'operario, che è salariato da un empresario, lavora per se e non già per l'impresario... Se l'operario scopre un metodo più efficace di produrre a se medesimo l'istesso quantitativo di beni economici che il salario dell'impresario li procura, egli abbandona l'empresario. Tra i metodi possibili havvi quello di formare, con altri operai, una cooperativa, cioè, una società in cui il lavoro è ora diretto o da lui medesimo, o da un suo compagno, o segue la falsa riga di metodi in uso presso altre aziende" (subrayado del autor). Esta con clusión de Pantaleoni nos parece plenamente feliz.

(127) Op.cit. pag. 58.

criterio distintivo propio (128).

5. La empresa cooperativa de producción: su esencia.

Vista la inoperancia de las anteriores teorías para (129) para fundamentar la esencia económica de la empresa cooperativa de producción, y en consecuencia sostener que esta actúa en el marco de una organización de economía descentralizada con arreglo a criterios y principios informadores propios, la conclusión a la que hay que llegar es a la inexistencia, desde el plano en el que nos estamos moviendo, de cualquier especialidad que intrínsecamente permita afirmar la autonomía económica de la cooperativa de producción

- (128) Vid. pags. 134 y ss. A la misma conclusión, aunque desde perspectivas distintas a las nuestras, llega LEO, (op. cit. pag. 563), en donde afirma que "la gestione di servizio - ... risulta di necessità estranea alla nozione di cooperativa"; este autor ha puesto de relieve la correlación entre las teorías de la mutualidad y la de gestión de servicios (crf. op. cit. pag. 567 y ss).

Por su parte, GARCIA PADRON, M^a (Las sociedades cooperativas en el derecho privado español: Introducción a su estudio", Santa Cruz de Tenerife 1972, pag. 31) reconoce que las cooperativas son una especie de empresas de servicio, aunque luego (pags. 32-33) no considere como una de las diferencias "tendenciales" de las mismas la gestión de servicios.

- (129) Además de las teorías citadas, debe mencionarse por su originalidad la del economista italiano VALENTI (L'associazione... cit) para el que la cooperativa es una empresa colectiva cuyo fin es restablecer el equilibrio distributivo (op. cit. pag. 237); para ello parte del modo general de distribución de la riqueza (pag. 9), señalando que esta se produce o bien relacionando el precio con el coste, o bien en función de la limitación que presentan algunos bienes o servicios. La distribución de la riqueza - sigue diciendo este autor, op. cit. pag. 13 - no se produce tras el hecho material de la producción, sino que viene determinada anticipadamente por el empresario ("agente economicamente responsabile della produzione") que retribuye anticipada e independientemente de la producción al resto de los coproductores ("Il salario... hanno questo carattere di remunerazione anticipada"). A este fenómeno

En definitiva, la empresa cooperativa de producción no presenta, desde una estricta perspectiva económica, rasgos ontológicos ni deontológicos (130) susceptibles de apreciar en ella un tipo distinto de empresa económica.

Sustentada esta afirmación, cabe preguntarse, a renglón seguido, si entonces la cooperativa de producción no ofrece matiz alguno especial que permita, no ya el contraponerla al resto de las unidades de producción, sino meramente diferenciarlas de estas; ya quede otra forma nuestra investigación carecería de contenido sustancial relevante, y presentaría unos contornos estrictamente negativos.

En consecuencia lo que se ha de investigar es si, no obstante no poseer la empresa cooperativa analizada unas reglas y principios económicos propios, es apreciable en ella algún rasgo, alguna tendencia, algún carácter que sirva para perfilar y delimitar su esencia.

En este orden de cosas, y entrando en tema, recordemos una vez más que en la formación de este instituto económico adquirió particular

de distribución se opone el de la redistribución (op. cit. pag. 14), en virtud del cual los que han sido perjudicados por aquella, encuentran el método para conseguir un cierto equilibrio. La cooperación - y la empresa cooperativa - se incardina en este supuesto de redistribución.

Esta teoría de VALENTI fue posteriormente seguida por LORENZONI, G "La cooperazione; chiarificazione di idee e tentativo di sistematizzazione", en "Studi in onore di Ricardo dalla Volta" Vo. I^a, cit pags. 467 y ss.

(130) En expresión de VERRUCOLI, op. cit. pag. 60.

relieve el grupo socio-económico que dió vida a las primeras cooperativas.

La importancia de este hecho trasciende el ámbito puramente histórico, para incardinarse en el económico, quedando configurada la empresa cooperativa de producción en función de la participación del trabajo (131); participación que por su importancia es preciso analizar.

Económicamente, ha quedado como conclusión firme que la cooperativa de producción es empresa indiferenciada, en la que se organizan, al objeto de producir bienes o prestar servicios, los factores que en la misma intervienen, y que esquemáticamente son trabajo y capital.

Cualquier tipo de empresa necesita de estos factores, los cuales pueden organizarse de forma varia.

Tradicionalmente, en el sistema de economía libre la organización se realiza de conformidad con el siguiente esquema: un empresario, portador de capital, entra en relación con el mercado de trabajo, integrando a los trabajadores en la empresa, reservando a la participación del capital los beneficios derivados de la explotación económica, y abonando al factor trabajo el precio o valor del trabajo mismo (132).

(131) Ya dijimos que económicamente es válida la configuración de una cooperativa de producción a base de participación del factor capital; lo que ocurre es que la influencia del origen de la cooperativa repugna a una tal configuración. In extenso, vid. pags. 6 y ss.

(132) Según la terminología marxista; cfr. MARX, C. "Salario, precio y ganancia", Madrid 1968, pag. 57.

Ciertamente que este esquema puede pecar de simplicidad, pero en sus líneas principales guarda virtualidad para su aplicación generalizada a todos los tipos de empresa que la doctrina económica ha venido a calificar como "capitalista".

De cualquier forma lo que interesa retener y dejar como idea clave en estos momentos es la de que en esta forma de organizar la empresa, el factor trabajo no tiene fuerza suficiente para participar directamente ni en la producción, ni en sus resultados, con lo que, y económicamente, queda relegado y marginado a simple instrumento del fin de la empresa, materializado en la figura del empresario aportador de capital (133).

¿Que ocurre en la empresa cooperativa de producción? En líneas generales, adelantemos que el proceso es exactamente idéntico que el reseñado para la anterior empresa, solo que radicalmente al revés.

En la empresa cooperativa de producción se asocian unos sujetos económicos, que en lugar de aportar capital, aportan originariamente trabajo.

Nos encontramos aquí con el primer indicio caracterizador de esta empresa, que consiste en que el factor desencadenante de la organización no es ya el capital, sino el trabajo, que genera precisamente la motivación de la asociación.

(133) Acertadamente dice FERNANDEZ PIRLA, "La empresa desde...", cit. pag. 51. que "la empresa queda subsumida bajo la figura del empresario, aportador del capital, cuya personalidad engloba a aquella".

Y notese que todavía nos encontramos en una fase de génesis, previa a la materialización de la empresa, por lo que también en la cooperativa de producción concurrirá el capital, a fin de que su adecuada combinación genera la producción. O dicho en otros términos, no puede buscarse especialidad alguna en la afirmación de que en este tipo de empresas no concurre el capital; estos factores se combinan en el seno de ambas empresas - de otra forma no podrían calificarse como tales -, pero en la cooperativa es el trabajo el que motiva la asociación.

Este hecho determina, a su vez, que la forma de distribuir los resultados obtenidos de la explotación económica se invierta: en lugar de atribuir al trabajo el precio valor del mismo, es el capital el que recibe ese precio valor, y en su consecuencia el trabajo recibe los beneficios contables de la actividad económica.

Sin embargo con ser esta diferencia importante, no la consideramos elemento básico de la diferenciación, ya que en línea de principio es lícito concebir una empresa capitalista en la que la distribución de los resultados se efectue de conformidad con este esquema.

¿En donde radica pues la especialidad de la empresa cooperativa de producción? Planteamos el tema en sentido contrario, es decir, en que radica la especialidad de la empresa capitalista? Si en ella se asocian capitales, que entran en contacto con trabajo, al que reducen a simple instrumento de la producción, supone reconocer que en la producción participa directamente solo el capital.

Mutatis mutandi, si en la empresa cooperativa de producción se asocia el trabajo, que entra en contacto con el capital al que reduce a simple

instrumento de la producción, se está señalando que en esta participa de una forma directa el trabajo.

He aquí la esencia de la empresa cooperativa; el hecho de ser vehículo de participación directa del factor trabajo en la producción de bienes y prestación de servicios.

Creemos que esta es la raíz, la esencia socio-económica de la empresa cooperativa de producción; el resto, o permitasenos la redundancia, lo demás es lo de menos; que la cooperativa de producción sustituya al empresario capitalista (134), no es más que un reflejo de la participación directa del factor trabajo en la producción; que la cooperativa revalorice el trabajo, y le atribuya el plus-valor del capital, es simple efecto de esa participación (135); que la cooperativa de producción sea instrumento de acceso del trabajador a la propiedad de los bienes de producción, no es más que correlato de esa actividad participativo (136); que la empresa cooperativa sea representación de empresa autogestionada por los trabajadores, no es sino consecuencia de su origi-

- (134) Ya dijimos (vid. nota 37) que la empresa cooperativa no elimina el empresario, simplemente lo sustituye; GARCIA PADRON, (op. cit. pag. 32), señala como una de las diferencias "tendenciales" de esta empresa la eliminación del intermediario especulador (criterio ya clásico en la doctrina, desde Gide a Verrucoli); sin embargo, este hecho pensamos que es consecuencia de esa participación; es decir, no criterio diferenciador, sino resultado de la diferenciación.
- (135) Este efecto, supondría la redistribución observada por VALENTI, (op. y loc. ult. cit.)
- (136) Este es el efecto observado por los primeros economistas que se acercaron al estudio de la empresa cooperativa. Vid. pags. 76 y ss.

naria participación en la producción, y por tanto ejercicio de una facultad previamente adquirida.

En definitiva, pues, podemos señalar a modo de conclusión lo siguiente: en un sistema de economía descentralizada, la actividad económica se instrumenta a través de unidades de producción; estas unidades de producción responden a una unidad de actuación, no siendo lícito afirmar una contraposición económica entre la empresa cooperativa y el resto de las empresas del sistema; las empresas económicas combinan en su seno los factores de producción: capital y trabajo; esta combinación origina dos tipos diversos de organización; la capitalista, por medio de la cual es el capital quien participa directamente en la producción, y la cooperativa, en la que es el trabajo el que participa directamente en esa producción.

Una vez enmarcada y delimitada la esencia de la empresa cooperativa de producción, desde la perspectiva económica, creemos llegado el momento de obtener, como conclusión final, un concepto que recoja y sintetice los rasgos hasta aquí señalados.

En este sentido, entendemos por empresa cooperativa de producción "aquella unidad de producción, en la que quedan asociados sujeto económicos portadores de factor trabajo, a fin de satisfacer sus necesidades económicas, mediante la creación de una organización que les permite par-

ticipar de forma directa, en un sistema de economía descentralizada, en la producción de bienes y prestación de servicios".

Con este concepto entendemos que quedan recogidas las notas comunes y específicas de la empresa cooperativa, que la perfilan e incardinan como un tipo especial de organización de factores de producción.

CAPITULO III

LA ESTRUCTURA JURIDICA DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE PRODUCCION

1. La empresa cooperativa de producción como realidad jurídica.

Acabamos de señalar en el capítulo anterior que la empresa cooperativa de producción es empresa en su más exacto significado económico; es decir, la cooperativa es unidad de producción de la que brota parte de la corriente de bienes y servicios que constituye el producto nacional (1).

Igualmente vimos que este tipo de empresa no admite, desde el punto de vista de la economía pura, una radical contraposición respecto del resto de las unidades de producción que operan en un sistema de economía libre, y muy especialmente respecto de la denominada empresa capitalista.

No obstante esta imposibilidad de configurar a la empresa cooperativa como una unidad de producción sujeta a leyes y principios económicos propios, observamos que la misma presentaba una cierta especialidad; que residía por una parte en la forma en que quedaban organizados los facto-

(1) Cfr. FERNANDEZ PIRLA, J.M. "La empresa desde el punto de vista económico", en "La empresa", Madrid 1962, pag. 46; también BROSETA PONT, M. "La empresa como objeto del tráfico jurídico", Valencia 1965, pag. 19 MARC, J.E. "La reforma de la empresa, aspectos jurídicos, sociales y económicos", en "3º Congreso Iberoamericano de Derecho de Trabajo", Madrid 1971, pag. 223. Por su parte, MONTOYA MELGAR, A. "La empresa y el Derecho del Trabajo", en "3º Congreso...", cit. pag. 392 dice que "en este concepto se encuentra, con toda seguridad, el carácter esencial de la empresa; su fundamento y razón de ser".

res de producción, y por otra en la repercusión de esta organización en la participación de esos factores; de suerte que y, mientras en la empresa capitalista el factor trabajo queda relegado a simple instrumento de la organización y por tanto de la producción, en la empresa cooperativa, dado que la motivación originaria es asociar trabajo, se habilita a través de ella un instrumento apto para la participación directa de este factor (2) en el proceso de producción de bienes y servicios.

Esta conclusión económica tiene una fundamental importancia en el momento de ensayar investigaciones interdisciplinarias respecto de la empresa cooperativa, en la medida en que si para la economía - o más exactamente para la doctrina económica que estudia la empresa capitalista - el elemento social - esto es, el trabajo - queda reducido a simple factor instrumental de la producción, y por tanto desnaturalizado (3), para el economista que se acerca a la investigación de la empresa cooperativa ese factor adquiere tal relevancia que imprime carácter a la delimitación del instituto.

Esto es, en la configuración económica de la empresa capitalista se prescinde de valorar el sustrato sociológico que la empresa, en cuanto

(2) Volvemos a insistir en que esta participación directa del factor trabajo en la producción a través del tipo de organización cooperativa, no presupone exclusión, en el concurso de la actividad productiva, del factor capital; sino simplemente inversión de la motivación asociativa en el momento de la génesis del instrumento económico apto para producir.

(3) Cfr. ALMANSA PASTOR, J.M. "La participación del trabajador en la administración de la empresa", Madrid 1965, pag. 15.

grupo social organizado, presenta (4); por el contrario, en la empresa cooperativa esa realidad sociológica se inserta con tal intensidad en su raíz, en su médula económica, que prescindir de ella significaría tanto como olvidar su esencia (5).

Pero es que aun hay más, por cuanto esa realidad socio-económica de la cooperativa sirve para conectar el antecitado aspecto en el jurídico que la misma empresa ofrece, permitiéndose así un análisis armónico en la investigación del fenómeno cuestionado.

La empresa cooperativa presenta, pues, desde su misma intención creadora una proyección exterior, materializada en el hecho de la asociación de trabajadores para participar directamente en la producción de bienes y servicios; ofrece un componente humano; es, en su más genuino significado, unacomunidad dinámica de trabajo (6).

(4) Nótese que esta afirmación la hacemos en términos puramente económicos, y no ya estrictamente socio-económicos, en los que por supuesto la configuración de la empresa (ya se trate de capitalista ya de cooperativa) no puede prescindir de ese sustrato sociológico; esta puede ser la configuración de FERNANDEZ PIRLA, op. cit. pag. 58 al decir "la empresa no es solamente un conjunto de elementos materiales, sino fundamentalmente un grupo humano que constituye una estructura social"; sobre el tema ALONSO OLEA, M. "La empresa desde el punto de vista social", en "La empresa" cit. pags. 65 y ss; GONZALEZ PARAMO, J.M. "La Empresa y la Política Social", t. I. Madrid 1966, pags. 490 y ss; MARC, op. cit. pags. 226 y ss; MONTOYA MELGAR, op. cit. pags. 393 y ss.

(5) Y ello debido a que, y si bien tanto en la empresa capitalista como en la cooperativa, existe concurrencia de factor trabajo, en la cooperativa ese concurso personal es "factor desencadenante de la organización y por ende de la producción".

(6) Vid. pags. 297 y ss.

Esta realidad de la cooperativa no puede pasar desapercibida para el Derecho, que la hace objeto de su regulación (7). De esta forma, la empresa cooperativa se presenta ante el jurista como realidad jurídica, difícil de aprehender, pero necesaria de analizar; con una relevancia tal que se convierte en centro de imputación de relaciones jurídicas (8), en institución (9) sujeta y sometida al campo de aplicación normativo.

¿Cual o cuales son los sectores del ordenamiento jurídico que acotan la realidad empresa cooperativa, y la acogen como centro imputativo de sus normas?

En este sentido, prescindiendo de las construcciones doctrinales que pretenden configurar un "derecho cooperativo" (10) como derecho singu-

- (7) Cfr. MONTOYA MELGAR, op. cit. pag. 400. Sobre el tema de la realidad jurídica de la empresa vid. entre la abundantísima bibliografía; SANTORO PASSARELLI, F. "L'impresa del sistema del diritto civile", Riv. dir. comm. 1942, I, pags. 376 y ss; GHIDINI, M. "Disciplina giuridica dell'impresa", Milano 1950; EICHLER, H. "La situazione della impresa secondo il diritto privato", Nuova Riv. Dir. Comm. Dir. Econ e Dire. Soc. 1954, pags. 104 y ss; GRAZIANI, A. "L'impresa e l'imprenditore", 2ª edic. Napoli, 1959.
- (8) Cfr. ALONSO OLEA, M. "Curso de Derecho del Trabajo", Madrid 1971, pag. 65. Sobre el alcance de la imputación normativa en el ámbito laboral, BAYON CHACON, G. "El ámbito de aplicación de las normas de Derecho del Trabajo", RPS, 1966, nº 71, pags. 5 y ss".
- (9) Es necesario precisar que cuando denominamos "institución" a la empresa cooperativa lo estamos haciendo en función de ser esta centro de imputación normativa (cfr. ALONSO OLEA, op. ult. cit. pag. 66) sin plantearnos en estos momentos la configuración jurídica de la Empresa-Institución; sobre este tema vid nota 46 pg. 291.
- (10) Ha sido la doctrina iberoamericana la que con más ardor defendió la autonomía jurídica y científica del derecho cooperativo; vid. SALINAS PUENTE, A. "Derecho Cooperativo", México 1954 y DAILY GUEVARA, J.R.

lar nuevo (11), objeto de una rama jurídica independiente en base a la especialidad técnica y científica del fenómeno cooperativo (12), y fr~~u~~casados los intentos de ordenación jurídica unitaria a través de la creación de un "Derecho de la Empresa (13), hay que concluir que la co~~o~~operativa, como realidad jurídica relevante para el Derecho, se encuen~~tr~~tra sometida a una heterogenea normativa; al derecho mercantil, que or~~o~~dena el tráfico comercial de la empresa cooperativa y regula la vesti-

"Derecho cooperativo", Caracas 1957, esp. pags. 247 y ss. En España la defendió GASCON HERNANDEZ, J. "El derecho cooperativo", Rev de la Real Acad. Leg. Jur., 1956, nº XII.

- (11) Sobre el tema de los Derechos singulares y especiales, vid: ASCAREL LI, T. "La funzione del Diritto speciale a la trasformazioni del Diritto commerciale", Riv. dir. comm. 1934, I, pags. 2 y ss; CASTRO y BRAVO, F. "Derecho civil de España", 2ª edic., Madrid 1949, pags. 100 y ss; BORRAJO DACRUZ, "Problemas ecomunes al Derecho Mercantil y al Derecho del Trabajo (Derecho especial y Derecho nuevo)", RDM, 1957, nº 66, pags. 363 y ss.
- (12) Parafraseando a BORRAJO ("Presupuestos críticos para el estudio del Derecho del Trabajo", Rev. Int. Soc. 1954, nº 46, pagas. 235 y ss) podríamos señalar que si la necesidad de un ordenamiento jurídico y de una ciencia jurídica nueva solo se hace sentir cuando el sistema jurídico y científico tradicional no alcanza ya sus objetivos, no se puede sustentar que el hecho social cooperativo exija hoy un tratamiento que escape del ámbito jurídico y científico de alguno de los sectores que tradicionalmente regulan e investigan la realidad empresa; en parecidos términos, y conforme con rechazar la autonomía, SERRANO CARVAJAL, J. "Concepto legal y constitución de las cooperativas", RPS, 1964, nº 62 pag. 35.
- (13) Cfr. GARRIGUES, "La empresa...", cit. pag. 273. Posición parecida, aunque apuntando a una solución maximalista del problema, es la de MONTOYA MELGAR (op. cit. pag. 411) al decir "El genuino Derecho de la empresa o no es nada, o es puro Derecho del Trabajo".

dura jurídico-formal del empresario (14); al derecho fiscal, que contempla la actividad económica de la cooperativa como hecho imponible; y al derecho del trabajo que regula las relaciones laborales organizadas en

- (14) En estos momentos prescindimos de hacer afirmaciones respecto al carácter mercantil o no de la sociedad cooperativa (el empresario social-persona jurídica), aspecto que será tratado posteriormente.

Lo que si creemos necesario constatar, aunque sea brevemente, es que la doctrina científica extranjera encuadra metodológicamente lo que podríamos denominar Teoría General de la Sociedad Cooperativa (concepto, naturaleza, caracteres, estructura, aspectos orgánicos y funcionales y relaciones con la Administración) en el Derecho Comercial.

En Italia esta es la postura pacífica, tanto entre los tratadistas clásicos como entre los modernos. Entre los primeros, vid: MARGHERI, A., en notas a la traducción del Tratado de Derecho Comercial de Errico Thöl, vol. I, t. 1, Napoli 1881, pagas. 557 y ss; PIPIA, U. "Trattato di Diritto Commerciale", vol. II, Torino 1914, pagas. 706 y ss; NAVARRINI, U "Trattato teorico-prático di Diritto Commerciale", vol. V, Torino 1921, pagas. 9 y ss; VIVANTE, C. "Trattato di Diritto Commerciale", 5ª edic. t. II, Milano 1923, pagas. 365 y ss; respecto de los mas modernos, vid. entre otros muchos, GRECO, P. "Le società", Torino 1959, pagas. 47 y ss; ASCARELLI, T. "Corso di Diritto Commerciale", 3ª edic. Milano 1962, pagas. 191 y ss. GRAZIANI, A. "Diritto delle società", 5ª edic. Napoli 1962, pagas. 475 y ss; DE GREGORIO, A. "Corso di Diritto Commerciale", 6ª edic., Milano-Napoli-Roma 1965, pagas. 393 y ss; FERRI, G. "Manuale di Diritto Commerciale", 2ª edic., Torino 1968, pagas. 343 y ss.

En Francia, y salvo las consideraciones hechas por los civilistas clásicos en torno a la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa, sigue siendo la doctrina mercantilista la que analiza lo que hemos venido en denominar teoría general de la sociedad cooperativa; vid. a este respecto: PIC, P. KREHER, J. "Des sociétés commerciales", 3ª edic. Paris 1940, t. III, pagas. 21 y ss; LACOUR, L. "Precis de Droit Commercial", 8ª edic. Paris 1945, pagas. 238 y ss; HAMEL, J.- LA GARDE, R. "Traité de Droit Commercial", t. I, Paris 1954, pagas. 954 y ss; HOUIN, R.- RODIERE, R. "Droit Commercial", Paris 1961, pagas. 181 y ss.

El mismo criterio siguen entre otras la doctrina belga (FREDERICO, L. "Traité de Droit Commercial belge", t. V, Gand 1950, pagas. 945 y ss; VAN RYN, J. "Principes de Droit Commercial", Bruxelles 1954, pagas. 210 y ss) la inglesa (GOER, L.C.B. "The principles of modern company law", London 1954, pagas. 238 y ss) la brasileña (CARVALHO DE MENDONÇA, J.X. "Tratado de direito comercial brasileiro", 5ª edic.

el seno de la empresa (15).

En definitiva pues, y abstracción hecha de la tradicional desconexión en nuestro país entre empresa cooperativa como realidad normativa

Vol. IV, Rio de Janeiro 1954, pags. 240 y ss). Frente a esta postura dominante, la doctrina científica española apenas si ha prestado unas líneas a la investigación de la sociedad cooperativa. La razón estriba, a nuestro modo de entender, en que expulsada la sociedad cooperativa del ámbito del Código de Comercio (vid. cap. I), definiendo el Derecho Mercantil como "aquel que regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de industrias mercantiles organizadas" (cfr. GARRIGUES, "Curso de Derecho Mercantil", 4ª edic., t. I, Madrid 1962, pag. 14), y calificados los términos cooperativa y mercantil como inconciliables (cfr. POLO, A. "Misión y sentido de la nueva ley de Cooperación", Rev. Der. Priv. 1942, pag. 70, referencia a separata) no hubo otra alternativa que excluir la investigación de la sociedad cooperativa de los Tratados y Manuales de Derecho Mercantil; esta fue la postura de GAY DE MONTELLA, R. ("Código de Comercio español comentado", t. II, Barcelona 1948, pag. 113) URÍA, R. ("Derecho Mercantil", 6ª edic. Madrid 1958, pag. 129) y GARRIGUES, J. ("Curso...", cit. pag. 294).

Encuadran metodológicamente a la sociedad cooperativa dentro del Derecho Mercantil, VICENTE Y GELLA, A. ("Curso de Derecho Mercantil comparado", 3ª edic., Zaragoza 1951, pgs. 237 y ss., que lo hace dentro de las "sociedades de capital variable") y últimamente, y definiendo su inclusión con ardor, SANCHEZ CALERO, F. ("Instituciones de Derecho Mercantil", t. I, Valladolid 1967, pag. 125, que las encuadra entre aquellas sociedades cuya finalidad es "suministrar a los socios determinadas prestaciones al precio mínimo posible, o remunerar ciertas prestaciones al máximo posible").

Independientemente de que desde una postura de "legis data" no sea posible configurar a la sociedad cooperativa como sociedad mercantil, consideramos que la investigación de este tipo de sociedad no puede ni debe quedar expulsada de los tratados de Derecho Mercantil; postura esta que puede venir apoyada por la superación del acto de comercio como objeto de la configuración del Derecho Mercantil (cfr. GARRIGUES, "Crisis del Derecho Mercantil contemporáneo", en "Hacia... I" cit. pags. 201 y ss) y por la comprobación empírica del papel tan fundamental que en una economía de mercado juegan estas organizaciones. Confirman estas conclusiones las palabras de SANCHEZ CALERO, F.- OLIVENCIA RUIZ, M. (Relaciones del Régimen jurídico de las sociedades mercantiles y de las sociedades cooperativas", en "El cooperativismo en la coyuntura española actual"; Madrid 1964, pag. 169) al decir: "la desconexión del régimen jurídico de la cooperativa es un defecto que tiene su raíz en falsas concepciones ideológicas y que ignoran el honrado sustrato común que hay entre ambas figuras".

(15) La investigación de la empresa cooperativa de producción dentro del

heterogénea y empresa cooperativa como realidad científica objeto de in-

Derecho del Trabajo puede venir, a nuestro modo de ver, avalado por una doble vía:

a) En primer lugar por cuanto en el seno de esta empresa existen unas relaciones jurídicas de trabajo, cuya calificación debe hacerse desde una perspectiva iuslaboralista. Contra esta primera vía chocan las formulaciones parciales del trabajo como objeto del Derecho del Trabajo, considerando que solo una particular especie de este cae dentro del ámbito de este sector científico (vid. DE LA VILLA GIL, L.E. "En torno al concepto del Derecho español del trabajo", RT, 1969, nº 29, pags. 103 y ss, esp. pag. 115 en donde escribe "el concepto clave de trabajador, núcleo del derecho español del trabajo, se deriva de la realización de una actividad libre, productiva, dependiente y por cuenta ajena..."); sin embargo, existe una fuerte corriente doctrinal que tiende hacia la consideración unitaria del trabajo, abstracción hecha de los tipos particulares del mismo (vid. por todos SCOGNAMIGLIO, R. "Diritto del Lavoro", Bari, 1969, pag. 17 donde dice: "La tendenza a far capo, al di là delle differenziazioni di specie, ad una visione ampia e unitaria del lavoro nella realtà economico-sociale come in quella giuridica, si propone nei termini altrimenti consapevoli, e non poco suggestivi, di una pretesa sua rispondenza alle più recenti istanze, come alle prospettive avvenire della materia").

b) En segundo lugar, por cuanto el trabajo en régimen cooperativo ha de realizarse en el seno de una empresa; o dicho en otros términos, la colectividad de trabajadores (abstracción hecha de la naturaleza jurídica de su relación de trabajo) impone ya una relevancia jurídico-laboral a la empresa cooperativa.

En definitiva, los aspectos relevantes para el derecho del trabajo de la empresa cooperativa son la relación jurídica de trabajo cooperativo y la configuración jurídica de la empresa cooperativa, en cuanto comunidad dinámica de trabajo.

Desde el punto de vista doctrinal, la doctrina española laboralista más representativa, ha excluido de los Tratados y Manuales cualquier referencia a la cooperativa, yafuese una referencia al trabajo cooperativo, ya al entorno jurídico donde ese trabajo se realiza (vid. BAYON CHACON, G.- PEREZ BOTIJA, E., "Manual de Derecho del Trabajo", 8ª edic. Madrid 1970; ALONSO ~~CARRA~~, M. "Derecho del Trabajo", 3ª edic. Barcelona 1971; BORRAJO DACRUZ, E. "Introducción al Derecho del Trabajo", 3ª. edic. Madrid 1971, aunque este último autor hace unas breves referencias (cfr. pag. 136) sobre el significado de la sociedad cooperativa.

Otra parte de la doctrina española prestó atención al fenómeno cooperativo, pensando que su investigación metodológica podía hacerse en el Derecho de Trabajo al tratar el tema de la Mutualidades (vid. nota

vestigación (16), lo cierto es que la empresa cooperativa de producción constituye una realidad jurídicamente relevante para el Derecho, y como tal digna de ser tratada por el intérprete.

2. Los elementos de la empresa cooperativa. Consideraciones generales.

Al estudiar la empresa cooperativa desde un plano económico, vimos que venía constituida, esencialmente, por el concurso de tres factores de naturaleza varia: uno, el trabajo, de naturaleza desencadenante; otro, el capital, de naturaleza técnico-concurrente; y un tercero, la organización, de naturaleza integrante. En este último sentido, pues, la empresa se destaca como organización destinada a la consecución de unos objetivos de-

109, cap. II), criterio este inaceptable para nosotros por cuanto equivale a desconocer la esencia de la empresa cooperativa en general, reduciéndola a mera asociación sin contenido económico relevante, y la esencia de la sociedad cooperativa "in genere", en cuanto vestidura formal del empresario cooperativo.

La doctrina iuslaboralista extranjera no ha incurrido en el anterior error y cuando trata el tema, lo hace con especial referencia al trabajo cooperativo (o las incidencias de su prestación); es decir a la relación jurídica de trabajo cooperativo, sin plantearse el tema de la sociedad cooperativa en general. Vid. por todos ROMAGNOLI, U. "La prestazione di lavoro nel contratto di società", Milano 1967, pags. 227 y ss.

- (16) La consecuencia de este doble abandono doctrinal es obvia; un absoluto vacío científico en torno a el tema de la empresa cooperativa, de la sociedad cooperativa, de la relación jurídica de trabajo cooperativo, del negocio cooperativo, etc. etc., aislandose los estudios jurídicos sobre este tema en grupos de expertos. En el mismo sentido CREMADES, B. "Las cooperativas de producción", Tribuna Cooperativa 1972, nº 8, pag. 31.

terminados (17).

Este aspecto adquiere relevancia no solamente por la concepción de la empresa desde la perspectiva económica, sino que también desde un plano jurídico la empresa viene entendida "como círculo de actividades regidas por la idea organizadora del empresario" (18), con lo que es esa idea de organización la que da sentido unitario a la propia empresa (19), comprendiéndose en ella - conforme señala ALMANSA PASTOR (20) - tanto el sujeto que organiza como la actividad organizativa y los elementos organizados.

En cualquier caso, sin entrar en el problema que plantea la individualización de un concepto que explique en términos jurídicos la realidad empresa, y o bien se huya de formulaciones jurídicas, aceptando la influencia del concepto económico de empresa en su configuración jurídica (21), o bien, al efecto de formalizar esa realidad jurídica, se ensayen nociones

(17) ALONSO GARCIA, "La reforma de la empresa", cit. pag. 28.

(18) GARRIGUES, "Curso...", cit. pags. 144-145.

(19) Así PERSIANI, M. "Contrato di lavoro e organizzazione", Padova 1966, pag. 15 al decir "La nozione di impresa (e quella di azienda), infatti, descrivono ambedue il fenomeno di una organizzazione...". Este es el matiz más relevante apreciado por la doctrina; vid. NICOLO, R. "Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile", Riv. comm. 1956, I, pag. 185 y MENGONI, L. "Recenti mutamenti nella struttura e nella gerarchia dell'impresa", Riv. soc. 1958, pags. 689 y ss.

(20) Op. cit. pag. 18.

(21) GARRIGUES, "Curso ...", cit. pag. 145; también ALONSO GARCIA, op. cit. pag. 47 al decir que "los intentos de construcción jurídica han arrancado - y no podían hacerlo de otra manera - de la concepción económica" (subrayado mío).

(22), lo cierto es que aquella primera aproximación al concepto de empresa como organización para la consecución de unos objetivos determinados, tiene el valor de poner de relieve la existencia de una serie de problemas, entre los que adquiere particular relieve el relativo a la tipificación de los elementos que componen ese conjunto organizado.

Desde el momento que la empresa hace referencia a una organización, se está postulando la presencia de unos elementos susceptibles de ser organizados; en definitiva se está afirmando como postulado previo la existencia de unos elementos, cuya tipificación se hace necesaria.

El problema de la tipificación o especificación de los elementos de la empresa es de gran complejidad, al tiempo que de particular importancia. Y ello no solamente por cuanto, y como acabamos de señalar, la apoyatura material de la empresa requiere la presencia dinámica de esos elementos "unidos por un vínculo de identidad de destino"(23), sino esencialmente por cuanto la heterogeneidad de los elementos que se organizan en su seno impide en numerosas ocasiones el construir jurídicamente una fór-mula que armonice a todos ellos.

El análisis de los elementos de la empresa puede realizarse desde muy diversos planos, los cuales en definitiva no vienen sino a responder a esa pluralidad de perfiles apreciables en la empresa en cuanto realidad

(22) En el sentido de definirla, ALONSO OLEA, "Derecho..." cit. pag. 64, que define la empresa como "Agrupación de personas que, controlando bienes o servicios, tiene por finalidad la producción de bienes o servicios para un mercado".

(23) Cfr. GARRIGUES, op. ult. cit. pag. 144.

objeto de investigación; así, y en este sentido, podrán tipificarse los elementos de la empresa desde un plano económico, socialógico, jurídico e incluso político.

Está claro que ahora el único que nos interesa es el jurídico; de ahí que y sin olvidar los elementos de contenido económico de la empresa (24), debamos detenernos en ellos.

Con esta delimitación, el problema no queda totalmente orillado, puesto que la especificación de los elementos jurídicos de la empresa puede considerarse desde un doble plano, susceptible a su vez de yuxtaposición.

Por una parte, y debido a que la empresa es centro de imputación de normas de naturaleza varia, resulta obvio que según el sector del ordenamiento jurídico en el que nos estemos moviendo, - mercantil o labo-

(24) Sobre el tema FERNANDEZ PIRLA, "Economía de la Empresa", Madrid 1961 pag. 3, para el que los elementos de la empresa son: a) El empresario, persona o conjunto de personas que asume la responsabilidad en la dirección y gestión de la empresa, b) el factor humano c) el conjunto de bienes o capital instrumental de la empresa, d) las relaciones públicas (prestigio, favor de la clientela), e) la propia organización, que sirve de cauce y motor de la producción y f) los elementos resultantes de la empresa en los mundos del derecho de la técnica, del derecho, de la sociedad y en el sistema socio-cultural. Desde esta perspectiva, vid. también GRECO, P. "Profilo dell'impresa economica nel nuovo codice civile", en "Giornale degli econimisti" 1942, pags. 346 y ss.

ran, - los elementos de la empresa adquirirán matiz diverso (25).

Por otra parte, los elementos de la empresa pueden contemplarse bien desde una perspectiva subjetiva u objetiva, según se atienda a los sujetos componentes de ese conjunto organizado (26), o a las relaciones jurídicas nacidas y desarrolladas en su ámbito (27).

-
- (25) Sin que ello de lugar al reconocimiento de un concepto de empresa propiamente mercantil o laboral (ALFANSA, cit. pag. 19). Intentos y ensayos de conceptualización jurídico-laboral de la empresa no han faltado en la doctrina; sobre el tema, en general, BAYON CHACON, G. "Concepto jurídico laboral de empresa", RFJM 1959, nº 6, pags. 249 y ss, y de una forma específica MONTOYA MELGAR "La empresa...", cit. pag. 413 en donde define a la empresa jurídica-laboral como "conjunto organizado de trabajadores, dirigidos por un empresario, por cuya cuenta prestan coordinadamente servicios".
- (26) La relevancia de los elementos subjetivos de la empresa tiene su correlato doctrinal en la construcción de una noción subjetiva de la empresa centrada en el empresario; es decir, el empresario como sujeto de la actividad de la empresa. Con esta teoría - elaborada por la doctrina científica italiana (cfr. por todos: CASANOVA, M. "Le imprese commerciali", Torino 1955, pags. 69 y ss; GRAZIANI, A. "L'impresa e l'imprenditore", 2ª edic. Napoli 1959, pags. 36 y ss; FERRARA, F. "Gli imprenditori e le società", 4ª edic., Milano 1962, pags. 30 y ss) se pretendía dar respuesta a la relación existente entre "impresa-azienda", de forma que el empresario deviene el sujeto de la actividad "impresa", cuyo objeto es la "azienda" (como conjunto de bienes organizados). Esta relación (no extraña a otros ordenamientos; y así en el francés de habla de "entreprise-établissement", y el alemán de "Betrieb-Unternehmen", sobre el significado de esta relación en el ordenamiento germano vid. JACOBI, E, "Betrieb und Unternehmen als Rechtsbegriffe", en Festschrift für Ehrenberg, Leipzig 1926) viene modernamente entendida en el sentido de considerar a ambos términos como fenómeno jurídico descriptivos de una organización en la que el elemento patrimonial se une al personal, PERSIANI, op. cit. pag. 15).
- (27) El concepto de empresa de MONTOYA (vid. nota 25) podría calificarse como ensayo para dar relevancia jurídica a los elementos objetivos sobre los subjetivos, puesto que para su existencia se necesita como factor condicionante la presencia de una especial relación jurídica de trabajo, sin la cual no es posible hablar de empresa. De cualquier forma, no debe confundirse la objetivación de los elementos de la

Estas dos perspectivas a través de las cuales se analizan los elementos de la empresa no se excluyen, de forma y manera que a la investigación subjetiva u objetiva de los elementos se yuxtapone la consideración del sector normativo que atrae a su ámbito de aplicación el juego concreto de los sujetos, y de las relaciones entre ellos existentes.

Partiendo de estas ideas generales en torno a la estructura jurídica de la empresa, y centrando el problema en la esfera de la empresa cooperativa, aquellas consideraciones generales nos imponen:

- a) el análisis de los sujetos que componen esta empresa,
- b) el análisis de las relaciones jurídicas a través de las cuales se organizan aquellos elementos personales.

En este orden de cosas conviene, antes de entrar en los temas básicos de nuestra futura investigación, realizar unas precisiones generales a modo de delimitación de nuestro campo de estudio; precisiones que vienen impuestas por un doble condicionamiento: uno, de general aplicación a la realidad jurídica que estamos contemplando, y que conecta con la heterogeneidad normativa que toma como centro de imputación la empresa; otro, de específica aplicación al marco de la empresa cooperativa, y que se relaciona con el tradicional abandono de la doctrina científica

empresa (tesis contractualista) con las teorías objetivas de la empresa. Tanto la teoría subjetiva (nota 26) como la objetiva son jurídicamente insostenibles, y ello aunque buena parte de nuestros textos legales, aun de carácter constitucional (vid. F.T. Do.III, 4-7) caigan en este error (DE LA VILLA GIL, L.E. "Derecho del Trabajo. Esquemas". Valencia 1972, pag. 121).

en la investigación de este instituto (28) y de rechazo con su calificación como "zona gris" a caballo entre el Derecho Mercantil y el Derecho del Trabajo (29).

Cohonestando estas consideraciones con la más simple conceptualización jurídica de la empresa como "conjunto organizado de trabajo" (30), podemos señalar lo siguiente:

a) En la empresa cooperativa los elementos personales son dos:

- el empresario, que a diferencia de lo que ocurre en el resto de las empresas, en que puede ser empresario una persona física-individual o una persona jurídica, ha de adoptar, como requisito formal condicionante, una determinada forma jurídica: la sociedad cooperativa.
- el personal que presta servicios en el seno de la empresa.

b) El tratamiento jurídico de la figura del empresario es doble, puesto que al mismo tiempo que titular de la empresa, es acreedor de trabajo; pero a diferencia de lo que ocurre en la investigación del empresario ordinario, en donde el primer aspecto cae en la esfera del derecho mercantil, y el segundo en la del derecho del trabajo, aquí, en la medida que el personal que trabaja en la empresa es jurídicamente titular de la misma, este encuadramiento se enturbia; y todo ello sin olvidar que el empresario cooperativo carece, al no realizar actos de comercio, del

(28) Vid. nota 16 de este cap.

(29) Cfr. CREMADES, op. cit. pag. 31

(30) Cfr. MONTROYA, op. cit. pag. 413.

Estatuto profesional (31).

- c) Como consecuencia de lo anterior, y como reverso de esa conclusión, el tratamiento jurídico del personal de la empresa, que normalmente viene acogido dentro de la normativa laboral (32), queda en una zona gris a resultas de que su relación jurídica de trabajo posea los elementos que la califiquen como jurídico-laboral.

Ciertamente que la investigación de la estructura jurídica de la empresa permite observar la existencia de otros elementos, tanto de naturaleza material como inmaterial, distintos a los cuestionados (33); sin embargo, y dado que la finalidad de nuestro estudio viene presidido por la configuración de la empresa cooperativa desde vertiente laboral - esto es, como "comunidad organizada de trabajo" - aquellos otros elementos son o bien irrelevantes para la configuración jurídica de la empresa,

- (21) Y todo ello con abstracción de que desde una perspectiva de lege ferenda fuese deseable, e incluso necesario, un tratamiento mercantil al empresario cooperativo; en este sentido, SANCHEZ-CALERO, y OLIVERENCIA RUIZ, "El régimen jurídico..." cit. pags. 173 y ss y BAYON MARINE, I - SERRANO ALTAMIRAS, R. "Régimen jurídico de las cooperativas", Madrid 1970, pags. 173 y ss.
- (32) Cfr., por todos MONTROYA, op. y loc. cit.
- (33) Vid: BAYON CHACON, "El concepto jurídico...", cit. pags. 253 y ss. HUECK, A - NIPERDEY, H.C. "Compendio de Derecho del Trabajo", (trad. española de DE LA VILLA GIL - RODRIGUEZ PINERO) Madrid 1963, pag. 73, GONZALEZ PARANO, "La empresa...", cit. pags. 61 y ss; ALCISO GARCIA, "La reforma de la empresa", cit. pags. 28 y ss.

o bien para su configuración desde esta perspectiva (34); y todo ello sin olvidar, como anteriormente señalamos, que la falta de criterios doctrinales en el momento de determinar el sector normativo que contempla a la empresa cooperativa como institución jurídica - o más exactamente, la calificación de los elementos subjetivos y objetivos como zonas grises a mitad de camino entre los núcleos de imputación de varios sectores del ordenamiento jurídico - exigirá, en aras de una mayor precisión conceptual y de un más profundo tratamiento científico, abordar temas que, dogmáticamente, escapen de una rigurosa investigación iuslaboralista.

(34) Así por ejemplo el fin lucrativo, o el fin técnico-productivo, o el factor "tónico" que se resuelve en la cantidad o calidad del dinamismo de la empresa, en su estilo y modo de actuar; cfr. BAYON CHACON, op. y loc. ult. cit. y MONTOYA MELGAR, op. cit. pag. 417.

Siguiendo el planteamiento presentado en el apartado anterior, y desde un plano de vista estrictamente jurídico, la estructura subjetiva de la empresa nos ofrece dos componentes, dos elementos que en ella que dan organizados:

- A la investigación de la especialidad - entendida esta como mera hipótesis de estudio - que en la empresa cooperativa presentan estos sujetos es a lo que van destinadas las presentes consideraciones.

(1) El primer aspecto es el relevante desde una perspectiva mercantil (cfr. URÍAS, R. "Derecho Mercantil", 6ª edic., ^{Madrid 1978, pag. 46 y ss.} y el segundo lo es para el derecho del Trabajo (cfr. MONTOYA MELGAR, A. "La empresa y el Derecho del Trabajo", en Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo" Madrid 1971, pag. 417).

Subseccion I

"El empresario cooperativo"

A) Los aspectos formales del empresario cooperativo 1. La sociedad cooperativa como forma jurídica típica.

Desde un plano general, son varios los criterios de clasificación para trazar un cuadro esquemático de los diversos tipos de empresarios (2); de todos estos criterios, el único que en estos momentos nos interesa es el que, atendiendo a la naturaleza jurídica del empresario, distingue entre empresario persona física y empresario persona jurídica (3).

Si en un primer momento, la actividad económica estuvo organizada en manos de empresarios individuales, a medida que la economía se racionaliza y se amplía progresivamente el ámbito espacial de esa actividad - dice URÍA (4) - las fuerzas de esos empresarios individuales van resultando impotentes para explotar y mover el conjunto de elementos heterogéneos que requiere la empresa; de ahí que la actividad económica inicie un proceso asociativo, mediante el cual los empresarios individuales vienen sustituidos por los empresarios sociales, con la consiguiente consecuencia de la aparición en el tráfico jurídico de aquellas formas

(2) Vid. in extenso ALONSO GARCIA, "Curso de Derecho del Trabajo", 2ª edic., Barcelona 1967, pags. 311 y ss.

(3) Junto a ellas ALONSO GARCIA menciona los grupos de empresarios sin personalidad jurídica reconocida (op. y loc. cit.), y dentro del empresario persona jurídica, los de naturaleza privada y los de carácter mercantil (ibidem).

(4) Op. cit. pag. 117

asociativas aptas para acoger y ordenar la vida de los empresarios sociales-personas jurídicas.

Con este planteamiento, fácilmente se colige la importancia que en la economía moderna de tipo capitalista adquieren estos empresarios, y de rechazo las formas jurídicas que estos pueden adoptar.

Estas formas asociativas, que ofrecen en la práctica de la vida y en cada sistema legislativo una rica variedad de tipos (5), tienen una nota en común, cual es la de la disponibilidad del empresario, en línea de principio, para optar por una u otra forma jurídica según sus necesidades económicas (6); bien entendido que una vez materializada es ta opción, se le impone con carácter obligatorio el régimen jurídico aplicable a la figura asociativa elegida.

- (5) Cfr. GRECO, P. "Le società", Torino 1959, pag. 4.

En nuestro ordenamiento jurídico los tipos asociativos aptos para calificar a un empresario como persona jurídica varían según el sector del ordenamiento en el que nos entemos moviendo. Así, desde una perspectiva mercantil, los tipos asociativos que califican a un empresario como social son: la sociedad colectiva, la comanditaria (en su doble modalidad de simple y por acciones), la de responsabilidad limitada y la anónima (sobre el tema, GARRIGUES, "Curso...", cit. pags. 235 y ss., y URÍA, op. cit. pags. 116 y ss). Por el contrario si nos trasladamos al plano laboral, se produce una ampliación de los tipos asociativos aptos para calificar a un empresario como social, habida cuenta de lo irrelevante que resulta para el Derecho del Trabajo que el empresario social tenga o no ánimo de lucro (cfr. ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo", cit. pags. 63-64).

- (6) En este sentido, SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, "Relaciones del régimen jurídico...", cit. pag. 163 al decir "En un principio, la forma no es más que el molde estructural adecuado a la naturaleza del fondo económico que late en el seno de la sociedad de que se trate".

Frente a esta disponibilidad en la opción del tipo organizativo que posee el empresario del sistema económico capitalista, el método económico cooperativo presupone, para el empresario que lo utilice, la obligación de asumir una forma jurídico-organizativa concreta, cual es la sociedad cooperativa; de manera que este método económico solo es susceptible de organizarse jurídicamente a través de una figura asociativa "ad hoc".

Esta identidad entre sociedad y método cooperativo viene explícitamente sancionado por el ordenamiento positivo de forma tan clara, que no permite interpretaciones distintas.

Concretamente, la parte primera del art. 2º de la Ley de Cooperación vigente señala que "Las sociedades constituidas con arreglo a las disposiciones de esta Ley son las únicas autorizadas para ostentar la calificación de Cooperativas" (7).

En nuestro ordenamiento jurídico no siempre se ha producido esta identificación entre forma organizativa y modelo económico cooperativo; muy al contrario, la misma ha sido fruto de un largo y confuso proceso legislativo.

Sin necesidad de insistir sobre aspectos ya estudiados, si parece necesario detenerse unos instantes en recordar que en la primera etapa

(7) En su parte segunda se contiene el principio de protección legal de la denominación cooperativa, ya que se prohíbe el empleo de la misma o de otra similar que pueda originar confusión en el nombre de las sociedades civiles o mercantiles, Sobre la evolución y alcance de la protección legal de la denominación cooperativa, vid. COUTANT, L. "L'evolution du droit coopératif de ses origines a 1950", Reims 1950, pags. 238 y ss.

de aquella evolución (8), la situación jurídica fué exactamente la contraria (9).

En este orden de cosas, ya señalamos en otro lugar (10) que el art. 124 del Código de Comercio más que excluir de su ámbito a las sociedades cooperativas de producción, lo que hizo fué exceptuarlas cuando aplicasen el principio de mutualidad; o lo que es lo mismo, en todos aquellos supuestos en que una sociedad cooperativa de producción no actuase bajo las reglas del principio de la mutualidad (11), quedaría sometido a las disposiciones del Código.

Ahora bien, como no existía una compañía mercantil con forma específicamente cooperativa, necesariamente la sociedad cooperativa de producción debería, en su organización, adoptar alguna de las formas tipo reguladas expresamente.

En definitiva, pues, el tipo de organización asociativa cooperativa no fué reconocida como categoría formal específica más que en etapas posteriores; precisamente cuando el legislador vió la necesidad ineludible de adecuar el fondo económico de su actividad a una estructura jurídica concreta; adecuación esta que tuvo como consecuencia más inmediatas:

- a) Prohibir al empresario que utilizase el método cooperativo la elección del tipo asociativo.

(8) Vid. cap. I, pag. 28 y ss.

(9) Situación que no fué ajena a los esquemas legislativos de otros ordenamientos jurídicos. Vid. supra el sistema francés e italiano, pags. 23-26.

(10) Vid. pag. 46.

(11) Sobre el concepto de la mutualidad del art. 124 del C. com. vid. pags. 44.

- b) Proteger legalmente la denominación cooperativa.
- c) Convertir en obligatorio el régimen jurídico aplicable al tipo de organización cooperativa.

2. La configuración jurídica de la sociedad cooperativa de producción.

Acertadamente señala FERRI (12) que la noción jurídica de sociedad está referida a dos aspectos: uno negocial, y otro organizativo; bajo aquel la noción de sociedad es unitaria, mientras que bajo este varía las posiciones que la organización asuma. Este doble aspecto explica - nos sigue diciendo el autor italiano - que la regulación jurídica se conecte no con el fenómeno abstracto "sociedad", sino con cada uno de los tipos sociales concretos.

Trasladando estas nociones generales al terreno en el que nos movemos, hay que señalar que se ha partido de una premisa, - cual es la calificación de la sociedad cooperativa de producción como tipo organizativo social -, que en cierta manera no ha sido demostrada; y ello por cuanto esa doble perspectiva, apreciada en la noción jurídica de sociedad, está relacionada en términos de causa a efecto, de forma que todos los tipos en que se organiza la sociedad tienen como elemento unificador un negocio jurídico idéntico (13).

Esto supone que si en la base de la organización cooperativa no aparece el negocio jurídico "sociedad", no se podría, en buena hermenéutica, calificar de sociedad a la envoltura legal que el empresario coopera

(12) "Manuale di Diritto commerciale", 2ª edic., Torino 1968, pag. 182.

(13) FERRI, op. y loc. cit.

tivo adopta en su organización económica (14).

En este sentido, se hace imprescindible el análisis del negocio jurídico base de la organización cooperativa, a fin de determinar si el punto de partida por nosotros adoptado tiene o no apoyatura legal.

En definitiva el tema que estamos proponiendo para nuestra futura investigación reside en configurar jurídicamente a la sociedad cooperativa de producción; y toda vez que el estudio de la sociedad cooperativa se objetiva con el término "producción", debemos comenzar analizando:

- a) si nuestro ordenamiento jurídico recoge esta terminología
- b) en tal caso, cuales son las notas que cualifican a este tipo de sociedad cooperativa.

2.1 La sociedad cooperativa de producción como tipo de organización cooperativa.

El problema de la calificación de la sociedad cooperativa de producción como tipo de organización cooperativa queda enmarcado dentro del más amplio de la clasificación de las sociedades cooperativas, cuyo tratamiento integral excedería con mucho de los límites de nuestro estudio.

(14) En general la doctrina señala que los contratos asociativos son base de organización económica, mientras los de cambio son base de lucha económica. Cfr. por todos AULETTA, G.G. "La comunanza di scopo e la causa nel contratto di società", Riv. dir. civ. 1937, pags. 1-2.

De entre los diversos criterios de clasificación propuestos por la doctrina (15), merece especial relieve el que, atendiendo a la naturaleza económica del objeto social asumido por la sociedad, distingue entre sociedades cooperativas de consumo y sociedades cooperativas de producción, según se trate de una actividad consuntiva o productiva de bienes y servicios (16).

Sin embargo, y aún reconociendo que esta distinción esta en la base de los criterios legales de clasificación, al menos en parte, nos parece a nosotros que más interesante que analizar con detenimiento este u otros criterios clasificatorios (17) es investigar cuales son los tipos legales de sociedad cooperativa, a fin de determinar si la norma contempla a la sociedad cooperativa de producción como categoría específica.

En este sentido, podemos comenzar recordando que el art. 124 del Código de Comercio contenía un esbozo de clasificación de las cooperativas, ya que exceptuaba de su ámbito a las "cooperativas de producción, crédito y consumo" (18).

En realidad, la clasificación contenida en el Código careció de todo

(15) Sobre el tema, LABADESSA, R. "Classificazione delle cooperative", Riv. Coop. 1950, pags. 156-168.

(16) Esta es la clasificación más extendida en la doctrina. Cfr. por todos, SANCHEZ CALERO, F. "Instituciones de Derecho Mercantil", t. I., cit. pag. 242.

(17) Otros criterios pueden ser: el subjetivo, en el que cabe distinguir cooperativas de consumidores, de profesionales en sus diversas vertientes, de trabajadores, etc., el de la naturaleza del interés asumido por la sociedad y así se distinguen entre sociedades de interés general y de interés particular (cfr. NAST, A. "Le regimen juridique des cooperatives". Paris 1919, pag. 69).

(18) Recogido también por el art. 2º de la ley de Asociaciones de 1887.

relieve jurídico, y ello por cuanto ni el propio código aportaba dato para la caracterización de cada una de las cooperativas a las que exceptuaba de su ámbito, ni elevaba a tipo organizativo la sociedad cooperativa incluida en su campo normativo. De ahí, pues, que consideremos que esta clasificación (19) no tiene otro valor que el brindar al interprete un punto de apoyo para considerar que el tipo sociedad cooperativa de producción no fue ajeno, como tipo específico, a los esquemas jurídicos de nuestra evolución legislativa.

Entrando ya en el análisis del ordenamiento vigente, digamos que es el artículo 36 de la ley el que ofrece una clasificación de las cooperativas, enumerando como tipos cooperativos los siguientes: del Campo, del Mar, de Artesanía, Industriales, de Viviendas Protegidas, de Consumo, de Crédito y del Frente de Juventudes (20).

A la vista de esta enumeración, cabría pensar que los criterios utilizados por la norma para la clasificación son:

- a) Uno sectorial, por el que es el sector económico el que determina la calificación de un grupo de cooperativas como tipo autónomo. Este parece ser el criterio seguido con las cooperativas del Campo, del Mar e Industriales.

(19) Clasificación fuertemente influenciada por el criterio de la operación económica realizada por la sociedad.

(20) Terminología esta última que debe entenderse sustituida por la de cooperativas de la Organización Juvenil y Escolares (art. 52 RC).

b) Otro objetivo, en virtud del cual es el objeto social asumido por la entidad el determinante para esta tipificación autónoma. Las cooperativas de Vivienda, Crédito, Consumo y Escolares son las que, en una primera aproximación, parecen responder a este criterio.

Sin embargo, si se pone en relación este intento de sistematizar los criterios clasificatorios (21) con el contenido típico de cada grupo cooperativo, fácilmente se comprueba que en la mente del legislador no estaban presentes ninguno de los dos, con lo que, y en definitiva, la clasificación de las sociedades cooperativas responden a meros criterios de oportunidad.

Por una parte, de haber seguido el criterio sectorial en su integridad - entendido este en relación con los sectores básicos de la economía: agricultura, industrial y servicios - el legislador debería haber hecho referencia a los tres sectores; sin embargo, se aprecia una ausencia absoluta de las cooperativas del sector servicio, - no pudiendo considerar a estas incluidas en las Industriales dado los rígidos términos con lo que las mismas vienen definidas (22), mencionándose por el con

(21) Todavía podría apreciarse un criterio subjetivo en la enumeración de las cooperativas de Artesanía, toda vez que estas vienen definidas como "las que asocian personas que reúnen en sí las cualidades señaladas en la declaración cuarta del Fuero del Trabajo" (art. 39 LC). Sobre el tema, SCAMARDI, A. "Definizione giuridica delle cooperative artigiane. Spunti dottrinari". Riv. Coop. 1961, pags. 224-230, y MOTOS GUIRAO, M. "Aspectos jurídicos de la empresa artesana", en "La empresa artesana y cooperativa a la luz de la doctrina social católica" Madrid 1963, pag. 282.

(22) Dice el art. 40 de la LC que son cooperativas industriales "a las que ..., realizan funciones referentes a las diversas ramas de la industria. Posteriormente, la redacción del art. 48 RC amplió el término al sector servicios.

trario, actividades propias del sector servicios como objeto social de las cooperativas de consumo (23).

Por otra parte, y a pesar de haberse planteado el legislador con imperfección este criterio sectorial, el mismo sirve para recortar funciones que son propias de cooperativas clasificadas con criterios claramente objetivos (24).

Este doble confusionismo clasificatorio, expresivo de una ausencia de criterios claros, provoca, entre otros hechos, el que:

- a) Cooperativas del Campo puedan tener como objeto el crédito, no obstante existir cooperativas de Crédito (25).
- b) Cooperativas del Mar puedan ejercer sus funciones en el sector industrial marítimo (26) no obstante la existencia de Cooperativas Industriales.

- (23) Así se desprende de la lectura de los apartados b), c) y d) del art. 50 de la LC, que dicen que las cooperativas de consumo podrán adoptar las formas de: b) "De servicios diversos, como restaurantes, enseñanza, transportes y otros similares, c) De suministros especiales, tales como agua, luz y alcantarillado, d) Cooperativas sanitarias para socorros, asistencia médico-farmacéutica, hospitalización y enterramiento". Por otra parte estos servicios habrán de destinarse al consumo o uso de los asociados o sus familiares, ya que de otra manera no pueden calificarse de consumo, y serían en algunos casos, como veremos infra, cooperativas industriales.
- (24) Funciones de crédito en las cooperativas del campo (art. 37, 1ª LC), consumo de "abonos, plantas..." en las del campo (art. 37, 2ª LC).
- (25) Cfr. BAYON MARINE-SERRANO ALTAMIRAS, op. cit. pag. 54.
- (26) Dice el art. 38 de la LC "Son cooperativas del Mar las que tengan por objeto... propulsar cuanto se refiere a las industrias marítimas y derivadas".

Ahora bien, independientemente de esta defectuosa clasificación, lo que nos interesa resaltar aquí es que, mientras la norma considera relevante para la calificación del tipo cooperativo las actividades de consumo y crédito, guarda silencio respecto a la producción, por lo que esta no genera un tipo especial cooperativo.

Esta primera aproximación requiere ser matizada, no obstante, ya que nuestro ordenamiento jurídico brinda algunos supuestos en los que expresamente se utiliza el término producción referido a una cooperativa, deviniendo así necesario la investigación del alcance de estas disposiciones.

De entre estas disposiciones unas están contenidas en lo que, y a los solos efectos instrumentales, podemos denominar ordenamiento cooperativo; las otras se encuentran contenidas en sectores diversos.

Como el sentido de cada una de ellas es distinto para la construcción del tipo cooperativo objeto de nuestro estudio, vamos a examinarlas por separado, para terminar respondiendo a la cuestión planteada de si en nuestro ordenamiento jurídico la cooperativa de producción es un tipo cooperativo especial.

2.1.1 La delimitación del concepto en el ordenamiento cooperativo.

El artículo 48 del recientemente aprobado Reglamento de Cooperación (RC) establece: "A los efectos de clasificación y encuadramiento, dentro de las cooperativas industriales, se diferenciarán las que asocien comerciantes, industriales y profesionales para la realización de servicios o actividades tendentes al mejoramiento técnico y económico de las explotaciones de los socios, y las que asocien trabajadores para la producción de bienes y servicios".

La redacción de este artículo es ciertamente confusa, y exige del interprete una tarea de depuración previa de los términos utilizados; en los que, por otra parte, se entremezclan elementos de matiz sociológico, económico y jurídico.

En principio, de la lectura del artículo se puede obtener un doble criterio clasificatorio:

a) Uno subjetivo, por el que las cooperativas industriales quedan clasificadas en dos grupos, según la naturaleza de los sujetos que intervengan en su constitución.

b) Otro objetivo, por el que, entendiendo la producción en su más estricto sentido económico - esto es, como operación que genera bienes y servicios para un mercado -, la misma puede estar presente tanto en las cooperativas industriales formadas por comerciantes, industriales o profesionales como en la formada por trabajadores.

Relacionando ambos criterios, podemos obtener una primera conclusión: si el término producción queda referido en nuestro ordenamiento jurídico a la operación económica descrita, es posible, como hipótesis de investigación, afirmar que hay dos clases de cooperativas de producción industrial:

- las formadas por comerciantes, industriales y profesionales,
- las formadas por trabajadores.

2.1.1.1 Las cooperativas industriales de producción formadas por comerciantes, industriales y profesionales.

Examinando el primer inciso del art. 48 del RC se puede sostener

que para la calificación de una sociedad cooperativa como industrial de producción constituida por comerciantes, industriales y profesionales, se requieren los siguientes presupuestos legales:

- a) Que las personas que vayan a asociarse realicen una actividad que permita calificar a las que lo ejercen como comerciantes, industriales o profesionales.
- b) Que las personas asociadas destinen la actividad de la sociedad cooperativa al mejoramiento técnico y económico de sus explotaciones.

Analicemos por separado cada uno de los presupuestos exigidos por la norma.

a) Presupuestos subjetivos

Acabamos de señalar que la norma dispone, como primer requisito subjetivo, el que los socios sean comerciantes, industriales o profesionales.

El problema interpretativo de este presupuesto se centra en delimitar si el legislador utiliza las antecitadas expresiones con un sentido jurídico, o por el contrario las relaciona con simples acepciones sociales o económicas, expresivas de la pertenencia de unos sujetos a una determinada categoría social.

Con este planteamiento se hace necesario analizar, en primer lugar, si los conceptos cuestionados tienen relevancia jurídica, y en segundo lugar, y si la tienen, cual es.

Con respecto al término comerciante, la mejor doctrina (27) enseña

(27) GARRIGUES, "Curso..." cit. pag. 198

que hay que distinguir entre el concepto vulgar o económico, y el jurídico. El primero - dice GARRIGUES (28) - se funda en el dato social de la profesión de vida de una persona, entendiéndose por tales a quienes hacen del comercio su profesión; el segundo, por el contrario, atiende directamente a los efectos jurídicos de la actividad mercantil, entendiéndose en este sentido por comerciante quien personalmente adquiere los derechos y obligaciones que se producen en la actividad mercantil (29), pudiendo referirse tanto a un comerciante individual, cuanto a una compañía o sociedad mercantil (30).

Con respecto a la segunda de las acepciones utilizadas, digamos que el término industriales es, fundamentalmente, de naturaleza económica, aunque no es por completo ajeno a los esquemas del ordenamiento positivo español.

En su sentido económico industrial hace referencia al sujeto que ejerce una industria, teniendo la industria, a su vez, un doble significado; uno, estricto, que equivale a actividad transformadora de materias primas en bienes intermedios o finales, actividad típica del sector secundario o Industria (31); otro que hace referencia, por degenera-

(28) Op. y loc. ult. cit.

(29) GARRIGUES, ibidem.

(30) Vid. arts. 1º, 2º, 3º, 4º y 116 del código de comercio.

(31) Sobre el tema CLARKC, "Las condiciones del progreso económico", t. 2º, Madrid 1971, pags. 352 y ss.

ción de la aceptación anterior, al ejercicio de cualquier actividad económica, sea cual fuere el sector económico. Este doble sentido de industria provoca, en consecuencia, un doble significado del "industrial": sujeto dedicado a una actividad de Industria, o sujeto dedicado a una actividad meramente económica.

Moviéndonos en el plano jurídico, encontramos en diversas normas de naturaleza fiscal base para delimitar el concepto de industrial, ya con referencia a una persona física, ya jurídica.

Con referencia a las personas físicas, podríamos señalar que industriales son aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales (32). Este impuesto - corrientemente denominado Impuesto Industrial - toma como objeto imponible (33) el ejercicio de cualquier actividad de comercio, industria, arte u oficio basándose en la presunción de que se obtiene un beneficio por el simple ejercicio de una actividad (34).

Con referencia a las personas jurídicas, podríamos calificar como sociedades industriales aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales en su forma de Licencia

(32) Vid. arts. 61 a 67 de la Ley de Reforma Tributaria de 11-6-1964 y Texto Refundido sobre el impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, aprobado por D. el 29-12-1966 (BOE. 6-2).

(33) Este impuesto tiene dos formas: de Licencia Fiscal y cuota de Beneficios; el objeto imponible señalado corresponde al primero, que es impuesto a cuanta del segundo, y que grava los rendimientos obtenidos.

(34) FUENTES QUINTANA, E. "Sistema Fiscal", fasc. II, Madrid 1970, pag. 201.

Fiscal, y del Impuesto sobre Sociedades, cuyo objeto imponible es, en este último, los rendimientos obtenidos del ejercicio de una actividad de comercio, industria, arte u oficio no exceptuado expresamente del gravamen (35).

Por otra parte, y trasladándonos desde el plano del Derecho Fiscal al Derecho de Trabajo, podemos entender por industriales aquellos empresarios que ejercen una industria donde se presta trabajo por cuenta ajena (36).

Si los términos hasta ahora propuestos tienen un alcance relativamente restringido, por cuanto toman como elemento de referencia algo tan concreto como es el ejercicio de una actividad comercial o industrial, el último - esto es, el profesional - es tan sumamente amplio, que dificulta, en buena medida, cualquier intento de referirlo a un dato concreto.

Jurídicamente, y tomando como punto inicial de la delimitación el de que por actividad profesional se entiende cualquier actividad humana creadora de utilidad social (37), podemos calificar a los profesionales como aquellas personas que viven habitualmente del fruto de su trabajo (38).

(35) Ministerio de Hacienda "Los Impuestos en España", 3ª edic. Madrid 1969, págs. 169 y 333.

(36) Cfr. art. 5º de la LCT.

(37) BORRAJO DACRUZ, "Introducción...", cit. pag. 23.

(38) BORRAJO, op. y loc. ult. cit.

En el ordenamiento fiscal, este concepto de profesional viene recortado, y con tal denominación se entiende aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre Rendimientos de Trabajo Personal (39), cuyo objeto imponible provenga de un trabajo personal preponderantemente, pero para cuya obtención haya sido necesario una cierta participación del capital o incluso la colaboración del trabajo o servicios de otras personas (40).

Concretamente, la norma fiscal somete al régimen tributario de los profesionales a los siguientes sujetos:

- a los que realicen funciones públicas y no perciban directamente haberes del Estado, Provincia, Municipio o Corporación de Derecho Público (41).

- Los que no estando comprendidos en el supuesto anterior, realizan un trabajo independiente (42).

(39) Vid. arts. 40 y ss de la ley de reforma del sistema tributario. O. M. de 27-1-1958 (BOE 18-2) que aprueba la Instrucción Provisional para el Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo Personal y la Tarifa de Licencia Fiscal; D. 512/67 de 2-3 (BOE 21-3) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Impuestos sobre Rendimientos de Trabajo Personal.

(40) De ahí que FUENTES QUINTANA (op. cit. pag. 190) señale que la actividad del profesional, desde el punto de vista del ordenamiento fiscal, se colorea con un matiz empresarial, que justifica precisamente el régimen tributario especial para estos.

(41) En este grupo quedan incluidos Notarios, Registradores, etc. (MINISTERIO DE HACIENDA, "Los Impuestos...", cit. pag. 107 y ss).

(42) La norma menciona en este grupo a los arquitectos, aparejadores, médicos, etc. (MINISTERIO DE HACIENDA, op. y loc. cit.).

A su vez, el término "profesionales" adquiere un sentido más riguroso y preciso cuando se le adjetiva con el término libre, dando lugar así a los denominados "profesionales libres": concepto que, despojado de acepciones clásistas, académicas o corporativas, viene a expresar la actividad desarrollada por aquellos sujetos que ofrecen sus servicios al mercado libre, generando relaciones con clientes que asumen la posición jurídica de arrendatarios, y sin entrar por ello en el círculo organizativo de aquellos (43).

Delimitados los posibles sentidos de los conceptos utilizados por el legislador en el artículo 48 del RC, nos corresponde ahora interpretar cual de entre ellos es el acogido por la norma.

En este orden de cosas, comencemos señalando que la exigencia de que en un tipo cooperativo los sujetos asociados ostenten una categoría jurídica determinada, no está ausente de la legislación cooperativa, ya que para ser socio de una Cooperativa de Artesanía se exige la condición jurídica de Artesano (44).

De este dato, se deduce que, si el legislador hubiera deseado conectar las nociones utilizadas en el art. 48 RC con los efectos jurídicos que de las mismas derivan, lo hubiera realizado de una forma expresa; de ahí que, ante esta ausencia se puede concluir que el alcance de estos conceptos es puramente económico.

(43) DE LA VILLA GIL, "Derecho del Trabajo..." cit. pag. 90.

(44) Cfr. art. 39 de la LC; sobre el concepto de artesano, MOTOS GUIRAO, op. cit. pags. 263 y ss.

Esta postura del legislador, criticable desde el punto de vista de técnica legislativa, se comprueba, de forma clara, en los dos primeros supuestos.

Efectivamente, si se considerase que la noción de comerciante se está empleando en su más estricto sentido jurídico, habría que concluir con que no solamente la de industrial sería ociosa por redundante, sino además que quedarían excluidas del régimen cooperativo aquellas personas, bien físicas bien jurídicas, que realizasen actos no comprendidos en la órbita del Derecho Mercantil; dándose la paradoja que en una sociedad, cuyo elemento definidor es la ausencia de fin de lucro (45), solo se permitiría asociarse a aquellas personas que hacen de aquel fin su profesión.

A la vista pues de las consecuencias tan contradictorias que la interpretación de los términos cuestionados supondría, no queda otra alternativa que reconocer, que, cuando el legislador utiliza las nociones de comerciantes e industriales las está refiriendo al ejercicio de las siguientes actividades económicas:

- a la actividad de comercio, entedida como actividad de compra de bienes y productos para su venta, abstracción hecha de sí esa actividad es o no jurídicamente mercantil, y sin que la persona que intervenga en la mediación realice funciones de transformación de los productos comprados.

(45) Cfr. art. 1º LC y art. 1º, 1 y 2 del RC. Sobre el significado del lucro en las sociedades cooperativas de producción, cuanto se diga supra.

- a la actividad deindustria, entendida tanto en su estricto sentido de actividad transformadora de materias primas en productos intermedios o bienes finales, cuanto en su más amplio de actividad encaminada a la prestación de servicios.

Y todo ello sin olvidar que ambas actividades quedan limitadas dentro de los sectores económicos secundario y terciario (46).

Respecto a la tercera de las acciones cuestionadas, su interpretación no puede ensayarse de forma aislada, sino que ha de realizarse poniéndola en íntima relación con todo el sentido del artículo 48 del RC.

En este artículo se establece por una parte, que la cooperativa industrial constituida por comerciantes, industriales y profesionales destina su actividad al mejoramiento técnico y económico de las explotaciones de los socios, y por otra, que se configura como un tipo especial de cooperativa industrial la constituida por trabajadores.

Integrando estos dos datos normativos en la noción de profesional, podemos obtener las dos siguientes conclusiones:

- que aquel concepto de profesional como sujeto que vive habitualmente de los frutos de su trabajo no puede acogerse, ya que de hacerlo quedarían identificados los términos trabajador y profesional (47) y con ello sin contenido el segundo de los tipos que

(46) Y ello por que las cooperativas industriales son contempladas por la ley en contraposición a las del Campo, de ahí que acertadamente POLO DIEZ, A. ("Misión y sentido de la nueva ley de Cooperación", Rey, Der. Pri, 1942 (referencia a Separata, imp. Galo Saez) pag. 120) califique a las cooperativas industriales como de "ciudad".

(47) A través de la noción de trabajador profesional; vid. al respecto BORRAJO DACRUZ, op. yloc. ult. cit.

la norma configura,

- que si la actividad de la cooperativa se destina al mejoramiento de las explotaciones de los socios, se está exigiendo, como presupuesto previo, que estos tengan una explotación susceptible de ser mejorada; o lo que es lo mismo, a la organización que crea la cooperativa industrial se superpone la propia de cada uno de los socios, por muy rudimentaria que esta sea.

Estas dos conclusiones permiten sostener, que cuando el legislador emple al término profesional lo está adjetivando con la expresión libre, dando así a esta noción un contenido jurídico del que carecen las restantes ya analizadas.

En definitiva, y como conclusión general de este primer presupuesto subjetivo, se puede señalar que el legislador ha procedido a individualizar los sujetos que pueden formar parte de este tipo de sociedad cooperativa; individualización concorde con el carácter de sociedad personalista que la cooperativa tiene (48), pero sin que la misma afecte sustancialmente a la naturaleza del tipo.

b) Presupuestos mutualistas

Al estudiar la configuración económica de la empresa cooperativa de producción señalamos que parte de la doctrina científica proponía, como criterio diferenciador de esta empresa, el de la mutualidad; mutualidad que para nosotros tenía una doble proyección: económica y jurídica;

(48) CHIDINI, M. "Cooperativa e società", Temi, 1952, pg. 189.

la primera entendida como atributo de la empresa, y la segunda de la sociedad, esto es de la forma jurídica adoptada por el empresario cooperativo.

Ahora, se hace necesario analizar el alcance del principio mutua-
listas en el tipo cooperativo questionado ya que el legislador le da
entrada al establecer en el artículo que estamos comentando que la ac-
tividad de la cooperativa se destinará "al mejoramiento técnico y econó-
mico de las explotaciones de los socios".

La investigación jurídica del principio mutualista aplicado a las
sociedades cooperativas ofrece un doble plano:

- uno encaminado a delimitar su concepto.
- otro dirigido a configurar su contenido.

Refiriéndonos al primero de los temas propuestos, y recordando bre-
vemente lo señalado en otro lugar (49), digamos que la mutualidad viene
entendida como una especial relación entre actividad de la entidad en
la que el principio se incardina, y participación de los socios en esa
actividad, quedando esta limitada al círculo de los sujetos componentes
de la sociedad mutualista (50).

El principio mutualista, así entendido, tiene jurídicamente una se
rie de efectos, entre los que resalta la especial posición contractual

(49) Cfr. pags. 115 y ss.

(50) Sobre el tema MINERVINI, G. "Società mutualistiche", Riv. trim.
dir. proc. civ. 1947, pags. 683-691; MESSINEO, F. "Di nuovo su co-
operative e utili sociali", Riv. dir. comm. 1949, I, pags. 470-478;

en que quedan socios y sociedad en orden a las prestaciones y contraprestaciones de carácter obligacional (51).

Este efecto se manifiesta y materializa en la exclusividad de las prestaciones realizadas entre socios y sociedades; exclusividad que puede configurarse de forma más o menos rígida: del socio con la sociedad, de la sociedad con el socio, o de ambos a la vez (52).

Trasladando estas nociones al plano concreto del tipo de sociedad cooperativa que estamos estudiando, se puede afirmar:

- que el concepto de mutualidad acogido por el legislador es el expuesto por nosotros, ya que la actividad de esta cooperativa

VERRUCOLI, P. "Osservazioni sul carattere delle società cooperative", Nuova Riv. dir. comm. delle Econ. e soc. 1949, I, Pags. 196-202; GRAZIANI, A. "Società cooperativa e scopo mutualistico", Riv. dir. comm. 1950, I, pags. 276-286; PAROLI, A. "Ancora sulle scopo mutualistico degli enti cooperativi", Riv. coop. 1950, pags. 426-428 ROMANO-PAVONI, G. "Osservazioni sulle società costituite per scopo mutualistico e per scopo di consorzio", Riv. dir. ind. 1953, pags. 109-130; ASCARELLI, T. "Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazini e società", Riv. trim. dir. e proc. civ. 1953, I, pags. 327 y ss; SIMONETTO, E. "Società e mutualità", Riv. dir. civ. 1964, I, pags. 400-426.

(51) Para GHIDINI (op. cit. pag. 190) este es el concepto de mutualidad; a nosotros nos parece que es efecto simplemente.

(52) Cfr. GHIDINI, op. y loc. cit.

queda limitada al círculo de los socios (53).

- (53) Para ASCARELLI, ("Cooperativa e società, Concettualismo giuridico e magia delle parole", Riv. delle soc. 1957, pag. 419) la mutualidad es "propriadamente un fenómeno de organización de categoría y encuentra en esta premisa su significado y alcance. En la doctrina española esta ha sido la postura defendida por GARCIA PADRON, M. ("Las sociedades cooperativas en el derecho privado español", Santa Cruz de Tenerife, 1971, pags. 109-110) cuando señala que estas (las cooperativas) sirven no solo a los socios, sino también al grupo social de que forman parte, o mejor, a los restantes componentes de dicho grupo", (subrayado mío). Esta opinión no podemos aceptarla ni doctrinal ni positivamente.

Doctrinalmente es insostenible el decir que la sociedad cooperativa es un fenómeno de organización de una preexistente comunión de intereses, por cuanto si bien es cierto que la comunidad de intereses puede existir antes de la constitución de la sociedad, normalmente la identidad surge como efecto de la creación de la organización colectiva, con lo que, y como señala FERRI ("La cooperativa come società", Riv. delle soc. 1957, I, pag. 257) la mutualidad actua no sobre la pertenencia a la categoría, o al grupo social, sino sobre la pertenencia a la sociedad.

Legalmente, por otra parte, para conjugar la naturaleza jurídica de la cooperativa como organismo de categoría con el fundamento contractual sería necesario acudir, como apunta OPPO ("L'essenza della società...", cit. pags. 371-372) a la configuración del acto constitutivo de la sociedad como un contrato a favor de tercero o como un contrato que "con uno u otro mecanismo confiera a los componentes del grupo el derecho a participar en la sociedad o les convierta en beneficiarios, en sentido jurídico, del resultado contractual". Teniendo en cuenta esto, y supuesto que la condición de socio se adquiere no perteneciendo al grupo, sino única y exclusivamente mediante las aportaciones correspondientes, y supuesto que la mutualidad reside precisamente en que la ventaja económica de la actividad de la cooperativa se destina a los socios, no se comprende como los miembros del grupo "pueden participar indirectamente de las ventajas de la cooperativa (GARCIA PADRON, op. y loc. cit.) por el mero hecho del "efecto reflejo de la norma jurídica" (ibidem). Llegados a este punto tendríamos que concluir que cual quier actividad económica beneficia indirectamente al grupo social, o, reduciendo al absurdo, a la comunidad social íntegramente; lo realmente relevante no es que sociológicamente exista una identidad de intereses entre los miembros de una categoría, que carece de interés jurídicamente, sino que la tutela legal se actue no sobre el grupo sino sobre los socios (en el mismo sentido OPPO, op. cit. pag. 370).

- que del contenido de la norma se desprende que el efecto de exclusividad anteriormente citado se configura tanto respecto de las prestaciones de la sociedad con los socios (54) cuanto de estos con aquella de forma que la actividad de la cooperativa se limita a los socios, únicos destinatarios y beneficiarios del ejercicio del objeto social (55).

Expuesto el alcance y sentido de los presupuestos provisionalmente considerados como básicos para la configuración jurídica de este ti-

(54) Estatutariamente pueden establecerse sanciones, caso de incumplir los socios esta exclusividad.

(55) El determinar las funciones económicas que puede asumir este tipo de sociedad cooperativa plantea un problema de interpretación normativa, ya que:

- por una parte, el art. 40 de la LC define a las cooperativas industriales en general como las constituidas para "realizar funciones referentes a las diversas ramas de la industria", dando así a entender que el sentido del término industrial debe ser el de actividad transformadora de materias primas en bienes intermedios o finales.

- por otra, el art. 48 del RC dice que las actividades de las cooperativas industriales constituidas por comerciantes, industriales o profesionales son "servicios...", término este que parece identificarse con el sector económico del mismo nombre.

Planteado así el tema, hay que optar por una de estas dos soluciones:

a) Que el término industria del art. 40 de la LC es perfectamente inservible para clasificar sectorialmente a las cooperativas, y en consecuencia las cooperativas industriales pueden actuar en cualquier sector económico, abstracción hecha del agrícola y marítimo.

b) Que necesariamente la actividad de estas cooperativas ha de limitarse al sector industria, con lo cual, además de resultar vacío el término servicios, quedan sin contenido numerosos supuestos de asociación de comerciantes, industriales del sector servicios y profesionales (piense en una cooperativa que tenga por objeto prospecciones de mercado, distribución de mercancías a clientes,

po de sociedades cooperativas, ocurre plantearse, y resolver, si efectivamente estos actúan o no como criterios básicos de la delimitación conceptual del tipo.

En este orden de cosas, y entrando en el primero de estos presupuestos, hay que señalar que la llamada del legislador a unas categorías subjetivas es jurídicamente irrelevante.

Cierto que dijimos que el término profesional tenía un matiz jurídico, y que con el se estaba haciendo referencia a unos sujetos determinados; sin embargo, si pensamos por una parte que este tipo de cooperativas se construye en contraposición a la que asocia trabajadores, y por otra que los términos comerciante e industrial contemplan no el status personal de esos sujetos, sino la actividad económica que realizan, fácilmente se colige que criterio unificador de esta cooperativa no es la pertenencia de los asociados a una categoría.

Dicho de otro modo, la categoría subjetiva no es elemento homogéneo de esta cooperativa, ya que en unos supuestos la referencia se hace no respecto del sujeto, sino de la actividad económica ejercida por el sujeto, independientemente de que goce o no del status jurídico correspondiente.

En consecuencia hay que buscar otro elemento que sirva al tiempo que para unificar esta cooperativa, para delimitarla del segundo de los ti

etc. actividades excluidas del sector industria, pero que tienden a prestar un servicio que mejora la explotación de los socios.

La solución no puede ser sino la primera, con lo que viene a poner de relieve la inoperancia de la calificación de estas cooperativas como industriales.

pos regulados por el art. 48 RC.

En este sentido, se ha señalado que el efecto de exclusividad de las prestaciones, propio del principio mutualista, se concreta en que la actividad de la cooperativa ha de destinarse a los socios.

Ahora bien, la norma apostilla estableciendo que esa actividad ha de destinarse al mejoramiento técnico y económico de las "explotaciones de los socios", con lo que está introduciendo el dato clave en la búsqueda de este elemento unificador.

Efectivamente, el legislador no solamente exige que las ventajas económicas se limiten al círculo de los socios, sino que exige que se destinen a "sus" explotaciones, tomando como presupuesto previo la existencia de esa explotación (56).

Es precisamente este elemento el que sirve para unificar las cooperativas industriales de producción formadas por comerciantes, industriales y profesionales, para delimitarlas de aquellas otras formadas por trabajadores.

2.1.1.2 Las cooperativas industriales de producción formadas por trabajadores.

El segundo de los tipos de sociedades cooperativas industriales a que hace referencia el artículo 48 del RC es el que ~~Q~~asocia trabajadores

(56) Explotación entendida como conjunto de actividades económicas que componen una industria, un comercio, un negocio, una organización empresarial en suma, en sentido cualitativo y no cuantitativo.

para la producción de bienes y servicios".

De los términos utilizados por el legislador, y en una primera aproximación, podríamos señalar que presupuestos básicos y delimitadores de esta cooperativa industrial son los dos siguientes:

- la asociación de trabajadores
- la producción de bienes y servicios.

Un análisis de cada uno de estos dos presupuestos nos obliga a rechazar como elementos delimitadores cualquier de los citados.

Con respecto al segundo de estos criterios tipificadores su inoperancia para actuar como tal nos viene dada si recordamos que entendiendo la producción en su sentido económico más amplio, - esto es como actividad generadora de bienes y servicios para un mercado - , tanto en este tipo cooperativo como en el analizado en el apartado anterior se realizan funciones productivas.

Ciertamente que se podría aducir en contra, que mientras en el supuesto primeramente contemplado se produce una limitación cualitativa del mercado receptor de la actividad productiva (57), - limitación operada por la inserción del principio mutualista en este tipo cooperativo -, en el analizado ahora la limitación del mercado no opera más que a efectos estrictamente funcionales; sin embargo, esta diferencia no es relevante

(57) Notese que esta limitación es meramente cualitativa, ya que cuantitativamente, en línea de principio, no cabe apreciar reducción alguna.

te para elevar a criterio tipificador la producción (58).

Tampoco el primero de los presupuestos delimitadores puede acoger se como criterio diferencial básico; bastando para ello contemplar la literalidad del precepto.

La noción de trabajador es jurídicamente beligerante, en la medida en que su concepto queda delimitado por referencia a cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico: el laboral (59), el de seguridad social (60), el fiscal, el penal, el constitucional (61), etc.

Ello supone que cada noción de trabajador será válida en tanto en cuanto se encuentre incluida en alguno de los núcleos de imputación de los sectores citados.

Por el contrario, el legislador del ordenamiento cooperativo habla llana y simplemente de trabajador, sin ofrecer ningún contenido jurídico concreto.

(58) Algún autor (cfr. ASCARELLI, "Cooperativa e società...", cit. pag. 400 y 418) pretende dar relieve jurídico a esta diferencia, señalando que en el primer supuesto el beneficio derivado de la actividad de la cooperativa se adquiere directamente por el socio, sin necesidad de que intervengan la sociedad. En contra, y acertadamente, SCORDINO ("La società...", cit. pag. 43).

(59) Cfr. art. 1º y 2º y 4º de la LCT.

(60) Cfr. art. 61 Ley 21-4-1966.

(61) Cfr. D.I, 1 y 2, II, 1 del FT.

A mayor abundamiento, no solamente el término trabajador acogido por el artículo 48 carece de contenido jurídico, sino que tampoco se puede ensayar con respecto a él la noción jurídica general de trabajador; esto es, la que considera como tal a cualquier sujeto de viva habitualmente de los frutos de su trabajo (62), ya que de hacerse así mal se podría buscar la diferencia entre esta noción de trabajador, delimitadora del tipo cooperativo contemplado, y las anteriormente dadas no solamente de profesional, sino incluso de comerciante e industrial, nociones que en la práctica pueden reconducirse a las de trabajadores por cuenta propia, y como tal trabajadores (63).

De ahí que de nuevo tengamos que rechazar la relevancia jurídica de esta categoría y buscar fuera de ella el criterio delimitador de este tipo cooperativo.

Los índices básicos para la investigación de este criterio nos vienen suministrados por las conclusiones adoptadas al configurar el tipo de cooperativa industrial formada por comerciantes, industriales y profesionales.

Si entonces señalamos la necesidad de objetivar las categorías subjetivas mencionadas por el legislador, reconduciendo estas no al status jurídico sino a la actividad ejercida por los componentes de la cooperativa,

(62) Cfr. BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, "Manuel...", cit. pag. 14 y BORRAJO DACRUZ, "Introducción...", cit. pag. 33.

(63) Trabajador profesional; cfr. BORRAJO, op. y loc. cit

ahora también podemos concluir en que lo relevante para la tipificación de este tipo cooperativo es no el status del trabajador, sino la actividad por este ejercida, esto es el trabajo, actividad humana creadora de utilidad social (64).

Si conectamos esta conclusión con la obtenida en el tipo cooperativo anteriormente analizado, - esto es, la referente a que el fin de la asociación venía constituido por el mejoramiento técnico y económico de las explotaciones de los socios -, fácilmente se comprende que lo que realmente está realizando el legislador es regular el supuesto de asociación de trabajo.

Con esta interpretación queda orillada la dificultad de dar contenido jurídico al término trabajador, como si se tratase de categoría diversa a la de comerciante, industrial o profesional, al mismo tiempo que quedan perfectamente delimitados los dos tipos de cooperativas industriales.

Como notas comunes de ambos tipos quedan la de dedicarse a una actividad productiva, y la de limitarse esta actividad a los sectores económicos industria y servicios.

Como notas diferenciales y tipificadoras, la de ~~que~~ en un supuesto la motivación de la asociación, reconocida y tutelada por la norma, es

(64) BORRAJO, op. y loc. cit.

la asociación de capital, o más concretamente de titulares de organizaciones empresariales (65), mientras que en el otro, la motivación de la asociación, reconocida y tutelada igualmente por la norma es el trabajo; o lo que es lo mismo, en este segundo supuesto los sujetos que se asocian asumen la obligación de prestar un trabajo de forma personal y directa (66), con lo que y a diferencia del primer tipo en el que la asociación podía ser tanto de personas físicas como de jurídicas (67), en el contemplado ahora, y debido al carácter personalísimo de la prestación de trabajar (68), solo pueden asociarse personas físicas (69).

(65) De ahí que con esta interpretación se pueda afirmar que todos aquellos profesionales libres cuando se asocian no para el mejoramiento de sus explotaciones - sobre el carácter empresarial de estos profesionales, vid. nota 40 - sino para la prestación de un trabajo, la cooperativa deba calificarse dentro del segundo tipo. Sobre el tema, LANZA, A. "una cooperativa fra proffessionisti", Riv. delle Soe. 1954, pags. 1069 y ss.

(66) Vid. Sección II de este Cap.

(67) La posibilidad de que se asocien personas jurídicas puede durarse respecto al supuesto de asociación de profesionales; ahora bien, si tenemos en cuenta que las personas jurídicas pueden realizar actividades profesionales, y que la norma cooperativa no da relevancia jurídica a los sujetos, nada impide afirmar que varias empresas que realicen actividades de las denominadas profesionales puedan asociarse cooperativamente.

(68) Cfr. sobre el carácter personalísimo de la prestación de trabajo, BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, "Manual...", cit. pag. 517; ALONSO GARCIA, "Curso..." cit. pag. 435 DE LA VILLA GIL, "Derecho...", cit. pag. 276.

(69) Cfr. ALONSO OLEA, "Derecho...", cit. pag. 14.

2.1.2. La delimitación del concepto fuera del ordenamiento cooperativo.

Señalabamos anteriormente (70) que las referencias legales a la sociedad cooperativa de producción se encontraban esparcidas en disposiciones de naturaleza varia.

En consecuencia, y aceptando la intercomunicabilidad entre las normas de los diversos sectores del ordenamiento jurídico (71), se hace necesario investigar si la noción de sociedad cooperativa de producción suministrada por la legislación cooperativa es la de general aplicación, o por el contrario puede sostenerse, a través de una labor de hermeneusis, que aquella noción queda restringida a alguno de los tipos de cooperativas industriales ya analizado, o ampliada a alguna de las restantes clases de sociedades cooperativas.

En este sentido, las normas a analizar se encuentran en las disposiciones que regulan el régimen fiscal de las cooperativas y el Sistema de Seguridad Social de los socios cooperadores de cooperativas de producción.

2.1.2.1 La noción de cooperativa de producción y la normativa fiscal.

El texto refundido de la Contribución sobre las Utilidades de la

(70) Pags. 162 y ss.

(71) Resultado de entender el ordenamiento jurídico en sentido unitario; sobre el tema, GUASP. "Derecho", cit. pags. 385 y ss.

Riqueza Mobiliaria de 22 de septiembre de 1922 (72) eximía de la Tarifa III (73) a las cooperativas de las clases obreras de crédito, de producción o de consumo cuando, tratándose de cooperativas de producción, "no empleen de un modo permanente otras fuerzas de trabajo que las de sus mismos cooperadores".

Independientemente de las condiciones exigidas para que este tipo de cooperativas quedasen excluidas de la contribución a la Tarifa III (74) interesa resaltar que la norma fiscal, al efectuar la exención, partía de los siguientes presupuestos previos;

- que la producción, como actividad, genera un tipo cooperativo especial (75)
- que, como resultado de lo anterior, las cooperativas de producción podían ser tanto asociaciones de capital (76) cuanto asociaciones trabajo.
- que en el segundo de los supuestos, la cooperativa de producción recibía la denominación de obrera.

(72) Sobre la evolución del régimen fiscal de las cooperativas españolas" Vid. bibliografía, cit. nota 123 a pag. 52.

(73) Número 4 de las disposición tercera de la Tarifa III.

(74) El antecedente más inmediato de este precepto se encuentra en el apartado a) del art. 4º de la Tarifa III de la ley de 27-3-1900.

(75) Recuerdese la clasificación del art. 124 del Código de Comercio y la del art. 1 par. 2 de la ley de Asociaciones.

(76) Conclusión plenamente concordante con la inexistencia de un derecho necesario que regulase las sociedades cooperativas; sobre el tema vid. pags. 39 y ss del Cap. I.

Ahora bien, como las cooperativas de producción formadas por la asociación de capital no venían reguladas por norma alguna (77) legalmente se había producido una identificación conceptual entre cooperativas de producción y cooperativas obreras; o más concretamente, entre cooperativas de producción y cooperativas de asociación trabajo.

Esta identificación conceptual entre ambos supuestos se mantuvo, al menos a nivel terminológico, hasta el Estatuto Fiscal de las Cooperativas de 13 de mayo de 1969 (78).

El artículo sexto de esta disposición establece cuales, de entre las entidades cooperativas, habrán de tener la consideración de protegidas a efectos fiscales, mencionando en su apartado c)

"Las cooperativas de producción industrial, compuestas por trabajadores que actúen por sí mismos con su personal trabajo, de carácter preponderantemente manual, en el proceso productivo a que dediquen su actividad".

Para determinar el alcance que en la delimitación del concepto de sociedad cooperativa de producción ofrece este precepto, hay que partir de dos datos básicos:

(77) La norma contemplaba algunos supuestos de asociación de capital, como los Sindicatos Industriales o Mercantiles (R.D. 31-7-1915, Gaz. 1-8) asociaciones constituidas por industriales o comerciantes (art. 1º); sin embargo, y dado que el fin de estos sindicatos era el de afianzar "mediante la cooperación entre los asociados y la mutualidad de responsabilidad entre los mismos, el crédito de cada uno de ellos" (art. 6º), quedaban excluidos del ámbito de las cooperativas de producción.

(78) BOE 13-5.

- a) el artículo comentado es el heredero directo de la legislación sobre cooperativas obreras de producción (79).
- b) El Estatuto Fiscal de las cooperativas es, cronológicamente, anterior a la publicación del nuevo Reglamento de Cooperación, estando vigente en aquel entonces el de 1943, que no mencionaba en ningún precepto ni la sociedad cooperativa de producción, ni la "Obrera".

Planteado así el tema, el alcance del precepto que comentamos habrá que investigarlo por un doble orden de adecuaciones legales: la del Estatuto respecto a la normativa del 43, y la del Reglamento de 1971 respecto a la del Estatuto.

La primera adecuación, de carácter puramente terminológico, la llevo a efecto el Estatuto Fiscal suprimiendo el término cooperativa obrera de producción, inexistente en los esquemas clasificatorios de la legislación cooperativa (80), sustituyéndole por el de "industrial", única categoría de las legales que podía ser acogida, dados los criterios de clasificación sectorial adoptados por la ley (81).

Con esta adecuación, el concepto de cooperativa de producción se identificaba, no ya tan solo con el de cooperativas de asociación trabajo, sino con el del sector económico industrial.

(79) Cfr. DEL ARCO ALVAREZ, J.L. "Régimen fiscal de las cooperativas", Madrid 1969, pag. 77, Vid. también apar. c) art. 3º del D. de 9-4-1954 (BOE 1-6).

(80) Vid. art. 36 LC y arts. 42-44 RC de 11-11-1943.

(81) Cfr. pags. 159 y ss.

La segunda adecuación resultaba obligada, ya que si la norma fiscal regulaba un supuesto especial de cooperativa industrial, cual era la de producción formada por trabajadores, parecía lógico que el Reglamento de Cooperación recogiese este tipo cooperativo; que quedó regulado en el último inciso del artículo 48.

En su consecuencia, si el artículo sexto del Estatuto Fiscal vino a adecuar terminológicamente los tipos cooperativos a la clasificación legal, pero manteniendo el lastre histórico de referir la cooperativa de producción industrial al supuesto de asociación trabajo; y a su vez el art. 48 del RC lo introdujo en la legislación cooperativa, recogiendo con todo su contenido tradicional, resulta claro que aquella primera conclusión nuestra de aceptar dos tipos de sociedades cooperativas industria les de producción ya no es válida, toda vez que la producción está, en nuestro ordenamiento jurídico, unida indisolublemente al supuesto de asociación de sujetos que presten personalmente un trabajo.

El concepto, pues, de cooperativa de producción ha de ser limitado, después de visto el alcance de las normas fiscales, por las tres directrices;

- a) Actividad: producción de bienes y servicios
- b) Sector económico en el que puede actuar: el industrial (82)
- c) Supuesto de la asociación: trabajo.

Con esta afirmación queda ya como conclusión definitiva que, a pesar de la defectuosa redacción del artículo 48 del RC, la sociedad cooperativa

(82) Entendiendo este término en sentido amplio; cfr. pags. 165.

de producción queda referida, en nuestro ordenamiento jurídico, a aquellos supuestos en los que la motivación básica de la asociación sea el trabajo (83).

Ahora bien, la actividad productiva, en términos estrictamente económicos, no tiene porque limitarse a un sector económico concreto, como a primera vista hace nuestro ordenamiento jurídico; de ahí que, y a estos efectos, sea necesario seguir con el análisis del concepto de sociedad cooperativa de producción que suministran disposiciones de otros sectores del ordenamiento jurídico.

b) La noción de cooperativa de producción y la normativa de Seguridad Social.

La historia del aseguramiento social de los socios de cooperativas ofrece una evolución compleja y accidentada (84); evolución cuyo análisis detenido excedería de los límites de este estudio (85).

(83) Conclusión esta plenamente concorde con el concepto que de empresa cooperativa de producción dimos desde una perspectiva económica; cfr. pags. 132.

(84) Cfr. ALONSO OLEA, "Instituciones de Seguridad Social", 4ª edic., Madrid 1972, pag. 355.

(85) Las principales fases de esta evolución son:

a) Asimilación de los socios cooperadores que presten trabajo en una cooperativa a trabajadores por cuenta ajena a los efectos de previsión social (O.M. 17-7-1947)-(BOE 23-6) derogada por la O.M. de 10-1-7 1948 (BOE 18-1) que a su vez deroga, realizando la asimilación, la O. M. de 11-6-1952 (BOE 22-6), disponiendo la Resolución de la Dirección General de Previsión de 24-11-1952 (BOE 8-11) la afiliación de los socios cooperadores al régimen de seguros y subsidios sociales desde el 1-11-1952; este principio fue recogido igualmente por el art. 8 del Reglamento del Mutualismo Laboral de 10-9-1945 (BOE 17-9) y y el art. 9 "in fine" del Reglamento de Accidentes de Trabajo de 22-6-1956 (BOE 15-7).

De esta evolución interesa destacar que la noción de cooperativa de producción, como tipo cooperativo que determina la promulgación de normas especiales para regular la previsión social de sus socios, fué completamente ajena a los esquemas jurídicos; limitándose la norma a utilizar la genérica expresión de socios cooperadores de cooperativas constituidas con arreglo a la Ley de Cooperación (86) o la más concreta de socios cooperadores de cooperativas industriales (87)

b) exclusión de seguros sociales a los socios cooperadores que con este carácter prestasen servicios en las Cooperativas Industriales, aunque se respetaban derechos adquiridos (art. 6º apart. e), O.M. de 30-6-1959 (BOE 16-7).

c) Incorporación de los socios de cooperativas industriales que practiquen su "profesión y oficio" a la Mutualidad de Trabajadores Autónomos, si bien se concedía opción a los socios que estuviesen afiliados a las Mutualidades de Trabajadores por cuenta ajena entre continuar en la misma situación o incorporarse a la de Autónomos (arts. 1º, 7º y 8º apart. c) de la O.M. de 25-3-1963 (BOE 11-4).

Sobre el tema, vid: DE LA VILLAGIL, L. E. "La previsión social de los socios de cooperativas industriales", en Estudios en honor a Joradana de Pozas, t. III, vol. 3º, Madrid 1961, pags. 315 y ss. SAGARDOY BENGOC EA, J.A. "Un régimen especial de seguridad social. El de los socios trabajadores de cooperativas de producción", RPS 1964 nº 61 pags. 396 y ss. y DE LA VILLAGIL, L.E. "Las sociedades cooperativas industriales y el Seguro de Accidentes de Trabajo", RISS, nº 1966, pags. 998 y ss.

(86) Así el art. 1º de la O.M. de 17-6-1947 y de la de 11-6-1952.

(87) Así el art. 9º del Reglamento de Accidentes de Trabajo de 22-6-1956 al decir "Igualmente serán considerados trabajadores los socios de Cooperativas Industriales", el apart. c) del artículo 8º de la O.M. de 25-3-1963, al señalar que "en lo sucesivo, todo socios de Cooperativa Industrial, vendrá obligado a efectuar la afiliación de su Mutualidad...".

La primera disposición que de forma específica recogió el término cooperativa de producción fué la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963, cuyo apartado c) punto 5ª Base 2ª mencionaba como uno de los Regímenes Especiales del Sistema de la Seguridad Social (88) el de "socios trabajadores de cooperativas de producción" (89); ba se recogida a su vez por el apartado g) número dos del artículo décimo del Texto Articulado I de la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 1966.

Independientemente del acierto o no del legislador al crear un Régimen Especial de Seguridad Social para este colectivo (90) su simple enunciación provoca ciertas dudas interpretativas, que en una primera aproximación parecen contradecir las conclusiones hasta aquí mantenidas.

-
- (88) Sobre el significado de los Regímenes Especiales en el Sistema de Seguridad Social, vid. VIDA SORIA, J. "Régimen general y regímenes especiales en el sistema de la seguridad social española", CC DT. 1972, nº 3, pags. 49 y ss.
- (89) En clarísima contradicción con lo establecido por la Exposición de Motivos (y que no se corrigió) al decir que en materia de seguridad social, los socios trabajadores de las cooperativas de producción quedarían equiparados a los trabajadores por cuenta ajena, equiparación esta que se justificaba "como una exigencia impuesta no solo por su insatisfactoria situación actual, sino sobre todo por su condición jurídica" (BOE 28-12-1963).
- (90) Vid. VIDA SORIA, op. cit. pag. 56.

En efecto, ya ha quedado como conclusión firme la de que, dentro de nuestro ordenamiento positivo, las nociones de cooperativa de producción y cooperativa de trabajo, al menos en el sector industrial, se identifican.

Si relacionamos esta conclusión con la denunciación del colectivo que queda acogido en este Régimen Especial - "socios trabajadores de cooperativas de producción" - fácilmente puede convenirse que o bien el precepto incurre en una clara tautología al denominar socio-trabajador al que por la propia esencia de la cooperativa de producción ya lo es, o bien en estas cooperativas de producción coexisten dos categorías de socios - trabajadores y no trabajadores - siendo entonces falsa nuestra tesis.

Un detenido análisis del tema permite, sin embargo, señalar que ni el precepto incurre en una redundancia conceptual, ni nuestra conclusión es errónea.

Con respecto al primero de los puntos debatidos pensemos, en primer lugar, que este Régimen Especial tuvo, como objetivo inmediato, unificar la compleja normativa reguladora de la previsión social de los socios cooperadores; normativa, no obstante, que mantenía como elemento homogéneo la referencia a trabajadores socios de sociedades cooperativas (91), independientemente de que la obligación de prestar el trabajo sugiese como objeto de la obligación social o como objeto de un negocio

(91) Vid. art. 1º O.M. 17-6-1947 ("quienes presten su trabajo... sean o no socios de una cooperativa"), art. 1º O.M. 11-6-1952 ("los socios cooperadores que presten servicio en una cooperativa ..."), art. 7º

jurídico (92); y en segundo que tanto la Ley de Bases como su Texto Articulado son disposiciones anteriores a la reforma del Reglamento o Cooperación.

Cohonestando este doble dato, habrá que convenir que si el legislador de la Ley de Bases carecía de referencia tipológica, para identificar los supuestos de asociación trabajo y cooperativa de producción, y por tanto había de ser respetuoso con la legislación existente, forzosamente se vió obligado, aun a fuerza de crear una disposición de carácter didáctico, a señalar que los sujetos que quedarían acogidos a este Régimen Especial serían los trabajadores.

Tampoco ofrece mayores problemas alejar la duda de si con la expresión "socios-trabajadores" no se estaría implícitamente afirmando la posible existencia, en las cooperativas de producción, de una segunda categoría de socios: los "no trabajadores".

Efectivamente, el artículo 11 de la LC establece que "nadie podrá pertenecer a una Sociedad Cooperativa en concepto de empresario, contratista, socio capitalista u otro análogo" (93).

De la literalidad del precepto se deduce que si el supuesto base de la asociación es el trabajo, lo que se prohíbe es la presencia de socios que limiten su participación en la cooperativa a las simples apor-

O.M. 25-3-1963 ("..., los socios de las Cooperativas Industriales que practiquen su profesión y oficio...").

(92) Sobre el tema, vid. pags. 336 y ss.

(93) Redacción ya adoptada por la ley de 1931 (art. 3º).

taciones de capital (94); de ahí, que deba rechazarse la pretendida doble categoría de socios en las cooperativas de producción, implícitamente contenida en la enunciación del colectivo acogido en el Régimen Especial de Seguridad Social que estamos comentando.

A la vista de estos razonamiento, hay que concluir que ni es lícito calificar de tautológica la enunciación de este Régimen Especial, ni queda falseada la configuración de la cooperativa de producción como asociación de trabajo.

Por otra parte, y a mayor abundamiento, hay que alabar al legislador de la ley de seguridad social que, en congruencia con toda la tradición legislativa española en materia de cooperativas de producción y

-
- (94) Parece necesario, a la vista de ciertas afirmaciones anteriormente sustentadas por nosotros, matizar el sentido de esta prohibición, al objeto de que aquellas no queden en entredicho.

A estos efectos se recordará que al configurar la cooperativa industrial formada por comerciante, industriales y profesionales se dijo que el supuesto base de esta asociación era el capital, y que en la misma se asociaban empresarios; afirmación esta, que en una primera aproximación, puede parecer contradictoria con la prohibición del art. 11 de la LC.

Ahora bien, hay que señalar que la prohibición de este precepto actúa como un factor de igualdad entre todos los socios; esto es, que en realidad lo que se prohíbe es que en una cooperativa ciertos socios ostenten posiciones jurídicas distintas a la ostentada por la totalidad, en definitiva lo que hace la norma es introducir el principio de igualdad jurídica de todos los socios.

Es este el alcance del precepto, y el que explica que sea viable una cooperativa de empresarios, cuando todos ellos tengan una misma posición jurídica; la de usuarios del servicio ofrecido por la entidad; y no lo sea una cooperativa de producción en la que unos socios trabajen y otros no. Conforme con esta interpretación, De LA VILLA GIL, "Derechos...", cit. pag. 108.

adelantándose formalmente a la legislación propiamente cooperativa, elevó la cooperativa de producción a tipo propio, al no adjetivarla con relación a alguna de las categorías legales.

Esta interpretación ha quedado confirmada tras la promulgación del decreto de 13 de agosto de 1971, que con carácter transitorio ha venido a regular el Régimen Especial de Seguridad Social de los socios trabajadores de las cooperativas de producción (95).

Concretamente el artículo 1º de este decreto, después de asimilar a estos socios, en materia de seguridad social, a trabajadores por cuenta ajena, establece en su número dos que "el encuadramiento de dichos socios trabajadores tendrá lugar en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales de trabajadores por cuenta ajena, según proceda, de acuerdo con la naturaleza de la actividad que ejerza la Cooperativa en la que presten sus servicios".

¿Que alcance presenta este encuadramiento para la configuración jurídica de la cooperativa de producción?

Sabido es que el Sistema de la Seguridad Social se articula, en nuestro ordenamiento positivo, a través de un Régimen General y unos Regímenes Especiales, de los cuales algunos han sido expresamente relacio

(95) BOE de 27-10 (nótese que el decreto es de la misma fecha que el Reglamento de Cooperación). El carácter transitorio de este decreto se señala en el número 1 del artículo 1º al decir "En tanto se regule el Régimen Especial...".

nados por el legislador (96) mientras que otros se han regulado como consecuencia de la autorización concedida al Ministerio de Trabajo (97).

De entre los Regímenes Especiales relacionados por la ley, los únicos que contemplan, como factor desencadenante de esa especialidad las características singulares del trabajo por cuenta ajena (98) son el de los "trabajadores del Mar" y el de "los trabajadores dedicados a las actividades agrícolas, forestales y pecuarias" (99).

A su vez, recordemos que la ley de Cooperación utilizó el criterio de la naturaleza del sector económico para definir a las cooperativas industriales, del campo y del mar, pero a la hora de fijar la noción de cooperativa de producción restringió su actuación al ámbito de la primera de las categorías enumeradas.

Si relacionamos estos datos con lo preceptuado en el decreto que estamos comentando, se puede deducir que, a efectos de seguridad social,

(96) Vid. art. 10.2 de la ley de 21-4-1966.

(97) Autorización contenida en el art. 10.3 de la propia ley. Esta autorización se ha ejercido para regular los siguientes Regímenes Especiales: Ferroviarios (D. 6-7-1967, BOE 14-7); Minería del carbón (D. 12-3-1970, BOE 13-3); Escritores (D. 29-10-1970, BOE 17-11); Toreros (D. 8-6-1972, BOE 26-6) Un detallado estudio de los Regímenes Especiales, en el libro conjunto "Dieciocho lecciones sobre Regímenes Especiales de Seguridad Social", Madrid 1972.

(98) Cfr. ALONSO OLEA, "Instituciones...", cit. pag. 332.

(99) No obstante completarse la especialidad de este Régimen por la presencia de trabajadores por cuenta propia; cfr. ALONSO OLEA, op. y loc. cit.

los socios de las cooperativas de producción quedan encuadrados, según la naturaleza de la actividad de la cooperativa, en el Régimen General, si se trata de cooperativa de producción industrial, o en los Regímenes Agrario y del Mar, si la actividad se ejerce en los sectores del campo y del mar (100); lo que en definitiva indica que, a los efectos de ensayar la noción de sociedad cooperativa de producción, es irrelevante el sector económico en el que aquella opere (101).

(100) Una Resolución de la Dirección General de Seguridad Social (BOL nº 176, pag. 13) ha venido a perturbar la clara interpretación del decreto 2566/71, al señalar "La Norma general de dicho Decreto es que los socios cooperadores de dichas cooperativas y entre tanto no se regule el Régimen Especial previsto en el apartado g) del número 2 del artículo 10 de Ley de Seguridad Social es que figuren incluidos en el Régimen General". Ya se ha dicho que el parr. 2º del art. 1º de dicho decreto establece como norma general no la inclusión en el Régimen General, sino en este y en cualquiera de los Regímenes Especiales; la redacción de esta Resolución no ha podido ser más desafortunada, ya que, y en definitiva, el principio inspirador del decreto es, simplemente la asimilación de los socios a trabajadores por cuenta ajena.

(101) De forma más contundente se puede confirmar esta conclusión con la lectura del art. 63 de la O.M. de 22-2-1973, por la que dispone que el Patronato del Fondo Nacional de Protección al Trabajo ponga en ejecución el XII Plan de Inversiones para el ejercicio de 1973, al decir "A los efectos de la concesión de los préstamos previstos en el apartado c) del artículo 13 de la Ley 45/60 de 21 de julio se entenderán trabajadores... los socios trabajadores de cooperativas, protegidas a efectos fiscales, de producción industrial, pesquera, agrícola o artesana..."

El análisis efectuado de las disposiciones que toman como centro de imputación de sus normas a las cooperativas de producción ha venido a demostrar que, no obstante los defectuosos criterios de clasificación de los tipos cooperativos contenidos en el sector cooperativo, en nuestro ordenamiento positivo hay base suficiente para sostener (102) que el concepto investigado presenta una noción unitaria, al tiempo que constituye un tipo perfectamente diferenciado en la tipología cooperativa; noción que se identifica con el supuesto de asociación trabajo, independientemente del sector económico en el que la actividad productiva de cooperativa opere (103), con lo que, y en definitiva, aquella noción suministrada por el artículo 48 del RC ha quedado matizada en una doble dirección:

a) una restrictiva, en virtud de la cual solo son cooperativas de producción en nuestro derecho positivo las que asocian trabajo.

b) una expansiva, en virtud de la cual cualquier supuesto de aso-

(102) Dice GARRIDO FALLA, F. ("Dos métodos jurídicos en el estudio de la Administración Pública, Sevilla 1961, pag. 68) que "la mejor defensa de una tesis jurídica cualquiera está siempre en encontrar una disposición, incluso de rango secundario, que coincida con ella.

(103) Industrial, agrícola, marítimo o artesano; conforme, SAGARDOY BENGOCHEA, J.A. "Consideraciones sobre las cooperativas de producción", RT 1964, nº 5, pag. 80.

ciación trabajo da lugar a calificación como cooperativa de producción, sin que la adjetivación por sectores económicos venga a modificar la intrínseca unidad del concepto.

2.2 La Sociedad como negocio jurídico base de la cooperativa de producción.

2.2.1 Significado y alcance de la cuestión

Examinada la primera de las cuestiones propuestas en la investigación de la configuración jurídica de la cooperativa de producción relativa a su delimitación conceptual y a su calificación como tipo organizativo cooperativo, corresponde entrar ahora en el segundo de los temas, relativo al análisis del negocio jurídico que constituye la base de este instituto.

El plantear el tema de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa de producción puede parecer, en estos momentos de nuestro estudio en donde ha quedado ya como conclusión firme la de que el empresario cooperativo ha de adoptar una forma jurídica, la sociedad cooperativa -, como simple exigencia academista, carente de resultados operativos y de proyección jurídica práctica.

No obstante esta primera valoración, el análisis de la naturaleza jurídica (104) de la cooperativa de producción tiene una relevancia ex_

(104) Sobre el tema, en general, vid. LOIS ESTEVEZ, L. "El concepto de naturaleza jurídica", Anuario de Filosofía del Derecho, t. IV, 1956, pags. 158 y ss.

traordinaria, tanto en sus aspectos prácticos como doctrinales, ya que a través de ella se va a justificar y aclarar la razón de ser de esta institución (105).

La doctrina científica se ha ocupado, no siempre de formar afortunada, de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa (106); planteamiento este que ha tenido el valor de trascender de lo puramente cooperativo e influir en la depuración de los ámbitos respectivos de aplicación de las instituciones jurídicas que se encuentran en la base de

(105) Cfr. LOIS ESTEVEZ, op. cit. pag. 178.

(106) Dejando a un lado la literatura científica sobre el tema contenida en Manuales y Tratados, tanto de Derecho Civil como Mercantil, pueden verse: RAMADIER, P. "Definition et nature juridique des coopératives", Paris 1929, UCHA, "Naturaleza jurídica de las cooperativas", Revista de Derecho Comercial (Argentina), 1947, pags. 2.235 y ss; COUTANT, L. "L'evolution du droit cooperatif...", cit. pags. 114-168; GASCON HERNANDEZ, J., "Las cooperativas desde el punto de vista del Derecho Mercantil", RDM 1957, n° 65, pags. 98 y ss; FERRI, G. "La cooperativa come società", cit. ASCARELLI, T. "Cooperativa e società", cit; VERRUCOLI, P. "La Società cooperativa", cit., pgs. 122-150; COLOMBO, G.E. "Osservazioni sulla natura giuridica delle cooperative", Riv. Dir. Comm 1959, I, pags. 142-152; SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, "Relaciones del regimen jurídico...", cit. pags. 138-156; BAYON MARINE-SERRENO ALTAMIRAS, "Régimen jurídico..." cit. pags. 38-43; SCORDINO, F. "La società cooperativa", Napoli 1970, pags. 68-112; GARCIA PADRON, "Las Sociedades Cooperativas ...", cit. pags. 77-115.

de la asociación voluntaria de sujetos: Sociedad y Asociación (107).

Cierto es que actualmente el problema ha perdido interés, desde una perspectiva "ex lege", debido a que el legislador, al transformar el derecho cooperativo de estatutario en necesario (108), ha procedido a calificar, al menos formalmente, a la cooperativa como Sociedad (109) poniendo fin a la polémica doctrinal.

Sin embargo, la cuestión no puede darse por concluida en nuestro ordenamiento positivo (110) ya que la LC al definir la cooperativa como

(107) Cfr. por todos, la magnífica obra de KAYSER, P. "Sociétés e association: leur domaines d'application" Paris 1928, esp. pags. 144-151 y 229-259. En la Jurisprudencia, el análisis de la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas ha sido igualmente vehículo para depurar ambos conceptos; así en la Jurisprudencia francesa, la Sentencia de 11-3-1914 (se puede consultar su texto en KAYSER, op. cit. pgs. 84-85); en la española STS 7-12-1965 (A. 5669) y en la Italiana Cass. 2-3-1949, en "Giurisprudenza Cassazione Civile", 1949, I, pags. 220-225, con nota de GUERRA, P. "Differenza fra società e associazioni").

(108) Vid. pag. 37.

(109) El artículo 1º de la LC dice "Es Sociedad Cooperativa..." formula que se repite en el art. 1º. 1 del RC.

El art. 1º del Estatuto de la Cooperación en Francia de 10-7-1947 utiliza términos idénticos al decir: "Les cooperatives sont des sociétés..."; cfr. COUTANT, op. cit. pag. 115 y 172.

(110) En la doctrina italiana el tema es, desde la publicación del codice, de continua actualidad, viniendo planteado a través de una doble vía: indirecta la primera y directa la segunda.

Indirectamente, la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa apasionó a la doctrina italiana como consecuencia de una vacilante jurisprudencia en torno a la posibilidad de que una cooperativa se transformase en sociedad lucrativa, siendo argumento a favor o en contra el de la naturaleza de Sociedad o Asociación. Sobre el tema, vid: BIGIAMI, W. "Sulla trasformazione del le cooperative", Giur. It. 1942, I, col 524 y ss; FERRI, G.

sociedad sin ánimo de lucro (111), y supuesto que el criterio legal de distinción entre Sociedad y Asociación reside en la ausencia de lucro

"Pretesa nullità di una deliberazione di trasformazione da società per azioni in società cooperativa e pretesa conversione della deliberazione nulla in atto costitutivo di nuova società", en *For It* 1947, I, pags. 934 y ss; GIULIANI, A. "Trasformabilità della società cooperativa in società per azioni", *Riv. del Notariato*, 1948, pag. 467 y ss; SCIALOJA, A. "In tema di trasformazione della società nel nuovo ordinamento delle imprese cooperative", *For It*. 1948, I, pag. 82 y ss; BOLAFFI, R. "Trasformazione di società cooperativa in società ordinaria", *Riv. trim. di dir. e proc. civ.* 1948, pags. 447 MESSINEO, F. "Società cooperativa e sua trasformabilità", *For. It.* 1949, I, pags. 68 y ss; ROMANO-PAVONI, G. "La trasformabilità delle società cooperative", *Mon dei Trib.*, 1950, pags. 213 y ss; idem, "Ancora sulla trasformabilità delle società cooperative", *Corte Brescia* 1951, pags. 62 y ss; MARTORANO, F. "Trasformazione di cooperativa ad unanimità", *Riv. trim dir e proc. civ.* 1954, pags. 852 y ss; DE MARCO, F. "Sulla trasformazione delle cooperative", *Gir. Cass. Civ.* 1955, I, pags. 384 y ss; ASCARELLI, T. "Trasformazione di società in cooperativa e viceversa", *For. Ita.* 1956, I, pags. 777 y ss; VERRUCOLI, P. "Sulla trasformabilità della società cooperativa in società ordinaria", *Riv. dir. comm.* 1959, II, pags. 287-312.

Directamente, la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa se plantea, a nivel doctrinal, de la redacción dada al art. 2511 del "codice civile" ("Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative...") que al introducir el elemento mutualista en el concepto de sociedad cooperativa (y señalarse en el artículo 45 de la Constitución que "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata" - sobre los trabajos preparatorios de este artículo de la Constitución, GRAZIANI, "Società cooperativa e scopo mutualistico", cit. pags. 278-280 y FERRA, G. "Principi costituzionali in materia di cooperazione a carattere di mutualità", *Riv. delle Soc.* 1964, pag. 781) da a entender la existencia de una causa en el negocio jurídico cooperativo distinta a la causa de la sociedad ordinaria. Sobre el tema vid. nota 50.

- (111) Artículo 1º LC: "Es Sociedad Cooperativa la reunión de personas naturales o jurídicas que se obligan a aunar sus esfuerzos con capital variable y sin ánimo de lucro, al objeto de lograr fines comunes de orden económico-social, sometiendo expresamente a las disposiciones de esta Ley".

en el segundo de los tipos organizativos (112) provoca en el interprete importantes dudas de no fácil solución.

(112) Cfr. art. 1º ley de Asociaciones de 1887 y art. 1º de la Ley de Asociaciones de 21-12-1964 (BOE 28-12-1964).

La doctrina no se manifiesta pacíficamente en torno al criterio diferenciador entre sociedad y asociación: entre los criterios elaborados, hay que destacar:

a) El de la mutabilidad de los miembros, según el cual la sociedad se caracterizaría por su estructura cerrada y la asociación por su estructura abierta (cfr. FERRARA, F. (senior) "Le persone giuridiche", Torino 1938, pag. 64, (2ª ediz., con notas de FERRARA, F. (junior) Torino 1956, pags. 75-77). Este criterio estructural viene criticado en base a que en los supuestos dudosos no se ofrece elemento sustancial alguno (cfr. ROMANO-PAVONI, "Teoria delle società", cit. pag. 165, nota 55) así como califica como Sociedades a asociaciones con fines ideales o artísticos, con estructura cerrada, y como Asociaciones a Sociedades en las que se permite una continua mutabilidad, como la sociedad anónima. (Cfr. RUBINO, "Le associazioni non riconosciute", 2ª ed. Milano 1952, pags. 13 (hay traducción esp. Madrid S/F, FALZEA, A. "Brevi note sulla differenza fra società e associazione", en Giur. Cass. civ. 1947, II, pag. 989, ASCARELLI, T. "Cooperativa e società...", cit. pag. 427)).

b) El de la determinación preestablecida de los beneficios, según el cual serían sociedades aquellas instituciones en las que la participación de los beneficios viene determinada en base a proporciones previamente establecidas, mientras serían asociaciones aquellas instituciones que no solamente tengan fines altruistas o no patrimoniales, sino en las que la participación de los miembros en las ventajas económicas de la entidad no venga preterminada (Cfr. RUBINO, op. cit. pag. 11); se critica este criterio en base a que la predeterminación en la forma de repartir los beneficios se manifiesta como simple modalidad accidental de un momento sustancial, que es el de la división de los beneficios, insuficiente, por tanto, para legitimar la distinción entre ambas instituciones jurídicas (cfr. FALZEA, op. cit. pag. 990, BOLAFFI, R. "La società semplice", Milano 1947, pag. 138).

c) El de la naturaleza jurídica del negocio jurídico de origen, según el cual las asociaciones estarían constituidas por un acuerdo, y las sociedades por un contrato (cfr. EXPOSITO, C. "Lo Stato fascista e le associazioni", Padova 1935, pag. 106, y en España GARCIA TREVIJANO, J.A. "Principios jurídicos de la Organización Administrativa", Madrid 1957, pag. 152); sin embargo, y como afirma BOLAFFI

Efectivamente, si se considera, por un lado, que entre la Asociación y la Sociedad no hay un tipo organizativo intermedio - "tertium

(op. cit. pag. 142) "esta teoría no ofrece al interprete un criterio de distinción, sino que representa solamente el resultado de una sistematización dogmática. Afirmar que en la base de la asociación hay un acuerdo y en la de la sociedad un contrato significa formular en términos técnicos la distinción" (en el mismo sentido, GASPERONI, N. "La trasformazione delle società", Milano 1952, pag. 144, nota 183).

d) El de la naturaleza de los intereses que acoge cada instituto jurídico, y en virtud del cual son sociedades aquellas instituciones en las que los miembros tienen el propósito de realizar un interés futuro mediante la actuación de una actividad económica, mientras son asociaciones aquellas en las que los miembros pretenden reglamentar un interés ya existente entre los socios (cfr. VENTURI, C. "Negozzi associativi economici", Napoli 1938, pag. 43-45); criticada, igualmente, en base a que adopta una postura parcial, ya que acoge solo el aspecto de la coordinación de los intereses económicos (cfr. GASPERONI, op. y loc. cit.).

e) El de la diversa naturaleza de la actividad puesta en común, según el cual son sociedades las que desarrollan una actividad común de carácter productivo, mientras son asociaciones las que ejercen una actividad común de satisfacción, es decir, capaz de realizar los intereses de los asociados independientemente del ejercicio de un proceso productivo (cfr. FALZEA, op. cit. pag. 995); este criterio de distinción, a parte de la generalidad y elasticidad del término actividad común de satisfacción (FURNO, C. "Contrato innominato di mostra artistica.", Riv. trim. dir. e proc. civ. 1949, pag. 221) peca de unilateral y es excesivamente "restringido porque no pueden ser excluidos de la noción de asociación aquellos organismos colectivos con fines estrictamente benéficos, pero en los cuales los miembros participan sin el fin de utilizar los servicios propios, sino solo con el de ofrecer tales servicios a terceros" (cfr. GASPERONI, op. y loc. cit.).

f) Criterio del lucro - entendido en un doble sentido: objetivo (intento de los socios de obtener una ganancia) y subjetivo (ánimo de repartirse entre ellos esa ganancia) - según el cual serían sociedades las que tuviesen ánimo lucrativo y asociaciones las que careciesen de dicho ánimo, Constituye el criterio tradicional, y es ampliamente acogido por la doctrina italiana, francesa y española (sobre la influencia del art. 1832 del "code" en el 1665 del Cod. Civ., vid. BELTRAN DE HEREDIA, J. "la comunidad de bienes en

non datur" (113) -, y por otro que en nuestro ordenamiento positivo la

el derecho español", Madrid 1954, pag. 51); vid. por todos, PIC, P-KREHER, J. "Des sociétés commerciales", 3ª edic. Paris 1940, t. I, pg. 165; HAMEL, J-LAGARDE, G. "Traité de droit commercial", Paris 1954, t. I, pg. 483; FERRARA, F. (jr) "Gli imprenditori e le società", 4ª edic., Milano 1962, pags. 198-200; CASTAN TOBEÑAS, J. "Derecho Civil Español, Común y Foral", pª9 edic. Madrid 1962, t. IV, pg. 527; DE GREGORIO, A. "Corso di Diritto Commerciale", 6ª edic. Milano-Roma-Napoli 1965, pags. 171 y ss; ESPIN CANOVAS, D. "Manual de Derecho Civil Español", 3ª edic. Madrid 1969, vol. III, pag. 579.

g) El criterio basado en la naturaleza de los beneficios que obtienen los socios, y según el cual serían sociedades las que ofreciesen a sus miembros ganancias de orden patrimonial, y asociación las que ofreciesen ventajas de orden espiritual o real (cfr. ESCARRA, J.-E.-RAULT, J. "Traité theorique et pratique de Droit Commercial", Paris 1950, t. I, pg. 92; FREDERICQ, L. "Traité de Droit Commercial Belge", Gand 1950, t. IV, pag. 54).

h) Por último, atendiendo al interés que acogen estas colectividades, se dice que son sociedades las que tienen un interés privado, y asociaciones las que tienen un interés general (cfr. tesis recogida por KAYSER, op. cit. pag. 138 como representativa del "ancien droit") criticada como excesivamente formalista, sin conexión con la realidad socio-económica (KAYSER, op. cit. pag. 140).

(113) Así KAYSER, op. cit. pag. 87 al decir "la classification des sociétés et association est universelle".

No obstante este principio, algunos autores, ante la dificultad de integrar a la Cooperativa en un esquema unitario que responda al de la Sociedad o al de la Asociación, han creído encontrar la solución configurando a la cooperativa bien como contrato innominado (cfr. TROUILLOT, G-CHAPSAL, F. "Du contrat d'association", Paris 1902, pag. 32, cit. por PIC-KREHER, op. cit. pag. 22), bien como fundación (cfr. FINZI, E. "Aspetti giuridici delle società cooperative", en Archivio di Studi Corporativi 1936, pag. 92 - también en "Studi in onore di Ricardo dalla Volta", Firenze 1936, vol. II, pags. 113 y ss - en donde escribe "La cooperativa..., dovrebbe sorgere e vivere come un specie di fondazione, accanto a un gruppo organizzato corporativamente... (subrayado del autor), bien como institución o como Corporación de derecho público (cfr. GASCON HERNANDEZ, "Las cooperativas...", cit. pags. 105 y ss). Ultimamente, VICENT CHULIA, F. ("Análisis crítico del nuevo Reglamento de Cooperación", RDM 1972, nº 125-126, pag. 455) califica a la cooperativa como institución "sui generis", ni sociedad ni asociación; a la luz del derecho positivo, su postura es insostenible.

noción técnica de sociedad es unitaria (114) habrá que convenir que o bien la sociedad cooperativa entra en la noción general de sociedad, ordenada para la consecución y distribución de ganancias, y en consecuencia a su esquema causal no es ajeno el ánimo lucrativo; o bien hay que considerarla asociación, si carece de ánimo lucrativo, lo que supondría configurar el negocio cooperativo como un negocio indirecto (115), ya que con él se posibilitaría la búsqueda de fines atípicos al contra-

- (114) La diversidad de los términos utilizados por el art. 1665 del código civil, que habla de "ganancia", y el 116 del código de comercio, que emplea la voz "lucro", no afecta a la sustancia del concepto. Cfr. PEREZ GONZALEZ, B.- ALGUER, J. "Notas a la traducción del Tratado de Derecho Civil de Ennecerus-Kipp-Wolf", 2ª edic., Barcelona 1950, vol. II, t. II, pag. 399; ROTONDI, M. "Comunidad y Sociedad, Sociedad Civil y Sociedad Mercantil", RDP 1958, pag. 730, nota 42; SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, op. cit. pag. 158.

Sobre el significado de la distinción entre ambas sociedades, vid: AZURZA Y OSCOZ, P.J. "Problema de la Sociedad Civil", Ann. Der. Civ. 1952, Fasc. I, pags. 124 y ss.; GIRON TENA, J. "Sociedades civiles y Sociedades mercantiles", en "Estudios de Derecho Mercantil", Madrid 1955, pags. 65-124.

- (115) Sobre el negocio indirecto, vid. CASTRO Y BRAVO, F. "El negocio jurídico", en "Tratado práctico y crítico de Derecho Civil", Madrid 1971, vol. X, pags. 442-457; respecto del contrato de sociedad, acepta la tesis del negocio indirecto, ROMANO-PAVONI, op. cit. pags. 149-150, y la rechaza GRAZIANI, A. "Diritto delle società", 5ª edic., Napoli 1962, pag. 7: con referencia a la sociedad cooperativa, mantiene tesis afirmativa VERRUCOLI, "La società...", cit. pg. 147 y tesis negativa OPPO, op. cit. pag. 375. En el sentido de negar el negocio indirecto, vid. Resolución Dirección General de los Registros de 2-2-1966 (Ar. juris 1398).

to de sociedad, acogiéndose, no obstante, la estructura societaria.

Planteado así el tema, parece que el método más eficaz para llegar a una clarificación, tanto de afinidades como de posibles diferencias, reside en comparar analíticamente, y en base a nuestro ordenamiento positivo, los elementos que integran el contrato de sociedad y el de sociedad cooperativa.

2.2.2 Los elementos de Contrato de Sociedad.

De la noción de sociedad contenida en el artículo 1665 del Código Civil, (116), se desprende que los elementos básicos de los que se compone el contrato de Sociedad (117), y sin los cuales no es posible configurar a un contrato como tal, son, tanto en el orden lógico como en el normativo, los tres siguientes (118):

a) Una pluralidad de sujetos

-
- (116) "La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias".

Sobre los precedentes y concordancias de este artículo vid: MANRESA Y NAVARRO, J.M. "Comentarios al Código Civil Español", 5ª edic., Madrid 1950, t. XI, pags. 296 y ss.

- (117) Sobre las teorías acontractualistas de la sociedad, vid., por todos, DUCOULOZ-FAVARD, C. "Nature juridique du contrat de société", Rev. des Soc. 1966, pags. 1-12, en donde analiza sintéticamente la tesis alemana de la "Organizationvertrag"; para bibliografía, vid. ROMANO-PAVONI, op. cit. nota 18 a pags. 289-292.

- (118) Cfr. PEREZ GONZALEZ-ALGUER, op. cit. pags. 396 y ss.; CASTAN TOBENAS, op. cit. pags. 522 y ss.; ESPIN CANOVAS, op. cit. pags. 575 y ss.

En Jurisprudencia, vid. STS (civ.) de 13-3-30 (Aran. 762); 15-10-1940 (Aran. 886); 27-2-1945 (Aran. 266); 11-3-1949 (Aran. 421). 27-6-1960 (Aran. 2.604); 23-5-1962 (Aran. 2.521).

b) Unas aportaciones en común

c) Un ánimo lucrativo de partir entre si las ganancias.

De estos tres elementos básicos, a los cuales parte de la doctrina añade el de la "affectio societatis" (119), especial consideración merece el tercero, a través del cual se procede a individualizar la causa del contrato de sociedad.

Reconocida en nuestro ordenamiento positivo la función caracterizadora de la causa en los negocios jurídicos, requisito esencial de los contratos (120), la consideración del ánimo lucrativo, como causa del contrato de sociedad, no puede ser contestada (121); y ya se defina obje

- (119) Este elemento intencional es ampliamente acogido por la doctrina extranjera; así PIC-KREHER, op. cit. pag. 81, lo definen como "intención común de todos los contratantes de agrupar sus esfuerzos al objeto de conseguir un fin común"; VAN RYN, J. "Principes de Droit commercial", Bruxelles 1954, pag. 235 (sustituye la terminología clásica por la de "ius" fraternitatis"). Nuestra doctrina científica reconduce este elemento a alguno de los anteriores (CASTAN TCHENAS, op. cit. pag. 529 y ESPIN CANOVAS, op. cit. 517); aunque la legal sigue considerándola elemento básico (S.T.S. civ.) 27-6-1960 (Ar. 2604).

Sobre el tema, interesante es el ensayo de HAMEL, J. "Quelques réflexions sur le contrat de société", en "Melanges en l'honneur de Jean Dabin", Paris 1963, t. II, pags. 645 y ss. esp. 645-648.

- (120) CASTRO Y BRAVO, op. cit. pag. 165 señala que "la doctrina de la causa ha servido y sigue sirviendo para destacar lo que merece la consideración de contrato (artículo 1261 código civil) o de negocio jurídico, de lo que no lo merece, para después distinguir el valor y alcance que a cada clase de ellos se le atribuye".

Sobre la distinción entre causa de la obligación y causa del contrato, DIEZ PICAZO. "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial", Madrid 1970, pag. 160 y CASTRO Y BRAVO, op. cit. pags. 186-187.

- (121) En Jurisprudencia vid. STS (civ.) 10-5-1934 (Aran. 1.010) "lo que

tivamente la causa como la "función económico-jurídica del negocio" (122), ya subjetivamente como "representación subjetiva del resultado concreto que se conseguirá en el negocio" (123), o ya integralmente como "valoración de cada negocio hecha atendiendo al resultado que con el se busca o se haya propuesto quien haga la declaración negocial", (124), lo cierto es que el artículo 1665 al afirmar que la sociedad es un con

caracteriza a la sociedad es la realización de un lucro" - 27-2-1945 (Aran. 266) - "El requisito esencial de la causa en el contrato de sociedad se habrá de apreciar con miras a la utilidad o provecho que los socios esperan obtener" - STS 23-5-1962 (Aran. 2521) "Siendo por último esencial del contrato de Sociedad..., el designio y aspiración de obtener un lucro o ganancia común entre los socios como fin principal y directo del contrato".

En la doctrina italiana, D'AMARTELLO, A. ("La causa del contratto di società", Riv. Dir. Civ. 1937, pags. 505, cit. por RAGUSA-MAGGIORE, G. "La causa nel contratto di società", Riv. Dir. Fall. 1959, pag. 118) individualiza la causa del contrato de sociedad en "la organización colectiva de las particulares fuerzas patrimoniales"; por su parte, para VERRUCOLI (op. ult. cit. pag. 140) "el elemento causal de la sociedad - fin común objetivado y constante - es siempre y solo el ejercicio de empresa", rebajando a motivo el ánimo de obtener y repartir ganancias (distinción entre "motivo" y "causa" en CASTRO Y BRAVO, op. cit. pag. 179). Para GUERRA (op. cit. pag. 223), el lucro no es causa de la sociedad. En general, no obstante estas posturas, la doctrina italiana acoge como causa del contrato de sociedad el ánimo lucrativo; cfr., por todos, RAGUSA-MAGGIORE, op. cit. pag. 115 (aunque para este autor la causa de la sociedad sea compleja).

(122) Cfr. GASPERONI, op. cit. pag. 126 y bibliografía en nota 145.

(123) Cfr. ROTONDI, E. "Istituzioni di diritto privato", Milano 1945, pag. 127.

(124) Cfr. CASTRO Y BRAVO, op. cit. pag. 191. Este autor (pag. 189) señala que "la teoría de quienes fijan que la causa objetiva o legal es también la subjetiva en el ánimo de las partes, muestra el buen camino".

trato..., "con ánimo de partir las ganancias", esta reconociendo a este elemento como causa típica del contrato; esto es, como razón justificadora del reconocimiento del negocio por parte del ordenamiento jurídico (125).

Sin embargo, el valor causal que a este elemento debe atribuirse exige determinar su significado sustancial.

En este orden de cosas, dos son las cuestiones a dilucidar: por un lado, que ha de entenderse por "ánimo lucrativo"; por otro, cual es la noción de ganancia que se encuentra en la base de la definición del contrato de sociedad.

Con respecto a la primera de las cuestiones, nos adherimos plenamente a la tesis (126) que configura este intento lucrativo a través de dos momentos sucesivos; ambos necesarios para su conformación:

- uno de naturaleza objetiva, materializado en el ánimo de la búsqueda y obtención de esas ganancias (127).

(125) VALVERDE Y VALVERDE, C. ("Tratado de Derecho Civil Español", 4ª edic., Valladolid 1937, t. III, pg. 648) dice que "la idea de ganancia es el fundamento jurídico y razón de existencia de este contrato".

(126) Cfr., por todos, HAMEL, J.- LAGARDE, G. "Traité de Droit commercial", Paris 1954, t. I, pg. 483 y GRAZIANI, "Diritto...", cit. pag. 69. En sentido contrario, ~~DE~~ BUEN, D. "Sociedad (contrato de)", voz, en Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona s/F, t. 28, pag. 862-863. En Jurisprudencia, S.T.S. (Civ.) 27-6-1960 (B. 2604).

(127) Este ánimo de obtener ganancias debe ser considerado en "abstracto"; de ahí que BIGIARI ("La professionalità...", cit. pag. 56) señale que una sociedad continua siéndolo, aun cuando "los socios estén convencidísimos que no conseguirán nunca ganancias".

- otro de carácter subjetivo, concretado en la partición y distribución, entre los socios, de las ganancias.

La presencia de este "iter" en la conformación del ánimo lucrativo adquiere un particular interés en orden a la distinción de este contrato con otras figuras afines; ya que puede ocurrir que entidades asociativas sin ánimo lucrativo busquen la obtención de ganancias - elemento objetivo -, sin por ello perder la naturaleza jurídica de Asociación, al ser ajeno a ese ánimo la distribución de esas ganancias entre los asociados (128).

De esta forma, pues, queda claro que el lucro, o más concretamente el ánimo lucrativo realmente causal, es el subjetivo (129).

Con respecto al segundo de los temas propuestos, es decir el relativo a cual ha de ser la noción de ganancia tipificadora del ánimo lucrativo, la doctrina científica no adopta una postura pacífica, pudiendo

(128) Cfr. GRECO, P. "Le società", cit. pag. 12-13.

(129) Para la doctrina clásica (cfr. TROPLONG, "Du contrat de société", Paris 1843, pag. 9 cit. por COOPER ROYER, E., J. (ean) y J. (acques), "Traité des sociétés", Paris 1938, t. II, pag. 702) la división ("le partage" del artículo 1832 del "code") no significa distribución material, sino simplemente que el beneficio ha de ser realizado en común.

Desde la perspectiva "uti socii", la distribución significa que nadie podrá ser excluido de toda parte de las ganancias (art. 1691 del código civil).

sistematizarse estas de las siguiente forma:

- a) para un sector (130), ganancia es cualquier ventaja de orden patrimonial, expresada bien en forma positiva - incremento de la fortuna de los asociados - bien negativa - economía o ahorro en el gasto.-
- b) Para otro sector (131), ganancia es exclusivamente una ventaja patrimonial o material que viene a enriquecer de forma directa el patrimonio de los socios; ganancia, que se modaliza a tra

(130) En la doctrina española, SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, "Relaciones del régimen jurídico...", cit. pg. 145; en la doctrina francesa acepta esta tesis PLANIOL, M.- RIBERT, G., "Traité pratique de droit civil français", 2ª edic., Paris 1954, t. XI, 2ª parte, pag. 241 ("Il nous semblerait donc preferable, plus conforme à la tradition et, en même temps, à l'évolution législative actuelle, de voir à l'occasion un bénéfice dans un avantage quelconque d'ordre patrimoniel"); en la belga, VAN RYN, J. "Principes de Droit commercial", Bruxelles 1954, pag. 230. En la doctrina italiana, esta postura doctrinal ha gozado de hondo predicamento, tanto entre los autores anteriores al "codice" (MANARA, "Delle società e delle associazioni commerciali", cit. pag. 230; PI PIA, "Tratatto di diritto commerciali", cit. pag. 51) como en los posteriores (MESSINEO, F. "Di nuovo su cooperativa e utili sociali", Riv. dir. comm., 1949, I, pag. 470; FERRARA (jr), "Gli imprenditori...", cit. pag. 200; DE GREGORIO, A. "Corso di diritto commerciale", 6ª edic. Milano-Roma-Napoli 1965, pag. 394).

(131) Es la tradicional en la doctrina española (MANRESA Y NAVARRO. Op. cit. pag. 283; CASTAN TOBERNAS, op. cit. pag. 527; ESPIN CANOVAS, op. cit. pag. 379) y francesa (LYON-CAEN, CH-RENAULT, L. "Traité de droit commercial", 5ª edic., Paris 1926, t. II, 1ª prte, pag. 45; ESCARRA, op. cit. pag. 92; HAMEL-LAGARDE, op. cit. pag. 486). En la doctrina belga, FREDERICQ, op. cit. pag. 112; en la italiana, por todos, GASPERONI, op. cit. pag. 130.

vés del beneficio (132).

Para ensayar una respuesta adecuada a este tema, que ha atormentado a la doctrina científica (133), es necesario plantearse, desde sus mismas raíces, la supuesta distinción entre lucro (ganancia) por una parte, y ahorro en el gasto por la otra, investigando cual es la relación que media entre ellos.

Con frecuencia se utilizan los términos "lucro", "ganancia", "especulación" o "beneficio" de forma indiscriminada, como si se tratase de conceptos con un mismo denominador común.

El término "especulación" que tiene en su sentido corriente una fuerte dosis peyorativa (134) aparece, en primer lugar, como concepto

- (132) SCHOLSEN, "La notion de bènèfice dans le contrat de société", Rev. prat soc, 1969, pag. 211; ver también SANCHEZ CALERO, F. "La determinación y la distribución del beneficio neto en la sociedad anónima", Roma-Madrid 1955, pags. 28-32, y bibliografía citada.
- (133) Así CASTAN (op. cit. pag. 521) critica la fórmula del art. 1665 del código civil, por cuanto "no conduce a nada, como no sea a complicar con sutiles distinguos la técnica jurídica, el excluir del Código Civil aquellas sociedades que, aun sin perseguir un beneficio consistente en dinero y partible entre los socios, se proponen - ... - obtener economías ..."; por su parte GIRON TENA ("Los conceptos ...", cit. pag. 212) señala que "la nota económica lucrativa en la índole del fin común ha aparecido siempre a nuestra como insoslayable", proponiendo un concepto de sociedad basado no en el ánimo lucrativo sino en el fin común.
- (134) El Diccionario de la Lengua Española (18ª edic., Madrid 1956, pag. 573) define el término especular como "Procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil".

radicalmente distinto de los restantes, pudiendo entenderse por tal el ejercicio de una actividad económica tendente a la realización de una utilidad excesiva, derivada de una particular conjuntura económica favorable, o de una especial situación en cambios y precios (135).

Por el contrario, lucro o ganancia (136), en sentido técnico, es pura y simplemente un incremento patrimonial derivado de una utilidad susceptible de rendimiento económico, no implicando por sí mismo especulación de ningún tipo (137).

Tomando en este sentido el concepto de lucro, resulta difícil, a nuestro entender, negar que la norma instrumenta a la sociedad como instituto destinado a la consecución y distribución de ganancias.

A su vez, esta ganancia puede asumir dos formas - beneficio y ahorro en gasto -, perfectamente diferenciables entre sí, pero que tienen en común el pertenecer a un mismo género: el lucro.

Ciertamente que entre ambos conceptos subsisten diferencias relevantes, si no cuantitativas - "gran ganancia bajo forma de ahorro en gas

(135) Cfr. SIMONETTO, E. "Il lucro dell'impresa cooperativa: utile e risparmio di spesa", Riv. delle Soc. 1970, pag. 244.

(136) Sobre la utilización sinónima de estos dos términos, con referencia al contrato de sociedad, ver STS (civ.) 23-5-1962 (Aran. 2521).

(137) SIMONETTO, op. ult. cit. pag. 245.

to puede ser realizado en los mismos modos y procedimientos destinados a la consecución de beneficios (138) - si de carácter técnico (139); sin embargo quedan subsumidos bajo la noción de lucro; ambos suponen una ventaja económica, tienen valor patrimonial, y son, bajo este perfil, perfectamente comparables (140).

Limitados así estos conceptos, no se puede dudar que el ánimo lucrativo, es decir la ganancia a la que se refiere ese ánimo, puede adoptar cualquiera de esas dos formas; y en ambos supuestos se realiza la operación de distribución de ganancias, puesto que el argumento de negar al ahorro en gasto entidad patrimonial autónoma fuera de los socios - esto es, afirma que en su distribución no participa de forma directa la sociedad - no invalida la exigencia legal, que se limita a establecer que las ganancias, fruto del ánimo lucrativo, se distribuyan, sin exigirse en ningún precepto que aquellas hayn de entrar en el patrimonio de la sociedad.

En definitiva, pues, consideramos que tanto el beneficio - ganancia que ingresa en el patrimonio de la sociedad como consecuencia de contratar esta con terceros - como el ahorro en gasto - que ingresa en el patrimonio de los socios - son formas de lucro (141), no siendo por tan

(138) Ibidem, pag. 249.

(139) "El ahorro en gasto no tiene existencia autónoma, como valor excedente, en el patrimonio de la sociedad, y no se registra en el balance de la sociedad, adoptando por ello la forma de entidad de carácter negativo" (cfr. SIMONETTO, op. cit. pag. 250)

(140) Cfr. SIMONETTO, op. y loc. ult. cit.

(141) Interesante es transcribir uno de los considerandos de la STS (sala 3ª) de 7-12-1965 (Aran. 5669) que dice "Lucro no debe entender

to lícito excluir del concepto de Sociedad aquellas instituciones que tienden a realizar economías en el gasto de los socios (142).

2.2.3 Elementos del contrato de Sociedad Cooperativa de Producción.

Tipificados los elementos básicos del contrato de sociedad, y sentado que el ánimo lucrativo representa no solo una cualidad del fin (143), sino que ejercita su influencia determinando la causa del contrato y convirtiéndose en elemento jurídicamente relevante para su configuración, ocurre investigar ahora si el esquema contractual de la cooperativa (144) de producción responde al del contrato de sociedad; labor es

se en el sentido de ganancia lindante con una utilidad excesiva y resaltante, sino el razonable de provecho o utilidad moderado, reducido, pero perceptible..., materializado, si no en el sentido de ingreso de numerario, si al menos, en el de ahorro en gasto".

- (142) En base a esta diversa forma de distribuirse el lucro ASCARELLI, T. ("Curso di diritto commerciale", 3ª edic., Milano 1962, pags. 199-205) niega el carácter de sociedad a las instituciones que solo pretende favorecer a los asociados la consecución de una economía, exigiendo que el ánimo lucrativo sea tanto de los socios como de la sociedad; en parecidos términos, GASTAN, op. y loc. ult. cit.; conforme con el sentido expuesto, FERRI, "La cooperativa come società, cit. pag. 254.
- (143) Cfr., BOLAFFI, op. cit. pag. 130; sobre la distinción entre fin del contrato y causa o "fin en abstracto", vid. STS (civ. 36-6-1948 (Aran. 1115).
- (144) BAYON MARINE-SERRANO ALTAMIRAS ("Régimen jurídico...", cit. pag. 40), tomando como criterio diferencial entre las sociedades y las asociaciones el que las primeras nacen de un contrato y las segundas de un acuerdo de voluntades (vid. nota 112) señalan que la sociedad cooperativa es sociedad por que en su base se encuentra un contrato; en realidad, entendemos que con este planteamiento el problema queda insoluble, ya que el núcleo central del tema radica no en afirmar que la cooperativa es un contrato,

ta que, en buena medida, se reconduce a analizar si ambos tipos organizativos mantienen una identidad causal, o es la suya una identidad meramente estructural o formal.

2.2.3.1 La pluralidad de sujetos

Entrando en el análisis del primero de los elementos que el artículo 1665 del Código Civil exige como presupuesto, no solo de validez sino de existencia para la constitución del contrato de sociedad, parece que no presenta dificultad de ningún tipo afirmar que la cooperativa de producción requiere una pluralidad subjetiva (145); así se desprende de la definición que el artículo primero, tanto de la LC como del RC, da de la sociedad cooperativa (146).

sino por que la cooperativa es un contrato de sociedad. Por otra parte, este punto de partida nos parece que no resuelve las cosas, puesto que también las asociaciones nacen de un contrato (cfr. CRISAFULLI, V. voz "Associazione", un Nuovo Digesto Italiano, t. I Torino 1937, pags. 1036 y ss; SACCO, R. "Società ed associazione", Riv. dir. comm, 1950, II, pag. 161; PELLISE PRATS, B. voz "Asociación", en Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona 1951, pag. 70; AURICCHIO, A. voz "Associazioni (in generale)" Enciclopedia del Diritto, t. II, Milano 1958, pag. 876).

- (145) La doctrina ha polemizado en torno a si para la calificación de un contrato como plurilateral (sobre el tema vid: FERRI, G. "Contratto plurilaterale" (voz) Novissimo Digesto Italiano, t. IV, Torino 1959, pags. 679 y ss) ha de atenderse al número de sujetos que intervengan como partes en la declaración de voluntad, o al número de declaraciones de voluntad; parece que la doctrina se inclina predominantemente (ROMANO-PAVONI, "La teoria ...", cit. pag. 292 y bibliografía citada) a tomar como criterio delimitador de la unilateralidad o plurilateralidad de un acto el número de partes declarantes; en este sentido no hay objeción alguna para calificar al contrato de sociedad cooperativa como contrato plurilateral (cfr. SAN CHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, op. cit. pag. 171 y BAYON MARINE-SERRANO ALTIMIRAS, op. cit. pag. 40).

- (146) "Es sociedad cooperativa la reunión de personas..."

Esta identidad del primer elemento del contrato de sociedad y de cooperativa podría ser contestado en base al mayor número de sujetos que se requieren para constituir una cooperativa, puesto que al exigir la norma un mínimo de quince (147), supera el número de socios exigidos para proceder a la constitución de una sociedad, ya civil (148) ya mercantil (149).

Sin embargo, esta pluralidad cualificada no pasa de ser un mero requisito formal, habida cuenta del carácter social con que el ordenamiento configura este instituto (150) pero sin relevancia, en cualquier caso, para convertirse en principio tipificador básico (151).

-
- (147) Cfr. apar. b) art. 8 LC y apar. d) art. 4 del RC; por su parte la legislación italiana exige un mínimo de 9, salvo para las cooperativas de producción y trabajo admitidas en las licitaciones públicas (la normativa de este tipo de cooperativa de producción puede consultarse en NICOLETTI, D. "Codice della cooperazione", Roma 1965 pags. 438-485) en las que se necesita un mínimo de 25.
- (148) Basta un número de dos socios.
- (149) Tres en la anónima (art. 10, ley 17-7-1951).
- (150) Cfr. SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, op. y loc. cit.
- (151) Conforme con este criterio para la legislación italiana, D'ANGELO, A. "Il numero dei soci nelle società cooperative", Riv. Coop. 1956, pag. 287; ver también sobre el tema, FRANCESCHELLI, M. "Sui requisiti dei soci nelle società cooperative", Riv. Coop. 1948, pags. 33 y ss y LABADESSA, R. "Il numero dei soci nelle cooperative", Riv. Coop. 1957, pags. 23 y ss.

2.2.3.2 La aportación en común

El segundo de los elementos básicos del contrato de sociedad es la aportación en común, esto es la puesta a disposición por los socios de aquellos medios necesarios para desarrollar el programa de la sociedad (152).

Este segundo elemento también se exige en la sociedad cooperativa de producción, por lo que cabe afirmar, sin más, que la aportación en común es elemento esencial al contrato de sociedad cooperativa y requisito exigible a todos los socios (153).

Esta primera conclusión de que ninguna diferencia hay en la aportación en común - cuya funcionalidad genérica consiste en ser medio idóneo para la consecución del fin social (154) - requiere sin embargo un análisis más detallado, habida cuenta de las posibles dudas que pudieran surgir en torno a la tipificación de estas aportaciones, y al valor

(152) Sobre aportaciones en la sociedad, en general: PICARD KREHER, "Des sociétés...", cit. pags. 33-61; PEREZ GONZALEZ-ALGUER, op. cit. pags. 397 y ss; GIRON TENA, "Los conceptos de sociedad..." cit. pag. 216-219; CASTAN TOBEÑAS, op. cit. pags. 222-226, SIMONETTO, E. "L'apporto nell contratto di società", Riv. Dir. Civ. 1958, I, pg. 1 y ss; en la sociedad cooperativa, CRECO, G. "Costituzione di società cooperativa e obbligatorietà del versamento dei tre decimi del conferimento in danaro", Riv. Dir. Fall 1946, I, pags. 71 y ss; VERRUCOLI, "La Società...", cit. pags. 152 y ss, y SCORDINO, op. cit. pag. 163 y ss.

(153) Dice el artículo cuarto del RC: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo ocho de la Ley, como complemento de sus preceptos, habrá de tenerse en cuenta en los Estatutos sociales: g) "La obligatoriedad de los socios de efectuar aportaciones al capital social ..."

(154) Cfr. GARRIGUES, "Curso...", cit. pag. 244; URÍA, "Derecho Mercantil", cit. pag. 119.

funcional que haya de otorgarse a la limitación cuantitativa de la aportación de cada socio al capital social.

A) Entrando en el análisis del primero de los temas cuestionados, hay que señalar que el artículo quince de la LC - recogido en el número dos del artículo décimo del RC - dice que las "aportaciones al capital social podrán hacerse en dinero, crédito, efectos, trabajo y actividad industrial".

Una primera comparación de este precepto con el artículo 1665 del Código Civil, que menciona como aportaciones las de "dinero, bienes e industria"(155) podría hacer suponer que se están contemplando algunos tipos de aportaciones diversos a los comunmente exigidos en la sociedad; apreciación esta que debe rechazarse habida cuenta de la fórmula omni-comprehensiva adoptada por el Código Civil.

El problema surge, sin embargo, cuando se intenta integrar los tipos de aportaciones mencionados por la norma cooperativa en alguno de los enumerados en el artículo 1665 del Código Civil.

Partiendo de la distinción dual entre aportaciones de bienes (aportaciones propias) y de industria (aportaciones impropias) (156) y caracterizando como notas del primer tipo las de la "utilidad o satisfacción de un interés, su individualidad u objetivación y su apropiabilidad" (157)

(155) El artículo 116 del Código de Comercio menciona como aportaciones las de "bienes e industria, o cualquiera de ellas".

(156) Cfr. GARRIGUES, op. y loc. ult. cit.

(157) Cfr. VERGÉS SANCHEZ, M. "El socio industrial", Madrid 1972, pag. 27. La doctrina no mantiene un criterio pacífico sobre el alcance que

no ofrece dudas el considerar como aportaciones de bienes las de dinero, crédito (158) y efectos, y como aportación de industria la de trabajo (159).

El núcleo central de la cuestión se presenta al ensayar latipificación de la "actividad industrial", puesto que si por aportación de industria se entiende "una prestación de hacer, por virtud de la cual el socio pone su actividad al servicio de la sociedad" (160), el legislador parece incurrir en una tautología, ya que esa aportación, así delimitada, queda suficientemente tipificada con la aportación de "trabajo"; por el contrario, si por actividad industrial se quiere señalar la aportación de una actividad de empresa (161), la utilización técnica del término industrial aparece, por perturbador, inadecuado.

De esta doble alternativa, pensamos que la que debe mantenerse es la segunda; esto es, considerar la aportación de actividad industrial como un supuesto de aportación de bienes.

haya de darse a la aportación de bienes, puesto que mientras un sector mantiene una tesis amplia, entendiendo por tal cualquier entidad útil apta para satisfacer un interés, incluso moral (cfr. CASTAN TOBEÑAS, op. cit. pag. 524) otro sector doctrinal, más numeroso, señala que solo es aportación de bienes lo que representa una satisfacción patrimonial (cfr. GARRIGUES, op. y loc. ult. cit).

(158) Para algunos autores (PIC-KREHER, op. cit. pag. 38, HAMEL-LAGARDE, op. cit. pag. 475) el crédito comercial es aportación de industria. En sentido contrario, y con amplia bibliografía, VERGEZ SANCHEZ, op. cit. pag. 33 y ss.

(159) Así GARRIGUES, op. y loc. cit.; URÍA, op. y loc. cit; CASTAN op. y loc. cit.

(160) Cfr. VERGEZ SANCHEZ, op. cit. pag. 41 ROMAGNOLI, "La prestazione di lavoro nel contratto di società" Milano 1967, passim, esp. 80-152.
Vid

(161) Ibidem, pag. 32.

El problema, sin embargo, no queda concluido con la aceptación, en línea de principio, y en base a nuestro ordenamiento jurídico, de que en la sociedad cooperativa de producción las aportaciones pueden ser tanto de bienes como de industria (trabajo), puesto que inmediatamente nace la duda de si una cooperativa de producción puede tener un fondo común representado por las aportaciones de trabajo de los socios.

Planteada así esta cuestión, podría parecer, en una primera reflexión, carente ya de contenido dogmático ya de interés práctico, por un doble orden de consideraciones:

En primer lugar, y si se mantiene doctrinalmente la posibilidad de que las sociedades personalistas se constituyan solo con aportaciones de trabajo (162), con más rigor esta afirmación debe postularse de la sociedad cooperativa "in genere" y de la de producción en particular, en la que las cualidades personales de los socios son valoradas y ponderadas en el momento de la constitución o posterior ingreso (163).

En segundo lugar por cuanto, si se ha calificado la cooperativa de producción como un supuesto de asociación trabajo, rechazar ahora que el trabajo pueda configurarse como aportación social, equivale a negar la funcionalidad de este tipo de aportaciones como medio idoneo para la consecución del fin social (164).

(162) Ibidem, pag. 63

(163) Sobre el tema, VERRUCOLI, op. cit. pags. 151 y ss; SIMONETTO, "Società e mutualità", cit. pag. 405; sobre el significado del "intuitus personae" en la sociedad cooperativa, LEO, "La legge..." cit. pags. 579 y ss. y nota 69 a pag. 579.

(164) VERRUCOLI, op. cit. pag. 271; OPPO, op. cit. pag. 391; ROMAGNOLI, op. cit. pag. 228.

En principio, así parece haberlo entendido el legislador, que permite, sin hacer distinciones según el subtipo de sociedad cooperativa, que las aportaciones se hagan "en dinero, crédito, efectos, trabajo y actividad industrial".

Sin embargo, y no obstante esta primera reflexión, surgen diversos argumentos para invalidar la conclusión; derivados de la configuración de la responsabilidad en la sociedad cooperativa, y de la valoración funcional otorgada al capital social.

En este orden de cosas, sabido es que la configuración de la responsabilidad varia según el tipo organizativo de sociedad, y que precisamente la valoración del capital social se hace en función de la responsabilidad asumida por los socios. (165)

Allí donde la responsabilidad es ilimitada, el capital social no actúa más que como instrumento indiciario de las aportaciones sociales, puesto que el acreedor social al poder actuar con este tipo de responsabilidad se considera suficientemente protegido; por el contrario, en las sociedades de responsabilidad limitada, el capital social se convierte en instrumento adecuado para garantizar a los acreedores sociales la realización de sus pretensiones ejecutivas (166).

(165) En general sobre este tema, SIMONETTO, "Responsabilità e garanzia nel diritto delle società", Padova 1959, passim, esp. pags. 110 y ss, y DI SABATO, F. "Capitale e responsabilità interna nelle società di persone", Napoli 1965.

(166) Vid. SIMONETTO, "Concetto e composizione del capitale sociale", Riv.

Estas consideraciones nos exigen analizar la relación que media entre forma de responsabilidad y función del capital social, en el esquema legislativo de la sociedad cooperativa de producción.

Así, por cuanto se refiere a este último, y si bien tanto la Ley como el Reglamento mencionan en diversos artículos la necesidad de contar con un capital social para la constitución de la sociedad (167), podría pensarse que ello no es dato para configurarle con esa función de fondo de garantía.

Ahora bien, un análisis más detallado de estos preceptos hace tambalear la afirmación, debido a la regulación minuciosa y detallada que se hace del mismo; así, se señalan los tipos de aportaciones que integran el capital social (art. 10.1 RC); se obliga a los Estatutos a fijar las bases para la valoración de las aportaciones no dinerarias (art. 10.2 RC) - con lo que se exige la capitalización de cualquier aportación de trabajo, que se incorpora como contribución económica al capital social (168) -; se establece la regla de que los socios recibirán títulos nominativos en contrapartida de sus aportaciones a capital social (art. 10.3 RC); se señala la cuantía total máxima de la aportación de cada socio, y la forma y los plazos para efectuar los desembolsos de las partes restantes (art. 11.1 RC).

dir. comm. I, 1956, pags. 48 y ss, y DI SABATO, F. "La nozione di capitale sociale nelle società di persone", Riv. delle Soc. 1966, pags. 470 y sa.

(167) El legislador no ha mencionado, como motivo de disolución, la desaparición del capital social, pudiéndose cuestionar si este motivo, no obstante, actuaría, no ya "ope legis", sino a petición de un tercero posible afectado, o incluso un socio. Nos inclinamos por la tesis afirmativa.

(168) Un estudio en profundidad del significado histórico de esta capita-

Todas estas normas, cuya similitud con las de la sociedad típicamente capitalista son bien patente (169), obligan a pensar que en el ánimo del legislador está el configurar al capital social de las sociedades cooperativas como fondo de garantía frente a posibles terceros perjudicados.

Por otra parte, y con respecto al tema de la forma de responsabilidad, los socios pueden asumir una responsabilidad limitada, o ilimitada; pero en cualquier caso, la responsabilidad asumida ha de ser idéntica a todos ellos, y en caso de silencio estatutario la ley impone la forma de responsabilidad "limitada al importe de las aportaciones al capital social obligado a suscribir y a desembolsar" (170).

Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto que la ecuación existente entre forma de responsabilidad ilimitada y capital social irrelevante por una parte, y forma de responsabilidad limitada y capital social garante por otra, quiebra en el sistema de la sociedad cooperativa, produciéndose una clara contradicción en la configuración que el legislador ha dado al capital social y la libertad en la elección de la forma de responsabilidad concedida a los socios; contradicción cuya superación hade realizarse, - salvo que se admita la posibilidad de constituir una sociedad cooperativa de producción con aportaciones de trabajo y con reg

lización del trabajo en ROMAGNOLI, op. cit. pags. 44 y ss, en donde se critica esta postura ("Il capitale-uomo - dice en pag. 46 - non passa mai a far parte del patrimonio sociale"). En el mismo sentido, SIMONETTO, "Responsabilità e garanzia...", cit. pag. 338.

(169) Comparense estos artículos con el 8º, y el 11, nº 3 apar. f) y nº 4, de la ley de 17-7-1951.

(170) Cfr. art. 19.1 RC.

ponsabilidad limitada (171) - rechazando que la cooperativa de producción pueda constituirse con un fondo de trabajo; y al mismo tiempo, negando que el trabajo quede configurado como aportación social (172).

B) Resuelto el primero de los temas planteados, corresponde ahora, por último, analizar el segundo; es decir, el sentido de la limitación cuantitativa de la aportación del socio a capital social (173).

Esta limitación a la participación del socio, cuya introducción en los textos legislativos obedece a un deseo de evitar degeneraciones de este tipo de sociedad hacia formas capitalistas, ha sido considerado por algún autor no meramente como una diferencia cuantitativa respecto del resto de los tipos organizativos de sociedad, sino como "una alteración en la función del mecanismo que el capital social realiza en las cooperativas", por cuanto "si bien en el resto de las sociedades existe una tendencia expansiva a fagocitar nuevos capitales y a integrar nuevos socios apor

(171) Por otra parte, y si se piensa que la constitución del Fondo de Reserva, que actúa igualmente como garantía frente a terceros, no viene fijado en una cantidad individualizada sino que al mismo se destina un porcentaje que puede engrosar el Fondo de Obras Sociales en su totalidad (art. 20 RC), la absoluta falta de garantía de estos terceros es manifiesta.

(172) Vid. sobre la configuración de la prestación de trabajo, pags. 336 y ss.

(173) El parr. f) del artículo 4º del RC prohíbe que el valor de la participación de cada socio exceda de la tercera parte del capital social.

tadores de estos, en la cooperativa se tiende a realizar la satisfacción del interés limitado de los socios a tener bienes y servicios producidos en el mercado al objeto de ahorrar las ganancias de los intermediarios en el cambio" (174).

Esta conclusión es válida para cierto tipo de cooperativas, en donde efectivamente la satisfacción del interés de los socios reside en procurarse bienes o servicios en condiciones más ventajosas que las ofrecidas por el mercado.

Es aplicable a aquellas cooperativas de producción cuyo resultado depende más de las cualidades personales y de la actividad de los socios, que de la cuantía de un capital social; pero no es aplicable, en general, para aquellas otras cuya actividad reside, precisamente, en producir bienes para terceros adquirentes, y cuya expansión cuantitativa depende de la tenencia abundante de medios de financiación, tanto internos como externos.

Este tipo de sociedades cooperativas - e insistamos una vez más que la sociedad no es más que la envoltura formal del empresario - ha de actuar, en un sistema de economía capitalista, con las mismas reglas que el resto de los empresarios personas sociales, de ahí que entendamos que esta limitación, que carece de alcance práctico debido al juego de los principios que determinan tanto los derechos políticos cuanto los econó-

(174) Cfr. SIMONETTO, "Società e mutualità", cit. pags. 391 y 392.

micos, no sea más que reliquia de una postura legislativa económicamente superada y como tal artificiosa e incapaz de descalificar la función que el capital asume en las cooperativas de producción.

En definitiva, entendemos que estas consideraciones nos permiten concluir que, desde la perspectiva del segundo elemento del contrato de sociedad, no es lícito advertir diferencia alguna que cualifique el de la sociedad cooperativa de producción con el de la sociedad "in genere".

2.2.3.3 El ánimo lucrativo

Sentado en los apartados anteriores que no corre diferencia sustancial entre los dos primeros elementos del contrato de sociedad, conforme vienen tipificados en el artículo 1.665 del C.Civ., y el de sociedad cooperativa de producción, hemos de pasar a analizar la presencia en este último del tercero de los requisitos cualificadores, el ánimo lucrativo, y que constituye la cuestión más polémica y polemizada en la doctrina científica (175).

El análisis del "animus lucrandi" de la sociedad cooperativa en general, y de la de producción en particular, no ha sido siempre objeto de estudio desde posturas intelectualmente desapasionadas y jurídicamente rigurosas, entremezclándose en la investigación factores de naturaleza sociológica, económica y política, impropios del análisis jurídico (176).

(175) Vid. SIMONETTO, "El lucro...", cit. y amplia bibliografía en nota 1. También PEREZ GARCIA, A. "El ánimo de lucro y la empresa cooperativa", en Tribuna Cooperativa, nº 9, 1972, pags. 21 y ss.

(176) Este confusiónismo en los planos de la investigación se aprecia en la mayoría de los estudiosos de la Cooperación. Así CIURANA FERNANDEZ, J.^{ta} ("Curso de Cooperación", Barcelona 1968, pags. 158 y ss)

En este sentido, y partiendo de la calificación de la cooperativa como "organismo de categoría" - esto es, como entidad destinada a proyectar su actividad al colectivo total componente de esa categoría (177) - se llega a la conclusión de que la cooperativa es una institución altruista, o cuando menos ego-altruista (178), cuya finalidad queda agotada en el servicio que presta a la categoría en sentido sociológico (179); impidiéndose, así, cualquier intento de mixtificar las ins

califica como sinónimos los conceptos de lucro, ganancia y beneficio, señalando que lucro es "toda ganancia que se obtiene sin riesgo y sin trabajo alguno" (pag. 158), y "que la cooperativa repudia el beneficio y lucro mercantil (pag. 160). Este mismo confusionismo se aprecia en lo que podríamos calificar como de "doctrina ortodoxa española", leyéndose en una apostilla al ensayo de CREMADES (op. cit. pag. 34) redactada por la redacción de la revista Tribuna Cooperativa (editada por la O.S. Cooperación) lo siguiente: "Este texto legal (C.Com) sustantivamente no puede ser el cuerpo jurídico que regule con igual identidad a las cooperativas y a las entidades mercantiles, cuyo único fin viene a estar constituido por el lucro del capital. Las cooperativas, por el contrario, pretenden el servicio a sus asociados".

(177) Sobre esta postura, vid nota 53.

(178) Según la ya acuñada frase de BIGIAMI "Sulla trasformazione delle cooperative", en Gius. Civ. 1949, I, col. 521 y ss. Crítica de esta calificación de la cooperativa en MESSINEO, F. "Di nuovo su cooperativa e utili sociali", Riv. Dir. Comm. 1949, I, pags. 470 y ss, esp. 478.

(179) Resulta extraño que uno de los más ardorosos defensores de esta teoría (VERRUCOLI, "La società...", pags. 137 y ss) califique no obstante a la cooperativa como sociedad, aunque reconozca que la misma se trata de "un istituto a doppia faccia, come società e come associazione" (pag. 144). Una solución congruente con este planteamiento en ASCARELLI, ("Cooperativa e società. Concettualismo giuridico e magia delle parole", cit. passim esp. pags. 419 y ss) en donde después de justificar la calificación de la cooperativa como organismo de categoría dice (pag. 424) "Esso giustifica a mio avviso la classificazione delle cooperative tra le associazioni".

tituciones cooperativas con las sociedades lucrativas.

La conclusión final a que conduce esta postura es a la exclusión de la cooperativa del campo de la sociedad, para pasar a aumentar el número de los fenómenos asociativos no reconducibles a los tipos de organización societaria (180).

Estas y parecidas posturas, así presentadas, parecen poco consistentes, ya que la investigación de sí en la sociedad cooperativa existe o no ánimo de lucro ha de elaborarse con esquemas estrictamente jurídicos, debiéndose abandonar aquellos otros que, al enturbiar la raíz del planteamiento, no pueden ofrecer, nunca, soluciones válidas en Derecho.

En este sentido hay que comenzar señalando la trascendencia que para la calificación jurídica de la cooperativa de producción como sociedad tiene el tema cuestionado; ya que al habernos adherido a la teoría doctrinal que marca la diferencia entre Sociedad y Asociación en el fin económico lucrativo de la primera, y al haber reconocido que ese ánimo lucrativo actúa, al mismo tiempo, como función tipificadora del negocio - esto es, como causa del contrato - la afirmación de que en la cooperativa existe ese ánimo de lucro entraña la propia calificación de su naturaleza societaria.

El planteamiento del presente tema nos exige, como "iter" lógico de nuestra exploración, el abordar las siguientes cuestiones:

(180) Cfr. GASPERONI, op. cit. pag. 133.

- a) La relativa a determinar si en la cooperativa de producción existe o no ánimo lucrativo, y que equivale, en síntesis, a tipificar la causa de este negocio jurídico.
- b) Resuelta esta cuestión y supuesto que la misma sea afirmativa, la relativa a determinar si los elementos típicos del ánimo lucrativo en el contrato de sociedad son similares a los del de sociedad cooperativa, para en su caso, analizar cual es la modalidad de lucro que en esta se produce.

Sin embargo, y antes de abordar la primera de las cuestiones propuestas, es necesario, al objeto de mantener el máximo rigor en nuestra investigación, resolver lo que podría plantearse como crítica u objeción inicial de nuestra argumentación base.

Efectivamente, estamos manteniendo que para llegar a la calificación jurídica de la cooperativa como sociedad es imprescindible hacerlo a través de la afirmación causal del ánimo lucrativo, conectando así lucro con sociedad, cuando por cierto sector doctrinal se afirma "una de armonía entre fin económico-lucrativo y organización societaria" (181).

De ahí que como cuestión previa debamos analizar si el ánimo de lucro es o no elemento tipificador para la investigación de la naturaleza jurídica de la Sociedad cooperativa.

(181) GIRON TENA, "Sobre los conceptos de sociedad en nuestro derecho", en "Estudios de Derecho Mercantil", cit. pag. 215.

a) El ánimo lucrativo como elemento esencial para la calificación societaria de la cooperativa de producción.

Son tres las vías a través de las cuales la doctrina, rechazando el fin económico-lucrativo de la cooperativa, llega a su calificación de Sociedad.

Primera: El criterio diferenciador entre Sociedad y Asociación

Señalamos anteriormente que la doctrina científica no adopta posturas pacíficas respecto del criterio diferencial entre Sociedad y Asociación; como consecuencia de esta pluralidad de teorías, es obvio que se puede sostener la naturaleza societaria de la cooperativa siempre que en ella esté presente el elemento diferencial base (182), siendo

(182) Recordando las teorías elaboradas por la doctrina (vid. nota 112) tendríamos el siguiente resultado sobre la naturaleza jurídica de la cooperativa:

- a) "Utilidad de los miembros: la cooperativa sería asociación, dada la variabilidad de socios.
- b) Determinación de los beneficios: sería igualmente asociación, ya que en la cooperativa los beneficios, o más concretamente su distribución, se hace en base a proporciones no establecidas previamente.
- c) Naturaleza del negocio jurídico de origen: sería sociedad, ya que nace de un contrato (si se aceptase la tesis de la cooperativa organismo de categoría sería asociación, pues nacería de un acuerdo).
- d) Por la naturaleza de la actividad; sería sociedad, ya que la sociedad cooperativa desarrolla una actividad productiva.
- e) Por la naturaleza del interés que acoge: sería asociación, si se piensa que la cooperativa pretende reglamentar un interés ya existente entre los socios, y sociedad si se rechaza esta doctrina.
- f) Por la naturaleza de los beneficios: sería sociedad, ya que las ventajas obtenidas por los socios cooperadores son de carácter patrimonial.

del todo irrelevante no ya el negar que el ánimo lucrativo sea extraño al esquema causal de la cooperativa, sino el cuestionarse la finalidad lucrativa de la institución.

Toda vez que nosotros hemos justificado anteriormente nuestra opción por el criterio lucrativo, a las razones allí expuestas nos remitimos.

Segunda: La Cooperativa como sociedad Mutualista

Empeñada la doctrina científica en encontrar nuevas formulaciones jurídicas aptas para calificar a la cooperativa como sociedad, así como para negar que el lucro constituya causa tipificadora de su contrato, se llega, como única vía posible para superar "el impasse" que produce una construcción similar, a la ampliación del concepto de sociedad.

La sociedad lucrativa no agota el concepto de sociedad (183), no se identifica con el genus, sino que viene a tipificar una de las dos especies de este género, del que la sociedad mutualista es la segunda especie, y para la que es la mutualidad, o más concretamente la "ventaja mutualista", causa del contrato.

Así planteada, no cabe dudar del atractivo que ofrece esta teoría, que al mismo tiempo que superar el problema de la calificación de la cooperativa como asociación (184), marca la diferencia entre esta y la

(183) A este resultado se puede llegar por otras vías; así, aceptando el concepto de sociedad propuesto por GIRON TENA (op. cit. pag. 206. "Unión de personas fundada mediante un negocio jurídico autónomamente determinado y con una adecuada organización jurídica").

(184) Aún siendo el criterio general, un sector de la doctrina, al acep-

sociedad ordinaria (lucrativa) en el terreno de la causa.

La construcción de esta teoría, en su planteamiento más puro, responde a las siguientes directrices:

Las cooperativas son unas instituciones jurídicas - se subraya - nacidas en un momento histórico muy concreto, y con fines sociales determinados; en el caso de las cooperativas de producción estos fines ~~eran~~ los de ofrecer trabajo en mejores condiciones que las existentes en las empresas capitalista, en las que aparece un empresario - cuya vestidura jurídica, tratándose de empresario social, es la de una sociedad lucrativa - como sujeto intermediario entre un mercado que demanda bienes o servicios y otro que ofrece trabajo.

Supuesto que esta sea la motivación histórica de las cooperativas de producción, se piensa que la causa de negocio cooperativo reside no ya en obtener un lucro, sino en beneficiarse de la ventaja mutualista que radica en permitir a los sujetos asociados trabajar en condiciones más favorables que las del mercado capitalista.

tar la teoría de mutualidad aplicada a la cooperativa, concluye con su calificación de asociación (cfr. ASCARELLI, op. y loc. cit y "Trasformazione di società in cooperativa e viceversa. Deliberazione a maggioranza e deliberazione all'unanimità nel sistema della società", For. Ita. 1956, I, pags. 778 y ss).

En consecuencia, no es el ánimo lucrativo elemento causal de esta cooperativa, puesto que los socios no constituyen la entidad al objeto de buscar ganancias para su posterior distribución, sino que el elemento causalmente relevante es facilitar a los propios miembros la consecución de una mayor remuneración de trabajo (185).

Expuesta la teoría de la mutualidad (186) parece conveniente, antes de abordar un juicio definitivo sobre la posición jurídica que la ventaja mutualista adopta en las sociedades cooperativas de producción, analizar si es posible, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, mantener los fundamentos básicos de esta elaboración doctrinal.

En este orden de cosas, el primer argumento que se puede aportar en contra de la teoría mutualista radica en la observación de la unidad causal que el concepto de sociedad mantiene en nuestro ordenamiento positivo; o para ser más categórico, la unidad del concepto de contrato de sociedad que impone, como lógico correlato, la identidad causal de lo que

(185) Cfr. BOLAFFI, "La società semplice", cit. pag. 169 ("Anche nelle cooperative i soci ritraggono un vantaggio apprezzabile: ma queste van taggio e non già una divisione di utili; la causa tipica e diversa nei due casi, consistendo nell'uno nella divisione degli utili e nell'altro nella mutualità"); GRAZIANI, "Società cooperativa...", cit. pag. 283; COLOMBO, "Osservazioni...", cit. pag. 149 ("la causa della cooperativa e quindi diversa dallo scopo di conseguire e ripartire utili"); OPPO, op. cit. pag. 285 ("Come è causa lo scopo di dividere l'utile nelle società lucrative, così è causa lo scopo mutualistico nelle cooperative").

(186) Sobre el significado de esta teoría en la elaboración económica de la empresa cooperativa, vid. pags. 115 y ss.

no son sociedades genéricamente distintas sino formas o tipos de organizaciones societarias.

La doctrina científica española, tanto la civilista como la mercantilista (187) mantiene pacíficamente que no hay un concepto genérico de sociedad mercantil (188) o civil; muy al contrario se afirma la identidad causal de ambas figuras de sociedad, cuya diferencia se plantea no en el plano de la causa, sino ya en el de la forma ya en el del objeto (189).

Desde una perspectiva "ex lege", entendemos igualmente que hay base para sostener la identidad causal de las diversas figuras y tipos societarios, puesto que los conceptos de sociedad, suministrados tanto por el art. 1.165 del C. Civ. como por el art. 116 del C.Com., mantienen una identidad imposible de negar (190).

-
- (187) Cfr. GIRON TENA, "Sociedades civiles y sociedades mercantiles: distinción y relaciones en Derecho español", en "Estudios...", cit. pags. 65-123; AZURZA Y OSCOZ, P. J. "Problemas de la sociedad civil", cit. passim, esp. pags. 146 y ss.
- (188) Categoricamente así lo sostiene GIRON TENA (Sobre los conceptos..." cit. pag. 255) al afirmar "Se ha pretendido la existencia de un concepto genérico de sociedad mercantil. Este punto de vista me parece que metodológicamente es insostenible; el Código de Comercio no ha configurado un tipo genérico de sociedad mercantil".
- (189) Sobre los diversos criterios de distinción entre sociedad civil y sociedad mercantil, vid. AZURZA: op. cit. pags. 124 y ss, y GIRON TENA, "Sociedades..." cit. pags. 86 y ss.
- (190) Suficientemente expresivas resultan estas palabras de GARRIGUES ("Curso...", cit. pag. 231). "La definición legal (de sociedad mercantil) define el contenido peculiar de todo contrato de sociedad ... Este hecho explica la coincidencia sustancial entre el art. 116 del C. de c. y el 1.665 del C. c.".

En definitiva, estas consideraciones en torno al concepto unitario del contrato de sociedad, nos permiten concluir que no es lícito sostener la naturaleza jurídica de sociedad de la cooperativa, estableciendo al mismo tiempo una diferenciación causal entre estas sociedades y las civiles y mercantiles (191).

Independientemente de la fuerza jurídica del argumento antecitado, suficiente por sí mismo para rechazar la teoría causal de la mutualidad en las sociedades cooperativas, entendemos que de la investigación histórica que del concepto de mutualidad ha mantenido nuestro ordenamiento positivo se pueden entresacar conclusiones similares.

La única disposición que de forma expresa conectó mutualidad con sociedad cooperativa fue, como ya quedó dicho (192) el C. de Comercio, cuyo artículo 124 excluía de su ámbito a las "sociedades cooperativas de producción (de consumo y de crédito) cuando realizasen actos de comercio extraños a la mutualidad".

Una simple interpretación literal del precepto comentado, pone de relieve que la mutualidad aparece exclusivamente como factor determinante de la mercantilidad de las sociedades cooperativas; de forma que, cuando una cooperativa de producción realizase actos de comercio tendría que adoptar la forma mercantil.

(191) Original, aunque no convincente, resulta la postura de GHIDINI ("Cooperativa e società", cit. pag. 192-193) que negando el carácter causal de la mutualidad, no afirma una identidad causal plena entre ambas sociedades, puesto que "nel contratto di società cooperativa si ravvisa un ulteriore elemento causale"; con lo que la causa entre ambas sociedades es "in parte la stessa" (subrayado del autor).

(192) Vid. pags. 42 y ss.

Por otra parte si se recuerda que, con referencia a las cooperativas de producción, el Código interpretó el acto mutualista no con el de dar trabajo a los socios, sino con el de producir para los socios, fácilmente se llega a la conclusión de que la mutualidad actuó en la configuración de la cooperativa como elemento extraño tanto para la calificación societaria de la entidad cuanto para la tipificación de su causa.

La legislación posterior guardó el más absoluto silencio sobre el tema de la mutualidad; silencio que podría justificarse al desaparecer, con la promulgación de disposiciones especiales, la razón de su incorporación normativa.

No obstante este silencio, se podría argumentar que si bien na expresamente, aparece el concepto mutualista de manera indirecta cuando se limita o prohíbe que las cooperativas de producción-trabajo (193) ostenten la posición jurídica de empresarios respecto de trabajadores vinculados con contrato de trabajo.

El problema se plantea en determinar si estas normas limitadoras quedan insertas en el esquema obligacionista y contractual de la cooperativa, o por el contrario no vienen sino a adecuar el carácter proteccionista de la legislación cooperativa a unos presupuestos materiales representativos de valores sociales dignos de protección.

En este sentido, del examen de la legislación sustantiva en mate-

(193) Vid. art. 25 ley de 1931, y art. 90 de su Reglamento.

ria cooperativano se desprende ningún precepto limitador ni prohibitivo de emplear mano de obra asalariada, encontrándose un precepto de tal naturaleza en las normas de carácter fiscal (194), lo que indica que la mutualidad se plantea en el terreno no ya meramente causal sino que ni siquiera lo hace en el contractual, operando esa limitación como medida selectiva para la protección fiscal o de otro tipo (195).

Tercera: La cooperativa como Sociedad formal.

La tercera y última de las vías a través de las cuales se llega a la calificación societaria de la cooperativa negando en ella el ánimo lucrativo, esta fundamentada en razones de orden instrumental.

La cooperativa - se dice - (196) responde en su esencia al esquema de las asociaciones sin ánimo lucrativo, y en consecuencia su naturaleza es la de una asociación; sin embargo, y habida cuenta de que la estructura de la asociación no permite desarrollar eficazmente los fines patrimoniales no lucrativos de esta institución, el legislador ha optado por

(194) El art. 6 del Estatuto Fiscal de las Cooperativas califica como protegidas en su apar. c) a las de producción industrial "compuestas por trabajadores que actúen por sí mismos con su personal trabajo, de carácter preponderantemente manual, en el proceso productivo a que dediquen su actividad fijándose en el nº 2 del art. 9 como causa de la pérdida de los beneficios fiscales el servirse de personas extrañas, salvo que estas desempeñen una función administrativa o técnica, y su número no exceda del 5 por 100 del total de asociados".

(195) La misma limitación se exige para que las cooperativas de producción puedan acogerse a los planes de inversión del Fondo Nacional de Protección al Trabajo (cfr. art. 63, OM 22-2-1973).

(196) Cfr. GASCON HERNANDEZ, J. "Las cooperativas desde el punto de vista del Derecho Mercantil", RDM 1957, nº 65, pags. 98 y ss.

su calificación de sociedad; calificación que es posibilitante e instrumental para la consecución de sus objetivos.

Esta tesis resulta completamente inaceptable; y ello no solamente por que obvia el problema de fondo - que trata de analizar si el funcionamiento dinámico de la institución responde al esquema causal de la sociedad - sino por cuanto aceptarla, significaría tanto como reconocer que el legislador esta utilizando la técnica del negocio indirecto (197) que permite que mediante un contrato causalmente unitario, cual es el de sociedad - cooperativo en este caso -, se obtengan fines distintos de los específicamente previsto por la norma.

b) El ánimo lucrativo como causa del contrato de sociedad cooperativa de producción

Las consideraciones mantenidas en el apartado anterior, señalan que el único camino posible para sostener la naturaleza societaria de la cooperativa de producción reside en afirmar el carácter lucrativo de su causa.

De esta forma, nuestra investigación queda reducida a comprobar si la causa de esta entidad es o no la distribución de ganancias, con la consecuencia lógica de que si el examen nos suministra conclusiones negativas habremos de afirmar su naturaleza de asociación.

(197) Se define el negocio indirecto (CASTRO, "El negocio jurídico", cit. pag. 447) como "el recurso a un negocio concreto determinado, para alcanzar consciente y consensualmente por su medio fines diversos de aquellos típicos de la estructura del negocio mismo". Vid. nota 115.

En este sentido entendemos que la única vía para adoptar una solución rigurosa se encuentra en analizar el funcionamiento dinámico de la propia institución.

Sabemos que la cooperativa de producción es un supuesto de asociación-trabajo; es decir, organización en la que unos sujetos, portadores a "título personal" de factor trabajo, se agrupan al objeto de potenciar sus esfuerzos individuales.

De esta primera afirmación, nos interesan destacar una conclusión importante, pieza clave de nuestra futura investigación: negar cualquier relevancia causal al hecho de que en esta sociedad se agrupen sujetos portadores de trabajo, ya que para la tipificación de la causa resulta dato accidental la posición socio-económica de los sujetos asociados.

Esta conclusión, planteada en el terreno puramente contractual, y por tanto ineficaz para negar que la norma no pueda en otros aspectos tomar en consideración el elemento sociológico que interviene en la cooperativa de producción, no ha sido entendida ni interpretada correctamente, pretendiéndose obtener de la estructura socio-económica de los sujetos de esta organización, consecuencias importantes para su configuración como sociedad.

Así, partiendo de la dialéctica existente entre sujetos poseedores del factor trabajo y sujetos poseedores del factor capital, e identificando conceptualmente el "ánimo lucrativo" como elemento causalmente relevante para la configuración de la noción de sociedad y el "capital" como factor privilegiado para la configuración de la noción de empresa ca-

pitalista, se llega a afirmar (198) que la cooperativa de producción, al no asociar capitalistas, no tiene ánimo de lucro, erga no puede ser calificada como sociedad lucrativa.

Independientemente de las objeciones que se podrían hacer a esta tesis por confundir planos de investigación y por caer en claras contradicciones (199), entendemos basta para rechazarla hacer las siguientes consideraciones: que la cooperativa de producción no asocie sujetos poseedores del capital, no supone que la cooperativa prescinda de él, lo único que ocurre es que los asociados, sociológicamente trabajadores, son quienes aportan ese capital, si bien, jurídicamente, esta matización resulte intranscendente para la configuración del contrato de sociedad, en el que lo que interesa es la aportación en común de "bienes", representativos de la participación del socio en el capital social; por otra parte, y supuesto que el capital social no asume, jurídicamente, una posición de beligerancia (200), es completamente falso sostener que capital

- (198) Cfr., por todos, SCORDINO, "La società...", cit. pag. 87-88, para quien la base capitalista de una sociedad califica "el interés del socio en la participación social".
- (199) Es contradictorio en su misma raíz socio-económica, puesto que si lo que se pretende es marcar la dialéctica entre ambos factores - dialéctica que entendemos existe - resulta absurdo pensar que los trabajadores, en un régimen estructuralmente capitalista, deben actuar con otro espíritu, con otro ánimo que los propios capitalistas. Quizas, y en el fondo, estas tesis hayan puesto el dedo en la llaga en la medida en que vienen a justificar, desde esta perspectiva que la permanencia de las cooperativas de producción en un sistema capitalista es medio para reforzar el propio sistema.
- (200) El capital social no es más que una cantidad contable, suma de garantía y responsabilidad de la sociedad (cfr. GARRIGUES, "Curso..." cit. pag. 327.).

y lucro sean términos sinónimos, elementos homogéneos de confrontación; muy al contrario, es perfectamente posible que nulo ánimo lucrativo se de con grandes cantidades de capital, y viceversa puede presentarse ese ánimo lucrando sin la presencia de capital, al menos cuantitativamente importante.

La cooperativa de producción, por su propia esencia, ha de realizar actos de cambio con terceros, a los que vende sus productos u ofrece sus servicios: no encontrándose, bajo este aspecto, diferencia alguna entre estas sociedades y el resto de las denominadas sociedades lucrativas que asumen un objeto social similar (201), coexistiendo entre ambas la necesidad de ofrecer sus productos a un precio que viene fijado por las reglas del mercado que rigen en el sistema capitalista en el que ambas organizaciones se encuentran estructuralmente incorporadas (202).

Los socios de una cooperativa de producción pretenden, al asociarse, aumentar su patrimonio con las ganancias realizadas en las operaciones con terceros, intercambiando con estos, consumidores o usuarios, los bienes y servicios producidos por la entidad (203).

De lo hasta aquí expuesto, bien podemos convenir, "prima facie", que las cooperativas de producción persiguen la obtención de una ganancia,

(201) Conforme en la doctrina científica, FERRI, "La cooperativa come società", cit. pag. 251.

(202) Sobre la necesidad que tiene la cooperativa de producción, en cuanto empresa económica, de seguir las reglas impuestas por el sistema en el que actúe, vid. pag. 105.

(203) GRECO, "Le società", cit. pag. 51.

la cual, a su vez, es distribuida entre quienes forman parte de la misma a título de socio (204), apreciándose en la configuración causal de esta sociedad los dos elementos conformadores del ánimo lucrativo: el objetivo de conseguir el lucro, y el subjetivo de repartirlo entre los socios (205).

Ahora bien, contestándose por amplios sectores doctrinales la presencia ya del primero, ya del segundo de estos elementos, se hace necesario analizar la adecuación dogmática y normativa de tales tesis a la realidad cooperativa.

En este orden de cosas se subraya que la cooperativa de producción ni pretende conseguir un lucro, ni tiende a la distribución de ganancias (206), ya que su causa se concreta en posibilitar a los que forman parte de ella el disfrute de los servicios que la cooperativa ofrece - condiciones de trabajo (207) -, y cuando se obtienen y distri

(204) COUTANT, "L'evolution...", cit. pag. 122; GASPERONI, "La trasformazione...", cit. pg. 138; SIMONETTO, "Il lucro...", cit. pag. 261.

(205) Vid. pags. 210 y ss.

(206) La doctrina española ha prestado poca atención a la configuración de la sociedad cooperativa en general, u de la de producción en particular; no obstante no han faltado autores que nieguen el ánimo lucrativo de estas entidades (cfr. MANRESA Y NAVARRO, J.M. "Comentario al Código Civil Español", t. XI, 5ª edic., Madrid 1950, pag. 281 - "se distinguen las cooperativas por el espíritu de solidaridad, contrario al de ganancia" -; CATAN TOBEÑAS, "Derecho civil...", t. II, vol. II, pag. 295 - "las cooperativas son asociaciones no lucrativas" -; PEREZ GONZALEZ, ALGUER, "Notas...", cit. T.I. vol. I, pag. 455; PELLISE PRATS, "Asociación", cit. pag. 71.

(207) Por todos, BERTO, G. "Studi preliminari sulla trasformazione delle società", Torino 1945, pag. 92 y ROMANO-PAVONI, "Teoria...", cit. pag. 145.

buyen ganancias, estas, constituyen una "prestación secundaria" (208), respecto de la esencial en que se incardina su función mutualista; e incluso, se sostiene que la mayor remuneración obtenida por los socios trabajadores no es ganancia "stricto sensu", sino "el resultado del goce directo de un servicio prestado por la cooperativa" (209).

Antes de entrar en la realidad de estas objeciones, y en las que de nuevo se aprecia el condicionamiento del pretendido carácter mutualista en la configuración de la institución, conviene hacer unas consideraciones previas que sirvan de punto de apoyo a la argumentación posterior.

En este sentido, ha quedado como conclusión firme la identidad que corre entre el objeto social de las cooperativas de producción y el resto de las sociedades lucrativas, en la medida en que para ambas lo es el ejercicio de una actividad económica; de este postulado cabe deducir que el legislador está contemplando a la cooperativa de producción como un mecanismo empresarial; y si esto es así - y sin entrar en la polémica relativa a si elemento esencial de la actividad empresarial sea el lucro - se puede señalar que empresa y fin lucrativo se acercan hasta identificarse entre ellos (210). Como acertadamente señala SIMONET

(208) Cfr. BOLAFFI, "La società...", cit. pag. 171; BIGIAMI ("sulla trasformazione..."), cit. col. 522) habla del carácter eventual de las ganancias.

(209) ROMANO-PAVONI, op. y loc. cit (nota 14).

(210) Dice GARIGUES ("Curso ...", cit. pg. 146) que "lo que distingue una empresa de las simples agregaciones de cosas y de derechos es la aplicación del esfuerzo personal (del comerciante y de sus auxiliares) para la obtención de una ganancia."

TO (211), "la empresa se rige sobre el lucro y se puede afirmar, como carácter socialmente típico de la empresa, la finalidad de producción y conexas a ella, la lucrativa". En definitiva, pues, se puede sostener que, desde el momento en que el legislador prevee como objeto típico de la sociedad cooperativa de producción el ejercicio de una empresa, está consintiendo y posibilitando que la misma tienda hacia la consecución de unas ganancias, de un lucro abstractamente considerado.

Estas consideraciones tienen, por otra parte, refrendo normativo cuando se analiza el concepto que de cooperativa de producción industrial ofrece el artículo 48 del Reglamento de Cooperación al afirmar sin rodeos que las mismas estarán destinadas a la "producción de bienes y servicios".

Si todo lo hasta aquí dicho se tiene como correcto, resulta difícil seguir manteniendo que la ventaja mutualista se inserte en el esquema causal del contrato de sociedad cooperativa de producción; o en otros términos, que causa de esta sociedad sea no el conseguir y distribuir ganancias, sino el de prestar un trabajo a mejores condiciones que las existentes.

Independientemente de que en estas posturas se encierre un sofisma (212) que encubre, en no pocas ocasiones, actitudes discriminatorias

(211) "El lucro...", pag. 246.

(212) Sofisma es sostener que la cooperativa de producción no tiene ánimo de lucro, si no que tiende a remunerar más el trabajo de los socios. No se comprende como, en términos ni económicos ni jurídicos, se pueda ofrecer remuneraciones más altas sin ánimo de conseguir ganancias y repartirlas posteriormente entre los socios.

respecto del comportamiento funcional de las cooperativas de producción y el resto de las sociedades llamadas lucrativas, entendemos que todas ellas, al sostener que la causa de este negocio jurídico se concreta en "posibilitar el goce a los socios del servicio que la entidad ofrece" (213), incurrir en un doble error.

Por una parte, por cuanto el trabajo "a mayores condiciones" (214) no se configura en este contrato como causa, sino que actúa como objeto del mismo; de forma que bien podríamos decir que el objeto contractual de la sociedad cooperativa de producción es doble: por una parte el ejercicio de una actividad económica de empresa, y por otra el trabajo que, con carácter obligatorio, han de prestar los socios.

Por otra, el segundo error estriba en que de aceptar tal tesis, la obligación de trabajar quedaría configurada como un derecho facultativo del socio, cuando de la normativa legal se desprende que esta obligación se articula de manera recíproca, en cuya virtud la cooperativa asume la de dar trabajo, y el socio la de prestarlo.

Todavía se podría argumentar que aun siendo cierto que la cooperativa de producción persiga un lucro, no por ello debe calificarse su causa como lucrativa, puesto que al ser el elemento subjetivo - esto es, la

(213) Por todos, ROMANO-PAVONI, op. y loc. cit. En la doctrina española, GARCIA PADRON. "Las sociedades...", cit. pg. 141 se adhiere a esta tesis al señalar que... en las sociedades cooperativas solo puede consistir (el elemento causal) en procurar... ocasiones de trabajo a sus propios socios.

(214) No le falta razón a SIMONETTO ("Il lucro...", cit. pag. 261) cuando dice "Nemmeno essa cooperativa (di produzione) tende a dare servizi a condizione migliori; e nemmeno occasioni di lavoro, in quanto le occasioni di lavoro sono quelle che sono: è l'organizzazione

distribución de las ganancias entre todos los socios - el causalmente relevante, podría ocurrir, caso de prohibir la norma el reparto, que tuviesemos que reconducir la institución a círculo de los fenómenos asociativos de carácter económico (215); sin embargo, y al examinar los apartados siguientes, vamos a tener ocasión de comprobar que la ley no solamente ha instrumentado a la cooperativa de reproducción como organización tendente a la búsqueda de lucro, sino que, al considerar efecto normal de su funcionamiento la obtención de ganancia, ha procedido a su estructuración distributiva.

c) El beneficio como modalidad de lucro en la sociedad cooperativa de producción

Al plantearnos inicialmente el tema del lucro en el contrato de sociedad, señalabamos que había dos modalidades: el ahorro en gasto, y el beneficio.

Supuesto que ha quedado como conclusión firme la de que la cooperativa de producción es una organización colectiva destinada a la con-

societaria e associativa in genere que potenzia le forze dei son
goli" (subrayado del autor).

- (215) Calificación a la que llegan PEREZ GONZALEZ-ALGUER, op. cit. pag. 448; BERTO, "Studi...", cit. pag. 97 y ASCARELLI, "Cooperativa e società. Concettualismo...", cit. pags. 410 y ss; GASCON HERNANDEZ, "Las cooperativas desde ...", op. y loc. cit.

secución de ganancias, se ha de analizar ahora cual de entre aquellas dos formas lucrativas es la generada por esta entidad.

En este sentido han sido varios los criterios propuestos por la doctrina para marcar la diferencia entre ambas modalidades: así se subraya (216) que mientras el ahorro en gasto se refleja negativamente, ya que pretende evitar una pérdida, el beneficio produce siempre un incremento patrimonial de carácter positivo; igualmente se señala que mientras el primero ingresa en el patrimonio de los socios, que son los directos adquirentes del mismo, el segundo respresenta una ventaja patrimonial tanto de la sociedad cuanto de los socios (217).

De entre todos estos criterios, pensamos que el quemás se ajusta a la realidad cooperativa es el que establece la diferencia en base a la diversa formación de cada uno de ellos; ahorro en el gastos sería, siguiendo esta orientación, la ganancia producida al operar la sociedad con los propios socios, mientras que beneficio sería el lucro generado al contratar la sociedad con terceros, como consecuencia de los actos de cambio intrínsecos a su actividad (218).

(216) CASTAN TOBEÑAS, op. cit. pag. 527 (independientemente de que para este autor el ahorro en gasto no sea ganancia, con lo que ganancia y beneficio se identifican); SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, o. píp. pag. 145.

(217) SIMONETTO ("Il lucro...", cit. pag. 255) distingue desde esta perspectiva tres conceptos: el beneficio, "incremento patrimoniale della società, ma anche dei soci", el autobeneficio, "incremento patrimoniale solo della società", y el ahorro en gasto, "incremento patrimoniale soltanto e direttamente dei soci". (subrayado del autor)

(218) SIMONETTO, op. cit. pag. 252.

Trasladando estas consideraciones al terreno cooperativo, encontraríamos ahorro en gasto en aquellas cooperativas cuyo objeto sea adquirir o producir bienes o servicios por y para los socios; por el contrario, aparecerá el beneficio siempre que la actividad de la cooperativa esté dirigida hacia un mercado exterior, receptor de los bienes y servicios producidos.

Relacionando esta última afirmación con lo anteriormente señalado sobre la actividad económica constitutiva del objeto de la cooperativa de producción, entendemos no necesita justificarse la conclusión relativa a mantener que la ganancia obtenida y producida por esta entidad sea un auténtico beneficio (219); pudiéndose observar como en ella existen los elementos tipificadores de tal carácter: es una ventaja patrimonial que enriquece positivamente tanto el patrimonio de la sociedad como el de los socios, y deriva de las operaciones de cambio realizadas con terceros no socios.

(219) Conforme, y por todos, SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ, op. cit. pag. 145, al decir "Esta actividad (la de las cooperativas de producción) es desarrollada con el deseo de obtener un beneficio - esto es, un incremento del valor de su patrimonio".

Por el contrario, el ahorro en gasto es la modalidad de ganancia típica de las cooperativas de consumo que operan solo con sus socios, así como de las cooperativas de producción formadas por comerciantes, industriales o profesionales.

De cualquier forma hay que señalar que ambas modalidades no son excluyentes, al menos teóricamente, puesto que si una cooperativa de consumo opera con terceros no socios, a los que vende sus productos a precio corriente, obtendrá un beneficio en sentido estricto (en nuestro ordenamiento jurídico ocurre, sin embargo, que este beneficio no es susceptible de reparto. Cfr. art. 50.4 del RC). La doctrina francesa ha utilizado el criterio de analizar la naturaleza del precio exigido por las cooperativas de consumo para calificarlas de sociedad si venden a precios corrientes,

Todavía algún sector de la doctrina (220) ha pretendido calificar el lucro de las cooperativas de producción como un ahorro en gasto, argumentando que la mayor remuneración obtenida por el socio carece de entidad positiva, puesto que representa negativamente la pérdida evitada al suprimirse la figura del empresario capitalista.

Sin embargo esta tesis, cuya construcción ciertamente no se debe a la doctrina cooperativa ya que con ella no se viene sino a aplicar la teoría marxista sobre la "plusvalía" del trabajo que obtiene el empresario (221), no puede acogerse ni aún obviando los elementos ~~meta~~jurídicos que la misma entraña (222); y no puede hacerse, por cuanto el hecho de que sean los socios trabajadores de la cooperativa los que directamente

y de asociación si lo hacen a precio de coste, lo que en definitiva significa negar la naturaleza de sociedad a las cooperativas que no procedan a distribuir ganancias (cfr. por todos, ESCARRA (Jean-Edouard)-RAULT, J. "Traité théorique et pratique de droit commercial" cit., pags. 96-98).

(220) Cfr. BERTO, op. cit. pag. 92; GRAZIANI, "Società cooperativa e scopo mutualistico", cit. pag. 283.

(221) Dice GRECO en este orden de cosas (op. cit. pag. 51): "Se pure si voglia ritenere, con la scuola marxista, che questo profitto consista interamente in un plus-lavoro sfruttato dall'imprenditore, si tratterebbe sempre, dal punto di vista giuridico-patrimoniale, non di un danno emergens, ma... di un valore e di un reddito... Si rimane quindi nell'ambito dell'utile in senso giuridico"

(222) Elementos de carácter socio-económico.

perciban los beneficios derivados de la actividad asumida por aquella, no indica más que en esta sociedad se han modificado las técnicas de distribución de las ganancias; esto es, que nos encontramos ante una modalidad de reparto de las ganancias diversas, en línea de principio, a la utilizada en la mayoría de los tipos de organización societaria; pero sin que esta técnica pueda contradecir, ni bajo la perspectiva económica ni bajo la jurídica, el incremento patrimonial que representa, tanto para la sociedad como para los socios, el lucro generado en los actos de cambio propios de esta entidad (223).

d) El retorno como técnica de distribuir el beneficio en la sociedad cooperativa de producción

Como último eslabón en el examen del ánimo lucrativo de la sociedad cooperativa de producción queda por analizar de que forma se distribuye lo que nosotros, en una primera aproximación, hemos denominado beneficio (224).

(223) Reduciendo al absurdo esta argumentación se podría igualmente señalar que cualquier sociedad obtiene un ahorro en el gasto, ya que evita la pérdida de la renta del capital, caso de realizar el socio de forma aislada la actividad asumida por la sociedad.

Esta tesis viene a desconocer que precisamente la función de la organización colectiva es potenciar los esfuerzos individuales, y desde esta perspectiva tanto lo hace la cooperativa de producción, que potencia el esfuerzo personal, cuando una sociedad ordinaria, que potencia el valor del capital.

(224) El término beneficio lo estamos utilizando en sentido genérico, representativo de ventaja patrimonial positiva; sin que esta adopción signifique trasladar al ámbito cooperativo el sentido que adquiere en algunos tipos societarios. Así, SANCHEZ CALERO, "La determinación y la distribución...", citp. pag. 29 define el beneficio neto de la S.A. como "el excedente del valor del patri

Si hasta aquí hemos estado manteniendo que la sociedad cooperativa de producción no se configura, causalmente, de forma diversa que el resto de las organizaciones societarias, ahora debemos comenzar señalando que bajo la perspectiva de la distribución de aquellos beneficios corre una diferencia entre ambos supuestos; diferencia que, por una parte e insistamos de nuevo sobre ello, no representa trasposición del elemento causal típico del contrato de sociedad, y por otra se articula de forma relativa, en la medida en que aumenta o se reduce según sea el tipo societaria objeto de equiparación (225).

Esta diversidad en la técnica de repartir las ganancias encuentra su justificación, adoptando como supuesto de comparación el de la sociedad anónima, en un doble orden de razones: por una parte, en la motivación económica base de la asociación; por otra, en la posición sociológica - que bajo este aspecto recibe refrendo jurídico-positivo - de los sujetos que componen la estructura de la organización.

Ciertamente que en ambos tipos societarios es idéntica la técnica de la distribución de beneficios, en la medida en que es la participación cuantitativa del socio en la sociedad el elemento básico para proceder al reparto; ahora bien, la diferencia estriba en que en cada una de estas sociedades el módulo para la valoración de esa participación es ra

trimonio neto sobre el capital y las reservas que arroja un balance anual regularmente aprobado".

(225) Según nos movamos desde sociedades personalistas a sociedades capitalistas, esta diversidad, en línea de principio, aumentará.

dicalmente diverso; en la sociedad anónima - y en la capitalista en general - el módulo es pura y simplemente la participación del socio en el capital, consecuencia de ser la asociación de este la motivación base de la organización, y de ostentar el socio la posición jurídica de mero aportador de capital (capitalista); en la sociedad cooperativa, por el contrario, al actuar el trabajo como motivación base de la asociación y ostentar el socio una posición jurídica compleja (aportador de capital-trabajador) el módulo valorativo de esa distribución ha de encontrarse en la participación del socio en la producción; esto es en el trabajo.

Sentadas estas premisas, courre analizar ahora como nuestro ordenamiento positivo ha estructurado el beneficio en la sociedad cooperativa de producción; problema que, en definitiva, se concreta a examinar de que forma se reparten las ganancias obtenidas por la sociedad entre quienes forman parte de la misma a título de socios.

En este orden de cosas, seha repetido hasta la saciedad por la dgc trina cooperativista que el elemento esencial y característico de la sociedad cooperativa es el "retorno" (226); concepto que, no obstante los

- (226) Se considera al inglés Alejandro Campbell el primero en introducir la técnica del retorno en una sociedad, en 1822 (CUNZ, E. "Sui prin cipi essenziali della società cooperativa", Riv. dir. comm. 1939, I, pag. 288), si bien se estima que fué uno de los pioneros de Rochdale - Charles Howarth - el que lo remodeló para la aplicación en las cooperativas (HANDSCHIN, G. "La ripartizione degli utili nelle cooperative di consumo", Riv. Coop. 1948, pag. 126). En general sobre el tema, COUTANT, "L'evolution...", cit. pags. 203-227 y LAMBERT, P. "La doctrine cooperative", cit. pags. 70-88.

múltiples ensayos doctrinales, aparece con unos contornos muy imprecisos, que ha llevado a algún sector a contestar vivamente su aplicabilidad (227).

En realidad, el retorno más que un concepto susceptible de aprehensión en términos positivos, manifiesta toda su operatividad cuando se le analiza de forma negativa: prohibición de repartir el beneficio neto de las sociedades a prorrata del capital aportado" (228); con lo que se identifica con lo dicho anteriormente por nosotros de que no viene a configurar sino una especial técnica para valorar la distribución de las ganancias obtenidas por las sociedades cooperativas.

Desde esta perspectiva negativa, nuestra legislación consagra de forma rotunda, al menos en una primera aproximación, el principio del retorno, puesto que en el artículo cuarto, apartado j) del RC se señala "la prohibición terminante de repartir dividendos activos al capital social"; y si se piensa que dividendo es la parte del beneficio neto distribuido entre los socios de una sociedad anónima, en función de su participación al capital social (229), esta conclusión no necesita de mayor argumento.

(227) FAUQUET, "El sector cooperativo" Buenos Aires, 1962, pags. 98 y ss; por su parte el francés LAVERGNE ("Les cooperatives de Consonmation", Paris, 1923, pags. 9 y ss) lo considera propio solo de las cooperativas distributivas.

(228) LAMBERT, op. cit. pag. 71.

(229) Cfr. SANCHEZ CALERO, "La determinación...", cit. pg. 42.

Sin embargo, nuestro ordenamiento positivo ofrece base para pensar que el reorno puede ser definido en sentido positivo, ya que el artículo veinte de la citada disposición establece que "Las diferencias numerarias entre el total de los rendimientos líquidos y las cantidades destinadas a Fondos de Reserva y Obras Sociales se podrán destinar a efectuar retornos cooperativos...".

Se nos plantea así, el tema de la determinación y distribución del retorno cooperativo, cuyo análisis va a permitir, por otra parte, apreciar el grado de adecuación de nuestra legislación a este principio.

En este orden de cosas, podemos comenzar señalando que la operación de determinar el retorno es una operación mecánica, de naturaleza estrictamente contable, que se realiza deduciendo del total de rendimientos líquidos las cantidades destinadas a los Fondos mencionados (230); pero a su vez esta operación requiere, con carácter previo, determinar que ha entendido el legislador por rendimiento líquido.

Con todo lo hasta aquí expuesto respecto del carácter económico lucrativo de la cooperativa de producción, no resultará difícil entender por rendimiento líquido el beneficio económico derivado del ejercicio de la actividad asumida por la entidad; o dicho en otros términos, la diferencia a favor de la cooperativa entre el coste del bien o ser-

(230) Se destinan un veinticinco por ciento del total de beneficios (así denomina el parr. 2º del art. 19 de la LC a los rendimientos líquidos); cfr. art. 17.2 RC.

vicio producido y el precio de venta obtenido en el mercado, deducidos los gastos que ambas actividades hayan generado (231).

Ciertamente que se puede argumentar que esta determinación se complica por la posición económica ostentada por los socios, en la medida en que habría que determinar hasta que nivel las cantidades periódicas percibidas por los trabajadores, necesarias por el carácter vital que las mismas asumen, constituyen coste del trabajo prestado por el socio o anticipo a cuenta de presuntas ganancias; sin embargo este problema no desvirtua la anterior delimitación de lo que deba entenderse por rendimiento líquido. (232)

Esta relativa sencillez en la delimitación del concepto de rendimiento líquido en las sociedades cooperativas, se convierte en la realidad normativa en tarea poco menos que insuperable; debido, sin duda alguna, al miedo del legislador de aceptar llanamente que las cooperativas son instituciones destinadas a conseguir y distribuir ganancias, así como a su deseo de configurar unitariamente a todos los tipos cooperativos, aún a fuer de forzar la propia naturaleza de alguno de ellos.

Efectivamente, el número uno del artículo dieciocho del RC establece que los rendimientos líquidos consistirán en "diferencias nume-

(231) BAYON MARINE-SERRANO ALTAMIRAS, "Régimen jurídico...", cit. pag 112.

(232) Vid. pags. 348 y ss.

rarias que se obtengan por márgenes de previsión y excesos de percepción, después de deducir toda clase de gastos generales y los intereses debidos al capital desembolsado establecidos estatutariamente, y el anticipo laboral que corresponda, en su caso, al socio trabajador como retribución normal a un trabajo de la misma clase en la localidad".

Por su parte, los números dos y tres del mismo artículo pretenden dar un concepto de que deba entenderse por "márgenes de previsión" y "excesos de percepción"; momento en el que aparecen las dificultades antecitadas, puesto que de la lectura de los mismos no se comprende como cualquiera de ambos pueda referirse a una cooperativa de producción formada por trabajadores.

En el sentir de la norma, exceso de percepción es la diferencia numeraria obtenida entre el precio de compra y el de venta; mientras que margen de previsión es la misma diferencia entre "el coste de los productos adquiridos o servicios prestados por la Cooperativa, y las cantidades que por tales servicios o productos perciba la misma".

De una interpretación literal, podría desprenderse la conclusión de que la norma está jugando con conceptos distintos, cuya operatividad dependerá del tipo cooperativo al que los mismos se apliquen.

Sin embargo, y a poco que se profundice en el tema, se observa que ambos conceptos encubren un significado unitario, cuyo presupuesto base es la existencia de una diferencia entre el coste del producto adquirido, del servicio prestado o del artículo comprado por la coope-

rativa y el precio percibido por el producto, servicio o artículo (233).

Supuesto esto, debemos cuestionarnos donde se integra el rendimiento líquido de las sociedades cooperativas de producción; que pueda configurarse bajo el concepto de "exceso de percepción" parece dudoso, si no imposible, puesto que la cooperativa de producción no tiene por objeto comprar para vender, que es lo que se está contemplando bajo esta denominación (234), sino que su objeto es, como quedó señalado, por una parte dar trabajo, y por otra producir bienes - lo que supone una transformación de estos - o prestar servicios.

Rechazado el exceso de percepción, no nos queda otra alternativa que afirmar que el rendimiento líquido de estas cooperativas se obtiene por vía del "margen de previsión", sin que una tal solución nos satisfaga plenamente.

Ciertamente que tal concepto es aplicable para aquellas cooperativas de producción cuyo objeto sea prestar un servicio a terceros (235), puesto que en este caso el margen de previsión estará constitui

(233) Conformes en líneas generales con esta conclusión BAYON MARINE-SERRANO ALTIMIRAS, op. cit. pag. 113.

(234) El exceso de percepción equivale al "trop-perçu" de que habla la doctrina francesa (cfr., por todos, SAVATIER, R. "Droit des affaires", Paris 1962, pag. 143), y que se presenta en las cooperativas de consumo cuando estas venden a sus socios a precios corrientes de mercado. Cfr. art. 20 LC.

(235) Cuando el servicio se preste a los propios asociados, nos encontramos no ante el supuesto de cooperativa de producción formada por

do por la diferencia entre "el coste de los servicios prestados por la Cooperativa y las cantidades que por tales servicios perciba la misma".

El problema surge cuando se quiere aplicar tal calificación a los rendimientos líquidos operados en una cooperativa cuyo objeto sea la producción - en sentido económico - de un bien, ya que en este supuesto el margen estaría constituido por la diferencia entre "el coste de producto adquirido y la cantidad que por tal producto perciba la misma"; y se piensa que en este caso la cooperativa no adquiere productos, sino que lo que hace es - y permitásenos la redundancia - producirlos, resulta radicalmente imposible obtener diferencias en base a actividades que no se realizan.

Esta inadecuación de los términos propuestos por la norma para la obtención de rendimientos líquidos en las cooperativas de producción encuentra justificación si se recuerda que el concepto de cooperativa de producción formada por trabajadores es un concepto en buena medida conformado al margen de la legislación estrictamente cooperativa (236); y que cuando esta legislación habla de cooperativas de producción lo hace contemplando el supuesto de cooperativas formadas por empresarios, para

trabajadores, sino formada por industriales, comerciantes o profesionales. Cfr. pags. 163 y ss.

(236) Vid. pags. 184 y ss.

las que el concepto margen de previsión si es aplicable, puesto que entonces la cooperativa tiene por objeto adquirir los productos previamente producidos por los socios para su posterior venta, siendo esta diferencia - el precio que la cooperativa paga al socio, y el que esta percibe de terceros - el margen de previsión que conforma su rendimiento líquido.

En realidad, la utilización por el legislador de estos conceptos no responde más que al deseo de huir de formulaciones que, de alguna manera, podrían involucrar a la sociedad cooperativa con terminología propia, pero no excluyente, de otros tipos societarios; independientemente de que, con respecto al tipo cooperativo que nos ocupa, tales fórmulas sean inadecuadas para su aplicación unitaria, y cuando lo son no vengano sino a identificarse con la noción generalizada y básica de beneficio económico.

Visto lo poco afortunado que resulta calificar al rendimiento líquido de las cooperativas de producción a través del término "márgenes de previsión", cabe preguntarse, no obstante esto, si estas diferencias vienen a asimilarse sin más con el concepto de rendimiento líquido, o por el contrario para obtener este rendimiento es necesario realizar alguna deducción más.

La respuesta a esta interrogante nos la brinda el citado artículo dieciocho, que señala que a estas diferencias hay que deducir:

- a) toda clase de gastos generales
- b) los intereses debidos al capital desembolsado establecidos estatutariamente

- c) los anticipos laborales que correspondan al socio-trabajador como retribución normal a un trabajador de la misma clase en la localidad (237).

De estas deducciones, interesa destacar las dos últimas, en la medida en que ellas van a conformar toda la particularidad en la distribución de beneficios en las cooperativas de producción.

Para entender todo el alcance que encierra este precepto, recordemos que el socio de una cooperativa de producción adopta una posición jurídica compleja: por una parte, la norma le exige hacer aportaciones a capital social, lo que le convierte en capitalista (238); pero por otra, la relación social surgida del contrato de sociedad le obliga a prestar un trabajo, lo que le convierte en trabajador.

Planteada así el tema, se comprende que uno de los problemas más delicados que afectan a la técnica de distribución de los beneficios en las cooperativas de producción es el relativo a conjugar la regla del retorno - como manifestación de la autonomía de la voluntad de los socios -, con la exigencia de que estos no se vean privados, por el hecho

(237) La calificación del anticipo como coste deducible para obtener el rendimiento líquido es argumento que confirma nuestra anterior conclusión relativa a la inadecuación del término "margen de previsión" en este tipo cooperativo, en la medida en que teóricamente puede ocurrir que ese margen consista solamente en el anticipo laboral, por lo que o se niega la operatividad de aquel, o se cae en una identificación redundante entre margen y anticipo laboral.

(238) Utilizamos el término capitalista con exclusión de toda acepción peyorativa.

de ser societaria su relación, de una remuneración que mantenga el carácter de medio vital de subsistencia para el socio y su familia (239).

En este orden de cosas, hay que reconocer pues que el legislador ha sido francamente progresivo al no despojar al anticipo laboral - fórmula equivalente a la de salario - de su naturaleza de coste de producción; y ello a pesar de poseer los trabajadores la condición de socios, y por tanto propietarios, de los medios de producción.

Una primera conclusión a estas consideraciones es pues, la de que las remuneraciones normales del socio en su condición de trabajador no constituyen auténtico beneficio - rendimiento líquido -; siendo el criterio comparativo de "normalidad", el de las remuneraciones obtenidas por los trabajadores que prestan un trabajo en las empresas no cooperativas.

La segunda deducción que tampoco queda integrada en el concepto de rendimiento líquido es el interés debido al capital desembolsado; consecuencia lógica de la esencia de la propia cooperativa.

La doctrina científica ha discutido en torno a la naturaleza del interés fijo pagado al capital en las cooperativas (240), habiéndose calificado a este interés bien como primer dividendo (241), bien como

(239) Sobre el significado del anticipo laboral, vid. pags. 398 y ss.

(240) Los apartados j) y k) del art. 4º del RC establecen que es interés que tienen derecho a percibir las aportaciones a capital es el legal, si se trata de aportaciones obligatorias, y el normal del dinero, si se trata de aportaciones voluntarias.

(241) GRECO, op. cit. pag. 55; HAMEL-LAGARDE, "Traité...", cit. pag. 967.

simple remuneración, de carácter compensatorio, por la utilización del capital (242).

En realidad, es difícil concebir al interés debido al capital como un dividendo de una sociedad de base capitalista, en las que este, como señala COUTANT (243), tiene un carácter mixto de renta de capital y renta del ejercicio de una actividad económica de empresa; en las cooperativas de producción es simplemente una renta de capital, sin que el mismo se vea incrementado por la renta de la empresa.

El interés debido al capital adquiere, en este tipo societario, la misma naturaleza que parte del anticipo laboral: un simple coste de la producción; y con el no se viene sino a remunerar las aportaciones del socio, en su vertiente de capitalista.

Llegados a este punto, nos encontramos en situación de definir el rendimiento líquido de las cooperativas de producción, entendiendo por tal la diferencia numérica entre el coste del bien producido o del servicio prestado y el precio de ese bien o ese servicio, deducida la remuneración normal que corresponde al socio en su calidad de trabajo - remuneración del trabajo - y la que le corresponde en su calidad de aportador de capital - remuneración del capital.

(242) COUTANT, op. cit. pags. 208-212; para SIMONETTO ("Il lucro...", cit pag. 272) la tasa de interés más que una tasa remuneratoria de capital es una tasa confiscatoria dada la depreciación progresiva de la moneda.

&243) L'evolution...", cit. pag. 209.

Delimitado el concepto de rendimiento líquido o beneficio neto de las cooperativas de producción, estamos en condiciones de ensayar una noción de retorno cooperativo, entendiendo por tal la parte de beneficio distribuido a los socios trabajadores en función del del trabajo prestado en la sociedad (244).

Ciertamente que la forma de ponderar el trabajo podrá variar de unas cooperativas a otras, en la medida en que pueden adoptarse fórmulas tales como la categoría profesional del socio, el número de horas trabajadas, el rendimiento obtenido, etc.; sin embargo, en la base de todas estas ponderaciones se encuentra el trabajo prestado, que constituye el módulo valorativo para efectuar la distribución de las ganancias (245).

De esta forma, aparecen claras las diferencias y similitudes que corren entre el dividendo capitalista y el retorno cooperativo: ambos tienen en común el ser técnicas distributivas de beneficios; pero se diferencian y distancian en el módulo que cada una de ellos toma para proceder al reparto; consecuencia jurídica de la diversa motivación que genera cada una de estas organizaciones societarias.

(244) No debe confundirse retorno cooperativo con beneficio distribuíble entre los socios. Este es un concepto más amplio que aquel, en la medida en que engloba cantidades sobre las que la Asamblea delibera si habrán de destinarse a retorno, a reservas voluntarias o a otros fines propios de la cooperativa (cfr. art. 20 RC).

(245) En jurisprudencia vid. STCT de 28-6-1967 (J.S. nº 23,351/67 TCT) ("... teniendo a la vez derecho a participar en la distribución de los retornos cooperativos, en relación con su personal esfuerzo").

2.3. El carácter diferencial de las sociedades cooperativas de producción.

De las consideraciones expuestas en el epígrafe anterior podemos extraer como conclusión definitiva que del análisis de los aspectos formales del empresario cooperativo, cuya forma típica es la sociedad cooperativa (246), no se desprende que corran diferencia alguna, bajo una perspectiva negocial, entre este y el resto de los empresarios cuya vestidura formal es una organización societaria, puesto que para to dos ellos es el contrato de sociedad el negocio jurídico base.

Ahora bien, más allá de esta unidad del negocio base, lo cierto es que para el ordenamiento jurídico el tipo cooperativo aparece como un fenómeno societario diferenciado, y como tal sujeto a un sector normativo que configura y delimita la cooperativa con perfiles propios, con respecto al resto de las organizaciones societarias, y con perfiles unitarios, en relación con todos los tipos de sociedad cooperativa (247); de ahí que se haga necesario investigar cuales son esos rasgos diferenciales.

El problema que se plantea reside, no en realizar una labor de subsunción de la sociedad cooperativa en cualquiera de las figuras so-

(246) Vid. pags. 152 y ss.

(247) El carácter unitario de la sociedad cooperativa viene defendido con ardor por la mayoría de la doctrina; cfr: SANCHEZ-CALERO-OLIVENCIA RUIZ, op. cit. pag. 176; SIMONETTO, "El lucro..." cit. pag. 279.

cietarias conocidas en el ordenamiento, y más concretamente en la sociedad civil o en la sociedad mercantil, sino precisamente en ensayar si existe un criterio diferencial que permita configurar a la sociedad cooperativa como figura societaria autónoma.

Esta observación no ha sido entendida correctamente por la doctrina española, la cual, utilizando el argumento de la ausencia de ánimo lucrativo de la sociedad cooperativa, se ha limitado a negar el carácter mercantil de la cooperativa, afirmando su naturaleza de sociedad civil (248).

En este sentido, sabido es que la doctrina, tanto civilista como mercantilista, ha polemizado en torno a los criterios de distinción entre sociedad civil y sociedad mercantil; siendo los criterios propuestos los que atiende a la forma, al objeto o a ambos a la vez (249).

Siguiendo el criterio expuesto en segundo lugar, se reputan como sociedades mercantiles las que realicen "actos que el Código de Comercio considere como comerciales, y civiles las que no tengan este fin" (250).

Trasladando este criterio al terreno de las sociedades cooperativas de producción, entendemos que no resultaría difícil calificar a es

(248) Cfr. GARCIA PADRON, op. cit. pags. 97-102.

(249) Cfr. GIRON TENA, "Los criterios de distinción...", cit. pags. 86-90; CASTAN (Op. cit. pag. 535) añade a estos criterios el profesional y el intencional.

(250) Cfr. CASTAN, op. cit. pag. 536.

tas como sociedades mercantiles (251); puesto que la realización de actos de comercio va implícita en su objeto, que es - como sabemos - producir bienes y servicios para un mercado.

Independientemente de que la distinción entre sociedades civiles y mercantiles en base al criterio señalado se someta a profunda revisión científica (252), debido a la ausencia en el Código de Comercio de una calificación previa de lo que deba entenderse por acto de comercio en sentido objetivo (253), lo cierto es que, desde la perspectiva en la que nos estamos moviendo, este criterio tiene el valor de poner de manifiesto que con él se vendría a quebrar la noción unitaria de sociedad cooperativa (254), en la medida en que ciertos tipos cooperativos habrían de ser calificados como mercantiles, y otros quedarían al margen de esta calificación (255).

(251) Al menos a las cooperativas de producción industrial; la calificación mercantil de las del campo y del mar es mas dudosa.

(252) GIRON TENA, op. ult. cit. pag. 92.

(253) Vid. GARRIGUES, "Curso...", cit. pag. 118 y ss.

(254) La doctrina francesa civilista no duda en aceptar esta quiebra de la noción unitaria de sociedad cooperativa, calificando a unas cooperativas como sociedades civiles y a otras como mercantiles (cf. HOUPIN, C-BOSVIEUX, H. "Traité general théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales et des associations", 7^a edic. Paris 1935 t. II, pag. 843; LYON CAEN-CH-RENAULT, L. "Traité...", cit. vol. III, 2^a parte, pag. 742; HAMEL-LAGARDE, op. cit. pag. 967). En la doctrina española parece seguir esta postura VICENTE Y GELLA ("Curso de Derecho mercantil comparado...", pag. 239) al afirmar el carácter mercantil de las cooperativas que realicen funciones de mediación.

(255) Aceptando no ya el criterio del objeto, sino el de la forma, la mercantilidad de las cooperativas se pone de manifiesto si con SANCHEZ CALERO ("Instituciones...", cit. pag. 125) se acepta la tesis de que el Reglamento del Registro Mercantil no se opone a la inscripción de las cooperativas en este Registro.

En base a estas consideraciones, entendemos que la investigación del carácter diferencial de la sociedad cooperativa no puede plantearse en los términos cooperativa sociedad civil - cooperativa sociedad mercantil, ya que la única conclusión válida que se podría obtener sería la falta de homogeneidad objetiva de las diferentes especies de sociedades cooperativas que subyacen en la institución: o dicho con palabras de GARRIGUES (256) la actividad cooperativa (257) "no quita ni aña de el carácter mercantil - y el civil, diríamos nosotros - a esta sociedad".

Sin embargo, lo cierto es que el legislador patrio al regular la realidad cooperativa tuvo necesariamente que apreciar una unidad en el fenómeno acotado; unidad que se convierte tanto en razón justificadora de su autonomía, cuanto en criterio diferenciador frente a los restantes tipos de organización societaria.

El problema se limita así al análisis de cual o cuales sean estos criterios; y dado que ha sido rechazada la tesis de la diferenciación en base a caracteres materiales o reales, tendremos que convenir que la única vía que queda es buscar estos en razones de naturaleza estrictamente formal.

(256) "Curso..." cit. pag. 294.

(257) No les falta razón a LYON CAEN-RENAULT (op. cit. pag. 738) cuando califican de pleonismo al término sociedad cooperativa, ya que en toda sociedad hay cooperación (en el mismo sentido, GARRIGUES, op. cit. pag. 293).

Efectivamente, si se piensa por una parte que las sociedades mercantiles aparecen influenciadas organizativamente por los principios informadores de un sistema económico concreto - el capitalismo (258) - con lo que su estructura formal responde, en mayor o menor medida según el tipo concreto de sociedad, a esta influencia; y por otra, que la sociedad cooperativa en general, y la de producción en particular, surge históricamente con el deseo de superar aquellos esquemas, entendemos se puede concluir que las razones que estaban impulsando al legislador a reconocer autonomía a esta sociedad fueron las de possibilitar, mediante una estructura organizativa "ad hoc", la plena operatividad de sus objetivos económico-sociales.

Mucho ha discutido la doctrina científica (259) sobre cuales son los elementos que, desde esta perspectiva, conforman unitariamente el concepto de sociedad cooperativa y sirven para oponerlo al resto de las organizaciones societarias: para un sector doctrinal (260), el elemento

-
- (258) Con esta afirmación no estamos aceptando la tesis de la identificación entre Derecho Mercantil y Derecho del capitalismo (en general sobre el tema, CARRIGUES, "La crisis del Derecho Mercantil...", en "Hacia un nuevo Derecho Mercantil", cit., pags. 201 y ss, esp. pag. 214), sino simplemente reconocer, como dicen SANCHEZ CALERO-OLIVENCIA RUIZ (op. cit. nota 52 a pag. 165) la "potente influencia ejercida por el capitalismo sobre nuestro Derecho".
- (259) Por la profundidad en el tema, vid: SAINT-ALARY, R. "Elements distinctifs de la société cooperative", Rev. Tri, droit com., 1952, pags. 485 y ss; y BARNES, W. "La société cooperative. Les recherches de droit comparé comme instruments de définitions d'une institution économique", Rev. Int. droit com, 1951, pags. 569-584.
- (260) DE SMET, R. "Essai de définition du critère distinctif des sociétés cooperatives", Louvain 1934, pag. 5; HIRSCHSFELD, A-BOITARD, M.

formal cooperativo hay que encontrarlo en la forma de distribuir las ganancias entre los socios; para otros autores es, por el contrario, la variabilidad de socios y de capital la característica más acusada de la cooperativa (261); no faltando, en fin, quienes consideran (262) el ejercicio de la gestión democrática el elemento que distingue y justifica todo el régimen especial de estas sociedades.

Estas y parecidas tesis (263) encierran una parte de verdad; sin embargo, pensamos que ninguno de los elementos citados puede oponerse, aisladamente, como criterio diferenciador de las cooperativas respecto del resto de las organizaciones societarias, ya de naturaleza mercantil ya civil.

Así, y por lo que se refiere a la distribución de beneficios utilizando la técnica del retorno cooperativo - recordemos que en su expresión negativa no es más que una modalidad de repartir las ganancias en proporción distinta a la aportación de capital - basta considerar que tanto en las sociedades civiles como en las colectivas (264) la distri-

 "il regime giuridico delle cooperative agricole in Francia e in Europa" Riv. Coop. 1955, pag. 224; CREMADES, "Las cooperativas de producción", cit. pag. 31.

- (261) Criterio muy difundido en la doctrina (cfr. por todos FERRI, "La cooperativa como società", cit. pag. 259) y recogido en diversas legislaciones extranjeras (vid. pgs. 18 y ss.
- (262) Cfr. por todos, GASCON HERNANDEZ, "Tres ensayos sobre cooperación", CPS 1957, 26, pag. 62.
- (263) Así, p. e., la tesis que marca la distinción en el llamado principio de la doble cualidad, socio-usuario, o principio mutualista. Sobre el tema p.ags. 115 y ss.
- (264) También en las Sociedades Anónimas Laborales.

bución de ganancias en función de la aportación de cada socio rige exclusivamente "a falta de pacto" (art. 1689 C.civ. y 140 del C. Com.), por lo que, y a salvo la exclusión a uno o más socios de "toda parte en las ganancias" (art. 1691 C.civ), el contrato de sociedad puede haber estipulado reglas que materialmente se acerquen a las del retorno cooperativo.

Por otra parte, tampoco la variabilidad de socios y de capital puede considerarse como elemento distintivo de las sociedades cooperativas (265); la variabilidad del capital no es más que la instrumentalización jurídica seguida por el legislador para mantener la naturaleza "abierta" de la sociedad cooperativa (266), elemento del negocio cooperativo más de carácter natural que esencial (267) y que puede encontrarse en las organizaciones societarias personalistas.

(265) Conforme para la legislación francesa, NAST, "Le regimen..." cit. pag. 100.

(266) En este sentido, OPPO, op. cit. pg. 279 al decir: "dove la variabilità del capitale è direttamente collegata alla variabilità del número dei soci". La naturaleza abierta de la cooperativa ("principio de la puerta abierta") plantea el problema de determinar si existe o no un derecho subjetivo del aspirante a socio a ingresar en la sociedad; en este sentido, y sin entrar en el análisis del contenido y límites del poder de los órganos sociales encargados de deliberar sobre la admisión (vid. apar. a) art. 12 LC), nos inclinamos a pensar que un tal derecho no existe (conforme GRISOLI, R. "Un diritto del nuovo socio all'ingresso in una cooperativa" Riv. dir. comm, 1958, I, pag. 303 y JAUS, O. "Un limite all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare: cessione, autorizzata dagli amministratori di quota di società cooperativa ad opera dei socio poi fallito", en "Studi in Onore de Alberto Asquini, t. II, Padova 1965, pag. 1.004; en el mismo sentido se ha manifestado la jurisprudencia italiana: Tri. Napoli 12-12-1963 (en Giur. Ital. 1964, I, pg. 535 y Riv. delle Soc. 1965, pag. 869, con comentario de VERRUCOLI). La jurisprudencia española mantiene el mismo criterio (STCT de 18-12-69, J.S. nº 37, 630/69.TCT. "Tan solo se debe una expectativa de derecho a ser aceptado como socio")

(267) GRAZIANI, "Diritto...", cit. pg. 352; en contra OPPO, op. cit.

Por último, consideraciones parecidas podrían realizarse respecto de la gestión democrática de la cooperativa, manifestación de la igualdad de derechos y obligaciones de los socios (268), y como tal conocida en otros tipos societarios (269).

Ahora bien, si ninguno de estos elementos pueden elevarse y contemplarse aisladamente como informadores y diferenciadores de las sociedades cooperativas, no es menos cierto que todos ellos analizados conjuntamente conforman un tipo especial de organización societaria, dando una unidad estructural al fenómeno cuestionado.

En definitiva, pues, estimamos que la única característica de esta sociedad, apta para ofrecer tanto una noción unitaria como diferencial, reside en la particular forma organizativa, centrada por igual en los tres elementos siguientes:

- a) Sociedad de naturaleza abierta y capital variable
- b) Igualdad de derechos y obligaciones del socio
- c) Distribución de los beneficios a prorrata de las operaciones realizadas por cada socio con la sociedad.

pag. 278, para quien la variabilidad de capital es un "essentiali negotii".

(268) Cfr. apar. c) art. 8 LC.

(269) La sociedad colectiva (vid. GARRIGUES, "Curso..." cit. pag. 255).

B) Los aspectos materiales del empresario cooperativo

1. Delimitación del tema

La acepción amplia del empresario como sujeto que ejerce una actividad constitutiva de empresa y que adquiere la titularidad de las obligaciones y derechos derivados de tal actividad (1) es, en una primera aproximación, aplicable al plano jurídico-laboral; sin embargo, y a poco que se profundice en el tema, se aprecia que la noción de empresario a efectos laborales se ve condicionada por la compleja estructura subjetiva de la empresa y por la función económico-social de las relaciones jurídicas surgidas en su ámbito.

De esta forma, para el Derecho del Trabajo la figura del empresario se manifiesta en una doble vertiente, apreciable según nos movamos en el ámbito de las relaciones laborales singulares o de las relaciones de empresa (2); bajo el primero, el empresario aparece como parte o sujeto de un contrato de trabajo, definiéndosele como aquella persona física o jurídica por cuenta de la cual y bajo cuya dependencia se presta un servicio remunerado (3); bajo el segundo aspecto, el empresario se caracteriza como el sujeto titular y organizador de la empresa, cuya acti-

(1) Cfr. URÍA, R. "Derecho Mercantil", 6ª edic. Madrid 1958, pag. 31-32.

(2) Cfr. MONTAÑA MELGAR, A. "La empresa y el derecho del trabajo", en Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Madrid 1970, pag. 417.

(3) ALONSO OLEA, M. "Derecho del Trabajo", Madrid 1971, pag. 59; BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, "Manual de Derecho del Trabajo", 8ª edic. revis

vidad organizativa se extiende al otro de los elementos subjetivos que la componen: el personal (4).

Sin negar la importancia que para el Derecho del Trabajo resiste la figura del empresario - empleador (5), lo cierto es que a nosotros nos interesa destacar la noción de empresario en cuanto organizador de la empresa, en la medida en que bajo este aspecto el análisis del empresario cooperativo adquiere perfiles específicos, derivados de la particular estructura de la empresa cooperativa.

En este orden de cosas, sabido es que la estructura base de una empresa no cooperativa viene conformada por los siguientes elementos:

- a) Un empresario - individual o social - que ostenta la titularidad jurídica de la empresa (6), que asume el riesgo de la explotación, y que ejerce su actividad organizativa programando las actividades económicas de la empresa, coordinando técnicamente las prestaciones de trabajo (7) y ejerciendo por sí o por sus

sada, Madrid 1972, pag. 294; ALONSO GARCIA, M. "Curso de Derecho del Trabajo", 2ª edic. Barcelona 1967, pag. 310; DE LA VILLA GIL, L.E. "Derecho del Trabajo, Esquemas", Valencia 1972, pag. 118.

- (4) ALMANSA PASTOR, J.M. "La participación del trabajador en la administración de la empresa", Madrid 1965, pg. 23.
- (5) Diferencia entre empresario y empleador en DE LA VILLA GIL, "Esquemas ..." cit. pags. 118-119.
- (6) ALONSO OLEA, op. cit. pag. 60
- (7) ALMANSA PASTOR, op. cit. pag. 24.

mandatarios un amplio poder de dirección que se convierte, en definitiva, en un poder de organización laboral de empresa (8).

- b) Un personal trabajador, que presta servicios por cuenta y bajo la dependencia de aquél, quedando excluido de la propiedad, de los resultados y de la gestión de la empresa.

Ciertamente que esta estructura-tipo se ha visto alterada por diversos mecanismos a través de los cuales se ha reconocido un derecho al trabajador a participar ya en los medios de producción, ya en los resultados y en la gestión de la empresa; sin embargo, estos métodos participatorios no han venido a modificar sustancialmente lo que, en un sistema de economía capitalista, se considera como estructura empresarial-tipo, montada sobre sujetos que mantienen intereses opuestos (9) como resultado del mecanismo contractual que le vincula (10).

(8) MONTOYA MELGAR, op. y loc. cit.

(9) En este sentido BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA dicen (op. cit. pag. 308) que "en el momento de discutirse las condiciones de trabajo en una empresa, no aparece por ninguna parte la personalidad unitaria de la misma, sino que sus elementos se escinden en dos partes contratantes en oposición"; vid. también, MENGONI, L. "Recenti mutamenti nella struttura e nella gerarchia dell'impresa", Riv. delle soc. 1958, pag. 722; GIUGNI, G. "Mansione e qualifica nel rapporto di lavoro", Napoli 1963, pag. 308; PERSIANI, M. "Contratto di lavoro e organizzazione" Padova 1966, pag. 87; SCOGNAMIGLIO, R. "Diritto del lavoro" Bari 1969, pag. 63.

(10) BORRAJO DACRUZ, E. ("La reforma de la empresa como presupuesto de la promoción social en el II Plan de Desarrollo Económico", en Estudios en homenaje al Profesor Lopez Rodó, Vol. III, Madrid 1972, pag. 498) señala que "no hay obstáculo moral ni jurídico para que el contrato (de trabajo) conceda al trabajador la facultad de participar de algún modo en la programación, en la ordenación y en el control de la empresa".

En definitiva, la participación de los trabajadores en una empresa no cooperativa no ha alterado los intereses típicos de cada uno de los elementos subjetivos de la empresa, en clara situación de conflicto; esto es, ni ha provocado la configuración de un interés objetivo de empresa, más allá del particular del empresario y de la colectividad de trabajadores (11), ni ha quebrado la titularidad originaria del poder de gestión en la figura del empresario (12).

La estructura de la empresa cooperativa responde, en una primera aproximación, al mismo planteamiento, si bien las posiciones jurídicas de ambos sujetos son diversas.

Que en la empresa cooperativa exista un empresario, así como personal trabajador, son conclusiones que entendemos no necesitan de mayores argumentos; aquél está constituido por la persona jurídica que adopta, en nuestro ordenamiento, una forma social típica (13); este viene repre-

(11) No hay un interés colectivo de empresa, sino simplemente un interés del empresario, que en ocasiones se ha querido objetivar, y un interés individual y colectivo de los trabajadores; sobre el primer punto, vid. SUPPIET, J. "La struttura del rapporto di lavoro", vol. II, Padova 1963, esp. pags. 108 y ss; sobre el segundo, GIUGNI, "Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva", Milano 1960, pags. 100 y ss; CABRERA BAZAN, J. "La titularidad y el ejercicio del interés colectivo en las relaciones colectivas de trabajo", Sevilla 1967, passim, esp. 16-52; TARELLO, G. "Teorie e ideologie nell diritto sindacale", 2ª edic., Milano 1972, pags. 29 y ss.

(12) En este sentido, si bien limitado al poder de dirección, MONTROYA MELGAR, "El poder de dirección, Madrid 1965, pag. 201.

(13) Cfr. pags. 152 y ss.

sentado por los sujetos que de forma personal y directa prestan un trabajo.

Ahora bien, en una empresa cooperativa los socios de la persona jurídica - esto es, del empresario - son quienes prestan el trabajo necesario para la consecución del objeto social; si relacionamos esta consideración con el concepto anteriormente elaborado de empresa cooperativa (14), - unidad de producción que en un sistema de economía descentralizada permite participar a los sujetos portadores de factor trabajo de forma directa en la actividad organizativa de empresa -, es fácil deducir que se está produciendo una modificación en las posiciones jurídicas los elementos que componen la estructura empresarial; modificación que puede entrañar una alteración de los intereses típicos que concurren en los sujetos que conforma la empresa no cooperativa, así como una variación en el sentido de la participación del personal trabajador en la actividad organizativa de aquella.

Planteado así el tema del contraste, en una primera aproximación, entre empresa cooperativa - empresa no cooperativa, nos parece a nosotros que las cuestiones más importantes a analizar en los aspectos materiales del empresario cooperativo se centran en torno a las dos siguientes:

- a) Configuración de los intereses que concurren en los sujetos que conforman la base personal de la empresa cooperativa,

(14) Cfr. pag. 132-133.

- b) Configuración de la participación de los trabajadores en la actividad organizativa de la empresa.

2. La producción como interés objetivo de la empresa cooperativa

2.1 Concepto y clases de interés

La noción general de interés es esencialmente económica, pero adquiere contenido para el Derecho - como dice ALMANSA (15) - cuando se habla de intereses protegidos por el ordenamiento jurídico.

CARNELUTTI define el interés (16) como la relación que media entre una persona y un bien apto para satisfacer una necesidad; ciertamente que cualquier persona es portadora de una pluralidad de intereses, los cuales pueden encontrarse en diversas relación entre sí; ahora bien, a nosotros nos interesa considerar exclusivamente el caso más complejo, esto es la relación que media entre intereses de personas distintas.

En este sentido, los intereses diversos de sujetos distintos pueden encontrarse en una posición de indiferencia o de relevancia (17); la primera situación la encontramos cuando entre estos sujetos no se deriva el nacimiento de una relación jurídica: cada sujeto tenderá a conseguir el interés propio, permaneciendo indiferente respecto del comportamiento de los otros sujetos; la segunda situación surge cuando la ac-

(15) Op. cit. pag. 60

(16) "Teoria generale del Diritto", 3ª edic., Roma 1951, pag. 11.

(17) SENA, G. "Contratto di società e comunione di scopo", Riv. delle soc. 1956, pag. 736.

tividad del sujeto que tiende a satisfacer su interés influye directamente sobre la posibilidad de satisfacción del interés de los otros sujetos.

De entre estas dos situaciones, obvio es señalar que la que importa considerar es la segunda, en la medida en que hace generar para el Derecho relaciones jurídicas.

Esta relevancia de los intereses de un sujeto respecto de los del otro puede manifestarse alternativamente bien a través de la figura del conflicto de interese, bien a través de la solidaridad de intereses (18).

El conflicto de intereses aparece genéricamente, ligado al concepto de escasez de bienes; de la limitación de bienes en relación a las necesidades humanas nace el conflicto de intereses, por el que la satisfacción de intereses de diversos sujetos se condiciona recíprocamente, encontrándose cada sujeto que desea la satisfacción de una necesidad de frente con el que tiende a la satisfacción de esa misma necesidad (19).

La solidaridad de intereses surge, por el contrario, al considerar que hay necesidades cuya satisfacción por un sujeto representa la satisfacción para otro.

La diferencia entre estas dos formas de interés relevante radica

(18) Cfr. CARNELUTTI, pp. cit. pag. 14

(19) CARNELUTTI, op. y loc. cit; SENA, op. y loc. cit; vid. también ROSS, A. "Sobre el derecho y la justicia". Buenos Aires 1963, pags. 346 y ss.

en que a un conflicto de intereses corresponde siempre un interés individual; mientras que a una solidaridad de intereses corresponde bien un interés común, bien un interés colectivo; diferencia esta que se manifiesta jurídicamente en la diversa instrumentación de la protección dada a cada uno de estos intereses.

Trasladando estas consideraciones desde el plano jurídico general al concreto en el que nos movemos, interesa analizar cual es la naturaleza de los intereses que corren entre cada una de las partes que componen la empresa cooperativa; ahora bien, como en la base de la superestructura empresarial cooperativa subyace una organización societaria (20), parece necesario referirse a los intereses que median tanto en la sociedad cuanto en la empresa cooperativa.

2.2 El interés colectivo de los socios de una cooperativa de producción

Hace unos instantes señalábamos que la posición de diversos sujetos con intereses distintos podría manifestarse en una situación de indiferencia o en una de relevancia; en este sentido, entendemos no hace falta mayor argumentación para excluir que la posición de los intereses de los socios en una cooperativa de producción sea de indiferencia, bastando para fundamentar esta afirmación el contemplar las numerosas relacio-

(20) Cfr. RIAZA BALLESTEROS, J.M. "La gestión de la empresa artesana y cooperativa" en "La empresa artesana y cooperativa a la luz de la doctrina social católica", Madrid 1963, pag. 290.

nes jurídicas que derivan del comportamiento de los sujetos contratantes (21).

Sentado pues que sea de carácter relevante la posición de estos intereses, debemos preguntarnos si esa relevancia se manifiesta a través de un conflicto de intereses o, por el contrario, media una posición de solidaridad.

La importancia del tema afecta a la naturaleza del interés protegido, en la medida en que si es conflictiva la situación entre los socios, nos encontraremos que son intereses de carácter individual los merecedores de protección jurídica; mientras que serán comunes o colectivos si es de solidaridad su posición.

En este orden de cosas, la doctrina científica (22) mantiene, pacíficamente, que la posición de los intereses de los socios en el contrato de sociedad es de conflicto.

(21) SENA, op. cit. pag. 737.

(22) Vid. BOLAFFI "La società semplice", Milano 1947, pag. 165; ASCARELLI, T. "Il contratto plurilaterale", en "Studi in tema di contratti", Milano 1952, pags. 100 y ss; AULETTA, G.G. "La comunanza di scopo e la causa del contratto di società", Riv. dir. civ. 1937, pags. 1 y ss; GRAZIANI, A. "Diritto della società", 3ª edic., Milano 1952, pags. 24 y ss.

Haciendo un planteamiento básico, podemos señalar que las líneas fundamentales sobre las que se mueve esta tesis son las siguientes: si la sociedad nace de un contrato, y la función del contrato es la de ser instrumento de superación de intereses opuestos (23), la posición conflictiva de los socios resulta obvia (24).

Ahora bien, al tiempo que afirmar la existencia de un conflicto de intereses en el contrato de sociedad, un sector doctrinal bastante numeroso (25) ha puesto de relieve que en este tipo de contrato se da una comunidad de fin, surgiendo inmediatamente la dificultad de armonizar y conciliar aquel conflicto de intereses con esta comunidad de fin,

¿Como se materializa esta conciliación? Para encontrar respuesta adecuada recordemos que la doctrina ha diferenciado dentro del contrato dos tipos diversos: el contrato de cambio y el contrato de organización o contrato plurilateral. En el primero se señala (26) que la presta

(23) Cfr., por todos, DIEZ-PICAZO, L. "Fundamentos de Derecho civil patrimonial", Madrid 1970, pag. 555 ("hay contrato, dice, cuando el concurso de consentimientos opera la ordenación de intereses opuestos o contradictorios").

(24) Dice SENA (op. cit. pag. 737) "Ogni soggetto vorrebbe insomma la piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi di produzione, e poichè questi sono limitati, fra i soggetti sorge il conflitto di interessi. E' questa una osservazione tanto evidente che sembrerebbe inutile se non conducesse direttamente a constatare appunto l'esistenza di quel conflitto di interessi fra i soci".

(25) ASCARELLI, op. cit. pag. 101; AULETTA, op. cit. pag. 8; GRAZIANI, op. cit. pag. 24.

ción de cada contratante constituye la contraprestación del otro, mientras que en el segundo los contratantes unen y asocian sus prestaciones para la consecución de un fin común (27).

La calificación de la sociedad como contrato en comunión de fin, elemento tipificador de los contratos de organización, no viene a contradecir, como observa GRAZIANI (28), la divergencia de intereses existentes entre los socios, sino que su función es la de delimitar frente a los contratos de cambio (29).

Sentado pues que en el contrato de sociedad coexisten conflictos de intereses y comunidad de fin (30) queda por resolver cuales son los intereses individuales y comunes que corresponden a cada una de las posiciones de aquellos intereses relevantes.

(26) Cfr. AULETTA, op. cit. pg. 7

(27) Dice AULETTA (ibidem) "Nei contratti di scambio ogni contraente acquista la prestazione dell'altro in ricompensa della propria, la prestazione dell'uno costituisce la controprestazione dell'altro. Nel contratto di società le parti uniscono insieme e associano le loro prestazioni per il raggiungimento dello scopo sociale: ogni contraente trova il proprio corrispettivo non nelle prestazioni degli altri, ma nella partecipazione al risultato utile ottenuto attraverso l'associazione delle prestazioni".

(28) Op. y loc. cit.

(29) FERRI, G. ("La fusione delle società commerciali", Roma 1936, pag. 89-90) critica esta postura señalando que si se reconoce en el contrato de sociedad un conflicto de intereses no se puede hablar de comunidad de fin puesto que "si todas las partes persiguiesen el mismo fin, su voluntad tendría necesariamente que tener el mismo contenido"; crítica de esta tesis en AULETTA, op. cit. pag. 8.

(30) SENA, op. cit. pag. 734.

En este orden de cosas, digamos que en la sociedad, en la medida en que media un conflicto de intereses, se aprecian unos intereses individuales, tanto en la fase de constitución como en la ejecución (31), el principal de los cuales es el interés de cada socio a la ganancia (32), cuya protección jurídica se instrumenta en base a normas de diverso contenido (33).

Ahora bien, la consecución de este interés individual viene condicionado por la consecución de un interés más inmediato, y que actúa respecto de aquel, utilizando terminología italiana (34) como "scopo-mezzo", esto es como fin instrumental; este fin instrumental es el ejercicio de una actividad económica, respecto del que la posición de los intereses de los socios es solidaria, en la medida en que de su consecución depende "la posibilidad de la realización de los intereses de todos los contratantes" (35). De ahí, en definitiva, que también quepa hablar

(31) Cfr. ASCARELLI, op. y loc. cit; SENA, op. cit. pag. 744.

(32) AULETTA, op. y loc. cit ("nella scitè ogni socio persegue un suo interesse individuale; ogni socio sacrifica un proprio interesse (l'interesse all'aporto) per attuarne un altro (interesse a partecipare ai guadagni sociali)").

(33) Vid. arts. 1689 y 1691 del C. Civ; arts. 133, 139, 140, 141 del C. de Com.

(34) GRAZIANI, op. y loc. cit; AULETTA, op. y loc. cit.

(35) Cfr. AULETTA, op. y loc. cit; en contra de este criterio, SENA, op. cit. pag. 739, que califica este interés como igual, pero no solidario. Sobre el concepto de interés social, vid: ASQUINI, A. "I battelli del Reno" en "Studi Giuridici di Filippo Vassalli", Vol. V, Torino 1960, pg. 121 (también en Riv. delle Soc. 1959, pag. 617); MIGNOLI, "L'interesse sociale", Riv. delle Soc., 1958, pag. 724 y

en el contrato de sociedad de un interés común digno de ser protegido por el ordenamiento jurídico (36).

Trasladando estas consideraciones al terreno que aquí nos interesa de la cooperativa de producción, podemos afirmar que las conclusiones son, en línea de principio, similares a las expuestas para la sociedad; lo que no podía ser de otra forma si se piensa que los socios cooperativadores constituyen un contrato de sociedad que goza de las características generales de cualquier otro contrato de este tipo.

En consecuencia, se puede señalar que el interés que media entre los socios cooperadores se encuentra en una posición de conflicto, y por tanto son de naturaleza individual los intereses protegidos por el ordenamiento jurídico. (37).

Ahora bien, a similitud de lo que ocurre en cualquier sociedad, en la cooperativa se aprecia una comunidad de fin, que determina una posición solidaria entre los intereses de los socios, dando origen a

ss; ASCARELLI, "Fiduciaria; conflitto di interessi e deliberazione di consiglio", Riv. della Soc. 1959, pag. 736; GIORDANO, A. "Interesse sociale e scopo di lucro", in Studi in Onore di Emilio Betti, Vol. V, Milano 1962, pags. 175 y ss.

(36) Vid. art. 1666 del C. Civ.

(37) Tiende a proteger de una forma directa el interés individual de los socios las normas que hacen referencia a los requisitos de las convocatorias de las Juntas Generales (arts. 32 y 33 RC), a la adopción de acuerdos sociales (art. 35.1 RC) y al derecho de información de los socios (ar. 44 RC).

la existencia de un interés supra-individual (38) que se instrumenta en la producción de bienes y la prestación de servicios; esto es, en la consecución del objeto social.

Sentada esta conclusión, el tema no queda definitivamente orillado, puesto que inmediatamente surge la duda de si es de naturaleza común o colectiva el interés supraindividual de los socios de la cooperativa de producción.

La primera alternativa parece, en una primera aproximación al tema, la más lógica con lo hasta aquí expuesto, sobre todo cuando, y a mayor abundamiento, es de naturaleza común el interés apreciado en los socios de una sociedad "in genere".

Sin embargo, y a poco que se profundice en el problema cuestionado, se observa que más que como suma de intereses individuales, el interés de los socios cooperadores es la síntesis, la combinación de estos intereses; en definitiva, que el interés a la producción se objetiva construyéndose como interés colectivo de aquellos (39).

(38) Cfr. GIORDANO, op. cit. pag. 176.

(39) Consideran al interés colectivo como "síntesis o combinación" de intereses individuales": SANTORO PASSARELLI, F. "Nociones de Derecho del Trabajo" (trad. española de SUAREZ GONZALEZ, F) Madrid 1963, pag. 19; ARDAU, E. "Teoria giuridica delle sciopero", Padova 1962, pag. 69; PERSIANI, op. cit. pag. 78; en contra CABRERA BAZAN, op. cit. pag. 16, para el que el interés colectivo surge no "por síntesis o fusión de los intereses individuales, sino por un fenómeno de abstracción".

Esta conclusión entendemos que puede ser fundamentada en base a los conceptos de interés colectivo y de sociedad cooperativa de producción.

Por interés colectivo se entiende "el interés de una pluralidad de personas hacia un bien apto para satisfacer una necesidad común" (40), siendo elementos característicos de este interés (41) los de su "economicidad - son intereses colectivos los que unen a una colectividad con el fin de satisfacer una necesidad económica común -, indivisibilidad - un interés es colectivo cuando la necesidad que le da origen solo puede ser satisfecha colectivamente -, generalidad - cualquier interés indivisible de cualquier colectividad entra en la noción de interés colectivo - y naturaleza privada de su tutela jurídica - el principio jurídico que le protege es de derecho privado".

La sociedad cooperativa de producción, en segundo lugar, se identifica en nuestro ordenamiento jurídico con el supuesto de asociación de trabajadores, cuyo objeto social es doble: producir bienes y servicios, y prestar un trabajo.

De la combinación de este doble objeto, y recordando que la obligación de trabajar se impone a todos los socios cooperadores, podemos mantener que la sociedad cooperativa exige, como presupuesto fáctico, una organización empresarial; esto es, una empresa entendida en el sentido de comunidad organizada de trabajo.

(40) Cfr. SANTORO PASSARELLI, op. y loc. cit.

(41) Cfr. TARELLO, op. cit. pags. 30-31, tomando los elementos de la noción de interés colectivo elaborada por Santoro Passarelli (op. cit).

Por otra parte, si conectamos las consideraciones expuestas con el concepto económico de empresa cooperativa, la conclusión firme a obtener es la de que el interés de los socios a participar de forma directa en la producción de bienes y servicios dentro de un sistema de economía capitalista se configura como un interés colectivo, cuyo punto de referencia son los socios-trabajadores "uti universi" (42), y que vienen valorado por el ordenamiento jurídico independientemente de los restantes intereses de los que aquellos son titulares.

Las características de este interés colectivo no se diferencian de las características generales del "interés colectivo"; y en este sentido sus notas configuradoras son:

- a) **Economicidad**, el interés a participar en la producción tiende a satisfacer materialmente una necesidad económica,
- b) **Indivisibilidad**: la participación de los socios en la producción es una necesidad que se sustrae a la disponibilidad, pudiendo ser satisfecha exclusivamente mediante una colectividad organizada,
- c) **Generalidad**: la sociedad cooperativa se presenta para los socios-trabajadores como una colectividad necesaria (43), en la medida en que a través de ella se consiguen fines sociales jurídicamen-

(42) El propio concepto de interés colectivo exige esta referencia "uti universi"; Cfr., por todos, PERSIANI, op. cit. pag. 79

(43) Cfr. MARCANTONIO, A (Di) "appunti di diritto di lavoro", Roma 1958, pag. 213 (cit. por ALLANSA, op. cit. pag. 68).

te reconocidas, cual es la participación directa de los trabajadores en la producción, y se satisfacen necesidades indispensables de carácter económico,

- d) Naturaleza privada de su tutela jurídica; el interés colectivo queda articulado mediante la asociación voluntaria de sujetos, ordenada en el marco del derecho privado.

En definitiva, y como resumen de lo expuesto, podemos establecer que la sociedad cooperativa en cuanto asociación surgida como instrumento contractual para la composición de intereses en conflicto, satisface intereses de naturaleza individual; pero en cuanto organización de trabajo, ordena intereses en posición solidaria, del que nace el interés colectivo a la participación directa de los socios-trabajadores en la producción de bienes y servicios.

De esta forma, en la sociedad cooperativa, y contrariamente a lo que sucede en una sociedad "in genere" en la que el interés solidario común se articula como interés instrumental de los intereses individuales de cada socio (44), el interés solidario colectivo se configura como un interés final, que prevalece frente a los particulares en caso de colisión entre ambos.

2.3 Los intereses de los elementos subjetivos de la empresa cooperativa

2.3.1 La imposibilidad de una configuración unitaria de la empresa cooperativa.

La búsqueda de un interés objetivo de empresa, que permita confi-

(44) Cfr. SENA, op. cit. pag. 745.

gurar a esta bien como una comunidad de intereses (45) bien como una institución con personalidad jurídica propia (46) constituye una dato constante en la doctrina laboralista; sin embargo, y aun reconociendo con nuestro maestro BAYON CHACON (47) que la realidad jurídica impide una visión meramente individualista de la empresa, resulta difícil sostener que en ella exista un interés de tal naturaleza tutelado y reconocido por el ordenamiento jurídico, más allá de los intereses típicos de cada uno de los elementos que la componen; resultando, por tanto, más cercano a la realidad sostener que estos sujetos son titulares de intereses opuestos de naturaleza varia.

-
- (45) Una visión de esta tesis en GARCIA DE HARO, R. "La posición jurídica del trabajador subordinado", Madrid 1963, esp. pags. 232 y ss; su teoría en síntesis es la siguiente: la empresa, considerada como unidad organizativa, es el punto de conexión de un complejo de relaciones jurídicas de diversas naturaleza tendentes a un mismo fin; la empresa - dice (pag. 233) - más que una suma de contratos es una "organización colectiva"; a esta organización colectiva corresponde una relación colectiva (pag. 250) que justifica los poderes y los elementos comunitarios del contrato de trabajo, originando una comunidad de intereses (una crítica de esta tesis en LEGA, C. "La comunità di lavoro nell'impresa", Milano 1963, pags. 72 y ss). Vid. también BORRAJO DACRUZ, "La configuración comunitaria de la empresa", RPS, 1969, nº 81, pags. 5 y ss.
- (46) Vid: GRECO, P. "Il contratto di lavoro", Torino 1930, pags. 26 y ss; ASQUINI, "Profili dell'impresa", Riv. dir. comm. 1943, I, pag. 16.
- (47) "El concepto jurídico-laboral de empresa", RFDI, 1959, nº 6, pags. 249 y ss; también "La reforma de la empresa", en "Tercer congreso ...", cit. pags. 441 y ss.

¿que particularidades ofrece la empresa cooperativa en contraste con la no cooperativa? En este sentido, el nucleo básico de la investigación se centra en torno a la posibilidad de configurar un interés objetivo de empresa, entendido como síntesis de los intereses de los sujetos que la componen.

Antes de ensayar una respuesta definitiva, parece necesario plantearse el tema de sí, a la luz de nuestro ordenamiento positivo, es posible abordar unitariamente la figura de la empresa cooperativa por responder su estructura en todos los casos a un mismo esquema; o si por el contrario, la configuración unitaria de la misma es bastante cuestionable, ya que su estructura varia según los supuestos concretos.

Planteado así el tema, pensamos que la respuesta ha de ser negativa, ya que las posiciones jurídicas del personal trabajador no son unitarias, apreciándose que este elemento subjetivo viene compuesto por dos colectivos diferenciables en razón de la naturaleza que origina la obligación jurídica de trabajar, puesto que mientras para una parte, que se identifica idealmente con los socios, esta obligación deriva directamente de la relación social (48), para otra - que puede representar cuantitativamente la parte más numerosa (49) - aquella obligación nace de un especial contrato de cambio.

En definitiva, pues, entendemos que para abordar el tema cuestio-

(48) Sobre el tema, vid. la sección II de este capítulo.

(49) Las prohibiciones de tener personal asalariado de refieren, como ya vimos (pag. 239), a aspectos puramente fiscales.

nado es imprescindible partir de esta diversidad sustancial y analizar los intereses típicos de los componentes de la empresa distinguiendo los que son propios de los trabajadores vinculados por un contrato de cambio y los que afectan a los integrados por un contrato de sociedad.

2.3.2 La cooperativa como empresa ordenadora de intereses opuestos

Rechaza la tesis doctrinal que pretende configurar un interés objetivo de empresa, queda por determinar cuales son los intereses típicos opuestos que se ordenan en aquella.

En este sentido, y por lo que se refiere al empresario, es el interés a la producción o cambio de bienes y servicios el que viene reconocido y tutelado por el ordenamiento jurídico (50); a su vez, para el trabajador interés individual, igualmente tutelado por el ordenamiento jurídico (51) es la retribución, causa del contrato de trabajo (52).

La empresa es, pues, organización ordenadora de intereses opuestos, sin que pueda configurarse en ella un interés colectivo a ambos su

(50) PERSIANI, op. cit. pag. 74, en donde señala que el supuesto interés del empresario a la ganancia no asume, cuando se considera a aquél como organizador de una empresa, ninguna relevancia en las relaciones con los sujetos que conforman la empresa; en este sentido vid. FERRAROTTI, F. "Il rapporto sociale nell'impresa moderna", Roma 1961, pag. 45.

(51) Vid. declaración III, 1, FT.

(52) Dado el carácter sinalagmático de las prestaciones del contrato de trabajo, la retribución es causa del contrato para el trabajador como el trabajo lo es para el empleador; BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, op. cit. pag. 424; DE LA VILLA GIL, "Esquemas..." cit. pag. 288.

jetos, entendido, como decíamos hace unos instantes, como síntesis de los intereses individuales (53).

Cierto que nuestro ordenamiento jurídico parece, en determinadas ocasiones, objetivar un interés de empresa (54) aludiendo a esta como entidad con personalidad jurídica propia, portadora de intereses comunitarios; sin embargo, y más que de un interés objetivo para cuya satisfacción el ordenamiento prevea determinados efectos jurídicos, se trata de una fórmula que tiende a explicar el significado y los términos de la comparación de los intereses de ambos sujetos, describiendo el ámbito dentro del cual estos son respectivamente valorados y tutelados.

Trasladando estas consideraciones al terreno de la cooperativa con personal asalariado, entendemos que la respuesta no puede ser diversa; esto es, que la empresa cooperativa no pasa, en este caso, de ser organización ordenadora de intereses en conflicto, ámbito de aplicación de determinadas normas jurídicas, y como tal "conjunto de relaciones individuales entre el empresario y cada uno de los trabajadores a su servicio" (55).

(53) GIUGNI, "Mansioni...", cit. 310 y ss.

(54) BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, op. cit. pags. 306-308; MONTOYA MELGAR, "La reforma de la empresa", cit. pg. 414. Numerosas referencias de este género se encuentran en las Leyes Fundamentales, produciéndose así una extraña paradoja entre la declaración constitucional y la realidad concreta (vid. SAGARDOY BENGOCHEA, J. A. "Sobre las crisis laborales o económicas: concepto", en Diecisiete lecciones sobre fuerza mayor, crisis de trabajo, reconversión y desempleo, Madrid 1970, pag. 138); crítica del concepto de empresa de las leyes constitucionales en BAYON CHACON, "El concepto...", cit. pag. 277.

(55) BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, op. cit. pag. 300.

En contra de este criterio, podría argumentarse una doble vía: en primer lugar podría aducirse que aun siendo exacto lo anterior, la presencia de trabajadores-socios diluye el conflicto de intereses, pudiendo configurarse un interés objetivo de naturaleza colectiva en base a la adscripción del empresario y personal a una misma categoría socio-económica (56).

Sin embargo, contra tal tesis se ha de señalar que el hecho de que cierto número de trabajadores ostenten jurídicamente la posición de socios no es elemento bastante para configurar a la cooperativa como empresa comunidad con un interés objetivo común al empresario y al personal que presta un trabajo en ella; para llegar a un resultado similar tendríamos que aceptar la existencia de un interés colectivo a ambos sujetos, interés que no es posible construirlo con datos estrictamente socio-económicos, cuales son los de la pertenencia de ambos componentes a la categoría de "trabajador".

Por el contrario, nos atrevemos a señalar que la posibilidad legal de que la cooperativa tenga personal asalariado a su servicio tiende a desvirtuar la propia esencia de la institución (57), al introducir un mecanismo constructual de cambio en lo que, originariamente, se ideó como instrumento de superación de este mecanismo.

(56) GARCIA DE HARO, "La posición jurídica;..", cit. pag. 47 configura a la cooperativa como empresa comunidad, aun reconociendo (pag.45) que no se excluye la posibilidad de tener personal asalariado.

(57) En este sentido dice GRECO, P. ("Le società", Torino 1959, pg. 54) que "meno giustificato, e in più stridente contrasto con lo scopo

En definitiva, se puede concluir diciendo que la cooperativa, cuando tiene trabajadores vinculados con contrato de trabajo, actúa respecto de estos con el mismo esquema conflictivo que cualquier empresa de tipo capitalista, aunque cuantitativamente la oposición de intereses se haya reducido.

La segunda vía para contestar aquella conclusión puede estar sustentada en la comprobación empírica de que en ciertas empresas cooperativas el único personal asalariado que existe es, paradójicamente, quien tiene investido poderes autoritarios de naturaleza técnico-organizativa (58).

Sin embargo este supuesto, que no es sino manifestación de la separación entre titularidad y gestión (59), y en cuya virtud estos sujetos ejercen el poder de dirección por delegación del empresario en sentido jurídico (60), no viene a encuadrarse dentro del caso cuestionado,

istituzionale è, per le cooperative di produzione o di lavoro, il ricorso al lavoro salariato di non soci..., alterandose così il carattere delle cooperative".

- (58) Cfr. ALONSO OLEA, "El futuro de la participación en la gestión", en Diecisiete lecciones sobre participaciones de los trabajadores en la empresa, Madrid, 1967, pag. 286.
- (59) BORRAJO, "Introducción...", cit. pags. 145 y ss., y "La configuración..." cit. pags. 11 y ss; ALONSO GARCIA, "La reforma de la empresa", cit. pags. 60 y ss; BAYON CHACON, "La reforma...", cit. pag. 444.
- (60) MONTIYA MELGAR, "El poder de dirección", cit. pag. 204; ALONSO GARCIA, "Problemas que plantea desde el punto de vista laboral la denominada Ley de Cogestión", en Dialogos sobre la empresa, Santiago de Compostela 1972, pags. 42 y ss.

debiendo por tanto concluir que cuando el único personal no socio es el Director o Gerente, su presencia no desvirtua el sentido que ha de darse a la empresa cooperativa como empresa comunidad.

2.3.3 La cooperativa como empresa ordenadora de un interés colectivo

El segundo tipo de empresa cooperativa viene constituido por el su-
puesto de la identidad de los sujetos que la conforman; esto es, el per-
sonal que presta un trabajo en la cooperativa es al mismo tiempo, por su
condición de socio, empresario cooperativo (61).

Los problemas que plantea esta identidad ideal entre ambos componen-
tes de la empresa son de muy diversa naturaleza; de entre todos estos nos
interesa detenernos en el relativo a los efectos que sobre la configura-
ción jurídica de la empresa puede tener.

En este sentido, y comenzando por el análisis de la posición de los
intereses que median entre ambos elementos, podría resultar obvio el cues-
tionarse la existencia de intereses diversos entre ambos sujetos; sin em-
bargo, la cuestión resulta lejos de ser superflua, no solo porque jurídi-
camente empresario cooperativo y trabajador cooperador no se confunden,
puesto que aquel es la persona jurídica que la voluntad de los socios han
creado, sino primordialmente por que la posición jurídica del socio no des-
virtua el interés individual de este, en su condición de trabajador, a una
retribución, que sigue satisfaciendo exigencias mínimas indispensables.

El nudo de la cuestión se centra en determinar sí, aun reconociendo

(61) BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, op. cit. pag. 301.

esta primera oposición de intereses entre el socio como trabajador y la organización social como empresario, se puede llegar a configurar un interés objetivo en la empresa cooperativa.

En realidad, y a poco que se profundice en el tema, se observa que la cuestión ahora planteada se resolvió ya afirmativamente cuando, al analizar el interés de los socios en la sociedad cooperativa de producción, se concluyó con la existencia de un interés colectivo que primaba, en caso de colisión, sobre los intereses individuales de los socios.

Esta afirmación podría parecer carente de rigor científico sobre todo si se piensa que en diversas ocasiones de este trabajo, se ha estado manteniendo la postura, por otra parte pacífica en la doctrina (62), de que no cabe confusión entre empresa y sociedad (63), ya que esta no viene a constituir sino la vestidura formal de uno de los elementos que componen aquella.

Esta separación, válida para cualquier empresa así como para la empresa cooperativa de producción que dispone de personal asalariado, no

(62) Vid: GARRIGUES, "Acotaciones de un jurista sobre la reforma de la empresa", en Hacia un nuevo Derecho mercantil, Madrid 1971, pags. 297 y ss, esp. pag. 300 donde, saliendo al paso de esta identificación, dice "(la reforma) de la empresa ha de hacerse desde el terreno de esta, como realidad diferente de la sociedad (anónima); ALONSO GARCIA, "La reforma...", cit. pag. 51.

(63) Esta identificación fué postulada por MOSSA, L. "Ensayos sobre empresa y sociedad", en Rev. Der. Merc. 1948, nº 3, pags. 185 y ss., y por CASANOVA, M. "Società ed. Impresa", en Nuova Riv. Dir. Comm, Dir. dell Econ. y Dir. Soc. 1949, pags. 1 y ss.

lo es para la cooperativa en la que prestan trabajo todos los socios, y exclusivamente los socios.

Efectivamente, aquella tesis viene rechazada en base a argumentos de diversa índole, entre los que nos interesa destacar ahora los siguientes: la sociedad es instrumento de asociación de capitales, mientras la empresa se configura como organización que integra capital y trabajo, por lo que, y salvo que se incurra en el error de identificar la empresa con el sujeto que aporta el capital (64), su asimilación resulta imposible, toda vez que entre el personal trabajador y la sociedad no corren relaciones de carácter interno, limitándose estas al puro orden externo desarrolladas en la esfera de la empresa (65).

Ahora bien, en el tipo de empresa cooperativa que estamos analizando la situación es diferente:

a) en primer lugar, la sociedad cooperativa no es instrumento de asociación de capital; cierto que la condición de socio se adquiere mediante las aportaciones a capital (66), sin embargo esta aportación es instrumental, en la medida que la asociación tiende a reunir trabajo.

(64) BAYON CHACON ("La defensa jurídica de la paz laboral", Madrid 1963, pag. 36 (separata) ha puesto de relieve que el capital es instrumento de la empresa.

(65) ALMIANSA, op. cit. pag. 37

(66) Vid. apar. g) art. 4 RC.

b) En segundo lugar, las relaciones entre el personal trabajador de la empresa y la sociedad no se agotan en el marco de aquella; muy al contrario, el trabajador-socio participa directamente en la vida interna de la sociedad.

En este sentido, se podría afirmar que la sociedad cooperativa de producción posee una originaria vocación para convertirse en organización empresarial, debiendo ser reconocida y tutelada por el ordenamiento jurídico como instrumento apto para provocar una reforma en el seno de la empresa (67).

Sentadas estas consideraciones, entendemos ha quedado explicado el por qué del reenvío en el tema de la configuración de un interés objetivo de la empresa a las conclusiones adoptadas al analizar la misma cuestión en el ámbito de la sociedad cooperativa.

En definitiva, pues, en la empresa cooperativa coexisten dos órdenes de intereses: el individual del trabajador a la retribución - que corre paralelo con el individual del socio a la ganancia - y el del empre-

(67) En este sentido dice BAYON CHACON ("Introducción sobre el salario..." cit. nota 1 a pag. 11) que las "fórmulas cooperativas parecen poderse aproximar con más realismo a la distribución justa"; vid. en parecidos términos, SUAREZ GONZALEZ, "Accionariado obrero y capitalismo popular", en Diecisiete lecciones sobre participaciones..., cit. pag. 27C, y SAGARDOY BENGOCHEA, "Consideración sobre las cooperativas de producción", RT 1964 nº 5, pag. 79.

sario a la producción; ahora bien, debido a las relaciones que vinculan a ambos elementos, que no se agotan en el estrecho marco técnico, jerárquico u organizativa sino que son aptas para generar una comunidad de trabajo (68), el interés del empresario se objetiva no por absorción del interés de aquel, sino por síntesis entre los intereses de ambos, originando un interés colectivo materializado en el interés a participar en la producción cambio de bienes y servicios en el seno de un sistema capitalista; y siendo este interés el que, en última instancia, da la razón de ser y justifica la existencia de la propia cooperativa.

3. La gestión en la empresa cooperativa

3.1 Propiedad y gestión en la empresa cooperativa

Analizado el tipo de interés que instrumenta la empresa cooperativa - individual en un caso, colectivo en otro -, y configurada esta como un supuesto de empresa comunidad allí donde se dé una confusión ideal entre los elementos que componen su estructura personal, queda por examinar la segunda de las cuestiones propuesta en la investigación de los aspectos materiales del empresario cooperativo en cuanto organizador de la empresa.

Sin embargo, y antes de abordar de lleno el tema de la gestión de la empresa cooperativa, o más concretamente de la relevancia que para la

(68) Sobre el significado sociológico y jurídico del término comunidad y comunidad de trabajo, vid. LEGA, "La comunità..." cit. pags. 9 y ss. esp. pag. 24 en donde dice "La comunità di lavoro nell'impresa viene pertanto ad assu mere, in virtù dei diversi valori e interessi che fra loro collega, non solo un significato de ordine tecnico, ma anche sociale e umano".

gestión adquiere el hecho de que el personal ostente jurídicamente la posición de socio, parece necesario referirse a las relaciones que median entre propiedad y gestión, o más exactamente entre titularidad en la propiedad de la empresa y titularidad del poder de gestión (69).

En este orden de cosas, y sin entrar a determinar a quien o quienes corresponde la propiedad en la empresa, cuestión espinosa que nos exigiría adoptar posturas ideológicas definitorias, entendemos que las relaciones entre estas titularidades pueden encontrarse en una doble situación:

a) Una primera de carácter homogéneo, en virtud de la cual ambas quedan confundidas, de forma que el sujeto titular de la propiedad es quien ostenta el poder de gestión; y si bien es cierto que para esta calificación resultan indiferentes la naturaleza jurídica del sujeto titular y el título jurídico para la adquisición de la propiedad, no es menos cierto que con respecto a este segundo aspecto se debe distinguir según que la homogeneidad de las titularidades derive de las aportaciones de capital o de las de trabajo, entendidas estas últimas no en su vertiente obligacional - esto es, como aportaciones de industria incorporadas a capital - sino en su vertiente organizativa - en cuanto elemento necesario para la existencia de la empresa.

(69) Notese que las relaciones las planteamos en términos de titularidades y no de ejercicio de esas titularidades; sobre el tema, vid. BORRAJO, "La configuración...", cit. pag. 12 y "La reforma de la empresa como presupuesto...", cit. pag. 494.

b) Una segunda de carácter heterogeneo, en virtud de la cual están separadas, correspondiendo la propiedad a un sujeto - normalmente el Estado - y el poder de gestión a otro distinto - la comunidad organizada de trabajo.

Podría argumentarse en contra de la situación descrita que la misma peca de simplicidad, olvidando que la homogeneidad de titularidades basada en las aportaciones de capital quiebra al instaurarse diversos mecanismos por los que a los sujetos que aportan trabajo se les otorga cierta titularidad en la gestión (70), sin exigírseles a cambio la asunción de riesgos y responsabilidades que la propiedad entraña.

En este orden de cosas, hay que reconocer que la participación de los trabajadores en la gestión, que en cierta medida no viene a ser sino derivación del fenómeno más generalizado que contempla la participación como punto de arranque para "posteriores y más profundas reestructuraciones sociales" (71), ha alterado la concepción clásica de la empresa capitalista, rompiendo, al menos en su aspecto formal, con el monopolio absoluto de la gestión del empresario-propietario (72).

- (70) Sobre las diversas teorías que fundamentan esta titularidad en la gestión, vid. ALMANSA, "La participación...", cit. pags. 71 y ss. Junto a la intervención de los trabajadores no hay que olvidar tampoco, como dice BAYON CHACON ("introducción al problema de la participación de los trabajadores en la empresa", en Diecisiete lecciones... cit. pag. 21), que "la progresiva intervención del Estado en la vida del trabajo es un nuevo ataque a la gestión exclusiva de la empresa por el propietario de la misma"; en el mismo sentido ALONSO GARCIA, "Problemas que plantea..." cit. pag. 49.
- (71) Cfr. KRISTAN, I. "La partecipazione nell'ambito dello sviluppo del sistema politico in Jugoslavia", Política del Diritto 1972, nº 1, pag. 33; también MANDEL, E "Contrôle ouvrier, conseils ouvriers, autogestion", Paris 1970, pags. 27 y ss.
- (72) BAYON CHACON, "Introducción...", cit. pag. 22.

Sin embargo, hemos de preguntarnos si esta participación del personal en la titularidad y en el ejercicio del poder de gestión en la empresa ha minado los fundamentos, tanto teóricos como prácticos, de la homogeneidad postulada; y en este sentido la respuesta ha de ser forzosamente negativa.

Desde un plano jurídico, la participación del personal no se ha concebido como título bastante para la modificación de la estructura de la empresa, que impone que sea el empresario titular, asumidor de riesgos y buscador de beneficios (73) el que ostente y ejercite con carácter inapelable las decisiones últimas que convienen a la vida económica y organizativa de la empresa (74).

Pero es que hay más, por cuanto y si bien en otros ordenamientos jurídicos la gestión conjunta ha alcanzado unaintensidad y alcance importantes (75), en el nuestro la ley de 1962 se ha limitado a implantar

(73) RODRIGUEZ-PINERO, M. "Empresa y contrato de trabajo", Anales de la Universidad Hispalense, Sevilla 1960, pag. 46; ALONSO OLEA, "El futuro de la participación en la gestión", cit. pag. 284-285.

(74) MONTOYA MELGAR, "El poder de dirección", cit. pag. 127; PERSIANI, op. cit. pag. 91. Este criterio se marca en las Ordenanzas y Reglamentaciones de Trabajo que conceden a la dirección de la Empresa la facultad de organizar el trabajo; vid. entre otras muchas, art. 5º Reglamento Nacional de Trabajo en Prensa (23-3-1971), art. 5º Ordenanza Laboral para las empresas de Transportes por Carretera (31-3-1971), art. 6º Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalurgica (29-7-70).

(75) Sobre la cogestión en Alemania vid., entre la muy abundante bibliografía, los siguientes: DERSCH, H. "Cogestione e codecisione del prestatori di lavoro nel Diritto tedesco", Riv. Dir. Lav., I, 1952,

muy tímidamente, y con un alcance muy modesto, la codirección (76), produciéndose incluso la paradoja, puesta de relieve por MONTTOYA (77) de que "los órganos de representación del personal instituidos para ejercitar el derecho a la codecisión, se encuentren invadidos por el poder del empresario".

Sentado, pues, que en la empresa capitalista existe una homogeneidad entre titularidad en la propiedad y en la gestión, nos corresponde ahora examinar el tema en el ámbito de la empresa cooperativa, para lo cual entendemos que el camino a seguir debe ser:

pgs. 72 y ss; NIPPERDEY, H.C. "La ley alemana de constitución de empresas", CPS 1953, n° 17, pags. 7 y ss. DE LA VILLA GIL, "La codecisión y la cogestión en las esferas privada y pública", CPS 1959, n° 41, pags. 39 y ss: Id, "La cogestión en la República Federal Alemana", en Diecisiete... cit. pags. 85 y ss; GARRALDA, A. "La participación de los trabajadores en la dirección de las empresas en Alemania", Oviedo 1967; ALMANSA PASTOR, "La participación de los trabajadores en los frutos y en la gestión de las empresas en Alemania", RT 1970, n° 29, pags. 9 y ss; RODRIGUEZ SANUDO, F. "La nueva ley alemana de participación de los trabajadores en la empresa", RPS 1972, n° 94, pags. 71 y ss.

- (76) Vid: VIDA SORIA, J. "El sistema de participación de los trabajadores en la administración de las empresas (aspectos orgánicos)", en Diecisiete... cit. pags. 179 y ss, esp. pag. 189 en donde pone de relieve el desequilibrio entre la expresión orgánica y el objetivo funcional perseguido", RODRIGUEZ SANUDO, "Sistema español de cogestión, aspectos funcionales", en Diecisiete... cit. pags. 193 y ss; para un estudio en profundidad del tema, ALMANSA, "La participación..." cit. pags. 232 y ss.
- (77) "La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa y los antecedentes del Régimen de Jurados", en Diecisiete lecciones sobre participaciones..., cit. pag. 31: en parecidos términos ALONSO GARCIA, "Problemas que plantea...", cit. pags. 41-42.

- a) Analizar a quien corresponde la titularidad en la propiedad, y en base a que título la misma se adquiere,
- b) Analizar a quien corresponde la titularidad del poder de gestión así como configurar la fórmula a través de la cual este se ejerce.

3.1.1 La titularidad en la propiedad de la empresa cooperativa

El nudo central del primero de los temas cuestionados reside en determinar cual es el título que justifica la propiedad en la empresa cooperativa; esto es, si ha de ser el capital, como en la empresa de estructura capitalista, o es el trabajo.

En realidad ensayar una respuesta adecuada no resulta, en estos momentos, tarea difícil, ya que en más de una ocasión nos hemos pronunciado, directa o indirectamente, sobre el tema; de ahí que entendamos bastante sistematizar las ideas generosamente expuestas a lo largo de este estudio para demostrar que es el trabajo el título que provoca la propiedad en la empresa cooperativa.

En este sentido, comencemos recordando que el análisis del desenvolvimiento histórico de la cooperativa enseñó que su nacimiento quedó vinculado al deseo de modificar sustancialmente las estructuras de la empresa clásico-liberal; surgiendo, pues, con una vocación de reforma que implicó ya una alteración en la titularidad tradicional de la empresa.

Por otra parte, la base socioeconómica de los sujetos que componen este tipo de empresa pone de relieve que la misma se creó como instrumento de acceso del factor trabajo a los medios de producción; o dicho con

otras palabras, como mecanismo de participación de los trabajadores en la propiedad de los medios de producción (78).

Cierto que la sociedad cooperativa es, jurídicamente, el titular de la empresa cooperativa, y que la condición de socio se adquiere mediante las aportaciones de capital, exigidas estatutariamente; sin embargo, si se piensa, por una parte, que la sociedad cooperativa de producción se identifica en nuestro ordenamiento jurídico con el supuesto de asociación de trabajo perfectamente entendido por el legislador que prohíbe la participación de un socio en estas sociedades a título de capitalista - esto es, como socio que no preste trabajo (79) - y, por otra, que el personal de la empresa cooperativa se puede confundir idealmente con el titular de esta, fácilmente se llega a la conclusión de que en nuestro ordenamiento la titularidad corresponde al trabajo.

Por último, a idéntica conclusión se llega relacionando asunción de riesgo y veturas en la empresa capitalista y en la cooperativa; en aquella el empresario asume el riesgo y el beneficio de la actividad económica de la empresa en función de la participación que justifica la titularidad, de manera que cuando el resultado es adverso el riesgo corre íntegramente por cuenta del aportador de capital (80), mientras que

(78) Cfr. BORRAJO DACRUZ, "Introducción..." cit. pag. 136; SUAREZ GONZALEZ, "Accionariado obrero..." cit. pag. 270; SAGARDOY BENGOCHEA, "Consideraciones...", cit. pag. 86.

(79) Art. 11 RC; vid. pag. 193.

(80) Esta irrelevancia del riesgo de la producción es lo que para BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, (op. cit. pag. 17) constituye elemento diferenciador de las relaciones laborales; algún sector doctrinal (BORRAJO,

cuando es favorable se destinan a este mismo sujeto la totalidad de los excedentes, una vez deducidos los diversos gastos de la explotación entre los que se incluye la retribución de quien presta trabajo.

En la empresa cooperativa la situación es diversa; cierto que hay un empresario que asume siempre el riesgo y la ventura de la explotación, pero esta asunción se efectúa valorando no el capital aportado, sino el trabajo prestado (81); es decir, contemplando al socio no en su calidad de aportador de capital, sino en su condición de trabajador.

Y notese que a estos efectos resulta del todo irrelevante que en la empresa cooperativa existan relaciones jurídico-laborales, puesto que los términos de la comparación se plantean entre empresarios - capitalista y cooperativo - y no entre trabajadores; lo que ocurre es que en el supuesto en que la empresa cooperativa tenga personal asalariado se está

"La configuración... cit. pag. 14) señala que el riesgo del capital es parejo al del trabajo, materializado este en "el fantasma del paro"; sin embargo, y como acertadamente señala DE LA VILLA GIL ("Esquemas...", cit. pags. 63-64), este planteamiento lleva el problema a un plano cuantitativo y olvida "no solo distinciones elementales entre riesgo laboral del propio trabajador y riesgo laboral ajeno, riesgo económico en sí y consecuencias de ese riesgo, sino que además abstrae el fenómeno de la dinámica social. O dicho con otras palabras, las incidencias (sobre todo económicas) podrán determinar que un trabajador deje de ser, en un supuesto concreto, trabajador por cuenta ajena, pero no supone de suyo, la asunción de riesgos por parte de quien ostente aquella condición jurídica". En realidad pensamos que en el fondo de esta tesis sobre la comunidad de riesgos está latente aquella otra ya analizada del interés colectivo de la empresa en base a la producción.

(81) Vid. pags. 260 y ss.

dando la paradoja de que en una empresa, cuya titularidad viene determinada por la condición de trabajador, existan trabajadores marginados de esta titularidad situación que en definitiva deriva del juego de los principios dogmáticos con los que actúa el sistema capitalista (82).

3.1.2 La titularidad del poder de gestión en la empresa cooperativa

Sentado que es el trabajo en donde radica la titularidad de la empresa cooperativa, queda por analizar a quien corresponde la titularidad del poder de gestión, al objeto de determinar si ambas titularidades se encuentran en situación homogénea o heterogénea.

Antes de abordar una respuesta al tema cuestionado, conviene referirse a una distinción que ha cobrado para la moderna empresa una importancia notable, sobre todo cuando el titular jurídico de esta adopta una forma social; me estoy refiriendo a la distinción entre titularidad del poder de gestión y ejercicio (83).

En este sentido, se reconoce como fenómeno bastante generalizado, la progresiva separación entre las figuras del empresario patrimonial o jurídico y del empresario profesional o económico, consecuencia de la personalización del poder de gestión dentro de la empresa en favor del segundo, que es quien realmente dirige la explotación (84).

(82) Se comprende ahora nuestra anterior afirmación (pag. 96) de que el cooperativismo de producción más que suponer una tercera vía, signifique un método dentro de cada sistema.

(83) BORRAJO, "La configuración comunitaria..." cit. pag. 12; ALONSO GARCIA "La reforma..." cit. pag. 67; MONTOYA BELGAR, "El poder de dirección", cit. pag. 197; ALONSO OLEA, "Derecho del Trabajo" cit. pag. 60.

(84) ALONSO GARCIA, op. ver. cit. pag. 69; BAYON CHACON, "La reforma...", cit. pag. 444.

El nudo central de esta distinción reside en determinar si la disminución del poder de gestión en la figura del empresario jurídico ha afectado su titularidad directa, o por el contrario el empresario económico actúa en el seno de la empresa mediante representación o delegación de aquél, debiendo calificarse su titularidad como derivada (85).

Planteado así el tema, la respuesta desemboca forzosamente en la segunda alternativa; esto es, estimar que el empresario económico ejerce el poder de gestión por delegación de los órganos de administración del empresario constituido en forma social, y como quien manda en Derecho es quien tiene la facultad de otorgar o revocar dichos nombramientos, es el empresario jurídico quien ostenta la titularidad directa del poder de gestión en la empresa.

Supuesto que la presencia de un empresario profesional no afecta a la titularidad directa del poder de gestión, queda por resolver a quien corresponde esta titularidad en la empresa cooperativa.

En este orden de cosas, se sostiene que la titularidad del poder de gestión viene conferida por el derecho sobre la empresa, de forma que ambas están indisolublemente unidas (86), tal vez como resultado de los dogmas básicos que instrumentan el sistema capitalista; los mismos motivos que impulsan al ordenamiento jurídico a reconocer títulos dominicales y crediticios sobre la empresa - dice MONTTOYA (87) - lo inducen

(85) En terminología de MONTTOYA, op. y loc. cit.

(86) MONTTOYA, op. ult. cit. pag. 199

(87) Op. y loc. ult. cit.

a atribuir poderes con los que dar eficacia a esos títulos.

Con este planteamiento, el tema vuelve a trasladarse a la esfera de la titularidad en la propiedad de la empresa, por lo que, si anteriormente señalamos que titular jurídico de la empresa cooperativa era la sociedad cooperativa de producción, se puede ahora concluir afirmando que titular originario del poder de gestión es la misma sociedad a través de sus órganos de gobierno.

A la vista de las conclusiones expuestas, se puede sostener que en el seno de la empresa cooperativa las relaciones entre titularidad en la propiedad y titularidad del poder de gestión se confunden, pudiendo ser calificadas como homogéneas; sin embargo, en la cooperativa es el trabajo el título que justifica estas conclusiones que debe retenerse para entender el alcance de las consideraciones que preceden.

3.2 La autogestión como fórmula de participación de los socios trabajadores en la gestión de la empresa cooperativa

3.2.1 Las fórmulas de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa: criterio de clasificación

La quiebra del concepto dominical de empresa, la progresiva separación entre empresa y empresario y la aplicación al ámbito de la empresa de las teorías comunitarias e institucionalistas han sido factores que, aun sin conseguir la transformación del esquema típico, de naturaleza conflictiva, que instrumenta la empresa, han logrado romper con el monopolio absoluto de la gestión en favor del empresario jurídico, provocando la aparición de diversas fórmulas, de intensidad y alcance variable, a través de las cuales se ha venido a reconocer en la comunidad organizada de

trabajadores (88) un derecho a participar en la gestión, dirección y administración de la empresa.

En este sentido, el primer paso para fijar el criterio clasificatorio las fórmulas de participación debe partir del análisis de la relación que media entre derecho de propiedad y derecho de gestión en la empresa; encontrándonos de esta forma con dos grandes sistemas de participación:

- a) Sistemas en los que el derecho a la gestión no deriva de la titularidad sobre la empresa,
- b) Sistemas en los que derecho a la gestión aparece originariamente vinculado a la propiedad de la empresa.

a) La participación en la gestión como derecho no derivado de la propiedad

Dentro de este sistema, cuya nota característica es la de que el derecho a la gestión no nace del derecho sobre la empresa (89), se puede a su vez distinguir, atendiendo a la naturaleza de la fórmula participatoria, entre formas no institucionalizadas y formas institucionalizadas.

(88) Se discute por la doctrina si el titular del derecho a la participación es el trabajador, la comunidad de trabajadores o el órgano representativo de esta comunidad (una exposición de las diversas posturas en ALMANSA, "La participación..." cit. pags. 72-78), siendo a nuestro entender correcta la tesis de quienes propugnan (DE LA VILLA GIL, "La codecisión y la codeterminación..." cit. pags. 112 y ss y "La cogestión en la República..." cit. pags. 88-89) que no cabe una respuesta unilateral, puesto que si bien el fundamento de que se reconozca tal derecho es el individuo, el titular es la comunidad, y el ejercicio del derecho se ejerce por el órgano de representación de esa comunidad.

(89) Como sucede con el derecho a la gestión del empresario; vid. supra

a) Formas no institucionalizadas

La característica general a todas estas formas es la falta de integración de las organizaciones sindicales en las responsabilidades derivadas de la gestión de la empresa (90); la ideología que subyace es la del "conflicto permanente" (91) y la vía de solución más adecuada a corto plazo es la negociación colectiva (92).

b) Formas institucionalizadas

Constituyen el grupo más numeroso de las fórmulas de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, pudiendo distinguirse dentro de ellas dos tipos.

a") Cogestión

Se define la cogestión "como el derecho del trabajador a participar en la gestión de la explotación junto al titular de esta" (93); a estos efectos resulta indiferente la naturaleza jurídica de la persona que ostente aquella titularidad (94), por lo que las fórmulas de cogestión se mani-

-
- (90) MANDEL, op. y loc. cit; GORZ, A. "Strategie ouvrière et neo-capitalisme" Paris 1964, pag. 117; TOURAINE, A. "Contribution à la sociologie du mouvement ouvrier. Le syndicalisme de contrôle", en Cahiers internationaux de sociologie", enero-junio 1960, pags. 57 y ss y "La sociedad post-industrial", Barcelona 1964, pags. 164 y ss.
- (91) Sobre la filosofía del conflicto permanente, vid. UDDA-ISEO, "I sindacati e l'impresa", Milano 1971 (resumen de estas posturas en la re-censión de este libro hecha por SALA, T. en CCDT. nº 3, pag. 109).
- (92) En realidad las formas no institucionalizadas desbordan con mucho el marco estricto de las relaciones de empresa, y suponen la aparición de fórmulas innovadoras las reivindicaciones sindicales tradicionales; es este el sentido de las intervenciones sindicales del mayo francés de 1968 (vid. MARTIN VALVERDE, A. "Los acuerdos de Grenelle y el Derecho del Trabajo", RT 1969, nº 26, pags. 50 y ss) y del "autunno caldo" italiano de 1969 (a través de la política de las grandes reformas o del "contropiano", vid. SALA, op. cit. pag. 112).
- (93) Cfr. BORRAJO, "Introducción..." cit. pag. 152.
- (94) Dice ALONSO OLEA ("Derecho..." cit. pag. 75) que "la cogestión se en-

fiestan tanto en un sistema de economía capitalista como de economía socialista, si bien es en aquel donde cobran todo su sentido.

La enorme variedad de las fórmulas de cogestión, en cuanto derecho genérico jurídicamente reconocido, hacen tarea vana su sistematización, encontrando fórmulas que se reducen al simple derecho de información, consulta, protesta o sugerencia (95) junto a otras que suponen una integración del titular del ejercicio a la cogestión en los órganos directores de la empresa (96), pudiendo, aún en este caso, ser varias las esferas sobre las que se actúa la decisión (97).

b") Autogestión

La autogestión puede ser definida, por contraposición a la cogestión, como el derecho reconocido a los trabajadores a gestionar y diri-

tiende referida precisamente a la empresa cogestionada y por los trabajadores que en ellas trabajan"

- (95) Detalle del contenido de cada uno de estos derechos en ALMANSA, op. cit. pags. 84-85; también vid. OIT, "Participación de los trabajadores en las decisiones que se adoptan en la empresa", Ginebra 1969, pg 14. Este derecho a la información o a la consulta constituiría el derecho típico reconocido a los Jurados de Empresa en España, cuyas decisiones no vinculan al empresario (cfr. MONTROYA MELGAR, "La representación sindical en la empresa", Sevilla 1968, pags. 80-85).
- (96) Tal sería el caso de los Consejeros Laborales en España, instituidos por la ley de 1962; un estudio en profundidad del tema, en ALMANSA (op. cit. pags. 232 y ss).
- (97) La doctrina suele distinguir tres esferas: personal, social y económica. En el ordenamiento español se limita la cogestión a la esfera social y personal (cfr. ALONSO GARCÍA, "Problemas...", cit. pags. 64 y ss. que afirma que en materias económicas la intervención solo se produce cuando "las mismas puedan afectar a los intereses del personal como categoría colectiva"; en contra de esta participación restringida, ALMANSA, op. cit. pags. 287 y ss; vid. también VIDAL SORIA, "El sistema español..." cit. pags. 186-190). Por su parte,

gir por sí mismos la empresa (98).

Las fórmulas de autogestión, dentro del sistema de participación que estamos analizando, son propias de los países socialistas (99) sien

BORRAJO ("Introducción...", cit. pag. 144) señala cuatro sectores en los que se puede desplegar las funciones: económico, técnico, profesional y social.

(98) OIT, op. cit. pags. 30.

(99) Un estudio detallado de estas fórmulas de autogestión desbordaría nuestro ámbito; sin embargo, y en la medida en que guardan con las empresas cooperativas cierta identidad, entendemos imprescindible hacer una referencia a las más representativas.

Yugoslavia

El derecho de autogestión se encuentra reconocido por la Constitución Yugoslava, que lo enunció en la de 27-6-1950 de la siguiente forma: "Las fábricas, minas, empresas de comunicación, de transporte, comerciales, agrícolas, forestales, comunales y otras empresas del Estado serán gestionadas, en tanto que propiedad común de la nación y en nombre de la comunidad social, por las colectividades de trabajo en el cuadro del plan económico y sobre la base de los derechos y obligaciones establecidos por las leyes y reglamentos" (Cfr. BIT, Serie Legislativa, Ginebra 1950, Yugoslavia, nº 2).

Los objetivos de la autogestión yugoslava exceden del marco de la autogestión empresarial, y en este sentido la autogestión viene entendida como una compleja relación social, por virtud de la cual se pretende introducir la autogestión en la esfera política; si bien, y como apunta KRISTAN (op. cit. pag. 39) "la autogestión no sale del sistema político, no es una estructura paralela a él, sino que es una parte integrante del sistema, dando forma y contenido a su funcionamiento".

Con respecto a los objetivos de la autogestión empresarial, y siguiendo a MANDEL (op. cit. pags. 319-320) se puede decir que son los siguientes: a) la autogestión no modifica el principio de la propiedad social de los medios de producción; a los trabajadores se les transfiere la gestión, pero no la propiedad, b) La autogestión supone una descentralización del sistema de dirección económica, c) la autogestión convierte a los trabajadores en productores libres en la medida en que asumen el riesgo de la producción.

Con relación a los órganos de la autogestión, y reconociéndose que el derecho a estas pertenece a la colectividad organizada de trabajo vienen estructurados de la siguiente forma:

do su nota más característica la situación de heterogeneidad que media

- a) La asamblea del personal, órgano de la empresa con facultades para adoptar decisiones sobre todas las cuestiones relacionadas con la unidad fabril. Según las facultades que le otorgan los Estatutos, puede nombrar al Director, o bien ser esta una facultad del Consejo Obrero. Se reúne con periodicidad para la discusión de los informes de los órganos de autogestión.
- b) El Consejo obrero, principal órgano de la autogestión, es el encargado de adoptar las principales decisiones que convienen a la marcha de la empresa. Sus miembros, en número variable, se eligen por votación secreta y directa por la base. Entre sus funciones destacan las siguientes: redacción de los estatutos, autorización de operaciones comerciales no corrientes, nombramiento de los comités de gestión o juntas directivas, (y en su caso del director) y la adopción del plan de la empresa. Debe reunirse al menos cada seis semanas, y aunque sus sesiones no son públicas cualquier trabajador tiene derecho a asistir a ellas.
- c) El Comité de gestión que actúa como comisión ejecutiva del Consejo Obrero.
- d) El Comité de vigilancia, que carece de facultades ejecutivas velando por el cumplimiento de las decisiones adoptadas.
- e) El Director, que si bien se configuró en un principio como funcionario público con poderes muy amplios, poco a poco ha ido delineándose como miembro de la comunidad de trabajadores, encargado de solucionar los conflictos generados en el seno de la empresa.

Entre la abundantísima bibliografía sobre la autogestión yugoslava, vid: OIT, "La gestión obrera de las empresas yugoslavas", Ginebra 1962; MEISTER, A. "Socialisme et autogestion. L'experience yougoslave", Paris 1964; LASSEIRE, G. "L'en treprise socialiste en Yougoslavie", Paris 1964; LAKS, M. "Autogestion ouvriere et pouvoir politique (1962-1965)", Paris 1970; SOMMIARY, C. "Yougoslavie: vers le capitalisme ou vers le socialisme", en "Critique de l'Economie politique" n° 7-8, pags. 226 y ss; CHAUVEY, D. "Autogestion", Paris 1970, pags. 24-41; OIT, "Participación...", cit. pags. 30-38; MANDEL, op. cit. pags. 317-337 y KRISTAN, op. cit. pags. 33-57.

Otros países en los que la autogestión se ha ensayado con más o menos éxito son: Argelia, en la que se introdujo por dos decretos de 22-3-1963, y en donde funciona en régimen parcial (vid; TEILLAC, J. "Autogestion en Algerie", Paris 1965 y MORELL, A. "L'experience algerienne d'autogestion industrielle", en L'economie de l'Algerie nouvelle, 1965, pags. 167-254 y MANDEL, op. cit. pags. 377-387); Polonia en donde se constituyeron consejos obreros por virtud de la ley de 19-11-1956, si bien el sistema no está muy extendido (vid. MANDEL, op. cit. pags. 366-376) así como en Checoslovaquia en donde funcionó la autogestión durante la denominada "primavera de Praga" (CHAUVEY,

entre la titularidad dominical y la titularidad del poder de gestión, puesto que el reconocimiento de este en la comunidad organizada de trabajo no altera la naturaleza pública de la propiedad, que sigue perteneciendo al Estado.

b) La participación en la gestión como derecho derivado de la propiedad

A diferencia de lo que sucede en las fórmulas participatorias del sistema anteriormente analizado en el que, y como hemos dicho, el derecho a la gestión aparece como derecho independiente del de propiedad, en este la participación de los trabajadores en la administración y dirección es consecuencia de su acceso a la propiedad privada de los medios de producción.

Planteadas así las bases sobre las que se asienta este sistema, resulta obvio señalar que para calificar como fórmulas de participación en la gestión a los diversos supuestos que derivan de la propiedad de los trabajadores de los medios de producción, es requisito indispensable el que estos intervengan de forma directa en la administración de la

op. cit. pags. 41-57; SIK, O. "Les nouveau systeme de gestion planifié dans la Republique socialiste tchecoslovaque", en Analyse et Previsions, Paris, mayo 1968 (cit. por CHAUVEY, op. cit. pag. 42, nota 1) y SLANSKY, R. "les premiers pas de l'autogestion dans une usine tchèue de constructions mécaniques", en Autogestion (revista editada por Anthropos en Paris y que constituye la colección más selecta sobre el tema), nº 7, diciembre 1968, pags. 39-47).

empresa; de ahí que, y por propia definición, se excluyan de este criterio clasificatorio todas aquellas fórmulas que, como el accionariado obrero o el capitalismo popular (100), no respondan más que al deseo de convertir al trabajador en mero propietario ya de la empresa en la que trabaja, ya de empresas diferentes (101).

Cuestión de cierto interés es la relativa a determinar si en este sistema cabe distinguir entre formas de participación institucionalizadas y formas de participación no institucionalizadas, ya que hablar de control obrero respecto de empresas cuya propiedad recae en los trabajadores resulta, en estricta lógica, contradictorio.

Sin embargo, si se piensa que en este sistema lo que determina la participación en la gestión es la propiedad sobre la empresa, es posible que se den supuestos no institucionalizados, siempre que sea la partici

(100) Vid. BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, op. cit. pags. 488 y ss; SUAREZ GONZALEZ, op. cit. pags. 269 y ss.

(101) Podría plantearse el tema de si los supuestos en los que la propiedad de la empresa pertenece a las organizaciones profesionales de trabajadores - esto es, a los sindicatos - son supuestos reconducibles o no a fórmulas de participación en la gestión derivadas del derecho de propiedad. En este sentido pensamos que la respuesta debe ser negativa, ya que el hecho de que el movimiento sindical sea propietario de un cierto número de empresas representa un elemento de participación de los trabajadores en el poder económico, pero no significa, por sí mismo, el que los trabajadores empleados hayan de participar directamente en la gestión (OIT, op. cit. pag. 44); sobre el tema, con especial referencia a la situación de Israel (en donde la Federación General de Trabajo, "Histadrut", es propietaria de gran número de empresas) vid. DERREER, M. "Plant Labor Relations in Israel", Industrial and Labor Relations Review, vol. 17, 1963, pags. 39 y ss. (cit. por OIT, ip. y loc. cit.).

pación en la propiedad la que tenga este carácter (102).

Decualquier forma, son las fórmulas institucionalizadas las que más interés revisten, si bien, desde un punto de vista cuantitativo y en comparación con las del sistema anteriormente analizado, su importancia es muy inferior.

3.2.2. La naturaleza participatoria de la empresa cooperativa

Fijado el criterio para clasificar las diversas formas de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, queda por examinar cual es la fórmula que más conviene a la cooperativa.

En este orden de cosas, y partiendo de las conclusiones expuestas en otro lugar relativas a la calificación de la empresa cooperativa como instituto jurídico destinado a hacer partícipes a los trabajadores en la propiedad de los medios de producción, resulta fácil, como primer paso en esta investigación, encuadrar a la cooperativa como fórmula de participación en la gestión derivada de la previa titularidad sobre la empresa.

Se podría argumentar todavía, en contra de este encuadramiento, que la participación de los trabajadores en la propiedad de la empresa no es garantía de su participación en la gestión; sin embargo, esta objeción se puede rechazar en base a un doble orden de consideraciones
a través de las cuales se pone de relieve que la

(102) Como en las fórmulas no institucionalizadas del anterior sistema, también en este aparecen ligadas a un proceso socializador, y dentro del sistema de economía capitalista, acusan la existencia de un proceso de transformación social más intenso.

empresa cooperativa es fórmula de participación de los trabajadores tanto en la propiedad cuanto en la gestión de la empresa (103):

- a) En primer lugar, no hay que olvidar que es la sociedad cooperativa la que ostenta la titularidad jurídica sobre la empresa; y si se piensa que en aquella solo se puede ingresar a título de socio trabajador, la participación de este en la propiedad de la empresa es un lógico correlato,
- b) En segundo lugar, el ordenamiento jurídico confiere la titularidad directa del poder de gestión de la empresa a quien ostente la titularidad sobre ella; y como esta se ostenta por la sociedad, a la que se accede por la condición de trabajador, la participación de este en la gestión de la empresa queda en principio garantizada.

En definitiva, pues, si la empresa cooperativa es una fórmula de participación a través de la cual quienes prestan un trabajo personal y directo son quienes ejercen la gestión y administración de ella, resulta que nos estamos moviendo en el ámbito de la autogestión; o dicho en otros términos, la cooperativa representa una fórmula de autogestión de los trabajadores.

Sin embargo, y antes de afrontar los temas relativos a los objetivos, esferas sobre la que se ejerce la autogestión, y órganos a través de los que la autogestión cooperativa se actúa, conviene detenerse en el

(103) En parecidos términos, aunque son conclusión dubitativa, GREMADES, B.M. "Presentación del curso", en Dialogos sobre la empresa, cit. pag. 15.

análisis de dos objeciones que podría invalidar esta calificación.

1ª) La primera objeción deriva de la dificultad de aplicar los fundamentos teóricos y equiparar los supuestos fácticos, a través de los cuales el concepto de autogestión ha venido elaborado, al ámbito de la cooperativa.

Teóricamente se señala que la autogestión representa la tentativa de mayor alcance para hacer participar a los trabajadores en la adopción de decisiones y en las responsabilidades de la dirección empresarial, sin que ello suponga la privatización de la propiedad de la empresa, que sigue perteneciendo al Estado.

La autogestión, pues, vincula sus postulados teóricos a un sistema de socialismo de Estado; más aún, en este sistema la autogestión no se limita a reconocer el derecho de la comunidad organizada de trabajo a gestionar la empresa, sino que viene entendida "como una compleja relación de orden socio-económico, que representa una alternativa a las relaciones de producción típicas del sistema de propiedad privada, de capitalismo de Estado o de estatismo revolucionario" (104).

La conclusión a obtener de las anteriores afirmaciones sería la de que la cooperativa, al actuar en un sistema de economía capitalista bajo los dogmas básicos de la propiedad privada, queda excluida del ámbito de la autogestión, ya que la falta el postulado medular de estar socializada su propiedad (105).

(104) Cfr. KRISTAN, op. cit. pag. 36

(105) Dice CHAUVÉY (op. cit. pag. 11) "Se déclarer partisan de l'autogestion c'est vouloir renouer avec le principe fondamental du

Sin embargo, el jurista, al hablar de autogestión como fórmula de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, debe separar diversos planos en la investigación del fenómeno, cuya contemplación conjunta, si bien resulta imprescindible para un adecuado entendimiento de su validez en los sistemas de economía socialista, resulta perturbador para su aplicación en sistemas de economía diferente.

En este sentido, pues, hay que distinguir:

- a) La autogestión entendida como proceso de participación del trabajador en las esferas económica, social y política de una comunidad nacional (106).
- b) La autogestión entendida como fórmula de participación del trabajador en la adopción de decisiones tomadas en el ámbito de una empresa.

En ambos supuestos se está en presencia de manifestaciones de democracia industrial; la diferencia estriba en que mientras en el primero

socialisme"; sobre las relaciones entre la doctrina marxista y la autogestión vid. BOURDET, Y "Karl Marx e l'autogestione" en Problemi del socialismo n° 213, 1971, pags. 262 y ss.

- (106) Dice KRISTAN (op. cit. pag. 37) "Non si tratta soltanto di liquidare il concetto ormai superato ed erroneo secondo cui l'autogestione consisterebbe unicamente in quello che accade all'interno delle organizzazioni dei lavoratori... Si tratta anche di far sì che il cittadino si affermi come soggetto con potere di autogestione a tutti i livelli della vita sociale".

esta democracia se ejerce - o potencialmente puede ser ejercida - en el triple nivel de empresa, empresas de un sector económico y conjunto de empresas de un país (107), en el segundo, el ejercicio de la de mocracia industrial se limita al ámbito de una empresa, individualmente considerada (108).

Sin negar la importancia y el alcance que el primer aspecto de la autogestión entraña, pensamos que es el segundo el que conviene a la autogestión entendida como forma de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa; pudiendo, por tanto, ser definida como "gestión empresarial asumida por quienes prestan un trabajo personal y directo en el seno de una empresa".

Del concepto propuesto de autogestión se desprende que para la ca lificación de un supuesto concreto como tal, es indiferente la situación - de homogeneidad o heterogeneidad - que puede mediar entre titularidad del poder de gestión y titularidad sobre la empresa.

2ª) La segunda objeción que se puede hacer a la calificación de la coope rativa como fórmula de autogestión deriva de la regulación que nuestro ordenamiento jurídico hace de esta empresa.

En este sentido se podría objetar que, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo permite que una empresa cooperativa tenga per

(107) Este triple nivel en CHAUVÉY, op. cit. pag. 13.

(108) Sobre el tema de la democracia industrial en el ámbito de la empre sa cooperativa vid. MEISTER, A "Los sistemas cooperativos: ¿Democracia o Tecnocracia?", Barcelona 1969.

sonal asalariado, - cuya participación se produce a través de las disposiciones que regulan con carácter general el tema (109) - mal se puede compaginar autogestión y empresa cooperativa.

Esta objeción que no es más que reflejo de la escasa atención que la cooperativa de producción ha merecido al legislador, nos obliga a hacer una doble distinción, entre empresa cooperativa como empresa autogestionada y empresa cooperativa como fórmula a través de la cual se posibilita el que los socios-trabajadores accedan a la gestión empresarial.

Respecto del primer punto, parece lógico reconocer que en aquellos casos en que en una empresa cooperativa trabaje personal asalariado, la calificación de esta como empresa autogestionada resulte imposible, ya que para ello se requeriría que todo el personal - socio o no socio - interviniese directamente en la administración y dirección.

Ahora bien, el negar que en determinados supuestos la empresa cooperativa no puede calificarse de empresa autogestionada no equivale a rechazar la validez del concepto de autogestión respecto de aquellos trabajadores, que en su condición de socio, gestionan la empresa.

Dicho con otras palabras: la empresa cooperativa, unitariamente considerada, puede o no ser empresa autogestionada; pero en cualquier caso, la cooperativa representa para los trabajadores-socios una fórmula

(109) El apar.4º del art. 5º del D. de 11-9-1953 (Reglamento de Jurados de Empresas) establece la obligatoriedad de constituir jurado respecto de aquellas cooperativas en la que, dándose los presupuestos numéricos para su constitución, exista personal que carazca de la condición de socio; en el mismo sentido serían aplicables a una cooperativa de producción las disposiciones de la ley de 1962 (conforme con esta conclusión ALIANSA, op. cit. pag. 271).

de autogestión. (110).

Sentado pues que la cooperativa representa siempre una fórmula de autogestión, interesa entrar en el análisis de los problemas propuestos al inicio de este apartado.

3.2.2.1. Objetivos y esferas de actuación de la autogestión cooperativa.

Con respecto a la determinación de los objetivos de la autogestión cooperativa, y limitándonos nuestro examen a aquellos supuestos, en los que la empresa cooperativa al tiempo que fórmula de autogestión para los trabajadores socios sea fórmula de empresa autogestionada, podemos sistematizarlos en los siguientes puntos:

1º.- La autogestión cooperativa en un sistema de economía descentralizada no supone la socialización de los medios de producción, sino simplemente posibilita el acceso de los trabajadores a la propiedad de estos medios; no es, por tanto, una alternativa hacia el socialismo.

2º.- La autogestión cooperativa supone una vía hacia la democracia industrial, ya que quien trabaja es quien tiene derecho a asumir las decisiones de la gestión empresarial; sin embargo, las fuertes limitaciones de orden financiero que sobre la cooperativa pesan (111), impiden --

(110) Conformes con la calificación de la cooperativa como fórmula de autogestión: MOIX, "Participación..." cit. pag. 168; VICENT GHULIA, F. "Instituciones cooperativas y formas de trabajo asociado", CCOT 1971, nº 2, pág. 58. Por el contrario para la OIT (op.cit. pág. 43) las cooperativas de productores forman un sistema conexo al de autogestión.

(111) Vid. cap. II de esta obra.

que los principios de esta democracia superen normalmente el nivel de empresa - o grupo de empresas relacionadas entre sí.

3º.- La autogestión cooperativa supone un camino hacia la abolición del trabajo asalariado (112) y hacia la supresión de la distinción entre quienes ostentan la propiedad, dirigen la producción y deciden la distribución de los resultados de la explotación económica de la empresa y quienes prestan un trabajo (113).

4º.- La autogestión cooperativa interesa a los trabajadores en la producción, responsabilizándoles en los riesgos y venturas de la actividad de empresa.

Con referencia al segundo de los problemas cuestionados, en principio, se puede señalar que las esferas a través de las cuales se actúa la autogestión cooperativa se extiende a todos los ámbitos que de alguna manera se relacionan con la actividad de la empresa.

En este sentido, la autogestión cooperativa actúa no solamente en las esferas de orden social y personal (jornada de trabajo, anticipos laborales, formación profesional, movilidad y clasificación profesional, etc.) sino que también lo hace en la económica, ya que los obstáculos que generalmente se mencionan para restringir la participación de los trabajadores a las dos primeras (114) no son aplicables a la cooperativa, desde el momento que son los propios trabajadores los titulares de la empresa y los que asumen el riesgo de su explotación.

(112) En este sentido se podría decir que cumple el ideal de la doctrina social católica de sustituir el contrato de trabajo por el de sociedad (cfr. SAGARDOY BENGOCHEA, "Consideraciones ..." cit. pág. 84.

(113) MANDEL, op. cit. pág. 319 (si bien con referencia a la autogestión yugoslava).

(114) Vid. AL-ANSA, Op. cit. pág. 90 y ss.

En consecuencia, también en la esfera económica se actúa la autogestión cooperativa, interviniendo los trabajadores en los siguientes aspectos (115).

- gestión comercial y financiera;
- medios técnicos de producción;
- organización general de trabajo;

Sin embargo, y como veremos a continuación, en nuestro ordenamiento positivo apenas si se han regulado los aspectos de esta autogestión produciéndose la paradoja de que un instituto, que representa una fórmula típica de autogestión, carece de canales para actuarla.

3.2.2.2. La estructura de la autogestión cooperativa.

Examinados los objetivos y las esferas de actuación de la autogestión cooperativa, el tema a desarrollar en este último punto es doble:

- a) Por una parte, analizar cuál es, a la luz de nuestro ordenamiento positivo, la estructura de la autogestión cooperativa.
- b) Por otra, examinar si esta estructura garantiza a los trabajadores socios su participación en las esferas anteriormente señaladas.

En este sentido, y antes de afrontar directamente estas cuestiones, conviene comenzar diciendo que el legislador, al regular los aspectos de la gestión en la cooperativa (116), lo ha hecho desde la perspectiva del empresario cooperativo -esto es, de la sociedad cooperativa - olvidando con ello el tema de la autogestión empresarial.

(115) CHAUVEY, Op. cit. págs. 13-14.

(116) Sobre este tema, vid. VALDES DAL-RE, F. "Perspectivas futuras del cooperativismo español", Rev. de Economía Política 1972, nº 61, págs. 14 y ss.

Frente a esta afirmación se podría objetar que el silencio normativo se justifica por la propia esencia de la cooperativa de producción, ya que al ser el trabajador empresario de sí mismo, que su participación se efectúe en el ámbito de la sociedad o en el de la empresa resulta un dato irrelevante, puesto que ambas se confunden.

Esta objeción en principio es válida, y en consecuencia bastaría con entrar en el examen de los órganos de la sociedad para que viniese analizada la estructura de la autogestión cooperativa.

De conformidad con este criterio podemos señalar que los órganos a través de los cuales se actúa la autogestión son los siguientes:

- a) La Junta General de trabajadores (Junta General de socios en el sentir de la ley) supremo órgano de expresión de la comunidad de trabajo (117).
- b) La Junta Rectora, nombrada y revocada por la Junta General (118).
- c) El Consejo de Vigilancia, órgano con facultades de supervisión limitadas al examen de las cuentas (119).

Sin embargo, a poco de profundizar en el tema cuestionado, se observa que estos órganos no garantizan una efectiva participación de los trabajadores-socios en la gestión y administración de la empresa cooperativa.

Pero aún hay más; no solamente esta estructura de la empresa cooperativa no garantiza eficazmente la participación de los trabajadores en aquellas esferas relacionadas con la empresa, sino que se da la paradoja de

(117) Cfr. art. 23 LC y arts. 36 y 37 RC.

(118) Cfr. art. 25 LC y arts. 39-41 RC.

(119) Cfr. art. 27 LC y art. 43 RC.

que la más garantizada viene a ser la esfera económica, mientras que las menos son la social y la personal.

La participación en esfera económica se actúa mediante la intervención de los trabajadores, en su condición de socios, a través de la Junta General, a la cual corresponde, entre otras materias, las relacionadas con la existencia de la propia empresa (120).

Se podría todavía, haciendo un esfuerzo para ello, aceptar que la autogestión en la esfera económica se actúa positivamente, aún obviando la anomalía que puede representar el que la auténtica gestión se lleve a cabo por gerentes - incluso no socios - nombrados sin intervención alguna de la Junta General de trabajadores, y la que representa el derecho de información a los socios, regulado con tal clase de cautelas que prácticamente le hace ineficaz (121).

Ahora bien, si desde la esfera económica nos trasladamos a la esfera social y personal, puede sostenerse que, salvo los supuestos de participación de los trabajadores-socios en casos de extinción de la relación social (122) y en la distribución de los retornos cooperativos (123), en los demás que afectan directamente no a su condición de socio sino a su condición de trabajador, su intervención es prácticamente nula.

(120) Vid. art. 24 LC. Debido a la confusión entre sociedad cooperativa de producción y empresa cooperativa de producción, las materias relacionadas con la disolución afectan más que a la sociedad a la empresa.

(121) Vid. art. 44 RC. En realidad hablar de derecho de información de los socios cuando se está en presencia de una empresa autogestionada resulta completamente absurdo.

(122) Vid. art. 12 LC.

(123) Mediante la intervención en la Junta General; cfr. art. 20 RC.

En este sentido se aprecia su absoluta falta de participación en aspecto tan fundamental como el de la elaboración del Reglamento de Régimen interno (124), auténticos -y permítasenos la comparación - Estatutos de la Empresa cooperativa - que pueden ser redactados con la sola intervención de la Junta Rectora (125) , aunque en él se contengan materias de tanta importancia como las relacionadas con la jornada de trabajo, clasificación y formación profesional, movilidad del puesto de trabajo, seguridad e higiene, etc.

Todavía se podría objetar que estas afirmaciones incurren en un defecto de visión, ya que olvidan que el socio puede participar en la gestión de la cooperativa a través de las Juntas Generales, configuradas como supremo órgano de expresión de la voluntad de los socios; esta objeción puede ser rebatida en base, precisamente, a su configuración asociativa.

Efectivamente, la Junta General aparece en la legislación cooperativa como órgano de la sociedad, y como tal sujeto a los formalismos y solemnidades propios para garantizar la validez de los acuerdos adoptados (126); o dicho en otros términos, el legislador contempla y regula los órganos de la sociedad cooperativa, olvidando que las cooperativas de producción son ante todo comunidades organizadas de trabajo, y como tales demandan una configuración ajena a los esquemas del derecho societario.

(124) No confundir con el Reglamento de Régimen Interior de las empresas no cooperativas, o de las empresas cooperativas que tengan personal asalariado.

(125) Cuyos miembros hasta antes de la reforma, además de estar sujetos al veto sindical (vid. art. 39. del Reg. del 43) podían no ostentar la condición de socio (vid. ahora arts. 39 y 40 RC).

(126) Vid. arts. 32 a 35 del RC.

Es así donde falla absolutamente el ordenamiento positivo, que al obviar el tema incurre en la contradicción de no ofrecer medios apropiados para la actuación de una de las pocas instituciones que en un sistema capitalista es representativa de la autogestión obrera (127)

(127) La otra institución de autogestión es la Sociedad Anónima Laboral, en la cual la participación del socio-trabajador es más efectiva; vid. VICENT CHULIA, op. cit. págs. 60-63.

SUBSECCION II

"El personal de la empresa cooperativa"

Analizado el primero de los elementos subjetivos que integran la cooperativa, corresponde ahora abordar, siguiendo el esquema trazado en otro lugar (1), el segundo de estos elementos; esto es, el personal de la empresa.

En este orden de cosas, y prescindiendo de la exposición de las teorías construidas por la doctrina y que pretenden disputarse la primacía en la calificación jurídica del personal (2), comencemos señalando que por tal se entiende el conjunto de trabajadores al servicio de una empresa (3); trasladando este concepto al terreno que aquí nos interesa, se puede definir el personal de la empresa cooperativa como el conjunto de trabajadores que en ella prestan trabajo.

(1) Vid. pag. 151.

(2) Sobre el tema, con especial referencia a la calificación del personal como categoría profesional, vid: RAVA, R, "Introduzione al diritto del lavoro", Milano 1958, pags. 24 y ss; PROSPERETTI, U. "Osservazioni sulla categoria per l'applicazione della legge sui contratti collettivi" en Lavoro e sicurezza sociale 1960, pags. 291 y ss; SIMI, V. "Formazioni sociali e categoria professionale", en Riv. tri. di dir. e proc. civ. 1965, pags. 437 y ss y ALMANSA, J.M. "La participación del trabajador en la administración de la empresa", Madrid 1965, pags. 46 y ss.

(3) Vid: BORRAJO DACRUZ, E. "Introducción al Derecho del Trabajo", Madrid 1971 (3ª edic.) pag. 135; idem, "Bases para una configuración comunitaria de la empresa", RT 1969, nº 26 pag. 20; MONTOYA MELGAR, "La representación sindical de la empresa" Sevilla 1968, pag. 28; idem, "La empresa y el derecho del Trabajo", en Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho del trabajo, Madrid 1971, pag. 418.

Concebido así el personal de la empresa cooperativa, la primera observación a constatar es la de que en su ámbito ese conjunto de trabajadores puede asumir posiciones jurídicas distintas, que afectan no solo a la calificación de la relación de trabajo sino también a los diversos aspectos que interesan al personal en cuanto colectividad social (4).

En otros términos, en la empresa cooperativa el trabajador puede ostentar la condición jurídica de socio, o prestar un trabajo por medio de un contrato laboral.

Planteado así el tema, fácil es deducir que los aspectos aquí relevantes han de ser los relacionados con los trabajadores-socios, puesto que al no existir diferencia alguna, ni teórica ni normativamente, entre el trabajador no socio de una cooperativa y el de cualquier otra empresa, el examen desbordaría con mucho el marco previamente acotado de nuestra investigación.

Baste en este sentido recordar lo paradójico y perturbador que resulta que una empresa, llamada a actuar bajo esquemas comunitarios y a ser manifestación de empresa autogestionada, pueda utilizar sin limitación alguna trabajadores asalariados (5).

-
- (4) Un concepto del personal en su acepción colectiva en AIMANSA (cop. cit. pag. 42); crítica de la doble acepción del personal - individual y colectiva - en MONTOYA MELGAR, "La representación..." op. y loc. cit.
- (5) Más afortunada me parece la legislación italiana que limita el número de trabajadores no socios a lo estrictamente necesario (cfr. art. 13 de R.D. de 12-2-1911 y art. 23 del D.L.C.P.S. de 14-12-1947); por otra parte tanto la legislación italiana como la francesa (arts. 29 y 30 del Libro III del "Code du travail") determinan una participación

Limitando nuestro estudio al supuesto en el que el personal de la empresa cooperativa asuma la condición de socio, podría pensarse, en una primera aproximación al tema, que las cuestiones a resolver serían las dos siguientes:

- a) Una de naturaleza individual, limitada al examen de la relación jurídica que origina la obligación de trabajar,
- b) Otra de carácter colectivo, dirigida a investigar que tipo de interés conjuga el personal de la cooperativa, así como de que forma se realiza la integración o participación de este personal en la empresa.

Sin embargo, ninguno de estos dos aspectos serán ahora objeto de análisis; el primero, por cuanto en definitiva reconduce el tema al examen de los elementos objetivos - relaciones jurídicas - de la empresa cooperativa; el segundo por que ha sido expuesto al analizar los aspectos materiales del empresario cooperativo.

Todavía se podría criticar que el examen de aspectos propios del personal se haya hecho desde la perspectiva del empresario cooperativo; sin embargo, con esta postura metodológica no se ha querido sino resaltar lo que en el ámbito de la cooperativa aparece como dato clave; esto es, que el trabajador socio es el empresario de sí mismo

de los no socios en los resultados de la cooperativa, En el mismo sentido de limitar el trabajo asalariado, vid. el art. 25 de la ley española de 1931, y el art. 53 de la ley General de asociaciones cooperativas de Venezuela (cfr. DAILY GUEVARA, J. R. "Derecho Cooperativo", Caracas 1967, pag. 67).

SECCION II

"Los elementos objetivos de la empresa cooperativa"

1. Delimitación del tema

La configuración de la empresa como centro de imputación de relaciones jurídicas exige un detallado examen de la naturaleza y contenido de estas relaciones.

De entre la pluralidad de relaciones jurídicas que pueden instaurarse en el seno de una empresa, especial relevancia adquiere la relación jurídica de trabajo que, nacida de un contrato (1), da vida a una diversidad de derechos y deberes entre los sujetos contratantes.

Trasladando estas elementales consideraciones al ámbito de la empresa cooperativa entendemos que no ofrece problema alguno sostener que en esta surgen relaciones de trabajo, puesto que, y en definitiva, la cooperativa, en cuanto comunidad organizada de trabajo, presupone la previa existencia de unas relaciones de las que se derivan, para unos sujetos, la obligación de prestar un trabajo.

En núcleo central de toda la problemática en torno a esta relación jurídica de trabajo cooperativo reside en determinar si le es aplicable

(1) Con esta afirmación nos adherimos plenamente a la tesis contractuista que configura a la "relación de trabajo como relación derivada de un contrato de trabajo" (cfr., por todos, BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA "Manual de Derecho del Trabajo", 8ª edic. revistada, Madrid, 1972 pag. 276); amplia exposición de las tesis relacionistas en MARTIN BLANCO, J. "El contrato de trabajo", Madrid 1959, pags. 131-203 y RODRIGUEZ PINERO, M. "Contrato de trabajo y relación de trabajo", Anales de la Universidad Hispalense, Vol. XXVII, 1967 (referencia a separata) passim, esp. pags. 22-44.

la noción estricta de relación jurídico-laboral; o dicho en otros términos, dado que el Derecho del Trabajo opera con conceptos jurídicos determinados, y el hecho social que contempla no es todo el trabajo sino una parcela perfectamente acotada de él (2) hemos de analizar si la noción jurídica de trabajador - personaje central de aquel sector normativo - conviene o no al socio de una cooperativa de producción.

2. La relación de trabajo cooperativo como relación social

Entendiendo por relación de trabajo, en un sentido amplio, aquella relación jurídica de la que se deriva una obligación de trabajar (3), la doctrina mantiene pacíficamente que, caso de ser contractual su origen (4), esta obligación puede presentarse tanto en los contratos de cambio como en los asociativos (5).

-
- (2) El trabajo libre, productivo, por cuenta ajena y dependiente; cfr. ALONSO OLEA, "Introducción al Derecho del Trabajo", 2ª edic. Madrid 1968, pags. 14 y ss; DE LA VILLA GIL, "Derecho del Trabajo", Valencia (curso 71/72) pags. 56 y ss; MONTOYA MELGAR, "Derecho del Trabajo" Murcia 1973, pags. 23 y ss.
- (3) Cfr. RODRIGUEZ PINERO, "Contrato de trabajo..." cit. nota 6 a pag. 3 recordando las acepciones del termino "relación de trabajo" propuestas por Hueck.
- (4) Históricamente la relación de trabajo podía derivar de una relación dominical o de una relación de señorío (ALONSO OLEA, op. y loc. cit); modernamente existen relaciones de empleo derivadas de un acto administrativo, como las de empleo público (SALA FRANCO, T. "La libertad sindical y los funcionarios público", Sevilla 1972, pag. 28).
- (5) SAVINO, M. "Il lavoro nei rapporti associativi", Roma 1939, pg. 17; MAZZONI, G. GRECHI, A. "Corso di diritto del lavoro", 2ª edic., Bologna 1948, pag. 67; RIVA SANSEVERINO, L. "Il contratto individuale del lavoro", en el Tratado de BORSI-PERGOLESI, 2ª edic., Padova 1953, pag. 83; MAZZONI, "Manuale di diritto del lavoro", Firenze 1958, pag. 221; SINAGRA, V. "Istituzione di diritto del lavoro", Palermo s/f, (pero 1962) 3ª edic., pag. 140.

Independientemente de los criterios propuestos para fijar la diferencias ya entre ambos contratos (6) - diversidad causal (reunión de fuerzas en los contratos asociativos, intercambio de riquezas en los de cambio), diversidad en las posiciones recíprocas de las partes contratantes (comunidad e igualdad en los primeros (7) y oposición y subordinación en los segundos) - ya entre las obligaciones de trabajo derivadas de cada uno de ellos - en los asociativos el trabajo se destina a un fin común a todos los contratantes, mientras que en los de cambio se destina al fin exclusivo del acreedor (8) - lo que interesa destacar ahora es:

- a) que el trabajo puede tanto cederse a cambio de un bien, cuanto prestarse asociándose con otros sujetos para ejercitar en común una actividad productiva.
- b) que salvo opiniones aisladas (9), la doctrina laboralista

-
- (6) SAVINO, "I rapporti associativo di lavoro in generale", en el Tratado de Borsi-Pergolesi, 2ª edic., Padova 1955, pags. 338 y ss; MOLITOR, E. "Rapporto di lavoro e rapporto sociale", Riv. delle soc. 1958, pags. 835 y ss; GRECHI, A. "Il lavoro nei rapporti associativi", en Tratado de Borsi Pergolesi, 3ª edic. Padova 1960 (vol. I) pags. 447 y ss; GUERRA, P. "Criteri di distinzioni tra rapporto associativo e rapporti di lavoro", Mass. Giur. Lav. 1952, pag. 75; CABRERA BAZAN, J. "Contrato de trabajo y contrato de sociedad", RPS 1962, n° pag. 79; SANTONASTASO, F. "Socio di società di persone e rapporto di lavoro", Mass, Giur. Lav. 1965, pags. 11 y ss.
 - (7) Dice MOLITOR (op. cit. pag. 841) "nella società, i membri si trovano su un piano di parità in quelli che sono i loro rapporti reciproci".
 - (8) Cfr. SAVINO, "I rapporti..." cit. pag. 338.
 - (9) Es la ya conocida tesis de CHATELAIN, Ch.W. ("De la nature du

califica el contrato de trabajo como contrato de cambio, ya que su causa es el intercambio de salario por trabajo (10).

Cierto que el contrato de trabajo es la forma más generalizada de prestación de un trabajo, y que la relación jurídica que no reuna los presupuestos sustantivos y adjetivos (11) que califican a la relación jurídico-laboral queda excluida del ámbito tuitivo y protector del ordenamiento laboral (salvo disposición expresa del legislador); sin embargo, todo ello no obsta para que, y en definitiva, la obligación de trabajar pueda presentarse tanto en un contrato de cambio distinto al de trabajo (12) cuanto en un contrato asociativo (13).

Trasladando estas consideraciones al ámbito de la cooperativa de producción, parece obvio señalar que la investigación ha de centrarse en torno a la obligación jurídica de trabajo que pesa sobre los socios, al objeto de determinar si esta obligación nace del vínculo asociativo, o por el contrario la prestación de trabajo deriva de una relación jurídica autónoma a la relación social.

contract entre ouvriers et entrepreneurs", en Rev. trim. de droit civil, 1904, pags. 313 y ss) que configuraba el contrato de trabajo como un contrato de sociedad; vid. sobre el tema, con amplia bibliografía, MARTIN MATEO, "El contrato de trabajo", cit. pags. 71 y ss.

- (10) Así BAYON CHACON ("Manual..." cit. pg. 282) para quien el contrato de trabajo se define "como contrato por el que un sujeto, a cambio de una remuneración..."; en este mismo sentido, y por todos, SANTORO PASSARELLI, "Nociones de Derecho del Trabajo", Madrid 1963, pag. 130.
- (11) Según terminología de DE LA VILLA GIL, "Derecho..." cit. pgs. 57 y 66
- (12) Por ejemplo el contrato civil de arrendamientos de servicios.
- (13) Dentro de los contratos asociativos se pueden distinguir dos tipos de

En principio, la tesis de la autonomía, y por tanto de la acumulación en un mismo sujeto de las posiciones jurídicas de socio y trabajador (14), encuentra punto de apoyo en la consideración de que el socio, al gozar la cooperativa de producción de personalidad jurídica propia, puede formalizar con ella contratos de naturaleza diversa, de los que sur

relaciones jurídicas, de las que derivan a su vez dos formas de prestación de trabajo; a) la relación asociativa estricta, que se presenta cuando se constituye una sociedad y corre una igualdad entre los derechos y deberes de los socios (cfr. SINAGRA, op. y loc. cit); b) la relación asociativa de trabajo, que se presenta cuando el trabajador aporta trabajo pero esta aportación no supone titularidad sobre la empresa, (MAZZONI, "Diritto..." cit. pag. 221); otros autores, por el contrario (SAVINO, I rapporti..." cit. pag. 324) reconducen todos los supuestos a relaciones asociativas de trabajo (crítica de esta postura en MAZZONI, op. cit. pag. 220).

- (14) Vid. DE SEMO, G. "Socio ed amministratore di società e rapporto di impiego nel sistema del nuovo codice", Mass. Giur. Lav. 1942, pags. 302 y ss; RAMIREZ-GRONDA, "Posibilidad de reunir las condiciones de socio y empleado de una cooperativa", Rev. de Der. Trabajo (Buenos Aires) mayo 1944; DEVEALI, M. "Situación jurídica del socio empleado" Rev. Der. Trab. (Buenos Aires) sep. 1946; CARCANGIU, E. "Amministratore-impiegato di società" Mass. Giur. Lav. 1955, pags. 117 y ss; CASSI, V. "Amministratore di società e lavoro subordinato", Il dir. Lav. 1956, II, pags. 325 y ss; BRUNETTI, G. "Associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato", Riv. delle socie. 1958, pags. 573 y ss; MONTUSCHI, L. "Socio, amministratore di società e rapporto di lavoro subordinato", Riv. dir. econ. 1963, I, pags. 479 y ss.

gen relaciones jurídicas extrañas a la relación social (15).

Ahora bien, para que esta tesis prospere, es condición indispensable que la obligación jurídica de trabajar no se vincule a la relación social, ya que de otra forma la acumulación resultaría imposible (16) y la condición de socio prevalecería sobre la de trabajador.

Supuesto esto, el análisis conduce forzosamente a determinar el al cance que la prestación de trabajo adquiere en la sociedad cooperativa de producción.

En este orden de cosas, y partiendo del concepto ya elaborado de producción (17) como asociación de sujetos que participan en la produc-

(15) Dice MOSSA, L. ("L'assicurazione sociale dei soci lavoratori delle società di fatto", Riv. inf. mal. prof. 1953, pag. 4) que "è indubio che el socio di una società può stabilire con essa rapporti estranei..., e può fare un contratto di altra natura: locazione, vendita, etc. In virtù di questi rapporti il socio si contrappone a la società come un vero terzo..."; y más rotundamente en pag. 9 escribe: "Il socio come lavoratore dipende di una impresa non personale sua... ma imprenditore non è il solo ed il socio non è il solo ed esclusivo interessato nell'impresa, in quanto essa appartiene alla società, alla quale egli partecipa".

En jurisprudencia, vid. s.T.S. (sala 6ª) de 17-5-1971 (Aran. 2582/I) en donde se afirma que "no hay obstáculo que impida la coexistencia de relaciones jurídicas perfectamente compatibles".

(16) Dice MOLITOR (op. cit. pag. 483) que "la diversità del collegamento della prestazione nella società e nel rapporto di lavoro esclude que un rapporto giuridico sia contemporaneamente rapporto di lavoro e società". Vid. también MONFUSCHI, op. cit. esp. pag. 481, nota 4 (con amplia bibliografía).

(17) Vid. pag. 198.

ción de bienes y servicios mediante la prestación de un trabajo personal y directo, y teniendo en cuenta por una parte, que nuestro ordenamiento positivo identifica la sociedad cooperativa de producción con el supuesto de asociación trabajo - cuya expresión negativa se encuentra en la prohibición de que existan socios capitalistas; esto es, que haya socios que limiten su participación a la sociedad a las aportaciones sociales (18) - y por otra que la obligación de dar trabajo al socio se asume como objeto social (19), es fácil sostener que la prestación de trabajo nace del vínculo asociativo, quedando integrada por tanto, en la relación social (20)

(18) Vid. págs. 193 y ss.

(19) No me parece correcta la opinión sustentada por algún sector doctrinal (AMENDOLA, V. "La posizione previdenziale dei soci delle cooperative di lavoro", Foro Ital. 1968, I, col. 1636) que integra la obligación de trabajar que pesa sobre el socio en la causa de la sociedad, puesto que causa de la cooperativa no es dar trabajo (crítica a esta teoría en págs. 244 y ss) sino obtener una ganancia; más acertado me parece calificar esa obligación como derivada del objeto social, ya que, como vimos, en las cooperativas de producción este objeto es complejo: producir bienes y dar trabajo (vid. pag. 247); conforme con este planteamiento CIACCIO, E. "La disciplina dell'occupazione e il fondamento delle prestazioni dei soci delle cooperative di lavoro", Giust. civ. 1960, I, pag. 1712.

(20) Esta es la tesis dominante tanto en la doctrina científica como en la legal.

En la doctrina científica, y a favor de la calificación social de la prestación de trabajo, vid: FONTANA, T. "Le società cooperative e le società di fatto costituite totalmente o in parte da prestatore d'opera per l'esecuzione di lavori nella vigente legislazione infortunistica", Riv. inf. mal. prof. 1941, pag. 31, FAVARA, E. "La cooperativa di lavoro e i soci". Giur. Cass. civ. 1951, III, pag. 325, LAMA, E. "L'applicazione dei contratti collettivi nei rapporti fra cooperativi e soci", Riv. Coop. 1954, pag. 14; LABADESSA, R.

En definitiva, pues, la relación de trabajo cooperativo no puede ser calificada como relación jurídico-laboral, ya que la prestación de trabajo del socio tiene como finalidad el especificar y dar cumplimiento

"Contratti collettivi di lavoro cooperative", Riv. Coop. 1956, pag. 8; VERRUCOLI, P. "La società cooperative" Milano 1958, pag. 271; OPPO, G. "L'essenza della società cooperative e gli studi recenti", Riv. dkr. civ. 1959, pag. 393; BARASSI, L. "Il diritto del lavoro" Milano 1959, pag. 441; CIACCIO, "La disciplina..." cit. pag. 1711; D'Angelo, A. "Cooperative di lavoro e soci lavoratori", Riv. Coop. 1962, pag. 674; SINAGRA, "Istituzioni..." cit. pag. 148; SANTORO PASSARELLI, "Nociones..." cit. pag. 79; ZAGO GARELLI, C. "Socio di una cooperativa di lavoro ed applicabilità dell'art. 2126 c.c" Riv. Dir. Lav. 1963, II, pag. 396, SAGARDY BENGOCHEA, J. A. "Consideraciones sobre las cooperativas de producción" RT 1964, nº 5, pag. 82; OFFEDU, M. "Il lavoro nelle cooperative e l'art. 36, prima comma, cost. "Riv. trim. de dir. c. proc. civ. 1967, pag. 1580; DE LA VILLA GIL, "Derecho..." cit. pag. 108; DAILY GUEVARA, J. "Derecho cooperativo" Caracas 1967, pag. 60.

Sostienen tesis a favor de la doble posición jurídica: SALANDRA, "Manuale di diritto commerciale" Bologna 1946, pag. 352; MENENDEZ PIDAL, J. "El trabajador en las cooperativas" Rev. Der. Priv. 1948, pag. 785; SCOGNAMIGLIO, R. "Diritto del lavoro" Bari 1969, pag. 157 y CREMADES, B. M. "Las cooperativas de producción", Tribuna Cooperativa 1972, nº 8, pag. 33.

Mantiene una postura variable: SAVINO "Il lavoro nei rapporti associativi", cit. pag. 269; DE LITALA, op. cit. pag. 64; GRECHI, "Il lavoro..." cit. pg. 457; KROTOSCHIN, E. "Tratado práctico de Derecho del Trabajo", Buenos Aires 1955 (vol. 1) pag. 130; ROMAGNOLI, U. "La prestazione di lavoro nel contratto di società", Milano 1967, pag. 252 y CABANELLAS, G. "Compendio de Derecho Laboral", t. I Buenos Aires 1968, pag. 359.

La jurisprudencia de nuestros Tribunales de Trabajo mantienen una opinión claramente contraria a la calificación laboral de la relación del socio-cooperador; s.T.S. (sala 6ª) de 2-12-1946 (Ar. 1376); de 27-11-1947 (Ar. 1458) de 14-5-1948 (Ar. 936) y de 27-5-1970 (Ar. 2694); del TCT 28-6-1967 (JS nº 23, 351/67 TCT), 18-12-1969 (JS nº 37, 630/69 TCT), 6-11-1969 (JS nº 37, 631/69 TCT), 28-4-1970 (JS nº 40, 163/70 TCT), 12-12-1970 (JS nº 43, 511/70 TCT).

Un análisis de la jurisprudencia en Italia en: MELCHIONA, R. "Contratto di lavoro subordinato, contratto di associazione in partecipazione e contratto di società. Profili-differenze" Mass. Giur. Lav. 1963, pag. 257 y RIZZO, N. "Struttura e durata del rapporto di lavo-

to al objeto social asumido en el contrato de sociedad (21).

No obstante esta connaturalidad entre prestación de trabajo y relación social, se discute por la doctrina si en aquellos supuestos en los que esta relación tiene las notas configuradoras de la relación jurídico-laboral, - y siempre que con el contrato de sociedad cooperativa no se intente simular un contrato de trabajo (22) -, sea posible atribuir al socio la condición de trabajador.

En este sentido, y partiendo del esquema típico del contrato de trabajo, se afirma que, como por una parte la posición del socio respecto de la sociedad - a través de sus órganos de gobierno - es de subordinación (23), y por otra la prestación del socio puede venir remunerada

ro" en "Il diritto del lavoro nell'elaborazione giurisprudenziale" dirigida por Domenico Napoletano, vol. 3º, Roma 1969, págs. 212-235.

- (21) En Jurisprudencia, vid. S.TCT de 17-5-1969 (JS nº 35, 344/69) en la que se niega el carácter laboral a las actoras - profesoras de una entidad cooperativa de enseñanza de la que eran socios, - en base a que "su trabajo no podía ser considerado como el de un productor ordinario que lo hace por cuenta ajena, sino que en su caso constituía una obligación contraída al ingresar como socios en la sociedad".
- (22) Sobre el tema de la simulación en la sociedad cooperativa de producción, vid. CABANELLAS, op. cit. pag. 158.
- (23) Dice CATALDI, E. ("La tutela infortunistica dei soci delle cooperative e delle società anche di fatto" Riv. inf. mal. prof. 1951, pag. 777) que "i soci delle cooperative..., se inseriscono nell'ambito della disponibilità tecnica e disciplinare dell'azienda sociale, venendo sì a trovare di fronte ad essa in vero rapporto di dipendenza"; con idénticas palabras se expresa GRECHI ("Obblighi assicurativi e rapporti di società" en I problemi della sicurezza sociale 1961, pag. 248); por su parte ROMAGNOLI (op. y loc. cit) señala que "nelle cooperative di lavoro dotate di personalità giuridica i soci possono assumere la veste di lavoratori subordinati nei confronti nella medesima..., purché la funzione degli organi che ne costituiscono la struttura interna non sia meramente rappresentativa".

con una cantidad fija mensual o semanal (24) - independientemente de su derecho a participar en la distribución de los retornos cooperativos -, el socio-trabajador de una cooperativa es un trabajador no ya en sentido sociológico (25) sino en sentido jurídico estricto.

En realidad, pensamos que estas posturas incurren en un error metodológico grave, ya que aplicar los esquemas del contrato de trabajo a una relación derivada de un contrato asociativo resulta imposible, puesto que el punto de partida de toda la investigación reside no en determinar si aquella relación tiene algunas de las notas configuradoras del contrato de trabajo, sino en examinar si la obligación de trabajar deriva o no de una relación autónoma. (26).

No obstante este hecho, y al objeto de dar el máximo rigor a nuestro estudio, vamos a examinar el alcance de la dependencia y de la asunción del riesgo en la relación de trabajo cooperativa.

2.1 El significado de la dependencia en la relación de trabajo cooperativa

Mucho ha polemizado - y sigue polemizando - la doctrina, tanto la

(24) SAVINO, "Il lavoro nei rapporti..." cit. pag. 269; DE LITALA, op. cit. pag. 64; GRECHI, "Il lavoro nei rapporti associativi" cit. pag. 457 y DEVEALI, op. cit. 476.

(25) Por la doctrina se acepta la tesis de que el socio de una cooperativa de producción se encuentra en situación económico social idéntica a la del trabajador por cuenta ajena; vid., en este sentido, SCOGNAMIGLIO, op. cit. pag. 156; OFFEDU, "Il lavoro..." cit. pag. 1571 y 1574 (con la agravante - dice este autor - de que no se le aplican las normas puestas para tutelar el trabajo); VIDA SORIA, J. "Régimen general y regímenes especiales en el sistema de la seguridad social española" CCTDT 1972, nº3, pag. 56.

(26) En este sentido dice DE LA VILLA GIL ("Derecho..." cit. pag. 107) que está por ello de más la estéril discusión sobre si tales socios

científica (27) como la jurisprudencia (28), sobre el alcance y contenido de la dependencia en el contrato de trabajo.

Ciertamente desbordaría nuestro estudio el plantear el tema con toda su intensidad; sin embargo, parece necesario hacer unas breves consideraciones para mejor entender nuestra conclusión.

En este sentido, sabido es que la nota de dependencia o subordinación se estima elemento natural de diversas relaciones jurídicas (29), de-

actúan dependientemente y por cuenta ajena; de ahí que no podamos compartir la tesis de CREMADES (op. y loc. cit.) de que "el juez laboral ha de entender como propiamente laboral la relación que une a un socio con la cooperativa en su relación de servicios... Y ello sin pararse a pensar sobre si el vínculo en virtud del cual una persona presta sus servicios es de arrendamiento o societario". La postura de este autor, defendible en términos de "lege ferenda", nos parece insostenible de lege data, por cuanto precisamente el análisis del vínculo constituye un prius de insuperable contestación.

- (27) Entre la abundantísima bibliografía, vid. particularmente, BAYON CHACON, "El concepto de dependencia en el Derecho del Trabajo, ¿Comienza una evolución jurisprudencial?" en Rev. Der. Priv. 1961, págs. 451 y ss.; DE LA VILLA GIL, "La crisis de la dependencia en la delimitación de las relaciones jurídico-laborales". Rev. Der. Trab. núm. 56, págs. 27 y ss; RODRIGUEZ PINERO, "La dependencia y la extensión del ámbito del derecho del trabajo", RPS 1966, nº 71, págs. 147 y ss; ALBIOL MONTESINOS, I. "En torno a la polémica ajenidad dependencia", CCDT 1971, nº 1, págs. 1 y ss.
- (28) Vid., entre otras muchas, las siguientes sentencias del TS: 30.6.1970 (Ara. 3481/II) ("... datos estos que demuestran la dependencia laboral a un patrono que les proporciona trabajo, nota que sigue siendo la típicamente diferenciada del contrato de trabajo con los institutos jurídicos afines"); 18.11.71 (Ara. 4708/II) ("... aunque la nota de dependencia haya venido siendo atenuada o entendida muy ampliamente por la doctrina científica y la jurisprudencia, pero sin posibilidad, en buenos principios de estimarla desaparecida de la relación laboral"); 31.1.72 (Ara. 411/I) ("El art. 1º de la LOT exige como denominador común y general de todas las variedades que reconoce el contrato de trabajo, que éste se realice bajo la dependencia de patronos o empresarios; un contrato que no tenga esta característica no puede merecer la calificación de contrato de trabajo")
- (29) Cfr., por todos, NAPOLEFANO, D. "Il lavoro subordinato". Milano 1955, pág. 66 y DE LA VILLA GIL, op. cit. pág. 61.

finiéndosela en este supuesto "como particular acentuación de un elemento propio de cualquier relación obligatoria que, vinculando al deu dor, limita su autonomía frente al acreedor" (30).

Ahora bien, en el contrato de trabajo la dependencia viene enten dida no como un "naturali negotii", sino como su elemento esencial y característico (31); configurándose no como relación de señorío (32) si no como vinculación personal del trabajador al empleador, en virtud de la cual aquél procede a dar cumplimiento a los actos que especifican, en cada momento, el poder de dirección del dador de trabajo (33).

(30) Cfr. RIVA SANSEVERINO, "Corso di diritto del lavoro", 5ª edic., Pa dova 1949, pág. 22.

(31) Así RODRIGUEZ PINERO, "La dependencia ..." cit. pág. 166 ("El dere cho del trabajo es, por tanto, el derecho del trabajo dependiente ..."); en jurisprudencia, junto a las sentencias citadas en la nota 28, vid: 6-2-70 (Arz. 621/I, "El actor no está vinculado con contra to de trabajo, pues obraba con carácter independiente"); 7-4-70 (Arz. 1695/I, "Por el contrato de trabajo una parte se obliga a eje cutar una obra por cuenta de un patrono, bajo su dependencia"); 21-10-1970 (Arz. 4465/II, "La prestación de una profesión liberal... carece de la nota de dependencia laboral"); 14-12-1970 (Arz. 5240/II, "La relación habida entre los litigantes no es contra to de trabajo..., notas que anulan la dependencia, única que marca la divisoria entre la relación de trabajo y las restantes relaciones jurídicas.").

(32) Cfr. DE LITALA, op. cit. pág. 245; para BAYON CHACON ("El concepto de dependencia..." cit. pág. 466) "en el aspecto social, la depen dencia constituye una pervivencia anacrónica de conceptos señoria- les".

(33) Vid., SANTORO PASSARELLI, op. cit. pág. 66-67 ("La relación perso nal a instrumental de subordinación, que se manifiesta con las dis posiciones del dador para la ejecución y disciplina del trabajo"); DE LITALA, op. cit. pág. 246 ("la subordinación se manifiesta en el cumplimiento de determinados actos que deben ser conformes a la di rectiva del dador de trabajo"); RODRIGUEZ PINERO, op. cit. pág. 159 ("lo que caracteriza la situación del trabajador es su subordi nación al poder de mando del empleador dentro de la zona propia de la pres");

Entendida así la subordinación, se hace difícil su aplicación a la relación jurídica de trabajo cooperativo, ya que viene a introducir un elemento extraño a los esquemas igualitarios del contrato asociativo (34), en los que la dependencia del socio a los órganos sociales es una exigencia de carácter funcional, necesaria para la vida de la organización (35), pero en ningún caso expresiva de su vinculación personal a un dador de trabajo (36).

tación del trabajo"); DE LA VILLA GIL, op. cit. pág. 62 ("la dependencia, pues, podría ser definida como la puesta a disposición de una energía personal de trabajo, organizada por la persona para la que se presta el trabajo").

En jurisprudencia, vid: 30-6-1970 (Ar. 3481/II, "Dependencia entendida no como subordinación rigurosa y absoluta de unas a otras, sino en el más amplio sentido de hallarse el trabajador comprendido en el círculo organicista y rector de aquél por cuya cuenta realiza una específica labor").

- (34) En contra de la opinión casi unánime de la doctrina (vid. amplia bibliografía en SAVINO, "Il lavoro..." cit. nota 2, pág. 334) SAVINO (op. cit. pág. 335) acepta la existencia del elemento subordinación en los contratos asociativos, justificándose su postura por el concepto que de dependencia mantiene, ya que no lo relaciona con una vinculación personal del trabajador al empleador, sino "come il lato passivo della facoltà spettante al creditore di lavoro".

Sobre la incompatibilidad de la subordinación en relaciones de igualdad, vid., en jurisprudencia, s.T.S. de 1-7-70 (Ar. 3631/II "No existe dependencia, porque ambos sujetos se relacionan en un plano de igualdad").

- (35) Cfr. LAMA, "L'applicazione..." cit. pág. 13; CIACCIO, op. cit. pág. 1712; ZAGO GARELLI, "Socio d'una cooperativa ..." cit. pág. 398; AMENDOLA, "La posizione ..." cit. col. 1638.

- (36) Y ello por cuanto y como afirma, acertadamente a nuestro juicio RODRIGUEZ PINERO (op. y loc. ult. cit.) no cabe hablar de dependencia en sentido jurídico sino "haciendo referencia a esta vinculación personal" la cual precisamente es la que falta en la relación que nos ocupa; en el mismo sentido MAZZONI, "Manuale ..." cit. pág. 190, al criticar la configuración de la dependencia como simple sujeción a una organización de empresa, y sostener que el concepto que conviene es el de la "sujeción de quien presta trabajo a la iniciativa, dirección y control del "datore di lavoro".

Es este el auténtico alcance de la subordinación - supuesta subordinación - de la relación social; sentido, por otra parte, plenamente conforme con la calificación de la cooperativa como comunidad organizada de trabajo.

2.2 La asunción del riesgo en la relación de trabajo cooperativo

Paralelamente a la calificación del socio como trabajador dependiente, algún sector doctrinal (37) ha ensayado su calificación como trabajador por cuenta ajena en los supuestos en los que percibe unas cantidades fijas, ya que, en definitiva, en estos casos desaparece la aleatoriedad típica de los contratos de sociedad, y se introduce la ejeneidad en el riesgo típico de los contratos de trabajo (38).

Planteado así el tema, no resultaría difícil rechazar la tesis acudiendo a las ideas expuestas a lo largo de todo este trabajo; esto es, recordando que, en la medida en que el socio de una cooperativa de producción es empresario de sí mismo, el fruto de su trabajo se incorpora a su patrimonio y es él quien soporta los resultados favorables o adversos de la explotación económica.

Sin embargo, e independientemente de la fuerza jurídica indiscutible de estos argumentos, pensamos que de nuevo esta teoría confunde el carácter instrumental de los denominados anticipos laborales con su carácter jurídico.

(37) Vid. nota 24 de esta Sección.

(38) BAYON CHACON-PÉREZ BOTIJA, op. cit. pág. 17.

Bajo el primer aspecto, los anticipos laborales adquieren el mismo sentido que los salarios; es decir, son medios de subsistencia, necesarios para los sujetos que los perciben.

La consideración de la cooperativa de producción como un supuesto de asociación trabajo - y no de capital (39) - exige que los socios reciban con cierta periodicidad aquellas cantidades necesarias para subvenir a sus exigencias más elementales; de ahí que, y por otra parte, consideremos aplicables a los anticipos laborales las reglas de la inembargabilidad de los artículos 1449 y 1451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Desde un plano jurídico, y antes de abordar una respuesta definitiva al tema que nos ocupa, hemos de plantearnos dos cuestiones previas: la naturaleza de los anticipos laborales y la aplicabilidad a estos de las disposiciones sobre salario mínimo interprofesional.

Entrando en la primera de las cuestiones y en una primera aproximación, podría parecer que la calificación que más conviene a los anticipos laborales es la de anticipos a cuenta de beneficios distribuidos técnicamente bajo la forma de retornos cooperativos (40).

Sin embargo, si se recuerda la noción de retorno cooperativo ofrecida por nuestro ordenamiento - "parte de beneficio distribuido a los socios trabajadores en función de su trabajo, previa exclusión entre otros conceptos, de los anticipos laborales en cuantía similar a la de los sala

(39) Cfr. pág. 198.

(40) Vid. STCT de 17-6-1969 (JS loc. cit.) en donde se dice "percibiendo sus emolumentos, no en concepto de salario, sino en el de retornos cooperativos."

rios medios de los trabajadores de la misma localidad" (41) - se puede deducir que la naturaleza de estos anticipos es doble:

- a) en la cuantía que no exceda de los salarios medios de la zona, los anticipos constituyen el coste del trabajo del socio-trabajador; o lo que es lo mismo, la contraprestación por la prestación personal del socio,
- b) en la cuantía que exceda de aquellas cantidades, los anticipos son auténticos beneficios a cuenta.

Con respecto a la segunda de las cuestiones planteadas pensamos, habida cuenta de que el centro de imputación del salario mínimo interprofesional es el trabajador con contrato de trabajo (42), que el socio de una cooperativa de producción queda excluido de la protección y tutela que aquél salario representa (43).

Relacionando ambas conclusiones podría pensarse que nuestro planteamiento incurre en una contradicción, ya que si el legislador considera que

(41) Cfr. págs. 261 y ss.

(42) Cfr., por todos, ALONSO OLEA, "Consideración general sobre las clasificaciones del salario", en Diecisiete lecciones sobre salarios y sus clases, Madrid 1971, pág. 41, en donde dice: "el salario mínimo indica efectivamente un sueldo absoluto por debajo del cual no es lícito - que nadie preste servicios a nadie en virtud de un contrato de trabajo" (subrayado mío).

(43) La doctrina italiana se encuentra dividida entre quienes estiman que al socio de una cooperativa de producción no le es aplicable el salario mínimo (GIACCIO, op. cit. pág. 1713) y quienes sostienen que si le es aplicable (OPPEDU, op. cit. pág. 1583, y ASSANTI, G. "Prestazione di lavoro del socio di cooperativa e applicabilità dell'art. 36 Cost." Dir. Lav. 1968, II, pág. 107).

los anticipos laborales en cuantía equivalente a los salarios de los trabajadores de la zona constituyen el coste normal del trabajo del socio, es por que estima que éste no debe venir remunerado con anticipos inferiores aquellos salarios; sin embargo, no se olvide que tanto el anticipo laboral como el retorno cooperativo son conceptos jurídicamente relevantes desde una perspectiva estrictamente societaria (44), y por tanto nada impide - aunque de "lege ferenda" tal posibilidad deba desaparecer - que el socio pueda trabajar percibiendo anticipos inferiores a los salarios mínimos. Lo que sucede en este caso es que, al haber disminuído la sociedad sus gastos generales, los retornos cooperativos, si hubo beneficios, serán mayores.

En definitiva, pues, lo que interesa retener ahora es que el socio de una cooperativa de producción puede percibir tanto anticipos laborales en cuantía variable cuanto no percibirlos.

Planteado así el tema, y centrándonos ya en aquella primera cuestión relativa a determinar si en los supuestos en que el socio reciba una cuantía fija desaparece la aleatoriedad en el riesgo típica de los contratos de sociedad, hay que distinguir dos supuestos según la naturaleza del anticipo laboral:

- a) Cuando los anticipos laborales tengan la naturaleza de beneficios a cuenta de resultados favorables, no se puede dudar que el socio trabajador participa directamente en el riesgo, sobre todo si se piensa que, de ser favorables los resultados de la explotación, habrá de reintegrar la parte correspondiente de esos an

(44) Vid. págs. 248 y ss.

tipos percibidos en conceptos de retorno (45).

b) Cuando los anticipos laborales sean la contraprestación normal del trabajo del socio, tenemos nuevamente que distinguir dos supuestos:

a') Cuando el grado de responsabilidad del socio sea limitado

(46) la fijeza en la percepción de los anticipos laborales no altera su asunción en el riesgo, puesto que responde con todo su patrimonio de las deudas de la sociedad,

b') Cuando la cooperativa adopte la forma de sociedad de responsabilidad limitada el problema se complica, en la medida en que sólo es la sociedad la que responde con su patrimonio; de ahí, que en estos supuestos se tenga que reconocer, tal como hace la doctrina (47), que la figura del socio de una cooperativa de producción se acerca a la del trabajador por cuenta ajena.

Ahora bien, este acercamiento no supone transformar la relación del socio en relación jurídico-laboral - para lo cual, y como hemos repetido en varias ocasiones, sería necesario que su obligación de trabajar derivase de un negocio autónomo

(45) En este sentido Vid. STCT de 28-6-1967 (JS loc. cit.).

(46) Cfr. art. 59 RC; sobre el tema vid; cuanto se dijo en págs. 219 y ss.

(47) Cfr. DE SEMO, "Socio ed amministratore ..." cit. pág. 309; KROTOSCHIN, op. y loc. cit.; AMENDOLA, "Lavoro associato ed obblighi assicurativi" Riv. ital. prev. soc. 1966, pág. 1047.

mo al del contrato de sociedad - sino simplemente reconocer que en estos casos se aplican a la relación social técnicas de la relación jurídico-laboral, que no afectan a su naturaleza, sino que actúan como instrumentos para que la relación despliegue toda su eficacia (48).

En definitiva, pues, y de todo lo hasta aquí expuesto, se puede concluir diciendo que la prestación de trabajo del socio trabajador de una cooperativa de producción se inserta en el vínculo asociativo, sin que la subordinación del socio exceda de mera exigencia funcional de la organización cooperativa, y su remuneración en cuenta fija de instrumento para que la cooperativa consiga su objeto social.

3. La prestación de trabajo del socio-trabajador como prestación accesoria

En el apartado anterior ha quedado configurada la relación de trabajo del socio trabajador de una cooperativa de producción como relación social, en virtud de la cual aquél viene obligado a prestar un trabajo en las condiciones fijadas en el contrato de sociedad.

Nos corresponde ahora examinar, como último tema, la naturaleza jurídica de esta obligación social.

En una primera aproximación se podría pensar que el trabajo más que - como obligación, se configura en la cooperativa de producción como aportación social, en cuyo caso el socio trabajador quedaría equiparado a la figura del socio industrial.

(48) LILLONI, L. "Ancora sulle prestazioni accessorie nelle società e nelle cooperative", Riv. delle soc. 1964, pág. 68.

Sin embargo ya vimos en otro lugar (49) que el trabajo del socio cooperador no podía configurarse como aportación social; de ahí que, y sin repetir los argumentos ofrecidos, baste señalar que la caracterización del socio trabajador como socio industrial es imposible.

Efectivamente: el socio industrial queda sometido a un tratamiento jurídico diverso al de los otros socios (50), excluyéndosele tanto de la administración de la sociedad - salvo que intervenga a título de mandatario (51) - cuanto de las pérdidas sociales (52); por el contrario, es un principio inherente al de la cooperativa el de la igualdad de deberes y derechos de los socios (53) que se traduce en la posibilidad de todos ellos de acceder a la administración de la sociedad y en el mismo grado de responsabilidad frente a terceros por las operaciones sociales (54).

Rechazada, pues, la teoría que intenta configurar el trabajo del socio como aportación social y al socio mismo como socio industrial, se ha de buscar por otra vía la caracterización jurídica de su obligación de trabajar.

(49) Cfr. pág. 226.

(50) VERGEZ SANCHEZ, M. "El socio industrial", Madrid 1972, pág. 84.

(51) Ibidem, op. cit. pág. 91.

(52) Vid. arts. 129, 130 y 131 del Código de Comercio.

(53) Cfr. apar. c) art. 8 de la LC.

(54) Cfr. parr. 1 del art. 19 del RC.

En este orden de cosas, sabido es que se debe al legislador alemán de la ley de sociedades de responsabilidad limitada de 1892 la construcción práctica de dos institutos: el de la prestación accesorio ("Nebelaistungspflicht") y el de la aportación suplementaria ("Nachschusse"); estas tenían la finalidad de proporcionar a la sociedad un capital de maniobra, y aquellas de configurar toda clase de obligaciones a cargo del socio (55).

En nuestro ordenamiento jurídico, las prestaciones accesorias vienen reguladas por el artículo 10 de la ley de sociedades de responsabilidad limitada, que declara que: "en la escritura fundacional podrán establecerse con carácter obligatorio para todos o alguno de los socios, prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, expresando su modalidad ... Estas prestaciones no podrán integrar el capital de la sociedad.

En base a este precepto, la doctrina (56) ha deducido que los principios caracterizadores de las prestaciones accesorias son:

-
- (55) URÍA, R. "Las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada" RDM 1956, nº 60, págs. 326-327.
- (56) URÍA, op.cit. págs. 325-341; GARRIGUES, "Curso de Derecho Mercantil" t. I, 4ª edic., Madrid 1962, págs. 412-413; VERGEZ SANCHEZ, op. cit. págs. 70-71; Vid. también: COTTINO, G. "Prestazioni accesorie e poteri dell'assemblea", Riv. delle soc. 1962, págs. 16 y ss.; LILLONI, L. "Ancora sulle prestazioni accesorie nelle società e nelle cooperative" Riv. delle soc. 1964, págs. 56 y ss; LILLONI, "Prestazioni accesorie nelle cooperative e introduzione negli statuti, a maggioranza, delle riserve individualizzate", Riv. delle soc. 1962, págs. 1040 y ss.

- a) La accesoriedad tiene un sentido estrictamente jurídico, y no económico; esto es, se califica como accesorio no por que tenga menos relevancia económica que la aportación de capital, sino por cuanto nadie puede asumir la obligación de realizar prestaciones accesorias sin haber adquirido mediante la aportación a capital, la condición de socio.
- b) El contenido de las prestaciones accesorias puede ser muy variado, pudiendo asumir como objeto una obligación de dar, ha-cer o no hacer (57); pero en ningún caso - aún tratándose de prestaciones dinerarias - pueden integrarse en el capital so-cial. (58).
- c) La prestación accesorio puede o no ser retribuída; sin embargo y si se fija su retribución, ésta no tiene porqué hacerse con cargo a beneficios, pudiendo satisfacerse con cargo a otros conceptos (59).

Delimitado, pues, el concepto de prestación accesorio, como obliga-ción que puede recaer en alguno o en todos los socios , es necesario ana-lizar ahora si la prestación de trabajo que pesa sobre el socio de una

(57) Cfr. art. 1088 del C. Civ.; GARRIGUES, op. cit. 413, URÍA, op. cit. pág. 329.

(58) URÍA, op. cit. pág. 331; la doctrina italiana niega que en las socie-dades ordinarias las prestaciones accesorias puedan consistir en una cantidad de dinero (cfr. LILLONI, "Prestazioni accesorie..." cit. pág. 1047, si bien lo admite para las sociedades cooperativas).

(59) URÍA, op. cit. pág. 332.

cooperativa de producción puede configurarse como prestación accesoria, y en caso afirmativo determinar cual es la función, contenido y régimen jurídico que a la misma debe aplicarse.

En este orden de cosas, digamos antes de nada que la calificación de esta prestación como prestación accesoria puede contestarse en base a que en el ordenamiento positivo que afecta a las sociedades cooperativas no se contiene un precepto similar al artículo 10 de la ley de sociedades de responsabilidad limitada.

Sin embargo, esta primera conclusión debe ser analizada con mayor detalle; para ello, recordemos por una parte que el objeto de la cooperativa es producir bienes y servicios así como dar trabajo a los socios ; y por otra que el artículo 11 de la LC prohíbe la participación a título de capitalista, debiendo entender este término como equivalente al de simple aportador de capital en sentido técnico estricto.

Si cotejamos ambos aspectos, se puede deducir que los mismos se relacionan como causa y efecto; el legislador prohíbe que un sujeto participe en una cooperativa de producción a título de capitalista por que es consciente de que el objeto de ésta es dar trabajo; o dicho en otros términos, prohíbe que alguien intervenga sin asumir aquellas obligaciones que facilitan la consecución del objeto social de la cooperativa.

En definitiva, pues, el legislador estima que la participación del socio no se agota con sus aportaciones sociales a capital, sino que cobra su máxima virtualidad cuando procede a ejecutar las prestaciones que contribuyen al cumplimiento del objeto social.

Ahora bien, que otra cosa más que prestaciones accesorias son las obligaciones del socio distintas a las aportaciones sociales?. En consecuencia aparece como dato clave que si sobre el socio de la cooperativa de producción recae la obligación de prestar un trabajo, esta prestación queda configurada como prestación accesorio (60).

Configurada así la prestación de trabajo del socio-trabajador, estamos en condiciones de determinar cuáles son las notas comunes y diferentes que corren entre las prestaciones accesorias de una cooperativa y de una sociedad de responsabilidad limitada.

Común a las dos, y no podía ser de otra forma, es la relación de accesoriedad, puesto que en definitiva la condición de socio se adquiere no cumpliendo la obligación de trabajar, sino realizando las aportaciones a capital fijadas estatutariamente.

Como nota diferencial aparece la accidentalidad de las prestaciones accesorias en la sociedad de responsabilidad limitada, y la esencialidad en la sociedad cooperativa; o lo que es lo mismo, mientras en aquella la prestación accesorio afecta a la estructura, en ésta afecta a la función (61) ; mientras en aquella la obligación puede recaer en todos o en algu-

(60) La doctrina italiana es casi unánime en calificar la prestación de trabajo del socio como prestación accesorio: (cfr. VERRUCOLI, "Le società..." cit. pag. 271; OPPO, "L'essenza..." cit. pag. 393; ZAGO GARRELLI op. cit. pag. 400; OFFEDU, op. cit. pag. 1572; LILLONI, "Ancora sulle..." cit. pag. 73). En contra de tal calificación, GHIDINI, "Cooperativa e società", Temi 1952, pag. 189; por su parte ROMAGNOLI (op. cit. pag. 236) la califica como prestación accesorio si el acto constitutivo exige tal obligación, en otro caso acepta la condición de trabajador subordinado del socio.

(61) Como dice LILLONI ("Ancora sulle..." cit. pag. 71) las prestaciones ac-

nos socios, en ésta ha de recaer, por imperrativo legal, en todos; mientras que en aquélla, en fin, se configura como obligación del socio, en ésta, y como reflejo de su inserción en el objeto social, se presenta como un derecho-deber tanto de los socios cuanto de la sociedad.

Con respecto al contenido de esta prestación, no necesita argumentar se que se trata de una obligación de hacer, naturaleza compartida en definitiva, por todas las prestaciones de trabajo, independientemente del esquema negocial del que deriven (62).

Por último, y con respecto al régimen jurídico de la prestación personal del socio-trabajador, aparecen una serie de problemas, todos ellos derivados de la configuración de la prestación accesorio como pacto social asumido en el contrato de sociedad (63).

En este sentido, y examinada ya la cuestión relativa a la compensación económica que el socio puede percibir por su trabajo (64), los temas

cesorios son funcionales en la cooperativa en la medida en que ésta se constituye precisamente para permitir a sus miembros el cumplimiento de aquéllas.

(62) Cfr. , por todos, BAYON CHACON-PEREZ BOTIJA, "Manual ..." cit. vol.II pág. 517.

(63) La doctrina discute en torno a la naturaleza jurídica de la prestación accesorio, calificándose como subcontrato, como contrato mixto o como pacto social (cfr. URÍA, op. cit. pag. 334; COTTINO, op. cit. pag.17 (sus argumentos en contra de la naturaleza contractual no parecen convincentes) y LILLONI, op. ult. cit. pags. 58-62); nosotros pensamos que la naturaleza que más conviene a la prestación accesorio de trabajo en la cooperativa de producción es la de obligación social asumida en el contrato de sociedad, e insertada en la relación social.

(64) Vid. págs. 256 y ss.

más importantes son los de determinar la relevancia de la prestación de trabajo en los derechos del socio y las consecuencias del incumplimiento por el socio de la citada prestación.

Respecto a la primera de las cuestiones, hay que señalar que la relevancia de la prestación accesoria de trabajo afecta, no a los derechos políticos (65) sino a los económicos, puesto que la participación del socio en los retornos cooperativos se evalúa, como vimos (66) en función del trabajo prestado.

Por su parte, y con relación a las consecuencias que puede aparejar el incumplimiento de la citada prestación, pensamos que en primer lugar se puede producir la exclusión del socio, en base precisamente al incumplimiento de las obligaciones sociales asumidas en el contrato; problema a dilucidar sería el relativo a si cabe la acción del 1101 del C. Civ., en demanda de indemnización por daños y perjuicios; nos inclinamos por la respuesta afirmativa, bien entendido que al configurarse la prestación como derecho-deber aquella acción puede ser entablada tanto por la sociedad como por el socio, si bien, y en este último caso, y por aplicación analógica de los supuestos paralelos del contrato de trabajo, la indemnización solo procederá cuando se pruebe suficientemente el perjuicio causado.

(65) En los que rige el principio democrático igualitario (cifr. art. 35.4 del RC).

(66) Vid. pags. 265.

CONCLUSIONES

I.

1. Los orígenes del movimiento cooperativo de producción no pueden analizarse independientemente de los del movimiento obrero en general, recibiendo de este toda su originaria y sustancial razón de ser.

2. El fenómeno cooperativo, en cuanto fenómeno comunitario, es propio de la naturaleza humana; sin embargo, no por ello se deben buscar precedentes de las cooperativas de producción, en su vertiente de asociación trabajo, en instituciones cuya aparición es cronológicamente muy anterior al siglo XIX.

3. Todos los supuestos precedentes o antecedentes tienen en común con las cooperativas de producción el carácter espontáneo de su nacimiento, pero difieren en la motivación, formalización y organización. La motivación suele ser en estos precedentes de carácter religioso o psicológico; las cooperativas de producción nacen como vehículos de emancipación de las clases trabajadoras, en un momento histórico muy concreto, el triunfo de la Revolución Industrial.

4. Tema discutido por los historiadores es el de determinar cual fué la primera cooperativa de producción.

En este sentido, se señala en primer lugar, que las ideas filántropico-reformistas de Owen se adaptaron perfectamente a las aspiraciones del movimiento obrero inglés, que se refugió en una actividad cooperativo-sindical. Sin embargo, la aspiración de la Federación Sindical, basada en las cooperativas de producción, no dió resultado.

5. Mayor importancia que el experimento owenista, merece el desarrollo en Francia a iniciativa de Buchez, que funda en 1834 la primera cooperativa de producción: la "Bijoutiers doré".

Es en este país donde mayor auge toman las cooperativas de producción, gracias al triunfo de la revolución de 1848, y a las ideas asociativas de Luis Blanc que da vida a los Talleres Nacionales.

6. En Inglaterra, el movimiento cooperativo nace por la vía de las cooperativas de consumo, ya que en este país interesa menos la participación del trabajador en la producción, que la promoción del consumidor al que se le ofrece la posibilidad de obtener bienes y servicios en mejores condiciones que las existentes en el mercado.

7. El cooperativismo alemán es un cooperativismo de crédito y ahorro, de adquisición de materias primas y venta de productos manufacturados ligado al sector agrícola o al artesano, que no solamente no favorece un impulso del asociacionismo obrero, sino que, en cuanto distrae su atención brindándole mejores condiciones de vida, elimina en parte la necesidad de la asociación.

8. Con la afirmación de la intrínseca validez del fenómeno cooperativo y de su objetiva relevancia como instituto económico, se inicia el proceso de su regulación jurídica, influida en buena medida por factores políticos y económicos.

9. El primer país que formuló una normativa especial para las sociedades cooperativas fue Inglaterra, al promulgar en 1852 la "Industrial and Provident Societies Act".

10. En Francia, las cooperativas de producción están sujetas a las disposiciones comunes de derecho societario hasta el 1867, fecha en que se aprueba la ley de 24 de julio que regula en su Título III las sociedades de capital variable; aunque no se configuraba la sociedad cooperativa como tipo de organización autónomo, se preparaba el camino para las posteriores regulaciones.

11. Especial importancia tuvo en Francia la ley de 6 de abril de 1917, que creó un nuevo tipo de sociedad - la sociedad anónima de participación obrera - con dos clases de acciones: la de capital y la de trabajo, propiedad colectiva, estas últimas, del personal asalariado constituido en sociedad cooperativa de mano de obra.

12. Los modelos legislativos europeos pueden reconducirse a los dos siguientes tipos:

- a) El modelo inglés, que configura una sociedad especial, distinta de las tradicionales, acentuando el carácter personalista de la cooperativa, y admitiendo todos los más en su organización algunas reglas típicas de la sociedad capitalista.

Es un modelo funcional y pragmático, que considera al fenómeno cooperativo no como corrector marginal del sistema capitalista, sino como elemento básico para su desarrollo.

- b) El modelo francés, que coloca las cooperativas entre los tipos tradicionales de las sociedades comerciales, acentuando el carácter clasista en sentido económico y limitando el fenómeno a unas dimensiones estrechas.

13. El proceso legislativo en España ofrece características muy especiales, puesto que hasta el final del primer tercio del presente siglo no se dota a las sociedades cooperativas de unos esquemas jurídicos propios.

14. De cualquier forma, pensamos que sería erróneo culpar del retraso del movimiento cooperativo al desinterés del legislador por otorgar un marco jurídico adecuado a las instituciones cooperativas, como pecaría de parcial sostener sin más que este desinterés se vio favorecido por la inexistencia del hecho social típico.

15. El movimiento cooperativo español nace involucrado en el proceso de conquista de la libertad de asociación, siendo múltiple el contenido de las primeras cooperativas de producción: asociaciones de resistencia política, de ayuda mutua, de fines económicos.

16. Al amparo de la ley de 28 de febrero de 1839, por la que se autoriza la constitución de sociedades obreras con fines mutualistas y benéficos, se crea en 1840, en Barcelona, la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera, que da vida, con un préstamo de siete mil duros concedido por el Ayuntamiento de esta ciudad, a la primera cooperativa de producción: la Compañía Fabril de Tejedores de Algodón, que funcionó hasta 1848, y cuya finalidad fue la de dar trabajo a los obreros en paro.

17. El régimen de tolerancia hacia las asociaciones obreras en general - que había sustituido aun régimen de persecución - concluye con la publicación del Decreto de 20 de noviembre de 1868, con el que se viene a reconocer el derecho a la libre asociación.

Este Decreto marca la fecha de separación del movimiento cooperativo y del movimiento obrero, formalizándose una situación ya latente que se agravaría en épocas posteriores, y que demostraría la incapacidad del movimiento cooperativo español de resolver la cuestión social de forma pacífica, puesto que hasta 1938 no pudo alejar a las masas trabajadoras de los partidos proletarios ni conjurar la amenaza de la revolución violenta.

18. En la evolución de la legislación española en materia de sociedades cooperativas se pueden distinguir dos fases perfectamente definidas y delimitadas:

- a) Una primera, en la que las normas básicas reguladoras de esta institución se encuentran en las disposiciones de derecho común societario o asociativo; será fundamentalmente una fase de derecho estatutario, originado por la costumbre o los principios generales del fenómeno cooperativo, y en la que la cooperativa quedará sometida a un mero control por razones de orden público.
- b) Una segunda, en la que se pasará del carácter facultativo de las normas al obligatorio, mediante una regulación unitaria del fenómeno con el desgaño de sus normas de las de derecho común.

19. La primera ley que de forma expresa reconoce la libertad de constitución de las sociedades cooperativas fué la de 11 de septiembre de 1869, que las contempla en el párrafo 2º de su artículo 2º; sin embargo, este precepto fué excesivamente tímido en su formulación, e ineficaz en la regulación de las relaciones jurídicas de la sociedad.

20. El Código de Comercio, incumpliendo las orientaciones contenidas en la regla quinta de la base quinta del Decreto de 20 de septiembre de 1869, dedicó una escasísima atención a las sociedades cooperativas.

El artículo 124 del Código preceptuaba que las cooperativas de producción, crédito y consumo quedarían sometidas a sus disposiciones cuando realizasen actos extraños a la mutualidad. Ahora bien, como estos actos equivalían en las cooperativas de producción a producir para otros; y las cooperativas obreras de producción tenían, por su propia esencia, que producir para terceros, todas ellas quedaban incluidas en su ámbito, con los beneficios que tal sujeción representó en orden al reconocimiento a la sociedad de la plena personalidad jurídica.

Para el resto de las cooperativas, el artículo 124 significó un trato discriminatorio, ya que las que actuasen bajo los principios mutualistas habrían de vivir precariamente al amparo del artículo 13 de la Constitución de 1876, mientras que las que realizasen actos extraños a la mutualidad quedaban sujetas al ámbito del Código.

De cualquier forma, el Código no reconoció a la sociedad cooperativa como tipo de organización societario autónomo, con lo que las que se sometiesen a sus disposiciones habrían de adoptar cualquiera de las formas establecidas para las compañías mercantiles.

21. El párrafo 2º del artículo 1º de la Ley de Asociaciones de 1887 sometió a las cooperativas de producción (crédito y consumo) al mismo régimen que el resto de las obligaciones lícitas.

Efecto positivo de esta ley fué el de unificar el régimen y naturaleza jurídica de las cooperativas, reconociendo al mismo tiempo que estas constituían una figura asociativa independiente de las demás reguladas.

Esta unificación, sin embargo, ha de ser criticada por cuanto produjo el efecto negativo de convertir todas las reglas orgánicas y funcionales de las cooperativas de producción en normas de derecho estatutario, con el peligro de que los fundadores o iniciadores de una cooperativa pudiesen someter a aprobación de los Gobernadores unos estatutos en los que se inculcasen todos los principios y reglas cooperativas, obligatorias ya en la mayoría de los ordenamientos extranjeros.

22. El vacío normativo en torno a las sociedades cooperativas se intentó remediar mediante disposiciones fragmentarios y particularistas, que no afectaron a las cooperativas obreras de producción más que por la vía indirecta de las exenciones fiscales.

23. El 14 de enero de 1925 se crea una Comisión "para el estudio y redacción de normas para el régimen de las Asociaciones Cooperativas".

En 1927, la Comisión concluye su trabajo, elevando al Gobierno un anteproyecto de ley que no vería, sin embargo, la luz en la Gaceta.

Este anteproyecto es, no obstante, de una singular importancia, ya que el texto legal que se aprobaría en 1931 siguió, en lo esencial, sus criterios orientadores.

24. En 1931, apenas transcurridos tres meses desde la llegada de la República, se aprueba un Decreto - que posteriormente sería elevado a Ley -

regulando unitariamente la sociedad cooperativa.

A pesar de los ataques que se han hecho a la norma republicana, acusandose la de demagógica y socialista, su perfección técnica fué de difícil superación, influyendo directamente en la legislación de diversos países sudamericanos.

25. La nota más relevante, respecto de la regulación de las cooperativas de producción, fué la quiebra de la terminología hasta entonces tradicional, subjetivizando el término "producción" con el de productores, y distinguiendo dentro de este tipo dos clases de cooperativas: la de profesionales y la de trabajadores.

26. El 27 de octubre de 1938 se promulga una nueva ley de cooperativas, que deroga algunos aspectos de la de 1931, y suspende la tramitación de expedientes sobre constitución de nuevas sociedades.

Con esta Ley, derogada por la de Unidad Sindical, se inicia un nuevo camino en el proceso de la regulación jurídica de estas instituciones, sustituyéndose el concepto liberal y democrático por otro autoritario y sujeto a la jerarquía de la recién creada Organización Sindical.

27. En 1942, se promulga una ley de Cooperación - cuya vigencia se mantiene en estos momentos - que somete definitivamente a la sociedad cooperativa al control de la Organización Sindical, no solo en sus aspectos orgánicos, sino también en los funcionales.

28. Esta intervención podría justificarse acudiendo a la teoría del conflicto de intereses, que late en el fondo de todos los controles públicos.

Sin embargo, esta tesis no puede aplicarse a la ley de 1942, que desvirtuó, con numerosas y rígidas intervenciones, la esencia que la sociedad cooperativa presenta en el concierto generalizado de otros países, convirtiéndola en una sociedad de naturaleza cuasi-pública.

29. Si en un primer momento, las cooperativas de producción se contemplaron con recelos y suspicacias, temiendo que en ellas se refugiasen las tendencias sindicalistas de antaño, a partir de la década de los 60 la postura de la Administración se modificó, siendo, a nuestro juicio dos los motivos del cambio:

- a) La constatación de una realidad pujante en el sector cooperativas de producción, actuando con criterios económicos rentables y con criterios sociales progresivos,
- b) El creciente interés hacia aquellas instituciones que pudiesen ofrecer nuevas fórmulas para la reforma de las estructuras empresariales de tipo capitalista.

30. Este cambio, que coincidió con un movimiento tendente a reformar la legislación cooperativa, culminó con la aprobación, el 13 de agosto de 1971, de un nuevo Reglamento de la ley de Cooperación de 1942, que vino a reducir aquellas injerencias de la Organización Sindical, y a acercar más la sociedad cooperativa a su naturaleza de asociación voluntaria de sujetos, instituida en el marco del derecho privado.

31. Con la aprobación de este nuevo Reglamento no ha de darse por concluido el proceso legislativo en materia cooperativa, no solo porque oficialmente se ha anunciado la preparación de una nueva ley, sino fundamental

mente por cuanto al haber tenido que respetar esta norma, por imperativos de técnica legislativa, los principios ordenadores de la ley de 1942, sola con una reforma a nivel de Ley se podrá conseguir el cambio en la total configuración de la institución cooperativa.

II.

1. El punto de partida en la investigación de los aspectos económicos de la empresa cooperativa de producción ha de ser, obligadamente, el de que esta no es una empresa caritativa o benéfica, sino empresa dirigida a conseguir fines económicos de forma igualmente económica.

2. Por un amplio sector doctrinal se mantiene que el cooperativismo es un sistema apto para organizar toda la realidad económica y social de un determinado ámbito geográfico, convirtiéndose así en sistema económico único, o cuanto menos dominante, y viniendo a resquebrajar el dualismo de los sistemas económicos actuales, oponiendo al capitalismo la eliminación del máximo lucro, y al colectivismo el reconocimiento de la propiedad privada.

3. La interpretación de cual ha de ser el camino para la conquista de la sociedad por parte de las organizaciones cooperativas, ha dado origen a diversas y en parte irreconciliables posturas, que puedan clasificarse de la siguiente forma:

- a) los que consideran que el dominio llegará por vías de las cooperativas de producción,
- b) los que entienden que será por vía de las cooperativas de consumo,
- c) los que sostienen que será la combinación de producción y consumo la que conseguirá cooperativizar integralmente la sociedad.

4. En todos los autores que mantienen la primera tesis se observa más que un deseo de construir una teoría económica del cooperativismo de producción, el de contemplar a la cooperación como un plan integral para la reorganización de las relaciones socio-económicas impuestas por el sistema capitalista; de ahí que todos ellos caigan en una cierta abstracción ética, y se ensayen las teorías más que sobre principios positivos, sobre meros principios negativos anticapitalistas.

5. Si lo que se pretende con un sistema cooperativizado por vía de la producción obrera es sencillamente trasladar la propiedad privada de unos sujetos individuales a otros, entonces hay que reconocer que los principios económicos por los que se regiría un tal sistema serían los mismos que los del capitalismo.

6. Si por el contrario lo que se pretende es modificar la naturaleza de la propiedad de los medios de producción, transfiriéndola de las manos de los particulares a las del Estado, entonces el sistema cooperativo se identifica con el colectivista, en cuyo caso hablar de "tercera vía" resulta inútil.

7. La doctrina de la soberanía del consumidor tiene sus orígenes en la doctrina alemana e inglesa, si bien la elaboración más cuidada la recibió de la francesa, y concretamente de la llamada Escuela de Nîmes, cuyo máximo representante fué Charles Gide.

8. El punto inicial y final de toda la teoría gidiana es el de que la cooperación es un fin en sí misma; no es instrumento funcional de ningún sistema económico, bastando para que ella se realice dejar que evolucione y se multiplique la pequeña cooperativa de consumo.

9. El plan de conquista del sistema económico se ha de realizar, en Gide, a través de sus ya famosas fases, cuyo contenido puede sistematizarse de la siguiente forma:

- a) La titularidad del poder económico reside en el consumidor, que debe emanciparse de la tiranía impuesta por el intermediario, llegándose en esta primera fase al autoabastecimiento no competitivo de todos los consumidores, y con ello al dominio del sector distributivo.
- b) Una vez conseguido el dominio en la distribución, las cooperativas estarán en condiciones para destinar parte de sus reservas financieras a la creación de nuevas entidades que, al operar en el sector industrial, permitan la producción a un precio justo.
- c) Dominado el sector distributivo y el productivo, no quedará más que adquirir la tierra necesaria a fin de que todo el sistema se encuentre cooperativizado.

10. El "desideratum" de Gide se centra, en definitiva, en convertir a la producción en instrumento del consumo, único medio de conseguir un equilibrio estable en las relaciones económicas.

11. Contra la teoría gidianiana se puede argumentar:

- a) Tanto el consumo como la producción son funciones económicas, y en consecuencia el equilibrio habrá de originarse no mediante una situación de sujeción de uno respecto del otro, sino mediante un estado de interrelación mutua.
- b) No puede elevarse a verdad absoluta la afirmación de que en

el cooperativismo de consumo el interés individual de los consumidores tienda a confundirse con el interés general, ya que no puede olvidarse la infinita subdivisión de la demanda.

- c) La experiencia histórica enseña, por último, que el cooperativismo no ha llegado nunca - y aún está lejos de hacerlo - a convertirse en monopsonio; esto es, en economía dominante de nuestros días.

12. Para salvar la construcción de un sistema económico cooperativo, y ante la imposibilidad de elaborarlo disociando las funciones económicas de producción y consumo, se acude a la concepción de la soberanía coparticipada del productor y del consumidor, a los que se añade, como demostración de la importancia que en la ordenación económica adquiere el Estado, la del ciudadano.

13. La crítica que en general puede hacerse a las teorías del cooperativismo como sistema de ordenación integral pueden, a nuestro juicio, estar fundadas en los siguientes argumentos:

- a) En la elaboración de la teoría se han invertido los supuestos teóricos, en el sentido de que partiendo de una aspiración última, se ha pretendido resolver todos los problemas, sin detenerse a considerar la virtualidad propia de una Teoría Económica de la Cooperación.
- b) Calificada como imperfecto el concepto de "sistema económico", y propuesto el de "tipo de organización", pensamos que las leyes económicas de la Cooperación no pueden invertir las de los tipos

de organización de los que aquella forma parte, no pudiendo concebirse la Cooperativa fuera de una economía centralizada o descentralizada.

14. En definitiva, pensamos que la diferencia de tipos de organización crea diferencia de intereses económicos, los cuales a su vez, engendran diversas formas cooperativas.

La forma cooperativa viene dada, pues, por la estructura económica en la que actúa, no pudiéndose hablar de "forma cooperativa", sino de formas cooperativas de economía de mercado o economía dirigida.

15. Otro sector doctrinal considera que, aún siendo el cooperativismo sistema económico, no es apto para ordenar todas las relaciones económicas de una sociedad, ya que su funcionalidad reside en ordenar un sector económico que se encuentra situado en las extremidades inicial y final del proceso productivo.

16. A nuestro juicio, la cooperación es una idea que encarna sus presupuestos no en un sistema, sino en un instituto económico que puede operar en varios tipos de organización, sometiéndose a sus funciones económicas en el ejercicio de su actividad.

17. En un tipo de organización de economía libre, la idea de cooperación económica se instrumenta y realiza a través de una empresa económica, - la empresa cooperativa - que comparte todos y cada uno de los atributos predicables a las unidades de producción típicas de esta economía.

18. Las posturas doctrinales en orden a la configuración económica

de la empresa cooperativa de producción se polarizan en torno a las dos siguientes tesis:

- a) la que niega que la cooperativa sea un tipo autónomo de empresa, opuesto al resto de las empresas que actúan en el sistema capitalista,
- b) la que acepta su autonomía, configurando sus notas y caracteres específicos.

19. Ha sido el economista italiano Maffeo Pantaleoni el que de forma más brillante, y en términos estrictamente económicos, ha puesto de relieve el carácter indiferenciado de la empresa cooperativa.

La creación de la cooperativa es fruto de un cálculo económico, en la medida en que los componentes del grupo son conscientes de que uniendo sus fuerzas a través de esta nueva combinación económica sustituyen el anterior coste de producción por otro nuevo, y por tanto su interés por mantener viva la cooperativa durará mientras ese coste sea inferior al obtenido con el sistema de la producción indirecta.

20. Los aspectos socio-económicos de la cooperativa de producción consienten una diferenciación respecto de la empresa capitalista, pero no una contraposición económica.

21. Las tesis de la autonomía de la empresa cooperativa son dos:

- a) la teoría de la mutualidad
- b) la teoría de la gestión de servicios

22. En términos económicos, la mutualidad significa un modo especial de organizar la actividad económica, una forma particular en el

ejercicio de dicha actividad, que materializaría un tipo concreto de empresa: la mutualista, de la que cooperativa sería una especie, oponiéndose a la especulativa o capitalista, segunda forma de organizar aquella actividad.

23. Según esta teoría, que históricamente conecta desde una perspectiva económica con la empresa doméstica y desde una perspectiva social con las mutuas de previsión o entidades de socorro mutuo, la esencia económica de la cooperativa reside en el hecho mutualista; es decir, en que quien ejerce cooperativamente una empresa lo hace en su particular beneficio.

24. Esta tesis no puede mantenerse, ya que la relación mutualista se agota en la esfera interna de la empresa, que externamente habrá de relacionarse con terceros, ofrecer sus productos a un mercado, y someterse a las leyes generales de la oferta y de la demanda, para las que resulta indiferente el hecho de producir mutualísticamente.

25. El fundamento económico de la teoría de la gestión de servicios encuentra un acusado paralelismo con la anterior teoría, hasta el punto de no ser más que una variación sobre el tema de la relación entre empresa cooperativa y sujetos asociados a ella.

26. Dada la inoperancia de las teorías que consideran a la empresa cooperativa como un supuesto diferenciado de empresa, hay que concluir que desde un plano estrictamente económico no hay diferencia alguna entre esta unidad de producción y el resto de las que actúan en el sistema de economía descentralizada.

27. No obstante esta conclusión, entendemos que es posible buscar

alguna especialidad entre las empresas capitalistas y las empresas cooperativas de producción.

28. En este sentido hay que partir de que el factor desencadenante de la organización cooperativa no es la asociación de capital sino la de trabajo, que genera precisamente la motivación de la asociación en empresa.

29. En una empresa capitalista, es el factor capital el que genera la asociación, entrando en contacto con el factor trabajo, al que reduce a instrumento de la producción.

Por el contrario, si en una empresa cooperativa es el trabajo el factor desencadenante de la asociación, resulta que la esencia económica de la cooperativa de producción reside en ser vehículo de participación directa del factor trabajo en la producción de bienes y prestación de servicios.

30. El resto - o permítasenos la redundancia - lo demás es lo de menos: que la cooperativa de producción sustituya al empresario capitalista, no es más que reflejo de la participación directa del factor trabajo en la producción; que la cooperativa revitalice el trabajo, atribuyéndole el plus-valor que quedaba anteriormente en manos del capital, es simple efecto de la participación; que la cooperativa de producción sea instrumento de acceso del factor trabajo a la propiedad de los medios de producción, no es más que correlato de esa actividad participatoria; que la empresa cooperativa, en fin, permita una gestión de la actividad económica del factor trabajo, no es sino consecuencia del ejercicio de una facultad previamente adquirida.

31. Entendemos por empresa cooperativa de producción "la unidad de producción en la que se asocian sujetos portadores de factor trabajo, a fin de satisfacer sus necesidades económicas mediante la creación de una organización que les permita participar, en un sistema de economía descentralizada, de forma directa en la producción de bienes y prestación de servicios".

III.

1. La empresa cooperativa se presenta ante el jurista como una realidad jurídica, difícil de aprehender, pero necesaria de analizar; desde su misma intención creadora tiene una proyección externa; ofrece un componente humano y es, en su más original significado, una comunidad dinámica : trabajo, con una relevancia jurídica tan acusada que se convierte en centro de imputación de relaciones jurídicas; en institución sujeta y sometida al campo de aplicación normativo.

2. Prescindiendo de las construcciones doctrinales que pretenden configurar un "Derecho Cooperativo" como derecho singular nuevo y objeto de una rama jurídica independiente, y fracasados los intentos de ordenación jurídica unitaria de la empresa a través de la creación de un "Derecho de la Empresa", la cooperativa, como realidad jurídica relevante para el derecho, se encuentra sometida a una heterogénea normativa.

3. El análisis de los elementos de la empresa puede realizarse desde muy diversos planos, los cuales no vienen sino a responder a la pluralidad de perfiles apreciables en la empresa en cuanto realidad objeto de investigación; en este sentido pueden tipificarse los elementos desde una perspectiva jurídica, sociológica, económica e incluso política.

4. Jurídicamente, los elementos de la empresa pueden contemplarse bien desde una perspectiva subjetiva u objetiva, según se atienda a los sujetos componentes del conjunto organizado que es la empresa, o a las relaciones jurídicas surgidas y desarrolladas en su ámbito.

III.1

La estructura subjetiva de la empresa cooperativa ofrece, bajo un plano jurídico, dos elementos que en ella quedan organizados:

- a) El empresario, animador de la actividad económica de la empresa, cuya titularidad jurídica se manifiesta en un doble sentido: sobre las obligaciones y derechos generados por aquella actividad, y en el ejercicio del poder de dirección como objeto del poder - de organización.
- b) El personal de la empresa, conjunto de trabajadores que en ella prestan servicios, y que quedan integrados en el círculo de las relaciones jurídicas que en ella se constituyen.

III.1.I.A.

1. El empresario del sistema capitalista posee, en línea de principio plena disponibilidad para optar por la forma organizativa - entendida como vestidura jurídico-formal - que más convenga a sus necesidades económicas; por el contrario, el empresario cooperativo viene obligado a asumir una forma jurídico-organizativa concreta: la sociedad cooperativa.

2. La noción jurídica de sociedad está referida a dos aspectos: uno negocial y otro organizativo; bajo el primero, la sociedad aparece como noción unitaria; bajo el segundo, varía según las posiciones que la organi

zación asuma. Ambos aspectos están relacionados en términos de causa y efecto, de forma que todos los tipos en que se organiza la sociedad han de tener como elemento unificador un negocio jurídico idéntico: el contrato de sociedad.

3. De la clasificación de los tipos contenidos en el artículo 36 de la ley de Cooperación, cabría pensar que los criterios manejados por el legislador son dos:

- a) Uno sectorial, en virtud del cual es el sector económico el que determina la calificación de un grupo de cooperativas como tipo autónomo.
- b) Otro objetivo, por el que es el objeto social asumido por la entidad el que determina la tipificación.

Sin embargo, relacionando los criterios de clasificación con el contenido típico de cada grupo cooperativo, se comprueba que la clasificación de las sociedades cooperativas responde a meros criterios de oportunidad.

4. La noción de sociedad cooperativa de producción viene suministrada por disposiciones contenidas tanto en el sector estrictamente cooperativa, cuanto en sectores diferentes: el fiscal y el de la seguridad social.

5. Entendida la producción como operación económica que genera bienes y servicios para un mercado, el artículo 48 del Reglamento de Cooperación ofrece dos tipos distintos de sociedades cooperativas industriales:

- a) la formada por comerciantes, industriales y profesionales.
- b) la formada por trabajadores.

6. Nota común a ambos tipos es la de dedicarse a una actividad pro-

ductiva , limitada a los sectores económicos de la industria y de los servicios.

Nota diferencial y tipificadora es la de que en el primer supuesto, la motivación de la asociación es de capital, o más concretamente de titulares de organizaciones empresariales, por muy rudimentarias que éstas sean; en el segundo, esa motivación, reconocida y tutelada por la norma, es la asociación de trabajo, o más exactamente de personas físicas que asumen la obligación de prestar un trabajo de forma personal y directa.

7. La noción de sociedad cooperativa de producción, a la luz de la normativa fiscal, queda limitada por las tres siguientes directrices:

- a) Actividad: producción de bienes y servicios.
- b) Sector económico en que él puede actuar: el industrial entendido tanto en su sentido estricto de actividad transformadora de materias primas en productos intermedios o bienes finales, cuanto en su sentido más amplio de actividad encaminada a la prestación de servicios.
- c) Presupuesto de la asociación: el trabajo.

Con ello, la noción de cooperativa de producción queda restringida el segundo de los tipos enumerados en el artículo 48 del Reglamento de Cooperación.

8. La configuración de un Régimen Especial de Seguridad Social, cuyo colectivo viene formado por "los socios trabajadores de las cooperativas de producción", y la posterior asimilación, a los efectos de seguridad social, de estos socios a trabajadores por cuenta ajena incorporándoseles

al Régimen General o a alguno de los Regímenes Especiales según la naturaleza de la actividad ejercida por la cooperativa, amplía la noción de sociedad cooperativa de producción, convirtiendo en irrelevante el sector económico en el que opere.

9. La sociedad cooperativa de producción puede ser definida, a la luz de nuestro ordenamiento positivo, como "aquella cooperativa en la que se asocian sujetos para producir bienes y servicios mediante la prestación personal de su trabajo".

La adjetivación posterior de la cooperativa como industrial, marítima, agrícola o artesana no viene a modificar la intrínseca unidad de concepto.

10. Los elementos básicos que configuran el contrato de sociedad son, siguiendo tanto el orden lógico como el normativo del artículo 1665 del Código Civil:

- a) pluralidad de sujetos
- b) aportación en común
- c) animo lucrativo de partir las ganancias

11. Reconociéndose en nuestro ordenamiento positivo la función caracterizadora de la causa en los negocios jurídicos, requisito esencial de los contratos, el ánimo lucrativo como causa del contrato de sociedad no puede contestarse.

11.1 El intento lucrativo viene conformado a través de dos momentos sucesivos:

- a) uno de naturaleza objetiva, materializado en la búsqueda y obtención de ganancias.
- b) otro de carácter subjetivo, concretado en la partición y posterior distribución de las ganancias entre los socios.

11.2 La ganancia, como noción tipificadora del ánimo lucrativo, puede asumir dos modalidades:

- a) el beneficio, ganancia que ingresa en el patrimonio de la sociedad al contratar ésta con terceros.
- b) el ahorro en gasto, ganancia que ingresa directamente en el patrimonio de los socios.

Ambos se diferencian, si no cuantitativamente, si en sentido técnico; pero tienen en común el ser ventajas económicas, valorables patrimonialmente, y el pertenecer a un mismo género; el lucro o ganancia.

En consecuencia, no parece prudente excluir del concepto de Sociedad a aquellas instituciones que tienden a realizar economías en el gasto de los socios.

12. El contrato de sociedad cooperativa de producción requiere, como primer presupuesto, una pluralidad subjetiva, sin que la exigencia de una pluralidad cualificada pase de ser un requisito meramente formal, irrelevante para convertirse en principio tipificador.

13. El contrato de sociedad cooperativa de producción exige de los socios la entrega de los medios idóneos para que aquella sociedad pueda desarrollar su programa.

13.1 No obstante lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Cooperación que permite que las aportaciones a capital social puedan hacerse en dinero, crédito, efectos, trabajo y actividad industrial, el binomio responsabilidad-función de garantía del capital social por una parte y el tracto sucesivo de la prestación de trabajo del socio por otra, determinan que el trabajo de este no se configure como aportación social.

13.2 La limitación cuantitativa de la aportación del socio a capital social, justificable en ciertas cooperativas de producción, no lo es en aquellas otras cuya expansión cuantitativa depende de una abundante disponibilidad de medios de financiación; en cualquier caso, por el juego de los principios de gestión democrática y de retorno cooperativo, que fijan los derechos políticos y económicos del socio, es una postura legislativa artificiosa e incapaz de descalificar la función del capital social en estas cooperativas.

14. La investigación de si el ánimo lucrativo es causa del contrato de sociedad cooperativa de producción ha de elaborarse con esquemas estrictamente jurídicos, abandonando aquellos otros de naturaleza sociológica, económica y política fundamentalmente que al enturbiar la raíz del planteamiento, no pueden nunca ofrecer soluciones válidas en Derecho.

15. Diversas son las vías a través de las cuales la doctrina, negando el fin económico-lucrativo de la cooperativa, llega a su calificación de Sociedad.

15.1 La búsqueda de un criterio diferenciador entre Sociedad y Asociación distinto al del ánimo lucrativo; esta tesis debe rechazarse en base a que en nuestro ordenamiento positivo es precisamente el lucro la función tipificadora del contrato de sociedad.

15.2. La teoría de la cooperativa como sociedad mutualista, configurando dentro del género sociedad dos tipos: el de sociedad lucrativa y el de sociedad mutualista; tesis que debe ser contestada en base a que en nuestro ordenamiento positivo la noción de contrato de sociedad es unitaria, y esta unidad conceptual impone, como lógico correlato, la identidad causal de lo que no son contratos de sociedad genéricamente distintos, sino formas o tipos de organizaciones societarias.

15.3 Por último, se mantiene que la calificación de la cooperativa como sociedad es una fórmula posibilitante e instrumental, ideada por el legislador para permitir que aquella pueda conseguir sus objetivos más fácilmente, y motivada, en última instancia, por el hecho de que la Asociación impide desarrollar eficazmente fines de naturaleza patrimonial-no lucrativos.

Aceptar esta tesis significaría tanto como reconocer que el legislador está acudiendo a la técnica del negocio indirecto, permitiendo que mediante un contrato causalmente unitario, se obtengan fines distintos de los específicamente previstos por la norma.

16. El único camino posible para sostener la naturaleza societaria de la cooperativa de producción reside en afirmar el carácter lucrativo de su causa.

16.1 Son dos las tesis elaboradas para negar relevancia causal al ánimo lucrativo en la cooperativa de producción:

- A) Partiendo de la dialéctica existente entre los sujetos poseedores del factor trabajo y del factor capital, e identificando conceptualmente el "ánimo lucrativo" como elemento causalmente rele

vante para la configuración de la noción de sociedad y el "capital" como factor privilegiado para la configuración de la noción de empresa capitalista, se afirma que la cooperativa de producción al no asociar capitalistas no tiene ánimo de lucro, erga no es lucrativa su causa.

Contra esta tesis se puede argumentar de la siguiente manera; que la cooperativa de producción no asocie sujetos poseedores de factor capital no supone que se prescindiera de él; lo que sucede es que los asociados, sociológicamente trabajadores, son quienes aportan ese capital; en última instancia y si se piensa que jurídicamente el concepto de capital social no es beligerante - en una mera cantidad contable - equiparar capital y lucro es falso, ya que nulo ánimo lucrativo se da con grandes cantidades de capital, y viceversa.

B) En segundo lugar, se dice que la causa del contrato de sociedad cooperativa de producción es posibilitar el goce a los socios de un trabajo a mejores condiciones que las ofrecidas por los empresarios no cooperativos. A nuestro juicio, esta tesis incurre en un doble error:

- confunde el objeto de la sociedad con la causa
- configura como derecho facultativo del socio lo que la norma articula como derecho-deber.

16.2 La cooperativa de producción, por su propia esencia, ha de realizar actos de cambio con terceros a los que vende sus productos u ofrece sus servicios; supuesto esto, los socios de una cooperativa de producción

pretenden, al asociarse, aumentar su patrimonio con las ganancias realizadas con las operaciones con terceros; a su vez, estas ganancias vienen distribuidas entre quienes forman parte de la sociedad a título de socio, con lo que, y en definitiva, se aprecia en la configuración causal de este contrato los dos elementos conformadores del ánimo lucrativo: el objetivo de conseguir una ganancia que se obtiene con los actos de cambio - y el subjetivo de repartirla entre los socios.

17. Entre los criterios propuestos para distinguir las dos modalidades de ganancia (beneficio y ahorro en gasto) el que más se ajusta a la realidad cooperativa es el que marca la diferencia en base a la diversa formación de cada uno de ellos: ahorro en gasto sería, así, la ganancia producida al operar la sociedad con los socios, y beneficio sería el lucro generado al contratar la sociedad con terceros.

17.1 Se sostiene que el lucro de las cooperativas de producción es un ahorro en gasto, argumentando que la mayor remuneración obtenida por el socio carece de entidad positiva, ya que representa negativamente la pérdida evitada al suprimirse la figura del empresario intermediario de capital y trabajo.

17.2 Esta tesis, cuya construcción ciertamente no se debe a la doctrina cooperativa ya que con ella no se viene sino a aplicar la teoría de la escuela marxista sobre la "plusvalía" del trabajo, no puede acogerse, puesto que el hecho de que sean los socios trabajadores quienes directamente perciban los beneficios no indica más que en esta sociedad se ha modificado la técnica de distribuir las ganancias; sin que pueda contestarse, ni bajo una perspectiva económica ni jurídica, la existencia del incremento pa

trimonial que representa, tanto para la sociedad cuanto para los socios, el lucro generado en los actos de cambio propios de la cooperativa.

18. El retorno cooperativo cuya aprehensión conceptual ha de hacerse por vía negativa - "prohibición de repartir los beneficios a pro-rata del capital aportado"- no se configura en el esquema societario más que como técnica especial para valorar la distribución de las ganancias obtenidas por la sociedad cooperativa de producción.

18.1 Jurídicamente, el beneficio de la sociedad cooperativa de producción puede definirse como la diferencia numeraria existente entre el coste del bien producido o del servicio prestado y el precio de ese bien o servicio, deducida la remuneración normal que corresponde al socio en su condición de trabajador - remuneración del trabajo - y la que le corresponde en su condición de aportador de capital - remuneración del capital.

18.2 Retorno cooperativo es la parte de beneficio - "rendimiento líquido" - distribuido a los socios trabajadores en función del trabajo prestado en la sociedad.

18.3 El dividendo capitalista y el retorno cooperativo tienen en común el ser técnicas distributivas de beneficios; se diferencian y distancian en el módulo que cada uno de ellos toma para proceder al reparto: participación de capital en un caso, y esfuerzo personal en otro.

19. Desde una perspectiva negocial, no existe diferencia alguna entre la vestidura jurídica del empresario cooperativo y la del resto de los empresarios sociales.

20. Sin embargo, y más allá de esta unidad del negocio base, lo

cierto es que el ordenamiento jurídico instrumenta de manera especial a este tipo societario, sometiéndole a un sector normativo que configura a la cooperativa con perfiles propios, frente al resto de las organizaciones societarias, y con perfiles unitarios, en relación con todos los tipos de sociedad cooperativa.

21. La única característica de la cooperativa, apta para ofrecer tanto una noción unitaria como diferencial, reside en su particular forma organizativa, centrada por igual en los tres siguientes elementos:

- a) Sociedad de naturaleza abierta y capital variable
- b) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios
- c) Distribución de los beneficios a prorrata de las operaciones realizadas por cada socio con la sociedad, o el trabajo prestado.

22. En definitiva, y desde un punto de vista negocial, la cooperativa nace de un contrato de sociedad, en virtud del cual unos sujetos, aportando en común bienes, asocian su trabajo para obtener y distribuir ganancias; desde un punto de vista organizativo, la sociedad cooperativa, de "lege data", no es reconducible al esquema ni de la sociedad civil ni de la sociedad mercantil, constituyendo un tipo autónomo; de "lege ferenda", la asimilación de ciertas cooperativas de producción a sociedades mercantiles es una exigencia funcional.

III.1.1.B

1. Para el Derecho del Trabajo, la figura del empresario se manifiesta en una doble vertiente, según nos movamos en el ámbito de las relaciones laborales singulares o en el ámbito de las relaciones de empresa; bajo el primero aparece como parte o sujeto de un contrato de trabajo; bajo

el segundo, se caracteriza por ser el sujeto titular y organizador de la empresa.

2. El interés se define como la relación que media entre una persona y un bien apto para satisfacer una necesidad.

Los intereses relevantes de sujetos distintos pueden encontrarse en una posición de indiferencia o de relevancia; en la primera, cada sujeto tiende a conseguir el interés propio permaneciendo indiferente respecto del comportamiento de los otros sujetos; en la segunda, la actividad del sujeto que tiende a satisfacer su interés influye directamente sobre la posibilidad de satisfacción del interés de los otros sujetos.

3. La relevancia de los intereses de un sujeto respecto de los del otro puede manifestarse alternativamente bien a través de la figura del conflicto de intereses, bien a través de la solidaridad de intereses.

Al conflicto de intereses corresponde un interés individual, protegido y tutelado por la norma jurídica; a la solidaridad de intereses, bien un interés común, bien un interés colectivo.

4. La posición de los intereses de los socios de la sociedad cooperativa de producción es de relevancia, derivándose del comportamiento de los sujetos contratantes relaciones jurídicas de naturaleza diversa.

5. Los intereses relevantes de los socios se encuentran en una doble posición:

- a) Conflictiva, ya que la cooperativa nace de un contrato (de sociedad) y la función de los contratos es la de ser instrumentos de superación de intereses opuestos; este conflicto de interés se aprecia tanto en la fase de constitución como en la de ejecución,

instrumentándose jurídicamente mediante intereses individuales.

- b) Solidaria, ya que el contrato de sociedad cooperativa es un contrato con comunión de fin.

6. El fin instrumental, determinante de la posición solidaria de los intereses de los socios de la cooperativa de producción, y que origina un interés supra-individual, es la consecución del objeto social.

7. El interés solidario de los socios a participar en la producción de bienes y servicios se configura no como interés común, sino como interés colectivo, cuyas notas caracterizadoras son:

- a) Economicidad: el interés a participar en la producción satisface una necesidad económica.
- b) Indivisibilidad: la participación de los socios en la producción es una necesidad que se sustrae a la disponibilidad individual de éstos, pudiendo ser satisfecha exclusivamente mediante una colectividad organizada.
- c) Generalidad: la sociedad cooperativa se presenta para los socios-trabajadores como una colectividad necesaria, en la que se consi-guen fines sociales jurídicamente protegidos.
- d) Naturaleza privada de su tutela jurídica: el interés colectivo queda articulado mediante la asociación voluntaria de sujetos, or-denada en el marco privado del derecho privado.

8. En una empresa no cooperativa resulta arriesgado sostener la existencia de un interés objetivo de empresa; más cercano a la realidad parece reconocer que los sujetos que la componen son titulares de intereses opues-tos de naturaleza varia.

9. La doble posición de los sujetos que componen el personal de la empresa cooperativa -socios-trabajadores y trabajadores por cuenta ajena-impide analizar unitariamente el tema de la existencia en esta empresa de un interés objetivo, síntesis de los intereses del empresario y del personal.

10. La empresa cooperativa con personal asalariado puede ser califica da como organización ordenadora de intereses en conflicto.

Contra esta conclusión se podría argumentar por una doble vía:

- a) La presencia de trabajadores-socios diluye el conflicto entre em presario y personal, como consecuencia de la adscripción de ambos a una misma categoría socio-económica.

Sin embargo, pensamos que el hecho de que un cierto número de tra bajadores ostenten jurídicamente la posición de socios, no es un dato jurídicamente relevante para configurar, con respecto a los que no son socios, un interés colectivo.

Independientemente de esto, la posibilidad de que la cooperativa tenga personal asalariado desvirtúa la esencia de la institución ideada, originariamente, como instrumento de speración de mecanismos contractuales de cambio.

- b) La segunda vía podría sustentarse comprobándose empíricamente que en ciertas cooperativas el único personal asalariado es, paradójicamente, quien tiene investidos poderes autoritarios de naturale za técnico-organizativa.

Este supuesto no se encuadra en la calificación de la empresa cooperativa como empresa ordenadora de intereses opuestos, ni desvir túa, por tanto, su esencia de empresa comunidad.

11. En la empresa cooperativa cuyo personal está compuesto exclusivamente por socios, coexisten dos ordenes de intereses: el individual del trabajador a la remuneración y del empresario a la producción; sin embargo, debido a las relaciones que vinculan ambos elementos - que no se agotan en el estrecho marco técnico, jerárquico u organizativo - sino que son aptas para generar una comunidad de trabajo, el interés del empresario se objetiva, no por absorción del interés del personal, sino por síntesis entre los intereses de ambos, originando un interés colectivo materializado en la producción o cambio de bienes y servicios en el seno de un sistema capitalista; interés éste que, en última instancia, da la razón de ser y justifica la existencia de la propia empresa cooperativa.

12. La titularidad en la propiedad de la empresa y la titularidad del poder de gestión de la empresa pueden encontrarse en una doble situación:

- a) Homogénea, en virtud de la cual ambas se confunden, de forma que el sujeto titular de la propiedad es quien ostenta la titularidad del poder de gestión.
- b) Heterogénea, en virtud de la cual la titularidad dominical corresponde a un sujeto y el poder de gestión recae en otro distinto.

13. En contra de la situación descrita se podría argumentar que los mecanismos participatorios del personal en la gestión de la empresa han minado los fundamentos, tanto teóricos como prácticos, de la citada homogeneidad.

Sin embargo, la participación del personal en la empresa capitalista no ha quebrado su estructura y presupuestos fácticos, que determinan que sea el empresario, asumiendo el riesgo y buscador de beneficios, el que es

tente y ejercite con carácter inapelable las decisiones últimas que convenga a la vida económica y organizativa de la empresa.

La titularidad de la empresa cooperativa corresponde al empresario cooperativo; sin embargo, si título no es el capital sino el trabajo, como se demuestra por el análisis del desenvolvimiento histórico de la cooperativa, por la base socio-económica de los sujetos que componen la empresa, y por la forma en que viene valorada la asunción del riesgo y ventura en la empresa.

La cooperativa representa, así, un medio para hacer participar al trabajo en la propiedad de los medios de producción.

15. La titularidad del poder de gestión reside, igualmente, en el empresario cooperativo, puesto que si bien es cierto que se está produciendo una progresiva despersonalización del poder en manos del empresario profesional, éste lo ejerce por delegación de los órganos de administración del empresario jurídico, constituido en forma de sociedad.

16. El primer paso para fijar un criterio clasificatorio de las fórmulas de participación debe partir del análisis de la relación que media entre derecho de propiedad y derecho de gestión en la empresa, encontrándonos así con dos grandes sistemas de participación:

- a) Sistemas en los que el derecho a la gestión no deriva de la titularidad previa sobre la empresa.
- b) Sistemas en los que el derecho a la gestión aparece originariamente vinculado a la propiedad de la empresa.

17. Dentro del primer sistema cabe una clasificación entre fórmulas no institucionalizadas y fórmulas institucionalizadas; estas últimas pueden adoptar dos tipos:

- a) Cogestión, o derecho del trabajador a participar en la gestión de la explotación junto a su titular jurídico.
- b) Autogestión, o derecho del trabajador a gestionar y dirigir por sí mismo la empresa.

18. La empresa cooperativa de producción es una fórmula de participación a través de la cual quienes prestan un trabajo, al tiempo que participan en la propiedad de los medios de producción, participan en la gestión de administración de la empresa.

19. La calificación de la empresa cooperativa como fórmula de autogestión puede contestarse en base a dos objeciones:

- a) La primera deriva de la dificultad de aplicar los fundamentos teóricos y equiparar los supuestos fácticos, a través de los cuales las fórmulas de autogestión se han elaborado, al ámbito de la cooperativa.
- b) La segunda deriva del hecho de que nuestro ordenamiento positivo permite la existencia de personal asalariado en la empresa cooperativa, cuya participación en la gestión sigue las reglas generales de la participación de los trabajadores en las empresas capitalistas.

20. Contra la primera objeción se puede argumentar que el jurista, al analizar el fenómeno de la autogestión, debe distinguir entre;

- a) Autogestión como proceso de participación del trabajador en las esferas económicas, social y política de una comunidad nacional.
- b) Autogestión como fórmula de participación del trabajador en la adopción de decisiones en el ámbito de una empresa.

Ambos supuestos son manifestaciones de democracia industrial; sin embargo, es la segunda noción la que conviene a la autogestión entendida como forma de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa; de ahí que para la calificación de un supuesto como autogestión resulte indiferente la situación de homogeneidad o heterogeneidad que puede mediar entre titularidad en la propiedad de la empresa y titularidad en el poder de gestión.

21. La segunda objeción obliga a distinguir entre empresa cooperativa como supuesto de empresa autogestionada, y empresa cooperativa como fórmula a través de la cual se posibilita el que los socios-trabajadores accedan a la gestión empresarial.

La empresa cooperativa, unitariamente considerada, puede o no ser empresa autogestionada; pero en cualquier caso, representa para los socios-trabajadores una fórmula de autogestión.

22. Los objetivos de la autogestión/cooperativa son:

- a) Abrir una vía hacia la democracia industrial.
- b) Abolir el trabajo asalariado.
- c) Responsabilizar a los trabajadores en los riesgos y venturas de la actividad de empresa.

23. En principio, y teóricamente, las esferas de actuación de la autogestión cooperativa son:

- la personal.
- la social
- la económica

24. Nuestro ordenamiento positivo al contemplar la cooperativa no como empresa sino como sociedad, y al regular la participación del socio en los órganos sociales con todas las cautelas y solemnidades propias de los esquemas societarios, provoca el que, paradójicamente, esta institución carezca de estructuras adecuadas para actuar la autogestión, reduciéndose con ello, paralelamente, las esferas de actuación de la autogestión cooperativa.

III.1.II

1. El personal de la empresa cooperativa puede ser definido como el conjunto de trabajadores que en ella prestan servicios.

2. En el ámbito de la empresa cooperativa, ese conjunto de trabajadores puede asumir posiciones jurídicas diferentes, que afectan no solo a la calificación de su relación de trabajo, sino también a los diversos aspectos que interesan al personal en cuanto colectividad social.

3. Lo paradójico y perturbador que resulta que una empresa, llamada a actuar bajo esquemas comunitarios y a ser manifestación de empresa auto-gestionada pueda utilizar sin limitación alguna trabajadores asalariados, obliga a considerar, de cara a una posible reforma legislativa, la necesidad de amortiguar los efectos de la diversidad de posiciones del personal de esta empresa.

III.2

1. La configuración de la empresa cooperativa de producción como co-

unidad organizada de trabajo presupone la existencia de unas relaciones jurídicas de las que se derivan, para unos sujetos, la obligación de prestar un trabajo.

2. El núcleo central de toda la problemática en torno a la relación jurídica de trabajo cooperativo reside en determinar si le es o no aplicable la noción estricta de relación jurídico-laboral.

3. Entendiendo por relación de trabajo, en un sentido amplio, aquella relación jurídica de la que deriva una obligación de trabajo, se mantiene pacíficamente que, caso de ser contractual su origen, esta obligación puede presentarse tanto en los contratos de cambio cuanto en los asociativos.

4. La tesis de la acumulación en un mismo sujeto de las posiciones jurídicas de socio y trabajador exige, para que prospere, que la obligación de trabajar derive de un negocio jurídico autónomo distinto al del contrato de sociedad; de otra forma, la condición de socio prevalece sobre la de trabajador.

5. La relación de trabajo cooperativo no puede ser calificada como relación jurídico-laboral, ya que la prestación de trabajo del socio tiene por finalidad el especificar y dar cumplimiento al objeto social asumido en el contrato de sociedad.

6. La pretendida subordinación del socio-trabajador no es más que una mera exigencia funcional, necesaria para la vida de la organización, pero en ningún caso expresiva de su vinculación personal a un dador de trabajo.

7. Los anticipos laborales del socio-trabajador, aunque puedan equipararse económicamente al salario del trabajador por cuenta ajena, jurídica

mente pueden tener una doble naturaleza.

- a) En la cuantía que no exceda de los salarios medios de los trabajadores de la misma localidad, representan la remuneración normal a su trabajo,
- b) En la cuantía que exceda de esos salarios medios, son retornos cooperativos a cuenta de beneficios futuros.

8. Los anticipos laborales no están sujetos a las cifras del salario mínimo interprofesional, pudiendo un socio trabajar sin anticipo laboral, y solo percibiendo a fin de ejercicio su parte correspondiente de retornos cooperativos.

9. La fiijeza en el tiempo y en la cuantía de los anticipos laborales no supone quiebra de la aleatoriedad típica de los contratos de sociedad, e introducción del principio de ajeneidad en el riesgo; sin embargo, cuando la responsabilidad del socio es limitada a su aportación a capital, se produce un acercamiento entre la figura del socio-trabajador y la del trabajador por cuenta ajena, sin que en última instancia se transforme la naturaleza social de su relación de trabajo.

10. La obligación de trabajar que pesa sobre el socio, en la medida en que se inserta en la relación social y contribuye al cumplimiento del objeto de la sociedad, queda configurada en nuestro ordenamiento como prestación accesoria.

11. Nota común entre esta prestación accesoria de trabajo y las que se puedan establecer en las sociedades de responsabilidad limitada, es la "relación de accesoriedad", entendida jurídicamente como imposibilidad de que un sujeto proceda a ejecutarla sin haber previamente adquirido la con

dición de socio mediante las aportaciones sociales.

12. Nota diferencial es la accidentalidad de la prestación accesorio en una sociedad, y la esencialidad en la otra; en la primera sociedad, la prestación afecta a la estructura, en la cooperativa de producción a la función; en aquella puede recaer en todos o algunos de los socios, en esta - y por imperativo legal - ha de recaer en todos; en aquella se configura como obligación del socio, en ésta como derecho-deber.

13. El contenido de esta prestación accesorio de trabajo es el típico de una obligación de hacer, naturaleza compartida por otra parte, por todas las prestaciones de trabajo, independientemente del esquema social del que deriven.

14. La prestación accesorio de trabajo tiene relevancia en la participación en los derechos económicos del socio, puesto que estos se evalúan en función del trabajo prestado.

15. El incumplimiento de esta obligación puede aparejar para el socio, junto a su exclusión, la indemnización de daños y perjuicios por vía del artículo 1101 del Código Civil; si bien, y al configurarse como derecho-deber, aquella acción puede entablarse igualmente contra la sociedad.

INDICE DE AUTORES

ABAD DE SANTILLAN, D: 4,31,32,34,35,37
ABENDROTH, W : 4,10,15
AGRO, G : 43,116
ALBIOL MONTESINOS, I : 345
ALGUER, J : 49,206,207,219,244,248
ALMANSA PASTOR, J.M : 135,143,146,275,279,289,299,303,305,312,314,324,326,332
333
ALMARCHA HERNANDEZ, L : 52,70
ALONSO GARCIA, M : 143,149,152,183,275,296,298,303,305,309,313
ALONSO OLEA, M : 2,3,136,137,141,144,153,183,189,196,274,275,296,304,309,313,
336,350
ALVAREZ DEL MANZANO, F : 42
AMENDOLA, V : 341,347,352
AMOROS RICA, N : 52
ANES ALVAREZ, G : 30
ANGUEIRA MIRANDA, A : 5,7
ANTONELLI, E : 24
ARBELOA, V.M : 37
ARDAU, E : 287
ARIZMENDI, J.M : 67
ASCARELLI, T : 138,139,174,175,180,200,202,203,216,229,234,248,282,283,285,286
ASQUINI, A : 285,291
ASSANTI, C : 350
AULETTA, G.G : 157,282,283,284,285
AURICHIO, A : 217
AZURZA Y OSCOZ, P.J : 206,236

BALLARIN MARCIAL, A : 68
BANDETTINI, A : 71,110
BARASSI, L : 61,342
BARLOCHER, R : 27
BARNES, W : 270
BARRE, R : 71,72,73,74,93,94,95,103,107
BAYON CHACON, G : 2,4,30,137,141,146,149,150,181,183,274,276,291,293,294,296,
297,299,300,303,307,309,318,335,338,345,346,348,359
BAYON MARINE, I : 149,161,200,216,217,257,259
BELTRAN DE HEREDIA, J : 204
BERTO, G : 244,248,251
BIGIAMI, W : 118,201,210,229,245

BLANC, L : 14
BOITARD, M : 270
BOLAFFI, R : 202, 203, 216, 235, 245, 282
BOLAFFIO, L : 114, 118
BINELLI, G : 26
BORRAJO DACRUZ, E : 3, 31, 138, 141, 167, 171, 181, 182, 276, 291, 296, 302, 307
309, 313, 315, 332
BOSON, M : 98
BOTENI, T : 107
BOURDET, Y : 322
BOXVIEUX, H : 22, 268
BOWDITCH, J : 3
BROSETA PONT, M : 134
BROUCKERE, L : 1, 6
BRUNETTI, G : 339

CABANELLAS, G : 342, 343
CABRERA BAZAN, J : 277, 287, 337
CAIRNES, J.E : 79
CARGANGIU, E : 339
CARNELUTTI, F : 279, 280
CARR, R : 31, 32, 37, 52
CARVALHO DE MENDONCA, J.X : 139
CASANOVA, M : 146, 298
CASSI, V : 339
CASTAN TOBEÑAS, J : 205, 207, 208, 212, 213, 216, 219, 221, 244, 249, 267
CASTRO Y BRAVO, F : 138, 206, 208, 209, 240
CATALDI, E : 343
CERDA RICHART, B : 57
CIACCIO, E : 341, 342, 347, 350
CIURANA FERNANDEZ, J.M : 77, 123, 228
CLARK, C : 165
CLARET MARTI, P : 49
COLOMBO, G.E : 200, 235
COOPER ROYER (Edouard, Jean y Jacques) : 211
COSTA, J : 8
COSSA, L : 114
COTTINO, G : 355, 359
COUTANT, L : 21, 22, 23, 154, 200, 201, 244, 254, 264
COWLING, E : 1
CRECO, G : 219
CREMADES, B.M : 142, 148, 229, 271, 320, 342, 345
CRISAFULLI, V : 217

CUNCZ,E : 254

CHAMBRE,R.P : 104

CHATELAIN,Ch.W : 337

CHAPSAL,F : 205

CHAUVEY,D : 316,317,321,323,327

DAILY GUEVARA,J.R : 137,334,342

DALLA VOLTA,R : 71,110

DAL PANE,L : 98

D'ANGELO,A : 218,342

DE BUEN,D : 210

DE GREGORIO,A : 139,205,212

DE MARCO,F : 66,202

DE LA VILLA GIL,L.E : 51,53,65,70,141,147,149,169,183,190,194,275,293,
305,308,312,336,338,342,344,345,347

DE LITALA,L : 342,344,346

DE SIEMO,G : 339,352

DE SMET,R : 270

DEL ARCO ALVAREZ,J.L : 40,49,52

DEL GIUDICE,R : 61

DERBER,M : 318

DERSCH,H : 304

DEVEALI,M : 339,344

DI SABATO,F : 223,224

DIAZ DEL MORAL,J : 35

DIEZ PICAZO,L : 208,283

DOLLEANS,E : 3,4,13,15

DUCOULOUX-PAVARD,C : 207

DUVAL,J : 35

KICHLER,H : 137

ELENA DIAZ,F : 67,82,90

ELORZA,A : 3,35,36,51

ESCARRA (Edouard) : 24,205,212,251

ESCARRA (Jean) : 24,205,212,251

ESPIN CANOVAS,D : 205,207,212,251

EUCKEN,W : 94

EXPOSITO,C : 203

FALZEA, A : 203, 204
FAUQUET, G : 99, 124, 255
FAVARA, E : 341
FERNANDEZ PIRLA, J : 107, 129, 134, 136, 145
FERRA, G : 116, 118, 120, 202
FERRARA, F (Sr) : 203
FERRARA, F (Jr) : 146, 203, 205, 212
FERRAROTTI, F : 293
FERRI, G : 44, 118, 119, 139, 156, 175, 200, 201, 216, 217, 243, 271, 284
FINZI, E : 205
FLINN, W : 2
FONTANA, T : 341
FRANCHESCHELLI, M : 218
FREDERICQ, L : 139, 205, 212
FUENTES QUINTANA, E : 166, 168
FURNO, C : 204

GABRIEL, R : 9
GALLONI, G : 119
GARCIA, Q : 67
GARCIA DE HARO, R : 291, 295
GARCIA GALLO, A : 32
GARCIA OVIEDO, C : 118
GARCIA PADRON, M : 47, 68, 126, 131, 175, 200, 247, 267
GARCIA TREVIJANO, J.A : 203
GARRANDA, A : 305
GARRIDO FALLA, F : 198
GARRIDO TORTOSA, F : 33, 34
GARRIGUES, J : 138, 140, 143, 144, 153, 164, 165, 219, 220, 221, 236, 242, 245, 268
269, 270, 273, 298, 255, 256
GASCON HERNANDEZ, J : 5, 8, 9, 54, 57, 62, 123, 138, 200, 205, 239, 248, 271
GASCON Y MIRAMON, A : 54, 55, 101
GASPERONI, N : 24, 112, 204, 209, 212, 230, 244
GAUMONT, L : 1, 17, 30
GAY DE MONTELLA, R : 24, 42, 44, 87, 140
GHIDINI, M : 120, 137, 173, 174, 237, 358
GIDE, Ch : 53, 86, 87, 88
GIERKE, O.v : 24
GIORDANO, A : 64, 286, 287
GIRON TENA, J : 206, 213, 219, 231, 233, 236, 267, 268
GIUGNI, G : 276, 277, 287

GIULIANI,A : 202
 GLUCK,E : 6
 GOBBI,U : 5,116,118,121
 GODIN,M : 27
 GOMEZ CASAS,J : 32,37
 GONZALEZ DE ECHAVARRI Y VIVANCO,J.M : 42
 GONZALEZ DE VEGA,A : 8,35
 GONZALEZ PARAMAO,J.M : 101,106,108,136,149
 GOWER,L.C.B : 27,139
 GRAZIANI,A : 121,137,139,146,174,202,206,210,235,251,272,282,283,
 284,285
 GRECO,P : 104,106,139,145,153,211,243,251,263,291,295
 GRECHI,A : 336,342,343,344
 GRISOLI,R : 272
 GUASP,J : 29,184
 GUELFAT,I : 71,76,89,90,92,96,97,98,100,101,104
 GUEPIN,A : 3
 GUERRA,P : 201,209,337
 GUERRERO GARCIA,A : 99

HEMEL,J : 139,205,208,210,212,221,263,268
 HAMILTON,D : 92
 HALM,G.N : 94
 HANDSCHIN,G : 254
 HIRSCHELD,A : 18,25,270
 HOLYOAKE,G : 16,20
 HOOG,G : 1,22
 HOUIN,R : 139
 HOUPIN,Ch : 22,268
 HUECK,A : 149

IGLESIAS,M.C : 3,51

JACOBI,E : 146
 JAUS,O : 272

KAYSER,P : 201,205
 KREHER,J : 139,205,208,219,221
 KRISTAN,I : 303,315,316,321,322
 KROTOSCHIN,E : 342,352

LABADESSA,R : 61,117,158,218,341
 LACOUR,L : 139

LAGARDE, G : 139, 205, 210, 212, 221, 263, 268
LAMA, E : 341, 347
LAMBERT, P : 5, 11, 12, 13, 15, 27, 77, 78, 88, 89, 100, 115, 254, 255
LANZA, A : 183
LAKS, M : 316
LASSERRE, G : 88, 89, 104, 316
LAURAS, : 51
LAVERGNE, B : 74, 88, 255
LEGA, C : 291, 301
LEO, E.M : 120, 126, 222
LIEFMANN, R : 107
LILLONI, L : 353, 355, 356, 358, 359
LOIS ESTEVEZ, L : 199, 200
LOPEZ MEDEL, J : 68
LORENZONI, G : 127
LYON CAEN, Ch : 212, 268, 269

MACNAB, H.G : 10
MANARA, U : 26, 87, 212
MANDEL, E : 303, 313, 315, 316, 326
MANFREDI, P : 26
MANRESA Y NAVARRO, J.M : 207, 212, 244
MARC, J.E : 134, 136
MARCANTONIO, A : 289
MARCHIERI, A : 139
MARIN PEREZ, P : 49
MARTIN GRANIZO, L : 51
MARTIN BLANCO, J : 335, 338
MARTIN VALVERDE, A : 313
MARTORANO, F : 202
MARX, C : 128
MAZZONI, G : 336, 339, 347
MEDUGNO, D : 18, 45
MEISTER, A : 316, 323
MELCHIONA, R : 342
MENENDEZ PIDAL, J : 118, 342
MENGONI, L : 143, 276
MESSINEO, F : 119, 173, 202, 212, 229
MICCIO, R : 65
MIGNOLI, : 285
MINERVINI, G : 65, 173
MLADENATZ, G : 10, 85, 98
MOLITOR, E : 337, 340

MONTOYA MELGAR,A : 134,136,137,138,146,148,149,150,151,274,276,277,
294,296,304,309,310,313,332,333,336

MONTUSCHI,L : 339,340

MORELL,A : 316

MORTON,A.L : 4

MOSSA,L : 298,340

MOTOS GUIRAO,M : 160,169

MOIX,M : 24,325

MUÑOZ ALONSO,A : 6

NAPOLETANO,D : 345

NAST,A : 22,23,121,158,272

NAVARRINI,U : 86,110,139

NICOLO,R : 143

NIPPERDEY,H.C : 149,305

OFFEDU,M : 342,344,350,358

OIT : 67,104,313,316,318,325

OLIVENCIA RUIZ,M : 140,149,153,200,206,212,217,218,249,250,266,270

OPPO,G : 119,120,175,206,222,235,272,342,358

PADOA,G : 44,119,120

PANTALEONI,M : 71,79,82,87,105,106,109,110,125

PAROLI,A : 43,116,174

PASSADORO,G : 72

PARLAGRECO,G : 72

PAVONI,G : 117

PELLISE PRATS,B : 49,217,244

PEREZ BOTIJA,E : 2,4,5,51,56,65,118,141,181,183,274,276,293,294,297
307,318,335,348,359

PREZ GARCIA,A : 228

PEREZ GONZALEZ,B : 49,206,207,219,244,248

PERRAUD,Ch : 51

PERROUX,F : 75,84,107

PERSIANI,M : 143,146,276,287,289,293,304

PFEIFFER,E : 85

PI PIA,U : 139,212

PIC,P : 139,205,208,219,221

PIGOU,G : 98

PIERNAS HURTADO,J : 34
PLANIOL,M : 212
POISSON,E : 89
POLO DIEZ,A : 50,57,140,171
POTTER,B : 85
PROKOVOVISTCH, :97
PROTOPOPESCO,I : 52
PROSPERETTI,U : 332
PUYAL,V : 56

RABBENO,U : 7,13,15,16,17,34,117,123
RAGUSA MAGGIONE,G : 209
RAIFFAISEN,F.W : 98
RAMADIER,P : 21,200
RAMIREZ GRONDA, : 339
RAMSLAND,C : 3
RATTO,L : 24
RAULT,J : 24,205,251
RAVA,R : 332
RAVENTOS CARNER,J : 32,35,52,55
REITLINGER,F : 17
RENAULT,L : 212,268,269
RENS,J : 67
RESTEAU,Ch : 27
RIAZA BALLESTEROS,J.M : 63,67,281
RICHAUME, : 27
RIEU,F : 7
RIPERT,G : 212
RIVA SANSEVERINO,L : 336,346
RIVAS MORENO,F : 53
RIVERO,J : 23
RIZZO,N : 342
ROCA Y GALES,J : 33
RODIERE,R : 139
RODINO,L : 116,117
RODRIGUEZ PIÑERO,M : 149,304,335,336,345,346,347
RODRIGUEZ SAÑUDO,F : 305
ROMAGNOLI,U : 142,221,222,225,342,343,358
ROMANO PAVONI,G : 174,202,203,206,207,217,244,245,247
ROTONDI,M : 206,209
ROSS,A : 280

RUBINO,D : 203
RUENI,C : 78,80,98,109,112,115,117
RUMEU DE ARMAS,A : 8

SACCO,R : 217
SAGARDOY BENGOCHEA,J.A : 190,198,294,300,307,326,342
SAINT-ALARY,R : 270
SALA,T : 313,336
SALANDRA, : 342
SALINAS PUENTE,A : 137
SANCHEZ CALERO,F : 140,149,153,158,200,206,212,213,217,218,249,250,
252,255,266,268,270
SANTONASTASO,F : 337
SANTORO PASSARELLI,F : 137,287,288,338,342,346
SAVATIER,Jean : 23
SAVATIER,René : 259
SAVINO,M : 336,337,339,342,344,347
SCAMARDI,A : 160
SCIALOJA,A : 202
SCOGNAMIGLIO,R : 141,276,342,344
SCORDNINO,F : 26,107,120,122,180,200,219,242
SCHAEFLE,A.G : 79
SCHERMA,G : 71
SCHOLSEN, : 213
SCHONFELD,V : 25
SCHULTE-DELITSCH,H : 97
SENA,G : 279,280,283,284,285,290
SERRANO ALTIMIRAS,R : 149,161,200,216,217,257,259
SERRANO CARVAJAL,J : 117,138
SIK,O : 317
SIMI,V : 332
SIMONETTO,E : 106,119,174,214,215,219,222,223,225,227,228,244,246,247
249,264,266
SINAGRA,V : 336,339,342
SLANSKY,R : 317
STUART MILL,J : 79
SOMBART,W : 73
SOMMARY,C : 316
SUAREZ GONZALEZ,F : 287,300,307
SUPPES,J : 277

TAMAGNINI,G : 71,72
 TARELLO,G : 277,288
 TATZ,G : 4
 TEILLAC,J : 316
 TESSITORE,P : 72
 t KINT,J : 27
 TOTOMIANZ,V : 9
 TOURAINE,A : 313
 TROPLONG, : 212
 TROUILLOT,G : 205
 TUNON LARA,M : 4

UCHA, : 200
 URIA,R : 58,140,151,152,153,219,221,274,355,356,359

VALDES DAL-RE,F : 327
 VALENTI,G : 79,80,87,89,102,103,126,131,139
 VALVERDE Y VALDERDE,C : 210
 VALKO,L : 12,19,20
 VALLEROUX,H : 15,22
 VAN RYN,J : 139,208,212
 VAVASSEUR,M : 22
 VELARDE FUERTES,J : 81,103
 VENIDITTI,C : 204
 VERCELLONE, : 102
 VERGEZ SANCHEZ,M : 220,221,354,355
 VERRUCOLI,P : 19,20,23,25,27,101,103,105,107,110,112,114,118,119,121,
 125,127,174,200,202,206,209,219,222,229,272,342,358
 VICENS VIVES,J : 30
 VICENT CHULIA,F : 69,325,331
 VICENTE Y GELLA,A : 140,205,268
 VIDA SORIA,J : 191,305,314,344
 VILLERME,L.R : 3,11
 VIVANTE,G : 87

WALRAS,L : 98
 WARRASSE,J.P : 1
 WATKINS,W.P : 67
 WEBB,S : 85
 WOLLEMBORG,L : 70,101,105,110
 WRONSKI,H : 104

411.

ZAGO GARELLI,C : 347,358
ZANOBINI,C : 61